# MEMORIA

ELEVADA AL

# GOBIERNO DE S. M.

EN LA

SOLEMNE APERTURA DE LOS TRIBUNALES

EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 1982

POR EL

FISCAL GENERAL DEL ESTADO

## EXCMO. SR. D. JOSE MARIA GIL-ALBERT Y VELARDE

"INSTITUTO EDITORIAL REUS"
MADRID

## INTRODUCCION

En la obligada y tradicional redacción de la Memoria anual, que se contrae al precedente año 1981, inicialmente resulta pertinente consignar la aprobación por Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, texto legal que desarrolla con plena fidelidad y cumplimenta el mandato del artículo 124 de la Constitución Española.

El nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Público, que deroga y sustituye el antecedente de 21 de julio de 1926, dispone, en su artículo 9.º —motivo de su mención o referencia— que la Fiscalía General del Estado elevará al Gobierno, con remisión también a las Cortes Generales y al Consejo General del Poder Judicial, una Memoria anual, precisando primordialmente que se detallará la actividad del Ministerio Fiscal, la evolución de la criminalidad, las posibles medidas de prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia.

Principalmente, por tanto, por las nuevas directrices a que deberá ajustarse nuestro informe anual que se infieren de la citada norma, también por la evidente singularidad de la morfología delictiva actual, por la cada vez más amplia e intensa actuación de las Fiscalías y, en definitiva, por nuestro permanente propósito de contribuir a alcanzar una efectiva política criminal, ha parecido aconsejable al Fiscal, en este momento, abordar el estudio de las distintas materias y revisión de las actividades que comprende la presente Memoria, con una cierta variación respecto de las anteriores, reduciendo

en adecuada síntesis bastantes de nuestras conclusiones y planteando directa, monográfica y técnicamente las que consideramos más relevantes cuestiones o problemas penales de actualidad.

Consiguientemente, se refleja, completándose con las estadísticas correspondientes de los asuntos despachados durante el año 1981, la eficiente actuación de las Fiscalías en todos los órdenes y grados de la jurisdicción ordinaria, especialmente en lo que se refiere al ámbito penal; se informa de los cambios y variaciones en los índices de criminalidad y de los casos de mayor gravedad, complejidad o resonancia; de las cuestiones de mayor dificultad que se han planteado a los Fiscales y de las consultas, circulares o instrucciones ordenadas que se transcriben literalmente, así como se recogen y comentan las disposiciones legales promulgadas en este período anual, que van conformando nuestro ordenamiento jurídico.

Por otra parte, se trata en el capítulo sustantivo de la Memoria un importante repertorio de problemas jurídico-penales que estimamos de superlativo interés en la comunidad social, tales como el tratamiento penal de la libertad de expresión, la protección de menores, las manifestaciones delictivas del tráfico de drogas, la situación penitenciaria, la problemática de la expulsión de extranjeros indeseables y algunos otros.

Las conclusiones establecidas sobre tan actuales y transcendentes materias, no sólo tienen una estricta finalidad expositiva, sino también la aportación de ideas o convenientes reformas legislativas. Asimismo en el resumen que se hace de las respectivas Memorias elevadas por los señores Fiscales de las Audiencias Territoriales y Provinciales quedan resaltadas sugerencias o propuestas de las Fiscalías en orden al perfeccionamiento del ordenamiento legal vigente.

Con remisión, por tanto, a los apartados enunciados de nuestro informe y en cumplimiento de lo ordenado

en el precitado artículo 9.º del mencionado Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el Fiscal General del Estado tiene el honor de elevar la presente Memoria General al Gobierno de Su Majestad.

## Capítulo I

## MOVIMIENTO DE PERSONAL

Como es habitual, los movimientos de personal, que a continuación se expondrán, se refieren no sólo al período al que este informe se contrae, 1981, sino también a los que se han producido al tiempo de su redacción, entrado ya el año 1982.

Se incorporaron a la Carrera Fiscal cinco Abogados Fiscales por Oposición restringida entre Fiscales procedentes del Cuerpo de Fiscales de Distrito. Este Cuerpo, a principios del presente año y como consecuencia del nuevo Estatuto Orgánico, se integró en la Carrera Fiscal, ejerciendo sus miembros las nuevas funciones asignadas con eficacia y competencia que ponen de manifiesto sus respectivos Jefes. Pese a esas incorporaciones continúa el grave déficit de la plantilla, con numerosas vacantes, que confiamos sea paliado con la incorporación de los que superen las pruebas de la Oposición que se está celebrando.

Han pasado a la situación de jubilación, por cumplir la edad reglamentaria durante el año 1981, los Fiscales Generales don Luis Martín-Ballesteros y Costea y don Francisco Corzo Machuca, Jefes de las Secciones de lo Civil y Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo; en ese mismo año el Abogado Fiscal del Tribunal Supremo don Antonio Senarega Novillo y el Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial de Barcelona don Augusto Escarpizo Lorenzana Majúa y los Magistrados del Tribunal Supremo, procedentes de la Carrera Fiscal, don Julio

Calvillo y Martínez de Arenaza, Presidente de la Sala de lo Civil, y don Eusebio Rams Catalá, Magistrado de la Sala Sexta. En el primer trimestre de 1982 el Excmo. señor don Juan Oña Iribarne, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo; don Adelto Henríquez Díaz, Teniente Fiscal de la Audiencia Territorial de Barcelona, y don Manuel González González, Secretario Técnico de la Inspección Fiscal. El cese de don Juan Oña es una gran pérdida para la Carrera Fiscal, a la que ha prestado largos años de servicio con el mayor acierto. Para este Fiscal ha sido de gran ayuda su prudencia y celo en la colaboración prestada y en todos deja un permanente recuerdo de caballerosidad y compañerismo.

Citamos a continuación, con hondo dolor, a los compañeros que fallecieron durante 1981 y principios del año actual: don Lucas García Rodríguez, Fiscal de la Audiencia Territorial de Las Palmas; don Gregorio Guijarro Contreras, Fiscal General del Tribunal Supremo y Jefe de la Sección de lo Social; don José Raya Mario, Fiscal General Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado; don Vicente Mora Piñan, Fiscal General Jefe de la Audiencia Territorial de Madrid; don Antonio Senarega Novillo, que recientemente había sido jubilado por razón de edad como Abogado Fiscal del Tribunal Supremo, y, ya entrado el año 1982, don Luis Rodríguez de Miguel, Fiscal General.

Si triste es para la Carrera Fiscal que funcionarios prestigiosos, que quemaron su vida en el ejercicio entusiástico y generoso de su función, abandonasen esta actividad por jubilación al cumplir la edad reglamentaria, dejando en el seno de la Carrera una profunda huella de enseñanzas y de honesto quehacer, es todavía más penoso tener que recordar a aquellos compañeros a los que la muerte separó del Ministerio Fiscal, algunos en trágicas circunstancias y cuando todavía su capacidad y su experiencia podían prestar beneficiosos servicios al Ministerio

Fiscal. Descansen en paz y que su ejemplo sea para todos constante estímulo.

Fueron promovidos a la categoría de Fiscales Generales don Luis Jiménez-Clavería y Calvo Rubio, que fue nombrado Jefe de la Sección de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo; don Pedro Claver y de Vicente Tutor, siendo destinado como Fiscal Jefe de la Audiencia Territorial de Madrid; don Miguel Montoro Puerto, encargándosele la dirección de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional; y don Eliseo García Martínez, que desempeñaba el cargo de Fiscal de la Audiencia de Valencia; y, ya con la nueva denominación de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, han sido recientemente nombrados don José González Chacón, don Ricardo Ratia Poyatos y don Félix Hernández Gil, este último con carácter eventual.

En el capítulo de nombramientos ha de destacarse el de don Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, que desempeñaba el cargo de Fiscal Inspector de la Fiscalía General del Estado, para el de Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, y el de don Eliseo García Martínez para sustituirle como Fiscal Inspector.

Como Fiscales del Tribunal Supremo fueron nombrados don Melitino García Carrero; don José María Riera Larios, Secretario Técnico de la Inspección Fiscal; don José Antonio Zarzalejos Altares, Fiscal de la Audiencia de Madrid; don Juan Escalante Huidobro, Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Santander; don Manuel Barril Figueras, Fiscal de Zaragoza; don Francisco Hernández Gil, don Eugenio de Herrera Martín y don Jesús Vicente Chamorro, este último con carácter eventual, que desempeñaban los cargos de Fiscales de la Audiencia Territorial de Madrid. Finalmente, ha sido designado Inspector Fiscal de la Fiscalía General del Estado don José Julián Hernández Guijarro, que, igualmente, desempeñaba el cargo de Fiscal de la Audiencia de Madrid.

Es de destacar que en el mes de abril de 1982 fue

promovido a la categoría de Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo don Mariano Fernández Martín Granizo, que desempeñaba el cargo de Abogado Fiscal del mismo Tribunal. La función Fiscal pierde un gran jurista, que gana la Judicatura.

Los cambios de titular, por nombramientos para otros destinos, jubilaciones y fallecimientos, afectaron a las siguientes Fiscalías:

Lérida, para cuyo cargo de Fiscal fue nombrado don Eladio Escusol Barra, que desempeñaba el cargo de Abogado Fiscal de la Audiencia de Barcelona; Fiscal de la Audencia de Toledo, don Miguel María González Blanco, Abogado Fiscal de la Audiencia de Pontevedra; Fiscal de Las Palmas de Gran Canaria, don Ricardo Beltrán Fernández de los Ríos, que desempeñaba el cargo de Fiscal de la Audiencia de Tarragona; a esta Audiencia fue nombrado Fiscal don Antonio Carbajo Madrigal, Teniente Fiscal de la Audiencia Territorial de La Coruña; Fiscal Jefe de la Audiencia Territorial de Valencia, don Bernardino Ros Oliver, que desempeñaba igual cargo en la Audiencia Territorial de Zaragoza; don Augusto Morales Bañol, Fiscal de la Audiencia de Gerona, fue nombrado para el mismo cargo en la Audiencia de Murcia; el Abogado Fiscal de la Audiencia de Alicante, don Roberto Martínez Abarca Ruiz Funes, fue nombrado Fiscal de Gerona; don Joaquín Llovel Muedra, Fiscal de Palma de Mallorca, fue nombrado Fiscal Jefe de la Audiencia Territorial de Zaragoza; el Teniente Fiscal de la Audiencia de Málaga, don Francisco Jiménez Villarejo, fue designado Fiscal de Palma; don Lucio Valcárcel Pestaña, Teniente Fiscal de la Audiencia Provincial de Santander, fue nombrado Fiscal Jefe de la misma, y para el cargo de Teniente Fiscal de la Audiencia Territorial de Barcelona, don Fernando Serrano Misas, que ocupaba el cargo de Fiscal de Peligrosidad de aquel territorio.

Los Fiscales de las Audiencias que han redactado sus Memorias se relacionan a continuación:

Audiencia Nacional: Excmo. Sr. D. Miguel Ibáñez y García de Velasco.

Albacete: Excmo. Sr. D. Rafael Rojo Urrutia.

Alicante: Ilmo. Sr. D. Francisco García Romeu.

Almería: Ilmo. Sr. D. José María Contreras Díaz.

Avila: Ilmo. Sr. D. Emilio Vez Pazos.

Badajoz: Ilmo. Sr. D. Manuel Ruiz Fernández.

Barcelona: Excmo. Sr. D. Alejandro Sanvicente Sama.

Bilbao: Excmo. Sr. D. Fermín Hernández Villarroya.

Burgos: Excmo. Sr. D. Eugenio Casimiro López López.

Cáceres: Excmo. Sr. D. Santiago A. Martín Andrés.

Cádiz: Ilmo. Sr. D. Jaime Ollero Gómez.

Castellón: Ilmo. Sr. D. Manuel Lucas Escamilla.

Ciudad Real: Ilmo. Sr. D. Jorge Sena Argüelles.

La Coruña: Excmo. Sr. D. Antonio Couceiro Tovar.

Córdoba: Ilmo. Sr. D. Rafael Contreras de la Paz.

Cuenca: Ilmo. Sr. D. José María Iscar Sánchez.

Gerona: Ilmo. Sr. D. Augusto Morales Bañón.

Granada: Excmo. Sr. D. Ramón Salgado Camacho.

Guadalajara: Ilmo. Sr. D. José L. Aranda Calleja.

Huelva: Ilmo. Sr. D. José Jiménez Villarejo.

Huesca: Ilmo. Sr. D. Francisco Goyena de la Mata.

Jaén: Ilmo. Sr. D. Mariano Monzón de Aragón.

León: Ilmo. Sr. D. Fernando Santamarta Delgado.

Logroño: Ilmo. Sr. D. Arturo Tejero Acerete.

Lérida: Ilmo. Sr. D. Eladio Escusol Barra.

Lugo: Ilmo. Sr. D. Jesús Gómez Herrero.

Madrid: Excmo. Sr. D. Pedro Claver de Vicente Tutor.

Málaga: Ilmo. Sr. D. Francisco J. Dago y Martínez de Carvajal.

Murcia: Ilmo. Sr. D. Angel de Alba y Osuna.

Orense: Ilmo. Sr. D. Fernando J. Seoane Rico.

Oviedo: Excmo. Sr. D. Odón Colmenero González.

Palencia: Ilmo. Sr. D. David Rayo Gómez.

Palma de Mallorca: Excmo. Sr. D. Joaquín Llobell Muedra.

Las Palmas: Excmo. Sr. D. Ricardo Beltrán y Fernández de los Ríos.

Pamplona: Excmo. Sr. D. Martín Rodríguez Esteban.

Pontevedra: Ilmo. Sr. D. Jacobo Varela Feijoo.

Salamanca: Ilmo. Sr. D. Bernardo Almendral Lucas.

San Sebastián: Ilmo. Sr. D. Jesús Martínez Calleja.

Santander: Ilmo. Sr. D. Juan de Escalante Huidobro.

Santa Cruz de Tenerife: Ilmo. Sr. D. José Civantos Cerro.

Segovia: Ilmo. Sr. D. Juan A. Martínez Casanueva.

Sevilla: Excmo. Sr. D. Hipólito Hernández García.

Soria: Ilmo. Sr. D. Gaspar Molina Rodríguez.

Tarragona: Ilmo. Sr. D. Antonio Carvajo Madrigal.

Teruel: Ilmo. Sr. D. José Luis García Ancos.

Toledo: Ilmo. Sr. D. Miguel María González Blanco.

Valencia: Excmo. Sr. D. Arturo Suárez Bárcena.

Valladolid: Excmo. Sr. D. Eduardo Mendizábal Landete.

Vitoria: Ilmo. Sr. D. Alfonso Arroyo de las Heras.

Zamora: Ilmo. Sr. D. Francisco Muñoz Zatarain.

Zaragoza: Excmo. Sr. D. Bernardino Ros Oliver.

## Capítulo II

## REFORMAS LEGISLATIVAS

Durante el pasado año 1981 la actividad parlamentaria ha seguido incidiendo en reformas sustanciales de nuestro ordenamiento jurídico, muchas de las cuales tendrán un reflejo trascendental en la estructura de nuestra sociedad, especialmente en el ámbito familiar, cuyas transformaciones se reflejan más inmediatamente en el entorno social; sin espíritu agotador del tema y sólo con criterio enunciativo, podemos destacar:

1. *Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.*

El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales (artículo 1).

Los funciones asignadas, entre las que destaca su legitimación para interponer los recursos de Inconstitucionalidad y Amparo (art. 29), las desempeña con autonomía, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad (artículo, 6, 1), y goza de inviolabilidad (art. 6, 2).

Es de destacar que cuando el Defensor del Pueblo tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito lo pondrá en conocimiento del Fiscal General del Estado (artículo 25, 1), quien deberá informarle periódicamente de la situación de aquellas actuaciones (art. 25, 2).

Igualmente cabe señalar que, aunque el Defensor del Pueblo no es competente para modificar o anular los actos y resoluciones de la Administración Pública (artículo 28, 1), puede sugerir en ciertos casos al órgano legislativo competente o a la Administración su modificación (art. 28, 2) y formular a las autoridades y funcionarios de las Administraciones Públicas advertencias, recomendaciones y sugerencias para la adopción de nuevas medidas.

2. *Ley Orgánica 2/1981, de 4 de mayo, que modifica y adiciona determinados artículos del Código Penal y del Código de Justicia Militar.*

En orden al Código Penal ordinario, esta Ley modifica algunos artículos preexistentes e incorpora a él nuevos preceptos. De una parte, se ha eliminado del artículo 214, como elemento del delito de rebelión, el alzarse "en abierta hostilidad contra el Gobierno"; basta ya con el alzamiento público para cualesquiera de los fines indicados. De otra parte, se introduce un nuevo fin como constitutivo de rebelión: derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución (art. 214, 1.º). El párrafo 4.º se redacta conforme a la actual estructura parlamentaria: Disolver las *Cortes Generales, el Congreso de los Diputados o el Senado.* Y el artículo 214 se inicia con un nuevo párrafo: *Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.* Son también nuevos en el Código Penal el artículo 174 bis, con sus tres apartados, y el artículo 216 bis *a)* y el 216 bis *b)*.

Importante es la facultad introducida por el artículo 216 bis *a)*, el poder acordarse por razón de los delitos en él definidos, y a petición del Ministerio Fiscal, el cierre provisional del medio de difusión y que en el concepto de instrumentos del delito, susceptibles de comiso, se incluyan las instalaciones, maquinaria y enseres.

También se modifican por esta Ley los artículos 290 y 291 del Código de Justicia Militar y se incorporan el

artículo 291 bis y el 538 bis, equivalentes a los artículos 216 bis *b)* y 216 bis *a)* del Código Penal ordinario.

3. *Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.*

Supone esta Ley un desarrollo del artículo 116 de la Constitución, que prevé los estados de alarma, excepción y sitio. Procede la declaración de estos estados cuando circunstancias extraordinarias hicieren imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios (art. 1, 1), pero tanto su duración como las medidas a adoptar serán las estrictamente indispensables (artículo 1, 2).

4. *Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio.*

Bajo la idea de igualdad, y por imperativos de orden constitucional, se ha hecho en esta Ley un tratamiento virtualmente unitario de la filiación matrimonial y la extramatrimonial en orden a los efectos, prueba y acciones de filiación en el Título V del Libro I del Código Civil (artículos 108-141).

También se modifica sustancialmente el Título VII del Libro I (arts. 154-171), cambiándose incluso su rúbrica —de las relaciones paterno-filiales en lugar de la patria potestad.

5. *Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio.*

Esta Ley modifica sustancialmente todo el Título IV del Libro I del Código Civil, dedicado al matrimonio. El Título, comprensivo de los artículos 42 a 107, se divide a su vez en once capítulos. Además, la Ley cuenta con

diez disposiciones adicionales, destinadas casi en su totalidad a regular cuestiones de procedimiento.

6. *Ley 35/1981, de 5 de octubre, sobre modificación del artículo 20 de la Ley del Registro Civil.*

7. *Ley de 5 de octubre de 1981, por la que se dictan normas complementarias sobre legitimación en el recurso contencioso-administrativo.*

8. *Ley 33/1981, de 5 de octubre, por la que se establece y regula el Escudo de España.*

9. *Ley de 28 de octubre de 1981, por la que se regula el uso de la Bandera de España y el de otras banderas y enseñas.*

10. *Ley de 30 de diciembre de 1981, regulando el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.*

De gran trascendencia para la Institución, en otro lugar de esta Memoria le dedicamos la atención que merece.

Dentro de las disposiciones sin rango de Ley merecen ser destacadas las siguientes:

— Real Decreto de 27 de noviembre de 1981, sobre Registro Civil de la Familia Real.

— Real Decreto de 16 de enero de 1981, sobre organización y funcionamiento del Registro de entidades religiosas.

— Real Decreto de 8 de mayo de 1981, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.

— Real Decreto de 27 de marzo de 1981, sobre plazo para la tramitación de expedientes de rehabilitación de títulos nobiliarios.

— Real Decreto de 22 de mayo de 1981, por el que se crea una nueva Sección en la Audiencia Nacional y el Juzgado Central núm. 5.

— Real Decreto de 3 de julio de 1981, creando los Juzgados de Familia, que se distribuyen así: cuatro en Barcelona y Madrid, dos en Bilbao, Sevilla, Valencia y Zaragoza y uno en Córdoba, La Coruña, Granada, Málaga, Palma de Mallorca, Las Palmas, Pamplona, San Sebastián y Valladolid, que iniciaron sus actividades el 1.º de septiembre de 1981.

— Real Decreto de 24 de julio de 1981, sobre reconocimiento, declaración y calificación de las condiciones de subnormal y minusválido.

— Real Decreto de 19 de junio de 1981, sobre constitución de la Comisión Asesora de libertad religiosa.

— Real Decreto de 24 de julio de 1981, aprobando el Reglamento de Armas.

— Real Decreto de 20 de agosto de 1981, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas.

— Orden de 14 de enero de 1981, desarrollando el Real Decreto 2.829, de 6 de octubre de 1977, sobre sustancias y preparados psicotrópicos.

— Orden de 1 de diciembre de 1981, estableciendo el contrato tipo de arrendamientos rústicos de conformidad con el artículo 20 de la Ley de 31 de diciembre de 1980.

## Capítulo III

## MEDIDAS DE POLITICA CRIMINAL

1. *Tratamiento penal de la libertad de expresión.*

La transgresión del orden jurídico es, en muchas ocasiones, consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión, reconocida en el artículo 20 del texto constitucional. Por ello es esencial marcar con precisión cuáles son las verdaderas líneas que forman la estructura de aquel derecho y en qué circunstancias su ejercicio abusivo puede convertirse en conducta penalmente ilícita. No se trata, pues, de un derecho absoluto e ilimitado, aunque tampoco de un derecho naturalmente limitado, sino un derecho pleno, abstractamente perfecto que está, en su ejercicio, sujeto a limitaciones específicas derivadas de su necesaria coexistencia con el contenido de otros derechos igualmente fundamentales. Su radio es amplio, pero no indefinido. Como la libertad de expresión no es un derecho prevalente o de mayor rango que otros derechos reconocidos en la Constitución, cuando se manifieste en comportamientos antijurídicos, lesionando o poniendo en peligro otros derechos, los titulares de éstos están legitimados para provocar la tutela de los órganos jurisdiccionales frente a quien se ha excedido en el ejercicio de su derecho de expresión.

Los criterios inspiradores de ese límite son de diversa naturaleza. Atendida la *tutela individual,* la libertad de expresión no podrá afectar negativamente a la dignidad y el honor. Si se ponderan los *valores de la sociedad* de que el individuo forma parte, la libertad reconocida ten-

drá, como límite, la moral y las buenas costumbres. Si se toma nota de la necesária *defensa del Estado* y de las instituciones, la esfera de los límites estará en la protección del orden constitucional, de órganos y autoridades. O, más en síntesis, los límites han de contar con una triple proyección: individual (atentados a la intimidad y el honor), social (ofensas a la moralidad y salud públicas) y estatal (desórdenes internos y agresión externa).

Si se ponderan las normas del Derecho Comparado, en el límite se hallan siempre:

— *Las informaciones perjudiciales para los intereses del Estado que exigen su seguridad* (arts. 262 y 290-291 del Código Penal italiano).

— *Los ataques a la Constitución y los ultrajes al Jefe del Estado.* (La Constitución alemana —art. 18— proscribe el abuso de la libertad de expresión de opiniones para combatir el orden constitucional liberal y democrático; la Ley inglesa de 1880 —art. 162— establece sanciones para quienes ataquen a la Constitución del Reino; en el mismo sentido la "Offences against the State Act", irlandesa, de 1939; diversas disposiciones suizas, de 7 de marzo de 1947 y 29 de octubre de 1948, reprimen los actos tendentes a modificar por la violencia la Constitución federal.)

— *Los que impliquen apología de determinados delitos, especialmente los comprendidos bajo la rúbrica de delitos contra la seguridad del Estado y los de provocación a la rebelión* (art. 272 del Código Penal italano; Ley francesa de 1881, art. 24).

— *Las informaciones ofensivas para los órganos del Estado y autoridades, las atentatorias a la independencia de los Tribunales o que obstaculicen el curso de la Justicia.* (El artículo 30 de la Ley francesa de 1881 castiga la difamación a los Tribunales de Justicia, los Ejércitos y los Cuerpos constituidos y el art. 31 las injurias a los miembros del Gobierno y de las Cámaras. El Código Penal italiano las injurias a la Asamblea legislativa, al

Gobierno, Corte Constitucional, Poder Judicial y las Fuerzas Armadas —art. 290— y las ofensas al honor y prestigio del Presidente de la República —art. 278—. Por otra parte, la legislación francesa prohibe la publicación de las actuaciones de procedimiento criminal o correccional antes de su lectura en vista pública. El Código Procesal italiano —art. 164— proscribe la publicación por medio de la prensa del contenido de cualquier documento relativo a la instrucción y al procedimiento antes de su lectura en juicio. Las legislaciones anglosajonas, a través del "Contempt of Court", impiden la publicación de noticias o comentarios que puedan causar el descrédito del Tribunal o entorpecer la labor de la Administración de Justicia.)

— *Las perjudiciales para la vida social que afecten a la moral y buenas costumbres, familia, infancia, sanidad.* (Arts. 528 y 565 del Código Penal italiano referentes a las publicaciones y espectáculos obscenos y a las informaciones ofensivas para la moral familiar. El artículo 283 y siguientes del Código Penal francés tipifican delitos de ultrajes a las buenas costumbres cometidos a través de la prensa y el libro.)

De igual modo, disposiciones de carácter supranacional establecen parecidos límites. Se reconoce el derecho a la libertad de expresión, pero con limitaciones de distinta naturaleza, que se centran en la colisión con derechos privados o con derechos públicos necesitados de una especial protección. Siempre se han de respetar los derechos de los demás y nunca se atentará a determinados intereses públicos. En este sentido, la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, hecha en Roma el 4 de noviembre de 1950, ratificada por España el 26 de septiembre de 1979, en su artículo 10, 1, reconoce que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, derecho que comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas. Pero el propio

artículo 10, inciso 2, señala los límites a ese derecho en estos términos: "el ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la Ley, que constituyen medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del Poder Judicial". El Pacto internacional de derechos civiles y políticos de Nueva York, de 19 de diciembre de 1966, ratificado por España el 13 de abril de 1977, expresa también que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración a fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística (art. 19, 2), así como que el ejercicio de este derecho puede estar sujeto a restricciones que deberán estar expresamente fijadas por la Ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o para la protección de la seguridad nacional, el orden público o la moral pública (art. 19, 3).

La trascendencia de las declaraciones de estos Convenios deriva no sólo del artículo 1, 5.°, del Código Civil —su contenido pasa a formar parte del ordenamiento interno tras su publicación en el *Boletín Oficial del Estado*—, sino también del artículo 10, 2, de la Constitución, a cuyo tenor las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la misma reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

*La libertad de expresión en nuestro ordenamiento jurídico.*

En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la libertad de expresión se reconoce en el artículo 20 de nuestra norma básica. En él se perfilan la estructura del derecho y su extensión, los posibles límites y los efectos de la eventual responsabilidad nacida de su transgresión.

— Está reconocido el derecho a la libertad de expresión. En este término se comprende tanto el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción (art. 20, 1, *a)*), como el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión (art. 20, 1, *d)*). La tutela de este derecho está expresa en la Constitución, ya sea ante el Tribunal Constitucional —recurso de inconstitucionalidad contra leyes que no respeten su contenido esencial (arts. 53, 1, y 161, 1, *a)*) y recurso de amparo (artículos 53, 2, y 161, 1, *b)*)—, ya ante la jurisdicción ordinaria, a través de un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad (art. 53, 2), que es, por ahora, el regulado en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, sobre protección jurisdiccional de los derechos de la persona (disposición transitoria 2.ª, dos, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de 3 de octubre de 1979, y disposición transitoria 2.ª de la Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982).

La protección de este derecho fundamental se extiende también a la esfera penal. En efecto, el artículo 165 del Código Penal —conforme a la redacción dada por Ley Orgánica de 21 de mayo de 1980— sanciona criminalmente a los que impidieren u obstaculizaren el legítimo ejercicio de la libertad de expresión y de difusión informativa.

Los derechos declarados en el artículo 20, 1, *a)* y *d)*, sólo pueden suspenderse cuando se acuerde la declara-

ción de los estados de excepción o de sitio (art. 55, 1.°, de la Constitución, y arts. 13, dos, y 21 de la Ley de 1 de junio de 1981).

*Los límites jurídicos a la libertad de expresión.*

Los límites a esos derechos comprendidos bajo la rúbrica de libertad de expresión no pueden ser internos o anteriores al ejercicio del derecho, dado que es inimaginable su restricción mediante la censura previa (art. 20, 2, de la Constitución). La censura previa, impeditiva o limitadora del derecho, no procede ni siquiera en las singulares hipótesis de los estados de excepción o sitio, como se desprende en forma implícita del artículo 55, 1, de la Constitución y, de modo expreso, del artículo 21 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, pues admitiendo que en aquellos casos la autoridad gubernativa podrá suspender y secuestrar publicaciones, agrega que el ejercicio de tales potestades "no podrá llevar aparejada ningún tipo de censura previa". Por ello, realmente y en este punto concreto, el artículo 193 del Código Penal ha extendido su contenido, por cuanto sancionaba a la autoridad gubernativa que, *fuera de los casos permitidos por las leyes,* estableciere la censura previa de imprenta, supuesto que ahora se dará siempre que se establezca esa censura que la Ley no permite en caso alguno.

— La libertad de expresión tiene, pues, sólo límites externos. Es un derecho fundamental del que gozan por igual todos los ciudadanos y que les protege frente a cualquier ingerencia de los poderes públicos que no esté apoyada en la Ley, e incluso frente a la propia Ley en cuanto ésta intente fijar otros límites que los que la propia Constitución admite; otro tanto cabe afirmar respecto del derecho a comunicar y recibir información. Cualquier limitación de estas libertades sólo es válida en cuanto hecha por Ley, no ya porque así lo exigen diversos Pactos internacionales ratificados por España,

sino, sobre todo, porque así lo impone la propia Constitución, que, extremando aún más las garantías, exige para estas leyes limitativas una forma especial e impone al propio legislador una barrera infranqueable en los artículos 53, 1, y 81 (Cfr. en este sentido las Sentencias del Tribunal Constitucional de 16 de marzo de 1981 y de 31 de marzo de 1982).

Si la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes son fundamento del orden político y de la paz social (art. 10, 1, de la Constitución), el ejercicio de la libertad de expresión tendrá como límite constitucional el desconocimiento de tales derechos. Así, son sus límites legales (art. 20, 4) el respeto a los derechos reconocidos en el Título I de la Constitución y en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y, de modo especial , el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia. El respeto a los derechos de los demás se exige como límite esencial e insalvable del derecho a la libertad de expresión, que para el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, ha sido muy recientemente regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, cuyo fin es el desarrollo del principio general de garantía de los derechos a que se extiende, que gozarán de protección civil y penal especial frente a intromisiones ilegítimas. Por ello ha podido declarar la Sala 2.ª del Tribunal Supremo que la Constitución española de ninguna manera ampara indiscriminadamente la libertad de expresión (Sentencia de 19 de noviembre de 1981), derecho que debe terminar y termina donde empieza el derecho de los demás a defender su prestigio, honorabilidad y dignidad (Sentencia de 10 de abril de 1982), pues, aun reconociéndola como natural y fundamental de la persona, acatado con el criterio liberal del sistema político-social que recoge la Constitución,, las actividades y conductas que se hagan con manifiesta infracción legal no permiten ser justificadas a través incluso del

ejercicio profesional, principalmente en beneficio del propio sistema político, que exige para su vivencia el máximo respeto a sus instituciones (Sentencia de 25 de abril de 1980).

Por todo ello, tanto el exceso en el ejercicio del derecho como la falta de respeto a los derechos de los demás, siempre que se sitúen fuera del área reservada al derecho, pueden alcanzar una proyección penal. Surge así una relación evidente entre justicia penal y libertad de expresión, sobre todo a través de acciones atentatorias al honor de personas y autoridades, ofensivas para órganos especialmente protegidos o simplemente contrarias a determinados principios que rigen la vida social o perjudiciales para la seguridad del Estado. Estos límites, realmente excepcionales, al derecho a la libertad de expresión, requieren una concreción penal típica y en mayor proporción se individualizan en los delitos cometidos por medio de la prensa. En garantía del derecho y de la singularidad del límite —esencial a un sistema de convivencia de libertades— es de destacar que su extinción sólo se produce en virtud de sentencia firme, emanada de Jueces independientes, sometidos al imperio de la Ley y con intervención preceptiva del Ministerio Fiscal, cuyas funciones claves son la defensa de la legalidad y la de los derechos —todos los derechos— de los ciudadanos que el ordenamiento jurídico reconoce y ampara.

Cierto que los efectos penales del incumplimiento de los límites no emana explícitamente de la Constitución. Pero sí de modo indirecto, porque el artículo 20, 5, establece el secuestro de publicaciones, medida cautelar que se condiciona a la existencia de una previa resolución judicial; y el secuestro, a su vez, subsigue a la iniciación, por Juez competente, de un procedimiento penal en razón de hechos constitutivos de delito (art. 816 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y art. 3, párrafo 2.°, de la Ley de 26 de diciembre de 1978).

La violación de los límites a la libertad de expresión halla en el Código Penal muy variadas figuras de delito cuando el medio comisivo sea la imprenta u otro procedimiento de publicidad o difusión. Recogemos aquí algunas de las infracciones de mayor importancia o que con más frecuencia se producen:

*Ataques a la Constitución.*—La Constitución, en cuanto norma superior de las que componen el ordenamiento jurídico (art. 9, 1), se halla protegida. Se tutelan, en efecto, los intereses que representa la permanencia de la Constitución —valor supremo y expresión típica de la continuidad democrática— en los artículos 214, 1.º; 216 bis y 217 del Código Penal, según la redacción dada por la Ley Orgánica 2/1981, de 4 de mayo. Si el artículo 214, 1.º, considera reos de rebelión a quienes se alzaren públicamente con el fin de derogar, suspender o modificar la Constitución, el artículo 216 bis *a)* sanciona la conspiración, proposición, provocación o apología con aquellos mismos fines siempre que se hicieren por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro procedimiento que facilite su publicidad. Se trata de un atentado contra su vigencia. Aunque la finalidad no es única (derogar, suspender o modificar fuera de las vías prevenidas en los arts. 166-169), es claro que de su conjunto se desprende que asume la posición de bien jurídico la vigencia de la Constitución y ello aunque el de mayor importancia sea la derogación, que realmente es el término jurídico antitético al de vigencia.

*Apología de determinados delitos.*—La apología cometida por medio de la imprenta u otro procedimiento que facilite la publicidad, es un límite a la libertad de expresión que halla su encaje en normas diversas. No siempre será fácil adscribir una conducta en el tipo exacto. En el radio del artículo 566, 4.º, se hallan los que por medio de la imprenta, litografía u otro medio de publicación hicieren apología de acciones calificadas por la Ley como

delitos que no fueren de los expresados en el artículo 268. Este artículo —redactado por Ley Orgánica 4/1980, de 21 de mayo— tipifica la apología llevada a cabo por medio de la imprenta u otro procedimiento de difusión de delitos comprendidos en este Título o de los cometidos por bandas o grupos armados y sus conexos o de sus culpables. El artículo 1.º del Real Decreto-Ley 3/1979, de 26 de enero, sanciona la apología por medio de la imprenta u otro procedimiento de difusión de las conductas y actividades de las personas referidas en el artículo 3, 1.º, esto es, de los delitos cometidos por personas integradas en grupos o bandas organizados y armados. Y, en fin, el artículo 216 bis *a)* tipifica la apología de los delitos comprendidos en los artículos 174 bis *b)*, 214 y 217 (delitos de rebelión), la de la rebelión militar y la del terrorismo realizado por medio de bandas o grupos armados a que se refiere la Ley Orgánica 11/1980, de 1 de diciembre.

*Expresiones injuriosas para autoridades, instituciones y órganos del Estado.—a)* En los artículos destinados a regular el desacato que protege el honor y dignidad de las autoridades se utiliza el término injuria en la significación técnico-jurídica que formula el artículo 457. En los artículos 240-241 se distingue, en función de la penalidad, entre las graves y las leves. Mas en el artículo 244 no existen calificativos para las injurias; estarán en él tanto las graves (art. 458) como las leves (art. 460) y las livianas (art. 586, 1.º). Luego cualquier tipo de injuria proferida contra los destinatarios protegidos en la norma (ministros, autoridades) es capaz de integrar el delito. Con la particularidad además de que éste es el único de los tipos de desacato que puede cometerse a través de la imprenta. En este sentido no es exacto el artículo 4 *a)* del Real Decreto-Ley de 4 de enero de 1977, modificado por el Real Decreto-Ley de 23 de noviembre de 1979, conforme al cual es competente la Audiencia Nacional para conocer de los delitos comprendidos en

los artículos 240, 241 y 244 "cuando se cometan utilizando medios de comunicación social o cualquiera otro que facilite la publicidad". Porque es, al menos, problemático que todos los subtipos de los preceptos aludidos puedan cometerse a través de la prensa. Excluimos en los artículos 240, 241 las injurias inferidas *en su presencia* porque, lógicamente, son las verbales. La otra modalidad es la de las injurias fuera de su presencia, pero *en escrito que se dirija al ofendido*. De su literalidad parece desprenderse que se trata de injurias por escrito, pero sin publicidad, esto es, de escrito dirigido *directamente*, no a través de la prensa. Con esta interpretación los delitos de los artículos 240 y 241 difícilmente son comisibles por medio de la prensa, salvo que se adoptara la modalidad de "carta abierta" y se entendiera así que el destinatario del escrito era el destinatario de la "carta abierta". Al contrario, el artículo 244 no ofrece problemas por cuanto tipifica las injurias o calumnias *por escrito que no estuviere dirigido* a un ministro o una autoridad. Este escrito, que no tiene por destinatario inmediato el ofendido, sí está relacionado de modo directo con la prensa. Y precisamente el artículo 244 es el único campo en donde se desarrolla el derecho de crítica, implícito en el derecho a la libertad de expresión. El derecho de crítica es legítimo ejercicio del derecho al tener por finalidad el control de los actos de gobierno de quienes ejercen funciones públicas. Pero tal derecho no es ilimitado, aunque no sea fácil precisar cuándo la crítica es ejercicio normal del derecho y cuándo es exceso.

Indudablemente, para su exacta interpretación es esencial la jurisprudencia del Tribunal Supremo en torno al derecho de crítica de actividades políticas y administrativas y sus límites. Conforme a la sentencia de 8 de julio de 1981, el derecho de libertad de expresión ampara el derecho de emitir juicios respecto al comportamiento de personas en el ejercicio de los cargos a los que se halla confiado el cuidado de los intereses públi-

cos, con lo que la crítica es una exigencia programática indispensable para el mantenimiento de la identidad de las costumbres. En la misma línea la sentencia de 12 de diciembre de 1981. Por su parte, la reciente sentencia de 10 de abril de 1982 dice que resulta evidente que cualquier ciudadano tiene el derecho a manifestar públicamente su opinión sobre la gestión de gobierno de las autoridades, decisiones y mandatos tomados en el ejercicio de sus cargos que afecten a la vida pública usando del derecho de crítica que les corresponde, en cuanto tal derecho puede contribuir a la perfección de la humana convivencia, favoreciendo el bienestar común, por lo que el ejercicio de una crítica, aun dura y desabrida, pero sana, honesta y constructiva, no constituye el delito de desacato y más si el imputado se dedica al periodismo, siempre que su única motivación sea la de censurar, sin malas intenciones, la labor pública desarrollada por el censurado.

Traspasado el círculo en que se desenvuelve el derecho de crítica se llega al área de los límites con contornos típicamente penales. Mas no es fácil hallar el equilibrio entre el derecho a criticar actividades públicas y el límite, sobre todo cuando éste pueda afectar negativamente a la dignidad de las personas. En un sentido muy general, la sentencia de 12 de diciembre de 1981 expresa que, si bien existe el derecho de crítica periodística de la función pública, no lo es menos que el ejercicio de ese derecho tiene los límites a que obliga el respeto a dicha investidura y la consideración personal debida a quienes la encarnan. La sentencia de 8 de julio de 1981 sitúa los límites al ejercicio del derecho de crítica en el respeto a otro derecho fundamental también reconocido. La sentencia de 10 de abril de 1982 declara que los límites están en el respeto al honor, prestigio y reputación de las personas a quienes se hubieren confiado las funciones públicas, por lo que cuando se les injuria o calumnia con ataques a su vida privada, tal conducta, al care-

cer de utilidad social, no puede justificarse invocando la libertad de crítica o de expresión.

Así, los límites al derecho de crítica se hallan en el respeto a otros derechos fundamentales. Pero el *animus criticandi,* en general, perfectamente lícito, en cuanto supone el ejercicio de un derecho, puede quedar eliminado y dar origen al *animus injuriandi,* elemento integrador del delito de desacato. El tránsito desde la conducta amparada en el derecho hasta el comportamiento punible, no siempre podrá concretarse con facilidad. Es claro que el derecho de crítica de las actividades político-administrativas —aun sobre la base de que persiga la defensa de intereses comunitarios— no posee un radio indefinido y que la tutela jurídico-penal de que es objeto el honor en nuestro ordenamiento representa un obstáculo para la legitimidad o justificación de actos atentatorios contra la dignidad personal. Estos podrían ser los principios informadores irrenunciables. Lo demás es relativo y circunstancial, por lo que en cada caso los Tribunales apreciarán libremente si un hecho dado se conforma con el contenido del derecho —*animus criticandi*— o traspasa sus límites, para adentrarse en la estructura antijurídica del *animus infamandi.* La vigencia de uno u otro *animus* puede apreciarse según que la crítica fundamental se proyecte sobre los hechos relativos a la actividad pública del destinatario —los juicios críticos de carácter social, político o económico no son constitutivos de delito en cuanto no menoscaban la honra o el crédito— o tengan conexión exclusiva con la vida o moralidad privadas; o según se manifiesten en juicios razonados de discrepancia con el hecho, actitud o comportamiento criticado o se limiten a meras expresiones descalificadoras y vengativas, sin apoyatura racional alguna.

*b)* Las instituciones y órganos del Estado también se hallan protegidos contra las ofensas inferidas a través de la imprenta u otro medio de difusión. Así, los

artículos 156 y 161, que tipifican las injurias contra el Gobierno y órganos legislativos y jurisdiccionales; o bien el artículo 467, en donde se incluyen las ofensas a Corporaciones o clases determinadas del Estado. Más recientemente, la Ley Orgánica 9/1980, de 6 de noviembre, dedicada a la reforma del Código de Justicia Militar, dio contenido al artículo 242 del Código Penal sancionando las injurias —cualquiera sea el modo de ejecución empleado— a los Ejércitos o sus Instituciones, Armas, Clases o Cuerpos determinados.

*Atentados a la moral y a las buenas costumbres.*—La pornografía en las publicaciones integra otro límite al derecho de libertad de expresión. Así lo reconoce la sentencia de 19 de noviembre de 1981, declarativa de que la constante doctrina de esta Sala viene subsumiendo la pornografía en el artículo 431 del Código Penal en cuanto atenta a los sentimientos de moralidad, decencia y morigeración propios de cualquier sociedad civilizada y culta. Y este criterio no pugna con la Constitución española, porque de ninguna manera ampara indiscriminadamente la libertad de expresión. Como se deduce de la simple lectura del artículo 20, 4, en el que sitúa el límite máximo permitido, no traspasable, en la protección de la juventud y de la infancia —que no queda garantizada, por supuesto, con la estampación de un rótulo que diga "publicación para adultos"— y del Real Decreto 3.471/1977, de 16 de diciembre, y la Orden de 5 de septiembre de 1978, ya que ambas disposiciones, puramente administrativas, se refieren sólo a las publicaciones eróticas y no tienen consecuencias penales cuando se infrinja un precepto de tal índole.

El límite que representa la pornografía es de difícil concreción. El artículo 431 ha sido el cauce que ha posibilitado la sanción de publicaciones pornográficas; la norma es abierta y está formada por ciertos conceptos culturales normativos-valorativos (pudor, buenas costumbres) que conducen a pensar que su radio queda res-

tringido a las ofensas públicas contra la moral sexual; así el bien jurídico protegido queda acotado a un campo muy concreto de las *bonae mores:* las costumbres sexuales, como se justifica por la colocación sistemática del artículo 431 y por el propio catálogo jurisprudencial de casos subsumidos en el tipo. Esas ofensas al pudor pueden cometerse de "cualquier modo", pero en el tema de la pornografía es necesario señalar los límites ilícitos de la libertad de expresión cuando el medio usado es la imprenta u otro procedimiento de publicidad. Así, la sentencia de 4 de junio de 1979 afirma que el Tribunal Supremo viene declarando incesantemente, desde tiempos remotos hasta la actualidad, que la redacción o venta de novelas, semanarios, publicaciones, folletos, películas, discos u otro tipo cualquiera de material pornográfico, integra delito de escándalo público. Pero las características del acto ofensivo a la moral, esto es, del acto obsceno o pornográfico, no siempre es fácil de precisar. Las diferencias entre el hecho jurídico lícito y los hechos con tipicidad penal no siempre son fácilmente perceptibles en publicaciones gráficas o escritas, pues estarán en función del significado de ciertas normas de cultura y de la permanencia en la colectividad de determinados valores morales, aun cuando, por mucha que sea la degradación de las costumbres, no deberá prescindirse de los principios inmutables de la moral.

De cualquier manera, las notas de la llamada pornografía total o completa, perfectamente típicas, son claras y derivarán de publicaciones encaminadas directa y exclusivamente a excitar la sexualidad siempre que tengan carácter obsceno con capacidad para depravar y corromper a personas abiertas a su influencia. Sin embargo, cuando nos desenvolvemos ante otro tipo de pornografía, menos intensa, pero capaz de atentar al pudor, la denominada aparente o sugestiva, la formación de la estructura delictiva no será sencilla.

*El problema del secuestro de publicaciones.*—El ejer-

cicio abusivo del derecho a la libertad de expresión cuando la transgresión de los límites constituya conducta antijurídica, aparte de la pena puede dar lugar, y en virtud de resolución judicial, al secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información.

Si los límites son vulnerados y el comportamiento se estructura como figura de delito, procede acordar la medida cautelar del secuestro, pero, en todo caso, por decisión del Juez competente. El secuestro tiene naturaleza judicial. En este sentido se ha modificado de modo sustancial la legislación inmediatamente anterior. El artículo 64, 2, de la Ley de Prensa de 1966 permitía el secuestro previo de publicaciones por parte de la Administración. Con el Real Decreto-Ley de 1 de abril de 1977 permanece junto al secuestro judicial el secuestro administrativo, aunque no sea general, sino reducido a supuestos especiales (art. 3, apartados *b)* y *c)*). Con la Ley de 26 de diciembre de 1978 desaparece la facultad administrativa de secuestro, tanto en su modalidad de previo al judicial como en la de secuestro administrativo independiente, como consecuencia de la exigencia constitucional de que sólo en virtud de resolución judicial puede acordarse tal medida (art. 20, 5).

Sin embargo, el artículo 193 del Código Penal prevé el secuestro no judicial en cuanto sanciona a la autoridad gubernativa que, *fuera de los casos permitidos por las Leyes,* recogiere ediciones de libros o periódicos. Lo que es congruente con la Constitución, pues el derecho a que el secuestro lo acuerde la autoridad judicial puede suspenderse cuando se declaren los estados de excepción o de sitio (art. 55, 1). Y la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio (art. 21, 2), expresa que durante el estado de excepción la autoridad gubernativa podrá ordenar el secuestro de publicaciones. A esa misma medida, para la hipótesis de estado de sitio, se refiere el artículo 32, 3. Mas si se relaciona el artículo 21, 2, de la Ley de 1 de junio de 1981 con el artículo 20, 5, de la Constitución

se observa lo siguiente: que el secuestro judicial abarca a las publicaciones, grabaciones y otros medios de información, en tanto que la secuestrabilidad competencia de la autoridad gubernativa, para los estados de excepción y sito, se reduce exclusivamente a las publicaciones.

El secuestro de publicaciones es coincidente con el acto de iniciación sumarial. El Juez tiene la facultad de iniciar o no el procedimiento penal, pero si lo inicia, por revestir los hechos apariencia delictiva, el secuestro es un imperativo ineludible. El sistema de que el acto de secuestro se condiciona a la apertura sumarial, está expreso en el artículo 816 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal e implícito en el artículo 3.º de la Ley de 26 de diciembre de 1978 en cuanto se remite a los artículos 816-823 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Antes de la iniciación sumarial no son imaginables actuaciones de ningún tipo encaminadas a preparar un posible secuestro posterior.

El objeto del secuestro lo componen, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los efectos e instrumentos (ejemplares impresos del escrito o estampa y el molde de ésta: arts. 816 y 822). En la Ley de 26 de diciembre de 1978 (art. 3, 1.º), las publicaciones o la prohibición de difundir o proyectar el medio a través del cual se produjo la actividad delictiva. En el artículo 216 bis *a)*, referido a la conspiración, proposición y provocación de los delitos, de los artículos 174 bis, 214, 217, y a la apología de estos delitos y a la de la rebelión militar y el terrorismo, la medida cautelar tiene una mayor amplitud. Nada dice sobre el secuestro de los *efectos*, por lo que alcanzará a las publicaciones o al objeto en que se hayan plasmado los medios sonoros o fotográficos. Pero para los *instrumentos* el objeto de la medida se ha ampliado hasta comprender las instalaciones, maquinaria y enseres e incluso el cierre del medio de difusión. La norma es facultativa para el secuestro de instrumentos específicos, pues, iniciado Sumario, el Juez puede no

acordarlo; el secuestro de la publicación por aplicación de las normas generales y la medida de cierre, por el contrario, son obligados si se solicitan por el Ministerio Fiscal en la querella y ésta es admitida.

El secuestro se justifica fundamentalmente por la necesidad de prevenir la difusión de publicaciones de contenido presuntamente antijurídico; su recogida después de la circulación de los impresos delictivos haría realmente ineficaz la medida cautelar real, pues no se impediría la producción del daño que se trata de evitar. Ahora bien, ¿la actual ordenación del secuestro de publicaciones es ajustada para conseguir los fines que con él se pretenden? Difícilmente la medida de secuestro acordada por el Juez puede llegar a tiempo de obstaculizar la difusión, dadas la entidad de los actos procesales que deben precederla (denuncia o querella, examen de la naturaleza de la posible infracción en cuanto determinante de la competencia, resolución motivada decidiendo iniciar el procedimiento), la brevedad del plazo de depósito para publicaciones periódicas y unitarias de una sola página (art. 12 de la Ley de Prensa) e incluso la duración de la ejecución material del secuestro. Como no es posible un secuestro a prevención o anterior a la iniciación del sumario, la única alternativa podría ser ésta: la actuación de carácter material, consistente en la urgente remisión de los ejemplares a la autoridad judicial por los órganos ante los que se efectúa el depósito de ejemplares; o la de carácter jurídico, de entender que el acto material de impresión, al que no acompaña aún la difusión por evento ajeno a la voluntad de los posibles imputados, es punible, aunque no se aplique la consecuencia punitiva íntegra, que se condiciona en el artículo 15 del Código Penal a la difusión o publicidad; así, la impresión delictiva no es un acto preparatorio impune, sino que, tratándose de un acto inequívoco, dirigido directamente a la ejecución, se adentra ya en el área de la tentativa. Hemos de reconocer, sin embargo,

que el carácter puramente formal de esos delitos, generalmente de mera actividad y sin exigencia de un resultado material, dificultan técnicamente esa interpretación.

*Conclusiones.*

La experiencia diaria nos enseña que la disciplina normativa del derecho a la libertad de expresión no es siempre respetada y en muchas ocasiones explícitamente violada por muy concretos medios de comunicación, que, situados en sus informaciones en los límites de lo delictivo, apoyan conductas contrarias a principios institucionales o atentatorias a derechos constitucionalmente relevantes, cuando no hacen un tratamiento positivo del terrorismo y de los actos de violencia rayanos en la apología.

El panorama legislativo en esta materia no es completo. Para que el ejercicio del derecho pueda acomodarse a los principios constitucionales, es preciso concretar normativamente los límites, teniendo en cuenta que todo lo excepcional —como son los límites— es de interpretación estricta.

Afirmada la tutela del derecho a expresar libremente pensamientos y opiniones en el artículo 20, 1, *a)*, de la Constitución, existe otra específica norma, también sin desarrollar (art. 20, 1, *d)*), que reconoce la libertad de información, comprensiva de los derechos al acceso, a la difusión y a la recepción de informaciones; así se concilian el derecho a adquirir información y el derecho de los ciudadanos a informarse a través de las varias opciones posibles, dado que esta libertad no se reduce a la comunicación por medio de la prensa, sino que también se refiere a las demás fuentes de información de que hoy dispone (informaciones radiofónicas y televisivas). Al Estado corresponderá el deber, negativo, de no obstaculizar su ejercicio y, el positivo, de garantizar el pleno

derecho a la información dentro de ciertos límites. Es urgente la promulgación de las oportunas disposiciones reguladoras de la libertad de expresión, tanto en su forma más común como la que se exterioriza en el derecho de información. Precisamente en las Cortes ha tenido entrada muy recientemente un proyecto de Ley Orgánica sobre ejercicio de la libertad de expresión a través de la radiodifusión y de la televisión, fundamental para el desarrollo de la libertad de comunicación audiovisiva y con la que se abrirán nuevos cauces de gestión de la información.

— No podrá eludirse en las futuras normas que desenvuelvan el artículo 20, 1, *a)* y *d)*, el tratamiento de las relaciones entre los medios de comunicación de masas, el derecho del ciudadano a ser informado y la reserva de algunas actividades del Estado que deberán situarse en el área de los límites. Si la actividad legislativa estará sujeta de modo incondicionado al principio de la publicidad, un determinado campo de la acción de los poderes ejecutivo y judicial estará gobernado por la no publicidad.

Principio rector puede ser el de la publicidad de todas las actividades de los órganos del Estado, con el consiguiente derecho a obtener información, pero al mismo tiempo, y cuando de esa publicidad puedan derivarse perjuicios para la seguridad estatal u otros intereses protegidos, serán imprescindibles medidas positivas para evitar que trascienda el conocimiento de lo que deba permanecer secreto; no sólo se limitará en este caso el derecho a informar, sino incluso el derecho a obtener información, desapareciendo la situación objetiva de la publicidad y la subjetiva de conocimiento o información.

— Derecho de información y justicia es otra faceta que deberá perfilarse exactamente y de modo especial las relaciones entre ese derecho, el proceso penal y el alcance del secreto. En cualquier caso, al contenido del derecho es esencial una información veraz sobre el desarrollo

de la actividad judicial en razón al legítimo interés de la opinión pública en conocer determinados sucesos, pero las revelaciones o informaciones intempestivas pueden causar perjuicios irreparables para la Justicia o los justiciables cuando los procesos penales se hallen pendientes. La indebida interferencia de los medios de comunicación, ya sea en la fase de investigación o en la de celebración del juicio, debería reprocharse ilícita, al modo del "contempt of Court" de la práctica y la legislación anglosajona, e impedir así influencias dañosas para el imputado, terceros o la independencia judicial.

La relación entre la actividad de los Jueces y el derecho a informar de los periodistas, es difícil de estructurar; de un lado, porque compromete, si no es suficientemente definida, dos fundamentales garantías del ciudadano: la justicia y la información; y, de otro, porque convergen en ella posiciones antitéticas en los planos periodístico y judicial, cuales son el principio del secreto instructorio y el del secreto profesional. Pero partiendo de la compatibilidad entre las funciones informativa y judicial, deben excluirse tanto la información plena como el silencio informativo durante la fase temporal de la instrucción de determinados procesos judiciales. Mas, una vez abierto el juicio oral, con la publicidad del procedimiento, surge pleno el derecho a informar, con los límites indispensables derivados de la necesidad de no impedir la efectiva actuación de la Justicia. Concurren así la publicidad procesal y la publicidad informativa.

Durante la fase instructoria o de investigación, regida por el secreto de las diligencias practicadas en el ámbito judicial (art. 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), toda información sobre hechos que pueda interferir la acción de la Justicia deberá evitarse, así como las que puedan contribuir a obstaculizar la de los órganos encargados de la instrucción. El secreto de la instrucción, que es un impedimento para la información, representa tam-

bién una prohibición de revelación por quienes intervienen en el proceso como partes. Ello es así porque la inoportuna revelación de fuentes de prueba puede favorecer la alteración o destrucción de los *instrumenta sceleris*, la fuga de delincuentes o las presiones sobre testigos; junto a las garantías probatorias concurren también a justificar el secreto de la instrucción el derecho del imputado, que cuenta con la presunción de no culpabilidad hasta la condena definitiva (art. 24, 2, de la Constitución). Para que la disciplina normativa del secreto pueda ser respetada y el silencio informativo en este campo no alcance grados de exasperación, debería imponerse una mayor aceleración de los procedimientos y una reducción de los límites del secreto sumarial, congruente con la nota genérica de publicidad que para las actuaciones judiciales señala el artículo 120, 1, de la Constitución.

De igual modo, es precisa una adecuada regulación del derecho al secreto profesional, reconocido en el artículo 20, 1, *d)*, de la Constitución, y en relación con la Justicia en el artículo 24, inciso final (derecho a no declarar por razón de secreto profesional sobre hechos presuntamente delictivos). Actualmente no se reconoce al periodista el derecho a ocultar incondicionadamente las fuentes de conocimiento ante los Tribunales de Justicia: el deber de declarar en juicio extingue el derecho, eximiendo a los periodistas de guardar el secreto, ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo reconoce el derecho a negarse a declarar sobre hechos conocidos, por razón porfesional, a Abogados, eclesiásticos y ciertos funcionarios públicos; y es que para éstos puede ser delictiva *la revelación de secretos* (tienen derecho a no revelar) y para los periodistas podría ser delictiva *la no revelación* (tienen obligación de revelar, pues el deber de testimoniar en causas criminales justifica la revelación).

Pero el secreto profesional en el ejercicio de la liber-

tad de información proyectado sobre el periodista y relacionado con la Justicia ¿ha de ser un derecho absoluto o contará con límites? Una cosa es clara: si no se ha publicado la noticia no hay derecho al secreto, y el periodista, ante esta circunstancia, es como un ciudadano cualquiera. Si la noticia se ha publicado, la alternativa consistirá en determinar *cuándo se extingue el derecho* a mantener el secreto de las fuentes de información (derecho a no revelar las fuentes) y cuándo nace la *obligación* de revelar esas fuentes. En líneas generales, habrá que entender, por el principio de colisión de intereses, que cuando concurra un derecho de orden más elevado (vida, seguridad nacional) debe ceder el derecho a callar las fuentes y surge la obligación de hablar.

*Otras posibles precisiones legales* pueden encontrarse en:

*a)* Una mayor definición de la extensión del derecho de crítica, como "animus" excluyente del "injuriandi", tanto en el terreno público de los desacatos como en el privado de las injurias y en la línea ya subrayada precedentemente de distinguir lo que es expresión discrepante, apoyada en juicios argumentados, por duros que sean, de lo que es mero desahogo o expresión peyorativa sin contenido racional o de enjuiciamiento del hecho, actitud o conducta criticada.

*b)* Introducción de la tutela de la libre actuación jurisdiccional, en fórmula análoga al anglosajón "contempt of Court", que evite las intromisiones y presiones de la publicidad y la prensa durante el delicado proceso de un enjuiciamiento.

*c)* Perfilar positivamente el límite entre los impunes actos preparatorios y la punible tentativa, en el sentido, ya señalado, de considerar que el comienzo de la impresión de una publicación de contenido delictivo constituye un acto externo, dirigido directamente a la ejecución del delito, de carácter inequívoco y, por ende, conflictivo ya de tentativa y sancionable, sin exigencia

alguna de la posterior publicación. Como hemos señalado, el carácter formal de los delitos de imprenta exige, para llegar a esa solución, una tipificación expresa de esa sanción anticipada de la conducta, a la que no podría llegarse tan sólo con la aplicación de los principios generales de la tentativa.

*d)* Congruentemente con la actuación anterior, cabría extender el secuestro a los supuestos de tentativa y a los efectos e instrumentos en que el acto intentado se materializa.

*e)* Por último, convendría actualizar ciertas iniciativas del Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal en esta materia, cual es la extensión de la responsabilidad de la autoría de los delitos de imprenta, cometidos por medios de comunicación social, no sólo al autor material del texto, estampa o imagen hechos públicos, sino también al director de la empresa, medio o programa en que fueran difundidos, y de la empresa impresora o grabadora cuando participaran culpablemente en el hecho al conocer el contenido delictivo de lo difundido (art. 34 del Proyecto de Código Penal), suprimiento la actual responsabilidad en "cascada", que permite delinquir impunemente tan sólo con buscar una "cabeza de turco" que se responsabilice como autor del texto o director de la publicación, pero dejando a salvo los intereses económicos de la empresa que obtiene el lucro.

En el mismo sentido de profilaxis criminal cabría señalar la iniciativa del artículo 231 del citado Proyecto de Código Penal, que permite la aplicación, como medida de seguridad, de la suspensión de profesión u oficio a los responsables de los delitos cometidos a través de los medios de comunicación; o la de suspensión del órgano informativo en que el delito de calumnia o injuria se hubiere propagado, medidas de seguridad que convendría extender a los demás supuestos de delitos contra la seguridad del Estado cometidos por tales medios.

2. *Tratamiento penal del tráfico de drogas.*

Anteriores Memorias han dejado constancia de la preocupación de la Fiscalía General del Estado por el incremento del consumo de estupefacientes en nuestro país, con la natural consecuencia del aumento del tráfico de dichas sustancias. Desgraciadamente su número sigue creciendo, como demuestra el cotejo de los datos estadísticos que ofrecen los procedimientos incoados durante los últimos años en prevención de esa clase de hechos:

| | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diligencias previas ... ... ... | 820 | 1.048 | 2.053 | 2.427 | 2.995 |
| Diligencias preparatorias ... | 68 | 94 | 99 | 162 | 136 |
| Sumarios de urgencia ... ... | 679 | 1.063 | 1.296 | 1.483 | 1.778 |
| Sumarios ordinarios ... ... | 552 | 831 | 848 | 1.276 | 1.675 |
| Procedimiento Ley 10/1980. | " | " | " | " | 109 |

La única cifra que presenta disminución es la relativa a las Diligencias preparatorias, pero este dato exclusivamente nos sirve para deducir que la tramitación ha sido más cuidadosa que en anteriores años, pues, dada la naturaleza de los delitos que nos ocupan y las penas que les corresponden, el procedimiento de urgencia ante Juzgado nunca puede ser el apropiado.

La prevención del consumo de droga y estupefacientes es fundamental para el combate contra su tráfico. Indudablemente el consumo genera tráfico y éste a su vez tiende a multiplicar el primero, con el fin de acrecentar el negocio, que constituye el transfondo de la operación.

El drogadicto es proclive a la comisión de delitos además del específico de tráfico de estupefacientes: los de falsificación de recetas médicas, escándalos públicos y delitos contra la propiedad (atracos en farmacias, robos a mano armada en establecimientos bancarios, robos en la modalidad de "tirón" y, en general, toda clase de infracciones catalogadas como robos). La mayoría de

estos delitos son cometidos para poder costear con el beneficio obtenido el alto precio de su vicio. Todas las actuaciones que tiendan a erradicar el consumo de estas sustancias contribuirá a disminuir la criminalidad en la doble vertiente acabada de apuntar, es decir, respecto a los delitos de tráfico de drogas y en relación con los restantes delitos cuya comisión resulta motivada por la drogadicción.

El problema de la droga afecta hondamente a la comunidad. La droga, extendida en amplias zonas juveniles, debe su aceptación al rechazo de los valores tradicionales hasta ahora existentes, a una falta de acatamiento de los principios comúnmente aceptados y a una negativa a compartir los defectos de la sociedad imperante. Así, haciéndose eco de las reflexiones de ciertos sociólogos, muchos adolescentes se preguntan por las razones que influyen en la sociedad para que se admita como normal y autorizado el uso y tráfico de tabaco y alcohol y por qué sus drogas blandas carecen de esta permisividad.

La definición de la droga como "toda sustancia que cuando se introduce en el organismo puede modificar una o varias de sus funciones", concepto expresado por la Organización Mundial de la Salud y recogido por la Fiscalía del Tribunal Supremo en Circulares relacionadas con la Ley de Peligrosidad Social de 1972, pese a tener que ser calificada como insuficiente, ya que no comprende a los fármacos que no penetran en el interior del organismo, permite, sin embargo, considerar droga, a los efectos de esa Ley, al alcohol. Este criterio, que gana terreno en la propia Organización Mundial de la Salud, descubre la separación entre lo médico-farmacológico y lo regulado en el campo del derecho positivo y también demuestra la parte de razón que acompaña a las posturas contestatarias juveniles en la pregunta a que aludíamos en el párrafo anterior.

Una sociedad ideal, que pudiera desconocer los plan-

teamientos anteriores y sus condicionamientos económicos y sociales, debería dar el mismo tratamiento jurídico al alcohol y a las drogas que le son afines. Desgraciadamente no es esa la situación existente en el contexto y aceptación social del alcohol y la política criminal no puede olvidar a los elementos y factores reales subyacentes en el fondo de la sociedad y por ello debe tener en cuenta que el alcohol forma parte de nuestra "cultura" y que su radical prohibición sería una utopía.

El tratamiento contrario, la legalización de las drogas blandas, es más que discutible. Gran parte de la doctrina entiende, con razón, que los efectos de estas sustancias son perjudiciales para la salud y que son inciertas las pretendidas consecuencias beneficiosas que su autorización produciría en la sociedad.

Consecuencia de lo expuesto es que la comunidad soporta resignadamente los efectos del consumo y tráfico autorizado del alcohol, pero que ningún bien la reportaría admitir y legalizar las drogas blandas, pues sería sumar dos males.

La verdadera respuesta a las anteriores cuestiones debe proceder de la propia sociedad, que, mediante una regeneración de sus actuales valores y metas y una paulatina actuación que lime sus deficiencias, haga deseable el actual modo de vida a los sectores juveniles marginados.

En los presentes momentos es imprescindible el desarrollo de una eficaz campaña de propaganda e información sobre los efectos de la droga. Hay que repetir lo ya manifestado en la Memoria de 1980 sobre la bondad de una publicidad adecuada, pero advirtiendo de los posibles efectos negativos de una información errónea o polémica.

Hay que tener en cuenta que la lucha contra la droga y su tráfico, igual que contra cualquier otro fenómeno que ataque el cuerpo social, debe realizarse con la utilización de cuantos medios y técnicas sean proce-

cedentes. Las medidas penales se encuentran entre ellas, pero como último factor a emplear y con el uso simultáneo de los restantes recursos.

La eficacia de los resultados de la campaña contra la droga vendrá condicionada por la multiplicación de los actuales medios, pero también por la racionalización en su utilización. La Memoria publicada en 1981 exponía en forma exhaustiva los órganos encargados de tal misión y sus competencias. Parece inútil su repetición, pues el estado de la cuestión es el mismo. Por ello, dándoles por reproducidos, hay que reclamar que una única ley regule todos los aspectos relacionados con la droga: penales, administrativos, médicos, etc. El Derecho comparado, como demuestra el estudio de la normativa existente en la mayoría de los países de nuestra área de cultura, nos ofrece ejemplos de leyes de este tipo.

Especial comentario merece la problemática de la regulación penal del tráfico de drogas. El artículo 344 del Código Penal y los números 7 y 8 del artículo 2 de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación contienen la normativa vigente sobre tráfico y toxicómanos. El Proyecto de Ley Orgánica de Reforma parcial del Código afecta, aunque no en puntos esenciales, al articulado vigente. El anterior Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal, pendiente de estudio en el Congreso de los Diputados, tipifica el delito de tráfico en su artículo 326, dentro del Capítulo III del Título VII —delitos contra la seguridad colectiva—. Ese nuevo texto regula el delito con fórmula parecida a la actual, aunque con distintos matices. Donde la divergencia es mayor es en lo referente a las medidas de seguridad, ya que la filosofía del Proyecto es distinta a la que preside la legislación vigente, como se comentará en momento posterior.

El estudio de las normas acabadas de enumerar y especialmente el contenido del nuevo tipo que el Proyecto del Código dedica al tráfico de drogas permite formular una serie de conclusiones:

— Evitaría problemas y dudas interpretativas la adición de la expresión "psicotrópicos" en la referencia existente a "drogas tóxicas o estupefacientes", dada la íntima relación entre estos conceptos y los Convenios internacionales sobre la materia ratificados por España.

— Las conductas típicas que el artículo 344 tan minuciosamente detalla, son refundidas en el artículo 326 del Proyecto de modo acertado. Expresamente se aclara, en coincidencia con la doctrina jurisprudencial, que la tenencia de drogas sólo es delictiva cuando tiene la finalidad de tráfico.

— Dada la importancia del bien jurídico protegido, la salud pública, la pena señalada debe guardar proporción con dicho objeto de tutela y sus correspondientes sanciones. Por ello, teniendo en cuenta las penas establecidas en el vigente Código, la reforma, que el Proyecto de modificación parcial presenta, parece adecuada en cuanto permite la rebaja facultativa, pero suprime la posibilidad genérica de agravación. En el mismo sentido se orienta el Proyecto del nuevo Código.

— Las concretas agravaciones de la pena que el Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal establece para los supuestos de que los culpables que pertenezcan a una organización con finalidad de difundir la droga, sean facultativos, o cuando la droga se difunda entre menores de dieciocho años, son acertadas, aunque el texto pudiera mejorarse en el debate parlamentario en el sentido de ampliar la agravación a la comisión de los demás casos típicos, además del de la difusión, siempre que las víctimas sean menores de dieciocho años.

— La distinción entre drogas "que causen grave daño a la salud" y las restantes, no es comúnmente aceptada por la doctrina científica. Ante la grave crítica que a tal clasificación se formula, con abundantes argumentos, innecesarios de repetir, sería preferible que el legislador abandonase su propósito y se limitase, como fórmula de corrección, a ampliar la autorización que el

párrafo cuarto del artículo 326 del Proyecto concede a los Tribunales en el sentido de que éstos podrán imponer la pena inferior en grado a las establecidas, atendiendo a las circunstancias del culpable, a la naturaleza de la sustancia y a la cantidad poseída para traficar.

— Las medidas de seguridad postdelictuales, únicas que perduran en el futuro Código, que expresamente deroga la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, son acertadas para estos supuestos y la reforma parcial del texto vigente las anticipa.

— Finalmente, la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social llevará consigo la desaparición de las medidas de seguridad predelictuales para los toxicómanos. El tema reviste gran importancia y debe ser objeto de la mayor meditación. La posición del Proyecto se justifica en que la supresión de las medidas de este tipo del campo del derecho penal no impide, parece que propicia, su regulación por otras ramas del derecho positivo desprovistas del carácter represivo, y, además, en la realidad observada de que las medidas curativas impuestas contra la voluntad del paciente (drogadicto) suelen ser ineficaces. Esa postura del Proyecto debiera, pues, encontrar el necesario complemento en una Ley de profilaxis social que arbitre los medios, hoy prácticamente inexistentes, para un adecuado tratamiento desintoxicante y deshabituador de los drogadictos no delincuentes.

Especial mención merecen las "jornadas sobre estupefacientes y psicotrópicos", organizadas por la Fiscalía General del Estado en unión con la Dirección General de la Policía y que tuvieron lugar durante los días 29, 30 y 31 de marzo de 1982 en los locales de la Escuela Judicial. Asistieron Fiscales y funcionarios del Cuerpo Superior de Policía destinados en las provincias con mayores problemas en la materia debatida y fueron expuestas las más importantes cuestiones relacionadas con el tema, dando lugar a amplios debates, en aras de una

mejor colaboración en sus futuras actuaciones sobre el tema.

La relación de los temas examinados fue la siguiente:

— Legislación penal y doctrina jurisprudencial.

— Legislación internacional y legislación administrativa nacional.

— Aspectos sociológicos.

— Prevención de las toxicomanías.

— Interrelación droga-delincuente.

— Avances farmacológicos en el estudio de las drogas.

— Sistemas de tratamiento y rehabilitación de los toxicómanos.

— Las facultades intelectivas y volitivas del agente bajo el efecto de las drogas.

Los debates realizados permitieron llegar a algunos puntos comunes y cabe destacar las siguientes conclusiones:

*a)* Debe comprenderse en el concepto de drogas a las sustancias relacionadas en las listas anejas a los Convenios internacionales ratificados por nuestro país.

*b)* Sería conveniente que el Juez competente autorizase en cada caso la destrucción de los estupefacientes intervenidos cuando su conservación ofrezca dificultades o riesgos de sustracción o utilización, siempre que sean realizados los correspondientes análisis y se reserven muestras-testigo suficientes. Este criterio sigue la pauta de la normativa contenida en el Proyecto de Ley Orgánica de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

*c)* Potenciar las relaciones con la Interpol a los efectos de la debida constancia y prueba de las condenas extranjeras en los procesos nacionales.

*d)* Necesidad de una Ley única que regule la amplia problemática de la droga.

*e)* Reconocer la compatibilidad de las sanciones administrativas y penales desde el punto de vista de la actual legislación, pero resaltar la conveniencia de

una nueva regulación que establezca la incompatibilidad cuando se origine por unos mismos hechos y se quebrante un único bien jurídico.

*f)* Profundizar en la investigación para descubrir a los componentes de la organización que normalmente existen detrás de estos delitos, con la natural consecuencia en cuanto a la competencia de la Audiencia Nacional.

*g)* Persecución de la apología de la droga, pero necesidad de distinguir la apología de las actividades que no constituyan tal figura y, por tanto, están autorizadas.

*h)* Resaltar los graves problemas ocasionados por la falta de coordinación entre los diversos Cuerpos de Seguridad del Estado.

*i)* Importancia de una eficaz colaboración en esta parcela entre el Ministerio Fiscal y la Policía y necesidad de una directa relación Fiscal-Cuerpos de Seguridad.

*j)* Relevancia del examen médico-forense del drogadicto; cuidadosa atención a las situaciones de "síndrome de abstinencia"" con sus limitaciones en cuanto a las posibilidades de actuación y de volición e incidencia de la teoría de las "actiones liberae in causa".

El juicio final de las "jornadas" debe ser positivo. Se intercambiaron puntos de vista, las experiencias particulares fueron puestas en común, los ponentes expusieron los temas en profundidad y se demostró la necesidad de la coordinación en el trabajo de ambos colectivos.

3. *Protección de menores.*

1. Es preciso prestar atención a los diversos problemas que suscita el tema de la protección de menores, a la luz de las exigencias constitucionales, de una parte, y, de otra, en relación con los postulados de un perfeccionamiento, en sentido técnico, de la acción del Estado en este campo, requerido cada día con mayor urgencia por imperativos de Política Criminal.

1.1. El tema, aun tomado con esta amplitud, no es en modo alguno ajeno al ámbito funcional del Ministerio Fiscal.

El artículo 3, 7, del Estatuto del Ministerio Fiscal establece como función suya "asumir o, en su caso, promover la representación en juicio y fuera de él de quienes, por carecer de capacidad de obrar o de representación legal, no pueden actuar por sí mismos, así como promover la constitución de los organismos tutelares que las leyes civiles establezcan y *formar parte de aquellos otros que tengan por objeto la protección y defensa de menores y desvalidos*".

1.2. Cabe poner de relieve un doble aspecto en la formulación por el Estatuto de esta función de amparo, sin duda la más noble entre las confiadas al Ministerio Fiscal.

De una parte, la mayor amplitud con que se concibe. Basta para comprobarlo la comparación con la norma paralela del Estatuto de 1926, que confiaba al Ministerio Fiscal (art. 2, 5.º) "la representación y defensa de menores, incapacitados, ausentes o impedidos para administrar sus bienes hasta que se les provea de las instituciones tutelares prevístas por las leyes en cada caso para la defensa de sus propiedades y derechos".

De otra parte, y precisamente como consecuencia de la ampliación de la función, su carácter excepcional. Veámoslo. Toda la actividad que en el cumplimiento de las múltiples funciones encomendadas al Ministerio Fiscal en el Estatuto (arts. 1 y 3) debe éste desarrollar, se resuelve en actos procesales. Tanto la formulación genérica del artículo 1.º —"promover la acción de la Justicia", "procurar ante los Tribunales la satisfacción del interés social"—, como las específicas formulaciones del artículo 3, suponen siempre una actividad estrictamente procesal. En cambio, como miembro de los organismos que tengan por objeto la protección y defensa de menores y desvalidos, deberá realizar una actividad que esta-

rá, en definitiva, determinada por la propia naturaleza de los citados organismos. Por supuesto, el carácter "excepcional" de una actividad administrativa, no procesal, en el Ministerio Fiscal, sólo es el resultado de una comparación estadística respecto de todas las demás funciones, que claramente se resuelven en actividades procesales. En ningún caso se quiere decir que esa "actividad administrativa" sea excepcional porque no sea coherente con la propia naturaleza de la institución.

1.3.1. Bastaría la norma estatutaria para legitimar que en esta Memoria se dedique una atención especial a la problemática de la protección de menores. Pero existe todavía un aspecto, en modo alguno desdeñable, que refuerza no ya la simple legitimación, sino la necesidad de entrar en él: cuando en el artículo 9 del propio Estatuto se establece la obligación de elevar al Gobierno una Memoria anual sobre la actividad del Ministerio Fiscal, se fijan los distintos objetos del informe, entre los que se cuentan la evolución de la criminalidad y la prevención del delito.

1.3.2. Por otra parte, la preocupación en torno a la prevención y tratamiento de la delincuencia juvenil está presente de modo constante en las Memorias. Baste citar expresamente, en prueba de ello, la Circular de 6 de diciembre de 1966, por la que se dan instrucciones a los Fiscales sobre la metodología de las Memorias, en que se dice: "que el tema de la delincuencia juvenil ha de seguir tratándose... hasta conseguir datos más precisos... Por ello deben aportarse sin falta las estadísticas del funcionamiento de los Tribunales Tutelares de Menores..."

En resumen, si se encomienda al Ministerio Fiscal una función informativa sobre las variables esenciales que interesan a la Política Criminal y, en el marco de ellas, tienen una posición central los problemas relativos a la delincuencia juvenil e infantil, es indudable que estas últimas deben ser objeto por su parte de una

atención creciente y, dentro de este panorama, ocupa su lugar el tema de la acción del Estado encaminada a la protección de los menores como un medio eficaz de prevención de la delincuencia.

2.1.1. Las líneas esenciales del régimen jurídico vigente en materia de protección de menores están contenidas en el Decreto de 2 de julio de 1948, sobre organización de la Obra de Protección de Menores, que establece el régimen jurídico del Consejo Superior de Menores y de las Juntas Provinciales de Menores, y el Decreto de 11 de junio de 1948, que aprobó el texto refundido de la normativa de los Tribunales Tutelares de Menores.

2.1.2. En el aspecto orgánico, dice el artículo 1.º (Decreto de 2-VII-1948) que "la protección de menores es una *institución* de inspección, vigilancia, promoción, fomento y coordinación de organismos y servicios protectores...".

"La Obra de Protección de Menores es una entidad estatal autónoma, dependiente del Ministerio de Justicia, constituida por órganos jerárquicamente ordenados. El Consejo Superior ejerce en el ámbito nacional la acción protectora; las Juntas de Protección de Menores la ejercen en el ámbito provincial.

El Consejo Superior de Menores está dividido en cinco secciones; la cuarta se denomina "Tribunales Tutelares de Menores".

El artículo 30 establece: "El Presidente de la Sección 4.ª, directiva de los Tribunales Tutelares de Menores, será nombrado de entre los Vocales del Consejo Superior por el Ministerio de Justicia."

Los Tribunales Tutelares de Menores están compuestos por un Presidente, un Vicepresidente, dos Vocales propietarios y dos suplentes. Sin embargo, se ha producido un proceso de reconversión de estos órganos colegiados en órganos unipersonales, servidos por Jueces remunerados y unipersonales.

Los Presidentes, Vicepresidentes y los Jueces uniper-

sonales son nombrados por el Ministro de Justicia a propuesta del Consejo Superior de Menores.

Las condiciones para el nombramiento son: ser Licenciado en Derecho, mayor de veinticinco años, de moralidad y vida familiar intachable, que, por sus conocimientos técnicos, se hallen más indicados para el desempeño de la función tuitiva que se les encomiende, no deben ejercer otra jurisdicción judicial *(sic)*. El Consejo Superior designa a los Vocales propietarios o suplentes de los Tribunales Tutelares de Menores.

Actúa como Tribunal de Apelación una Comisión del Consejo Superior de Menores, constituida por un Presidente, un Vicepresidente, dos Vocales propietarios y dos suplentes, todos los cuales serán Letrados y deberán reunir las demás condiciones antes aludidas. Los miembros del Tribunal de Apelación pasan, por razón de su cargo, a ser Vocales del Consejo (art. 5).

En el Consejo Superior de Protección de Menores habrá de actuar una sección de la que formen parte Vocales especializados en materia de Tribunales Tutelares de Menores, que resolverá con carácter ejecutivo los asuntos que afecten a la creación, organización, funcionamiento e inspección de dichos Tribunales (art. 6).

Los preceptos transcritos bastan para configurar en su aspecto orgánico a los Tribunales Tutelares de Menores.

2.1.3. Es preciso contemplar también su aspecto funcional.

La competencia de los Tribunales Tutelares de Menores se articula en torno a tres criterios o pautas de actuación distintos:

Se llama facultad reformadora a una pauta de actuación que no tiene carácter represivo, sino educativo y tutelar. Con esta forma de actuación, el Tribunal conoce de las conductas constitutivas de delito o falta y de los casos de menores de dieciséis años prostituidos, licenciosos, vagos y vagabundos.

Con carácter represivo conocen de las faltas cometidas por mayores de dieciséis años comprendidas en el artículo 584 del Código Penal, que constituye un conjunto de infracciones punitivas caracterizado por el peligro para la salud o la moralidad del menor de edad.

Finalmente, con carácter preventivo, deciden en materia de suspensión del derecho a la guarda y educación del menor, cuando procede, como consecuencia de disposiciones civiles o penales.

2.14. La breve síntesis realizada, en el apartado anterior, de la configuración legal de los Tribunales Tutelares de Menores al hilo del binomio estructura-función, permite señalar los caracteres de esta especial manifestación jurisdiccional de nuestro ordenamiento jurídico: se trata de un Organo híbrido, asentado claramente en el orden de la Administración, que determina su composición libremente, pero con funciones mixtas administrativas y jurisdiccionales.

En el ejercicio de la facultad reformadora, los Tribunales de Menores ejercen una función educativa y tutelar que queda fuera de lo estrictamente jurisdiccional, y lo mismo ocurre en su estricta actividad protectora. Sin embargo, en ambos casos hay momentos propiamente jurisdiccionales. Así, cuando deciden la aplicación de medidas de corrección, respecto de menores de edad penal, que han realizado una conducta definida como delito en la Ley Penal, aparte de presuponer una declaración de exención de responsabilidad criminal por la edad, constatan, mediante la apreciación de las pruebas, unos hechos concretos y, con base en ellos, deciden la aplicación de una medida. Pero todo ello se realiza en proceso especial que en su configuración se aleja considerablemente, podemos añadir, intencionadamente, del proceso jurisdiccional. Hay, simplemente, una investigación "ex officio" de aquellas circunstancias y extremos de importancia para el ejercicio de la función tuitivo-correccional que nada tiene que ver con un pro-

ceso en sentido estricto. La forma de actuación es claramente la de un órgano de la Adminstración.

Lo dicho anteriormente resulta aplicable al ejercicio de la facultad protectora en sentido estricto.

En cambio, la facultad de enjuiciar a mayores de dieciséis años por las faltas comprendidas en el artículo 284 del Código Penal, es una actividad netamente jurisdiccional.

3. El régimen legal de los Tribunales Tutelares de Menores que acaba de describirse choca abiertamente con el artículo 117 (3), (4) y (5) de la Constitución.

Se establecen las líneas generales a que debe someterse el ordenamiento jurídico de la jurisdicción, la Constitución se funda en los principios de separación de poderes, exclusividad de la Jurisdicción y unidad jurisdiccional.

El artículo 117 (3) dice: "El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan."

(4) Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por Ley en garantía de cualquier derecho.

(5) El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales...

3.1. Para sentar las bases de un régimen de separación de poderes es preciso determinar el criterio diferencial, es decir, la idea que sirva como pauta de diferenciación. Esto es lo que hace la Constitución en el artículo 117 (3). Lo que caracteriza a la Jurisdicción como Poder del Estado es que su actividad consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La formulación de este criterio de diferenciación no es nueva en nuestro ordenamiento jurídico, como es natural.

Juzgar es resolver sobre una pretensión que se formula ante los Tribunales como consecuencia de una norma jurídica.

Juzgar es una operación lógica que consiste en constatar una situación de hecho que coincide con el supuesto de una norma jurídica y proclamar la producción de la consecuencia jurídica que esa norma establece.

Cuando se dice en el artículo 9 del Decreto de 11 de junio de 1948 que "en el ejercicio de la facultad reformadora... la jurisdicción del Tribunal no tendrá carácter represivo, sino educativo y tutelar..., y que en el ejercicio de la facultad protectora las resoluciones del Tribunal serán esencialmente preventivas", se está haciendo referencia a funciones muy distintas de la función de juzgar.

El imperativo constitucional impide hoy que se utilice en las leyes ordinarias el término jurisdicción en sentidos distintos del constitucional. Es evidente que no se puede hablar de jurisdicción represiva o de jurisdicción educativa o titular o de jurisdicción preventiva.

El modo de hablar del Decreto está suponiendo una ambigua amalgama de actividad administrativa y jurisdiccional, asignada a un órgano único, que es claramente contraria al mandato constitucional.

3.2. El principio de separación de poderes, que inspira el texto constitucional, actúa expresamente en un doble sentido: atrayendo a la esfera competencial de los Juzgados y Tribunales todo lo que tiene carácter jurisdiccional y excluyendo de ella todo lo que no tiene ese carácter.

Este es el sentido del párrafo 4 del artículo 117 de la Constitución que ha quedado transcrito antes.

Pero es indudable que una actividad de protección de menores y desvalidos, una función tutelar y educativa de menores abandonados o desviados, aun cuando esta desviación se haya manifestado en la realización de un conducta definida en la Ley como delito, es clara-

mente un cometido de la Administración y, si se quiere observar el mandato constitucional, no puede figurar en la órbita competencial de un órgano jurisdiccional.

3.3. Finalmente, el párrafo 5 del artículo 117 de la Constitución consagra el principio de unidad jurisdiccional, que tampoco se observa en las normas reguladoras de los Tribunales Tutelares de Menores.

Baste recordar que los Presidentes de los Tribunales son nombrados por el Ministerio de Justicia a propuesta del Consejo Superior de Menores, que los Vocales propietarios y suplentes se nombran por el propio Consejo, que el nombramiento puede recaer en personas no pertenecientes a la Carrera Judicial, que, en fin, los Tribunales dependen de la Sección 4.ª del Consejo Superior de Protección de Menores.

En conclusión, el actual régimen legal de los Tribunales Tutelares de Menores está en abierta contradicción con las exigencias de la Constitución.

4. Pero este régimen tampoco satisface las exigencias de Política criminal. Bastaría considerar la magnitud creciente de las cifras que alcanza la delincuencia juvenil y la incidencia en la criminalidad de un considerable número de jóvenes que han sido objeto de la acción educativa de las instituciones de menores, para constatar el grado de ineficacia real del sistema de protección y alcanzar a comprender la necesidad de realizar una profunda revisión del sistema; la propia Fiscalía General del Estado, aparte de poner repetidamente de relieve la urgencia de la reforma, ha prestado su colaboración a los órganos de Protección de Menores en el intento, todavía sin éxito, de poner al día su valiosa, pero arcaica, normativa.

5. Finalmente, constatada la necesidad de una profunda reforma de las normas reguladoras de la acción del Estado encaminada a la protección de los menores, es conveniente formular desde ahora los principios fundamentales que deben inspirarla y que derivan del orden

moral, de la propia Constitución y de las exigencias de una acertada Política criminal:

*A)* La acción del Estado encaminada a la protección de los menores, es una acción de naturaleza administrativa y debe ser realizada exclusivamente por órganos de este carácter.

*B)* Esta acción del Estado se debe modular en consonancia con los principios de orden moral, que en esta materia tienen una trascendental importancia, y especialmente:

*a)* Se debe respetar el papel de la familia como institución natural de protección. La familia es el medio natural donde se forma la personalidad del individuo.

— La acción del Estado en este campo tiene carácter subsidiario.

— La institución familiar debe servir de modelo a la acción protectora del Estado.

*b)* Se deben tener en cuenta los derechos fundamentales del menor, tal como se han formulado en la Declaración de los Derechos del Niño, de Naciones Unidas.

*C)* Deben desaparecer los actuales Tribunales Tutelares de Menores, dando a los problemas jurisdiccionales que a éstos competen en estos momentos un tratamiento procesal adecuado a las exigencias de la Constitución.

Cuando se impute a un menor una conducta definida en el Código Penal como delito, el órgano de la jurisdicción ordinaria que resulte competente debe dictar, acreditada la edad, la resolución que corresponda, declarando la exención de la responsabilidad criminal por aplicación de la eximente 2.ª del artículo 8 del Código Penal, dando conocimiento de la resolución al órgano de la Administración que deba realizar la función de reeducación del menor desviado.

Las faltas cometidas por padres o encargados de la educación o cuidado de un menor en perjuicio de ellos deben ser enjuiciadas por los Juzgados de Distrito corres-

pondientes, sin perjuicio de que en los supuestos, que actualmente son de la competencia de los Tribunales Tutelares de Menores, se comunique la resolución al órgano de la Administración que realice acción de protección para que pueda adoptar las medidas necesarias en favor del menor.

Los supuestos de suspensión del derecho a la guarda o educación de un menor debe recaer en el ámbito de competencia de los Juzgados de Familia, y el órgano de la Administración ,encargado de la acción de protección, debe contar con una especial legitimación para promover un procedimiento en ese orden jurisdiccional a fin de conseguir una resolución de ese contenido.

*D)* Finalmente, es precisa una remodelación de las estructuras administrativas, sobre las que fundamentalmente, como queda dicho, va a recaer la responsabilidad de una acción protectora eficaz.

Aparte de la presencia activa del Ministerio Fiscal en esos órganos, por imperativo de su Estatuto y de los principios de orden moral en que deben inspirarse, ya antes aludidos, deben fortalecerse los aspectos técnicos.

El plan de educación debe ser el punto de confluencia de una serie de estudios médicos, en su caso psiquiátricos, psicológicos y sociológicos, que exige su realización por personal especializado y que ha de revisarse periódicamente si se pretende una acción eficaz.

El camino es largo y erizado de escollos, pero es preciso emprenderlo sin tardanza.

4. *Regulación jurídica de la expulsión de extranjeros indeseables.*

La ausencia en esta materia de una normativa congruente con los planteamientos constitucionales, es tema que preocupa a la Fiscalía General del Estado.

1. En la expulsión de extranjeros indeseables se aplica por las Autoridades gubernativas el Decreto de 14

de febrero de 1974 (arts. 12, 29 y 30). Como consecuencia de ello se producen detenciones prolongadas, que excede del límite de setenta y dos horas, marcado por la Constitución (art. 17, 2).

El problema que esta contradicción plantea ha sido abordado en tres ocasiones judicialmente y en las tres resoluciones se ha decidido que los preceptos del Decreto de extranjería no pueden entenderse en vigor y, por tanto, se acordó la inmediata libertad de los detenidos (las resoluciones son: Auto de 19 de septiembre de 1981, Diligencias previas núm. 1.895/1981 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Madrid; Auto de 24 de octubre de 1981, Diligencias previas núm. 3.048/1981 del Juzgado núm. 3 de Palma de Mallorca; y Auto de 24 de octubre de 1981, Diligencias previas 2.951/1981 del Juzgado número 1 de Palma de Mallorca).

Por su parte, la Fiscalía General del Estado —Memoria de 1980, págs. 239-240, Consulta de 12 de enero de 1979— mantuvo, si bien de forma provisional, que la Constitución no había derogado el Decreto de 1974, siendo necesario el desarrollo constitucional en esta materia para evitar la discordancia evidente y, en otro caso, el vacío legal, inadmisible en un Estado de Derecho, sin perjuicio, claro está, de que las actuaciones realizadas al amparo de la normativa vigente respeten los derechos fundamentales reconocidos a los extranjeros, de acuerdo con el artículo 13, 1, de la Constitución y las Convenciones internacionales suscritas por España.

2. El problema de la expulsión de personas del territorio nacional no es, desde luego, nuevo.

Se ha señalado como pena —ya en el Código Penal de 1822, arts. 28 y 52, e ininterrumpidamente desde el Código Penal de 1848, arts. 24 y 103— la de extrañamiento, que consiste en la expulsión "del territorio español por el tiempo de la condena" (art. 86 del Código Penal). Por esta consideración penal se prevé como delito su imposición arbitraria (art. 190 del Código Penal),

además de la genérica incriminación del artículo 178, que castiga al "funcionario que, arrogándose atribuciones judiciales, impusiere algún castigo equivalente a pena...". Su imposición sólo compete, por tanto, a los Tribunales de Justicia. Ahora bien, el problema difiere según se trate de nacionales o de extranjeros, ya que no debe olvidarse que el principio de soberanía autoriza la inadmisibilidad de extranjeros, impidiéndoles su entrada en España o decidiendo su expulsión. Pero este principio ha de tener dos límites necesarios. Por un lado, el derecho de asilo, que ya proclamó la Ley de 4 de diciembre de 1855 —el territorio español es un asilo inviolable para todos los extranjeros y sus propiedades (artículo 1)— y que anuncia la actual Constitución (artículo 13, 4), prometiendo una Ley que lo regule. Y, por otra parte, la equiparación jurídica de extranjeros y nacionales en cuanto a derechos individuales (Constitución, 13, 1).

Así, pues, la expulsión de extranjeros o su inadmisión ha de moverse en términos de Derecho, definidos entre la soberanía nacional y el respeto de las garantías jurídicas.

3. Puede pensarse que, como privación de un derecho, su resolución corresponde a los Tribunales de Justicia, pero la inmediatividad de la decisión y constituir un acto de soberanía parece darle naturaleza administrativa, sin olvidar que los actos de la Administración están sometidos al control jurisdiccional y, específicamente en esta materia, sería aplicable la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos de la Persona, de 26 de diciembre de 1978.

Si bien la decisión en cuanto a la inadmisión de extranjeros pudiera entenderse acto no discutible ante nuestros Tribunales, por razón de territorio (art. 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), hasta que la futura Ley de Asilo lo regule, la expulsión de extranjeros es acto que

no debe quedar fuera de la garantía judicial en un Estado de Derecho. De aquí se deriva la posibilidad de suspender la ejecución del acto impugnado, posibilidad que en esta materia es absolutamente necesaria.

4. El problema radica en la posibilidad de aplicar una medida cautelar gubernativa que implique privación de libertad.

El límite temporal de la detención (Constitución, artículo 17, 2) no puede ser superado en ningún caso, y menos aún por la Administración, que en la actualidad (a diferencia de la época anterior, Ley de Orden Público de 30 de junio de 1959) carece de facultades para privar de la libertad personal (art. 25, 3, de la Constitución).

La conclusión es todavía más clara si se quiere recuperar el vigor de las leyes y la jerarquía de las normas. Así, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "ningún español *ni extranjero* podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las Leyes prescriben (artículo 489). El término "leyes" es de la Constitución de 1876 (art. 4), que concuerda con la actual (art. 17, 1), a diferencia de otras Constituciones españolas, que no permitían la detención sino "por causa de delito". Pero aun en los términos actuales, aunque se admitan Leyes que autoricen la detención sin que sea "por causa de delito", hay que respetar la jerarquía de las normas-Decreto frente a Leyes.

Las Leyes —así la de Enjuiciamiento Criminal, artículo 490 y sigs.— definen los supuestos que permiten la detención. Y además señalan que su duración no puede exceder de setenta y dos horas, sopena de incurrir en delito el funcionario público que la practique (artículos 184, 186 del Código Penal), el de prisiones que no pusiere en libertad al detenido (art. 187, 2) o la Autoridad judicial, en su caso (art. 188, 1).

Por lo demás, no cabe la detención reiterada —de setenta y dos horas, con breve intervalo para otras setenta y dos y de nuevo lo mismo—, puesto que la causa

de la detención ya se ha extinguido o consumido en la primera detención y si se produjere otra sería evidentemente ilegal (art. 184 del Código Penal) o tendría que obedecer a una causa nueva y distinta.

El recuerdo del vigor de las leyes y de su jerarquía obliga a concluir —y sin necesidad de acudir a la Constitución— que la detención prolongada de extranjeros indeseables, que es práctica frecuente, no se acomoda a nuestro ordenamiento jurídico.

5. El límite del tiempo impide, pues, la detención prolongada, en aplicación del Decreto de 14 de febrero de 1974. Y, de otra parte, la sumisión del acto administrativo al posible control jurisdiccional permite revisar el propio hecho de la detención, caso de recurrirse contra él.

Se discute además si la Constitución ha derogado —disposición derogatoria 3.ª— el Decreto de 1974.

La cuestión parece innecesariamente planteada en los términos en que se hace —amplitud de la disposición derogatoria— si se observa que "los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título, (del que forma parte el art. 17) vinculan a todos los poderes públicos" (art. 53, 1, de la Constitución). Y si bien el número 2 de este artículo sólo legitima a los "ciudadanos" para recabar el amparo de los Tribunales, las prescripciones del artículo 17, en cuanto al plazo de la detención, únicamente pueden ser suspendidas en los estados de excepción o de sitio y, con ámbito individual, en los supuestos de la legislación llamada antiterrorista (artículo 55, 2, de la Constitución).

Así, pues, en ningún caso —salvo las hipótesis de los números 1 y 2 del art. 55 de la Constitución— cabe extender la detención a más de setenta y dos horas. Este límite vincula a todos los poderes públicos (art. 53, 1). Cuanto más que la detención dilatada, según se ha expuesto antes, sería ilegal según normas anteriores a la Constitución (Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal).

En consecuencia, las prescripciones del Decreto en cuestión pueden estar en vigor, salvo las referentes a la dilatación de la medida cautelar de detención por más de setenta y dos horas.

6. La necesidad, pues, de una ley reguladora de esta materia es indudable. La presencia de extranjeros no es hoy un hecho insólito. La extensión de los negocios, lícitos e ilícitos, la persecución por razones políticas de gran número de personas, la protección de los intereses nacionales y la garantía y auxilio jurídico a la persona humana, cualquiera que sea su nacionalidad, exigen un planteamiento coetáneo del problema.

Mientras llega, ha de partirse en la práctica diaria de los principios del tiempo histórico en la interpretación y aplicación de la Ley —que ya impone el Código Civil, artículo 3, 1— y de los criterios constitucionales, que, por lo demás, son condensación parcial de nuestra legislación histórico-liberal.

De acuerdo con dichos principios, puede formularse para hoy, como propuesta, que la decisión de la Autoridad gubernativa —en todo caso impugnable ante los Tribunales de la jurisdicción ordinaria— conceda un plazo al extranjero para abandonar el territorio nacional. Pasado el plazo, y firme la resolución, la desobediencia a la orden de expulsión constituye el delito del artículo 237 del Código Penal, del mismo modo que disponía el artículo 16 del Real Decreto de 17 de noviembre de 1852. Cumplida la pena, se ejecutaría la orden de expulsión. Entre tanto puede darse un control policial del sometido a la medida, siempre que no implique privación de libertad por más de setenta y dos horas. Una de esas formas de control podría ser la presentación periódica a la autoridad policial y la comunicación de los traslados de residencia, autorizando el incumplimiento de esa obligación a adoptar medidas más drásticas sobre la base de un delito de desobediencia.

De este modo se acuerda la actuación de la Adminis-

tración con las normas de un Estado de Derecho, lo que no ocurre, por razón de su fecha, con los preceptos del Decreto de 1974. La práctica actual, además de fundarse en principios políticos-jurídicos que no se avienen con el momento actual ni con la legislación democrática, no resuelve el problema en menos tiempo que el necesario para la actuación judicial y desconoce las garantías jurídicas de los derechos de la persona, creando, por otra parte, un poder extramuros del necesario control judicial que en estas materias es inexcusable en el mundo moderno.

Sería de desear que una Ley de Asilo y Extranjería, sin olvidar los derechos que concede la Constitución, regulase los supuestos de inadmisión o expulsión, con las garantías procesales que la propia Constitución establece y conforme a una "praxis" que aunara la eficacia del cumplimiento de la medida con el respeto al ordenamiento constitucional.

5. *Análisis de la situación penitenciaria y del desarrollo de la Ley General Penitenciaria.*

*A)* Situación de las prisiones.

1. El problema de la privación de libertad personal como consecuencia de hechos punibles, tiene en la actualidad un inevitable aspecto político, reflejado en las garantías de los derechos de los ciudadanos. Ya no se trata de una cuestión propia y exclusiva de las Leyes correspondientes y de los principios que inspiran nuestra cultura, sino que viene marcada por declaraciones de la Constitución.

La Constitución establece, en efecto, que "por Ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional" (art. 16, 4). La indefinición con que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 503 y concordantes) ordena esta materia, a pesar de la constante apelación a los términos mínimos (art. 528), ha permitido

la excesiva duración de privaciones de libertad sin previa condena, lo que, además de contradecir principios procesales, está en pugna con la "presunción de inocencia", tenido ya por derecho fundamental (art. 24, 2, de la Constitución).

Por otra parte, también la privación de libertad como consecuencia de una sentencia condenatoria viene afectada por la Constitución, que establece que "las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social..." (art. 25, 2). El "status" jurídico del condenado a privación de libertad no puede afectar a la dignidad de la persona, que es uno de los fundamentos del orden político y de la paz social (art. 10, 1); las condiciones y derechos individuales han de ser respetados (art. 25, 2) y expresamente el de trabajar (en relación con el art. 35) y el de acceso a la cultura (artículo 44, 1).

El vigor real —y no sólo legal— de estas disposiciones constitucionales viene, sin embargo, definido por términos materiales y económicos —establecimientos adecuados, funcionarios suficientes— que en buena parte lo condicionan y atenúan.

2. El estado general de las prisiones se ha transformado en un problema de opinión pública. Aunque no se produzcan acontecimientos violentos masivos de los reclusos, como los motines de años pasados, menudean las noticias de suicidios, de hechos agresivos en las prisiones. La existencia de proveedores de droga dentro de los establecimientos penitenciarios, la afirmación de mafias en los grandes centros de reclusión y las escasas condiciones de salubridad que padecen, han llegado a conocimiento de amplios sectores de la sociedad.

El origen y la posible solución de estos problemas no son exclusivos ni de la competencia ni del funcionamiento de Juzgados y Tribunales, porque están en función de múltiples factores. Pero en lo que se refiere a las normas procesales conviene reflexionar, porque son

precisamente los Juzgados y los Tribunales los que acuerdan los ingresos en las cárceles y prisiones.

Ante todo, aparece que el número de personas privadas de libertad es desproporcionado con la capacidad y condiciones materiales de los edificios penitenciarios y con el número de funcionarios adscritos a los mismos. El acomodar las exigencias materiales que impone la Constitución al número de presos, no puede improvisarse, ya que implica sin duda un considerable desembolso económico y un no escaso tiempo para su realización. Por lo demás, la creación de cárceles acondicionadas y un régimen penitenciario humanizado, podrían ser en algunos supuestos —ya observados para los mendigos en inviernos duros— un factor criminógeno no desdeñable, al hacer perder efectos disuasorios a la pena privativa de libertad en ciertos ambientes y con respecto a los grupos criminales procedentes del "lumpen".

3. El problema fundamental surge, desde luego, por el gran número de personas recluidas. Y en ello interviene no sólo el nivel cuantitativo de la delincuencia, sino planteamientos de Política Criminal más o menos condicionados por el entorno actual. Entre nosotros, en los últimos años ha habido un aumento del propósito inocuizador y anticipador de la pena, que se manifestó en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley 16/1980, de 22 de abril, mediante la cual se amplió el ámbito en que puede, y aun debe, el Juez decretar la prisión provisional. El fundamento de esta reforma, que aumentó, y en buena parte, la población reclusa, se expresaba en la inquietud ciudadana por la frecuente comisión de delitos violentos y en la creencia, no siempre fundada, de que existía un criterio judicial poco estricto en orden a acordar las prisiones provisionales.

Pero el factor de la alarma producida es un resultado que, además del propio estrépito del hecho y la frecuencia de los delitos, viene provocado, o al menos poten-

ciado, por la excesiva difusión que se concede a ciertas modalidades delictivas, a veces propiciada por las notas oficiales de las Autoridades o funcionarios responsables del orden público.

Acaso hubiera de pensarse que, así como fuera de desear la publicidad y difusión de las resoluciones judiciales que son tranquilizadoras —y que ya impuso por los medios entonces existentes la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 160, en relación con el 147, núm. 5—, el interés público requiere también la no producción de alarma por la reiteración y selección unilateral de noticias de hechos negativos para la convivencia. En ello entra en juego, sin duda, el derecho de libertad de expresión —art. 20 *d)* de la Constitución— y cualquier enfoque del tema es más propio, por tanto, de un acertado y responsable planteamiento de los que tienen el derecho, que de limitación de su derecho por parte de la Autoridad.

4. Con todo ello, en un incontrolable movimiento de péndulo, se provocó la creación de un grave problema la superpoblación de los establecimientos penitenciarios, manteniendo, sin embargo, los medios personales y materiales anteriores y el mecanismo judicial y procesal precedente.

La prisión provisional es el título bajo el que se encuentra un gran número de personas privadas de libertad. Así, en Madrid y su provincia, el número de preventivos está comprendido entre 1.200 y 1.500, en una población de 3.100 a 3.200 internos; en Barcelona, en el Centro de Hombres, al 31 de diciembre de 1981 los presos provisionales eran 1.449, los penados 499, mas varios detenidos pendientes de expulsión, dando un total de 1.999 internos; y en el Centro de Mujeres de esta población había 90 internas, de las que 61 eran presas preventivas. Que el número de presos preventivos alcance y hasta exceda el de penados representa una disfunción que obliga a meditación.

La lentitud de los procedimientos alarga estas situaciones, que acrece el número de problemas que la reclusión plantea, puesto que los sometidos a prisión preventiva todavía no pueden "disfrutar de los beneficios del régimen penitenciario", hecho que hace más negativa su situación y es proclive a despertar irritaciones y protestas.

En la tardanza del juicio y la sentencia influyen, desde luego, el ritmo histórico de la Justicia, pero sobre todo el orden administrativo y procesal. Aunque ha de ser oral, la preparación del juicio se lleva a cabo a través de la escritura y su celebración requiere la intervención de múltiples factores personales: testigos, Procuradores, Letrados, acusados, funcionarios de prisiones, fuerza pública, etc. El poder y las decisiones del Tribunal —y las instancias del Fiscal— han de realizarse a través de otros mecanismos auxiliares o colaboradores. Y así, el no traslado de un preso al lugar del juicio —a pesar del art. 664 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal—, su negativa a comparecer ante el Tribunal, las dilaciones en cumplir las fases del proceso —así la calificación de la causa por los Letrados con frecuencia— pueden ser y son causas de suspensiones de juicios y alargamiento de su preparación, con la consiguiente dilación de la prisión provisional. La que a veces es buscada y deseada por el propio procesado, que, en espera de acontecimientos que puedan favorecerle, como reforma del Código Penal, posibles medidas de gracia ante la probabilidad de acontecimientos importantes y que en el régimen anterior fueron medios de equilibrio y aliviaderos de la situación penitenciaria, hoy no admitidos en la forma de indulto general (Constitución, art. 62, 1).

5. Ante esta situación la Fiscalía General del Estado ha acordado designar Fiscales coordinadores, que visitan las prisiones y pretenden promover la rapidez en el despacho de las causas con presos, que ha sido casi obse-

sión legislativa y de la Fiscalía del Tribunal Supremo en gran número de Memorias.

Esta medida, no obstante los escasos resortes de que se dispone, está empezando a dar resultados, como puede observarse, por ejemplo, en las Memorias de los Fiscales de Madrid y Barcelona, cuyo extracto se publica en otro capítulo de esta Memoria. Se han creado ficheros en los que se controlan las causas con presos —es de observar que ya alguna Fiscalía, como la de Jaén, llevaba ese fichero de presos, no previsto entre los que obligatoriamente señala el art. 113 del actual Reglamento del Ministerio Fiscal—. Los Fiscales coordinadores han solicitado de los Instructores la rápida tramitación de las causas y de las Salas preferencia en los señalamientos, habiéndose conseguido, por ejemplo, en Madrid, que alguna Sala haya dedicado todo un mes a los señalamientos de causas con presos y otras señalen un día a la semana exclusivamente para las causas de esta naturaleza.

Sin embargo, el mecanismo judicial y procesal y la no actualización de las prácticas históricas, hacen que, a pesar de las medidas, no siempre sea fácil conocer el número de presos en prisión provisional, el tiempo que la padecen y los obstáculos que impiden su conclusión. Un Centro Coordinador bien estructurado, con los medios de la informática actual, podría cumplir un gran servicio en la lucha por el conocimiento y número de los presos y en la búsqueda de los medios de agilizar las causas y procedimientos.

Sería de desear también, y a fin de reducir las cifras absolutas de presos preventivos, una aplicación más flexible de los artículos 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el sentido de reducción de la medida de prisión a los delitos más graves y que más lesionan y alarman la convivencia pacífica, y en este sentido se han dado instrucciones por esta Fiscalía General del Estado a todos los Fiscales.

6. En cuanto a los reclusos privados de libertad por

sentencia firme, la situación viene definida por la carencia de medios personales —funcionarios— y materiales —establecimientos adecuados— y por la superpoblación de las prisiones. La Ley General Penitenciaria, como muy acertadamente señalan los Fiscales de Barcelona y Huelva y se recoge en otro capítulo de esta Memoria, no puede complirse en buena parte. La creencia, que es también popular, en la privación de la libertad como remedio de males y la no acomodación de la penología a la nueva situación social —que ya apunta el Proyecto del Código Penal— generan en gran medida los problemas de las prisiones, que quedan someramente analizados.

*B)* Necesario desarrollo del Juez de Vigilancia.

Durante el pasado año entraron en funcionamiento los primeros Juzgados de Vigilancia, Institución que plantea no pocos problemas por la falta de desarrollo de sus normas reguladoras.

El artículo 117, 3, de la Constitución, elevando a rango de norma fundamental el antiguo criterio del artículo 2.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que atribuía a los Jueces y Tribunales el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, *juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado,* debería poner fin, de una vez por todas, a la vieja polémica sobre si la ejecución de las penas privativas de libertad tiene naturaleza administrativa o judicial. La ejecución de lo juzgado, esto es, el cumplimiento de las sentencias penales y el de las penas en ellas impuestas, es potestad y responsabilidad del Tribunal sentenciador, y la autoridad administrativa, encargada del régimen de los establecimientos penitenciarios, es un mero órgano auxiliar o complementador de la actividad judicial, en orden a la ejecución de las penas privativas de libertad o las medidas de seguridad que requieran el internamiento del sometido a ellas.

Así parecen haberlo comprendido el Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal, remitido ya a las Cortes, al ordenar en su artículo 2.º, párrafo 2.º, "in fine", que "en todo caso la ejecución de la pena será intervenida judicialmente", así como el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobado por el Gobierno, cuando en su artículo 563 dispone que "la competencia de los Tribunales y Jueces para la ejecución de las penas y medidas de seguridad excluye la de cualquier autoridad gubernativa. Los órganos de la Administración Pública auxiliarán en la ejecución de las sentencias penales en la medida en que sean requeridos o ejerciendo las funciones complementarias que las Leyes les encomienden".

Una pieza muy importante, dentro de ese proceso de judicialización del cumplimiento de las penas privativas de libertad, lo constituye la figura del Juez de Vigilancia. Establecido con la misión específica de hacer cumplir las penas privativas de libertad (art. 76, 1, de la Ley General Penitenciaria en relación con el ámbito señalado en el art. 1.º de esa Ley), su primordial misión es la de adoptar las decisiones necesarias para que los pronunciamientos de las resoluciones en orden a las penas privativas de libertad se lleven a cabo, asumiendo las funciones que corresponderían a los Jueces y Tribunales sentenciadores (art. 76, 2, apartado *a)*). Lo que quiere decir que el Juez de Vigilancia es el órgano judicial específico de ejecución de las penas privativas de libertad, convirtiéndose en un "alter ego" del Tribunal o Juez sentenciador en ese concreto terreno, sin perjuicio de otras funciones, que le son propias, en cumplimiento de la función jurisdiccional de control de la actividad de la autoridad penitenciaria, como órgano de la Administración coadyuvante con la Justicia para el cumplimiento de aquellas penas (Vid. especialmente, las facultades de los apartados *d), e), f), g), i)* y *j)* del artículo 76, 2).

Aparece así el Juez de Vigilancia como un órgano

híbrido, cuyas funciones tienen una doble y distinta naturaleza; de un lado, viene a ser la "longa manu" del Tribunal sentenciador ante la Autoridad penitenciaria, satisfaciendo así el principio de inmediatividad, tan consustancial con el proceso penal, asumiendo las funciones que corresponda a aquél, pero actuando, en el fondo, la jurisdicción y potestad del Juzgador, que se extiende también a la ejecución de lo juzgado, con lo que, en ese aspecto, la jurisdicción del Juez de Vigilancia aparece como prorrogada, ya que ejerce funciones que por "natura" son propias de otro Tribunal; de otra parte, posee jurisdicción propia, en cuanto le corresponde en exclusiva el control judicial de las decisiones de régimen interno adoptadas por la Administración penitenciaria, decisiones que, o bien debe aprobar o bien puede revisar por vía de recurso o queja del penado. Esta última función de "vigilancia" es la más específica y propia del órgano y la que justifica su existencia; en cuanto a la otra, la meramente de ordenación de la ejecución de la pena y sus vicisitudes, venía ya realizándola los Tribunales de lo Penal y podrían continuar realizándola, sin mayores inconvenientes.

Esa diferenciación de funciones es consecuencia de la propia naturaleza de la condena penal y de los principios de individualización de la pena y la finalidad reeducadora y de reinserción social, que son propios de las penas privativas de libertad. Si el fallo condenatorio ha de especificar los derechos fundamentales del penado que quedan restringidos o de los que se verá privado; si al Juzgador corresponde estimar y señalar la pena y su "quantum" en función de la personalidad y circunstancias subjetivas del reo; si el haberse o no logrado el fin de reeducación del penado debe ser apreciado por quien lo juzgó y valoró las circunstancias de su delito y de su persona, no puede desligarse totalmente la ejecución penal de la responsabilidad, jurisdicción y potestad del Tribunal que dictó la sentencia. Eso todavía resulta

más claro en la filosofía del Proyecto del Código Penal, que hace del Juez de Vigilancia una pieza clave para la ejecución de muchas de las Instituciones sustitutivas de la pena —suspensión del fallo, condena condicional— o de las medidas de seguridad, convirtiéndolo en un colaborador del Tribunal sentenciador, al que debe informar y auxiliar para que pueda adoptar mejor sus decisiones.

Todo lo que obliga a mantener cierta relación entre el Juez de Vigilancia y el Tribunal, cuyas funciones de ejecución asume, e incluso debe obligar a dejar bien claro en la futura Ley Orgánica del Poder Judicial si la jurisdicción del Juez de Vigilancia en ese punto concreto es una mera jurisdicción delegada, si es prorrogada o si es sustitutoria de la originaria del Tribunal, rompiendo así la actual ambigüedad que todo conflicto puede originar. Por lo pronto, y no sin razón, el Presidente del Tribunal Supremo, en las Instrucciones por él impartidas a los Jueces de Vigilancia, ha venido a reconocer ese carácter subordinado de las funciones ejecutorias de esos Jueces, entendiendo que en esa materia las decisiones del Juez de Vigilancia deben ser recurribles ante el Organo Judicial que dictó la sentencia, quien debe resolver, agotando la instancia, dicho recurso.

Otra cosa es la función de control que le es propia y que entendemos debe agotarse en la propia decisión del Juez de Vigilancia.

Ahora bien, una vez más se ha puesto en marcha una Institución sin que los problemas jurídicos y procesales que, naturalmente, provoca toda novedad, hayan sido previamente resueltos y, lo que es peor, añadiendo a esa falta de desarrollo normativo una carencia de medios que dificulta su actuación. La buena voluntad del Consejo General del Poder Judicial poniendo "in actu" la Institución antes de que se apruebe la Ley Orgánica, no basta para salvar ni el hecho de la insuficiencia del número de esos Jueces, ni la falta de cobertura adecuada de toda la red de Establecimientos penitenciarios, ni la

circunstancia, siempre entorpecedora, de que esos Jueces, por ahora, han de simultanear sus funciones con otras de distinta naturaleza y que son propias de su cargo originario, que siguen desempeñando.

Por ello se hace necesario no sólo la creación de órganos específicos, con dedicación plena y medios humanos suficientes, sino, sobre todo, un adecuado desarrollo normativo de sus funciones y de los cauces procesales de su actuación para evitar que la improvisación origine discrepancias de criterios o, lo que sería más grave, indefensión de las personas que esos Jueces deben tutelar. Es de señalar que hasta ahora vienen rigiéndose esos Juzgados por la citada Instrucción de la Presidencia del Tribunal Supremo, de 8 de octubre de 1981, la que ha tenido que recurrir a la facultad integradora de las lagunas legales, propia de los Jueces, dando unas reglas generales, más bien principios, orientadores, con todos los riesgos de inseguridad jurídica que ello representa a la hora de ser aplicadas por Jueces con criterios distintos sobre qué y cómo debe ser suplida la ausencia de norma concreta. Pero, y eso estimamos debe ser resaltado aquí como una llamada de atención hacia el futuro, no parece que el problema vaya a desaparecer con las escuetas normas que el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (en la versión del Gobierno) dedica al tema. Frente a una regulación minuciosa, contenida en el borrador de la Ponencia redactora del Proyecto, la versión definitiva dedica a la trascendental figura del Juez de Vigilancia cinco artículos, dos de ellos limitados a regular su competencia territorial y personal, reduciendo la materia de recursos a las funciones de los apartados *a), b)* y *c)* del artículo 76 de la Ley General Penitenciaria y olvidando toda la extensa utilización que de la figura hace el Proyecto del Código Penal.

Una mayor intervención del Juez de Vigilancia en las clasificaciones, progresiones y regresiones de los penados —tarea que es esencial al control judicial de la ejecu-

ción y a la individualización de la pena—; el control de los traslados de Establecimiento, que pueden afectar a derechos del penado y ser medio para sustraer su evolución al conocimiento del Juez que comenzó a vigilar la ejecución de la pena y conoce sus vicisitudes; la vigilancia del cumplimiento de las normas relativas al régimen y tratamiento penitenciario, aun sin previa queja o recurso de un penado, y la forma de ejercer todas las facultades que sobre los sometidos a prueba o a medidas de seguridad contempla el Código Penal, son cuestiones que debieran ser reguladas en la futura Ley procesal. Igualmente, el régimen de recursos debe ser desarrollado más ampliamente, señalando las personas legitimadas o que deben ser oídas en los mismos; las facultades de la administración penitenciaria para comparecer en los recursos interpuestos por los penados; la función del Fiscal en defensa de la legalidad y de la fiel ejecución de la sentencia. Esos y otros temas más secundarios, pero igualmente perturbadores en su indefinición, debieran ser abordados por la normativa definitiva de esa Institución.

Contrasta, en cambio, frente a esa parquedad de normas en lo que afecta a las facultades de control del Juez de Vigilancia, los intentos de la administración penitenciaria de utilizar la figura para sancionar ciertas iniciativas introducidas en el Reglamento de la Ley General Penitenciaria y cuya legalidad es más que dudosa, pues choca abiertamente con el artículo 98 del Código Penal. Nos referimos al artículo 256 del Reglamento, que prevé la posibilidad de que las Juntas de Régimen soliciten del Juez de Vigilancia la concesión de hasta cuatro meses de adelantamiento del período o grado de la libertad condicional por cada año de cumplimiento de prisión efectiva (o sea un día de libertad por cada dos de cumplimiento, en curiosa coincidencia con la reducción de penas por el trabajo, que el Proyecto del Código Penal pretende derogar por atentatoria a la certeza de la pena).

No vemos cómo el Juez puede conceder tal anticipo de la libertad condicional sin conculcar los artículos 30 y 98 del Código Penal, que señalan la precisa duración de las penas y exigen, para poder conceder tal libertad condicional, que el reo haya extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta. Y es obvio que una ley no puede ser modificada ni derogada por vía reglamentaria, lo que priva de todo valor al citado artículo 256 del Reglamento penitenciario e impedirá la aceptación de tal propuesta por el Juez de Vigilancia.

## Capítulo IV

## ADMINISTRACION DE JUSTICIA

### 1. *Estatuto. Su influencia en la actuación del Ministerio Fiscal.*

Es obligado que la primera Memoria que el Fiscal General del Estado eleva al Gobierno después de la entrada en vigor del nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por Ley 50/1981, contenga un análisis de éste y una estimación de las novedades que entraña el recién inaugurado régimen jurídico del Ministerio Fiscal en España.

Pero hemos de aclarar, para ser rectamente entendidos, que no pretendemos subrayar el acontecimiento que para la historia del Ministerio Fiscal representa la promulgación de un nuevo Estatuto, hecho éste que se comenta y valora por sí mismo, ni tampoco sentar un cuerpo de doctrina firme en relación con la problemática esencial del Ministerio Fiscal, objetivo que requiere sin duda una experiencia en la aplicación de las nuevas normas, con la que aún no contamos, sino tan sólo resaltar las novedades más trascendentes con toda objetividad y sin valoraciones subjetivas, aquello que resulta de una interpretación rigurosamente técnica de la normativa vigente. Y señalemos que la constatación de las novedades que vamos a exponer adquiere especial importancia porque esas novedades imponen una actitud del Ministerio Fiscal en múltiples aspectos modificadora de criterios precedentes, nacidos y practicados bajo la

vigencia del Estatuto de 1926, que se funda en ideas diversas a las que informan el vigente.

Debe partirse, pues, para valorar correctamente las soluciones que a numerosos problemas arbitra el nuevo Estatuto, del hecho de que éste constituye un hito más en la evolución del Ministerio Fiscal, que ahora se configura de modo distinto a como lo hiciera el derogado, siguiendo la pauta de la vieja Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, y todo ello por imperio de la Constitución, que en su artículo 124 establece, como es sabido, las líneas maestras que han de gobernar la Institución.

En Memorias anteriores hemos comentado el precepto constitucional y no vamos a insistir directamente en ello, pero sí será preciso tenerlo presente en el estudio de las cuestiones a que nos referimos a continuación.

Sintéticamente cabría enumerar así las líneas maestras de la nueva regulación: por un lado, se ha potenciado notablemente al Ministerio Fiscal, aumentando sus funciones en una línea progresiva que, desde la vieja Ley Orgánica de 1870, se había venido haciendo ostensible, con alguna excepción, y que ahora se polariza fundamentalmente en la defensa de los derechos de los ciudadanos y en la actuación más intensa del interés social; por otro, se ha matizado su naturaleza, señalando notas que imponen un cambio de criterio en su configuración dogmática si no se quiere desconocer el alcance real de los preceptos constitucionales.

Pero una consideración ordenada, aunque forzosamente breve, de la entidad de las innovaciones introducidas, aconseja distinguir, además de los señalados, algunos otros aspectos de la regulación vigente.

a) *Naturaleza del Ministerio Fiscal.*

Probablemente sea ésta la cuestión que más directamente atrae el interés ante una consideración del alcance y entidad del nuevo régimen jurídico del Ministerio Fis-

cal. La razón es obvia. De ella dependen, con toda evidencia, las soluciones que se hayan adoptado respecto a los distintos problemas que por sí mismo plantea la institución. Esto es, la organización del Ministerio Fiscal, su gobierno, las relaciones con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial, los principios que han de regir su actuación en el cumplimiento de las funciones que la Ley le encomienda e incluso la extensión de éstas, son cuestiones que dependen muy directamente del criterio que se adopte en cuanto a la naturaleza de la institución y, de modo más concreto, de que se establezca una configuración gubernativa o judicialista de aquélla.

Pues bien, sin duda, no ha cristalizado todavía la institución del Ministerio Fiscal en España, de modo que permita dogmatizar sin discusiones sobre su naturaleza, atribuyéndole una u otra situación ante el conocido dilema a que, en último extremo, pueden reducirse los múltiples sistemas existentes: Ministerio Fiscal-Organo del Poder Ejecutivo, Ministerio Fiscal-Magistratura Postulante, integrada en el Poder Judicial. Razones poderosas, extraídas de la normativa vigente, permitirían, si bien siempre con puntos contradictorios en la construcción, otorgarle una u otra naturaleza. Cabría decir quizá que ni siquiera sería positivo adoptar de modo terminante una u otra posición y esto refrendaría el mérito de nuestras Leyes. Porque si bien un Ministerio Fiscal, exclusiva y terminantemente dependiente del Poder Ejecutivo, resultaría absolutamente ineficaz ante los Tribunales, que verían bajo sospecha de parcialidad sus pretensiones, un Ministerio Fiscal "judicializado" y en permanente desconexión con los otros Poderes del Estado, vería igualmente mermada su eficacia, pues se convertiría en un mero auxiliar de los órganos judiciales, sometido a sus criterios y sin capacidad de propia iniciativa.

Sin embargo, hay en la normativa vigente aspectos de mayor trascendencia cuya valoración es obligada.

Por lo pronto, el artículo 2.º del Estatuto Orgánico declara que el Ministerio Fiscal se habrá integrado, con autonomía "funcional", en el Poder Judicial. Y con este presupuesto, aunque sea porterior en el tiempo e inferior en el rango normativo, parece que debe interpretarse el régimen constitucional del Ministerio Fiscal, en cuanto no sólo no contradice los términos del artículo 124, sino que responde a su espíritu y a la sistemática del Título VI de la Constitución.

En efecto, partiendo, desde la Constitución, de una estructura política fundamental del Estado, integrada por tres poderes independientes, pero compatible, por una parte, con que entre tales poderes se den relaciones y, por otra, con que a cada uno no corresponda necesariamente una función única, sino que puedan ser varias y complementarias las atribuidas a uno mismo por la Ley, cabe interpretar el Título VI de la Constitución y muy especialmente sus artículos 117 y 124, referidos, respectivamente, a la Magistratura y al Ministerio Fiscal de este modo: la Justicia, que emana del pueblo y se administra en nombre del Rey, se actúa por el Poder Judicial, que se configura, constitucionalmente, como Poder independiente con ese cometido funcional: la Administración de Justicia. Para servir a esta función se articulan dos categorías de Organos: los que ejercen en exclusiva la potestad jurisdiccional, "juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado" ,en todo tipo de procesos, que son los Juzgados y Tribunales, conforme dispone el artículo 117, 3, y los que "promueven la acción de la Justicia", en defensa de la legalidad, que son los que constituyen el Ministerio Fiscal con arreglo a lo establecido en el artículo 124 y que ejerce esa función, sin perjuicio de las que corresponden a los otros órganos integrantes del Poder Judicial. Así, el menester de administrar Justicia, atribuido al Poder Judicial, se escinde en dos funciones: una, decisoria, y, otra, postulante, de cuya respectiva actuación se encarga a órganos diversos

e independientes entre sí, Tribunales y Ministerio Fiscal, pero siempre dentro del marco estricto del Poder Judicial y en concordancia con la doble necesidad de que la Justicia se actúa a instancia de parte legítima y que la independencia de los Tribunales no se empañe haciéndoles adoptar el protagonismo de la postulación del "ius puniendi" y su ejercicio a través de la imposición de la pena, lo que los convertiría en Juez y parte.

Sirven de apoyo a esta tesis tres clases de consideraciones, referidas, respectivamente, a la estructura del Poder, a los criterios de actuación de las funciones respectivas y a los regímenes estatutarios de los miembros de la Jurisdicción y del Ministerio Fiscal.

En cuanto a lo primero, ha de tomarse en cuenta que la Constitución regula la institución del Ministerio Fiscal en el Título VI, en el ámbito del Poder Judicial, y no en el IV, a propósito del Gobierno y la Administración, y que el Estatuo Orgánico, concretando la naturaleza de la Institución en virtud del mandato constitucional, señala, como se ha dicho, que "el Ministerio Fiscal, *integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial,* ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad".

Esta integración del Ministerio Fiscal en ámbito del Poder Judicial obedecería al criterio constitucional, ya aludido, de dividir la función de administrar Justicia en dos funciones complementarias entre sí y determinantes de un sistema de autocontrol: la decisoria y la postulante, que se encomiendan de modo excluyente y exclusivo a órganos diversos. Así se establece, con absoluta claridad, respecto de los órganos decisorios, en el artículo 117, apartados 3 y 4, cuando dispone que "el ejercicio de la potestad jurisdiccional... corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales" y que "los

Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior", y con relación a los órganos postulantes, en el artículo 124, 1, cuando se concreta que "el Ministerio Fiscal, *sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos* —cabe aclarar: las decisorias, que corresponden a los Juzgados y Tribunales—, tiene por misión promover la acción de la Justicia...".

Igualmente fundamenta la tesis el criterio de legalidad estricta que, en ambos casos, órganos decisorios y Ministerio Fiscal, preside la actuación de la función respectiva. Así lo proclama el artículo 117, 1, respecto de los Jueces y Magistrados: "sometidos únicamente al imperio de la Ley", y de modo paralelo y reiterativo, respecto de los Fiscales, el 124, 1 y 2, que no sólo atribuye al Ministerio Fiscal la defensa de la legalidad en el proceso, sino que además establece la sujeción de su actuación, en todo caso, al principio de legalidad. Y si la actuación de los órganos decisorios bajo el exclusivo imperio de la Ley no tiene una significación especial porque no es concecible otro modo de actuación en el Estado de Derecho, que proclama la Justicia como uno de sus valores esenciales, sí tiene connotaciones características tan terminante sumisión del Fiscal a la Ley, porque hubiera podido configurar la actividad funcional de éste, en defensa de los intereses públicos y sociales, conforme a un principio de oportunidad, como ocurre en otros sistemas, ya que una cosa es la decisión de la actuación (oportunidad) y otra que, decidida la actuación, ésta haya de postularse en los términos señalados por el Derecho, ya que, en otro caso, habría de ser rechazada por el Tribunal destinatario de la misma. Es obvio que no ha sido éste el propósito del legislador y sí justamente el opuesto de asegurar, en todo caso, la actuación del Fiscal conforme a la Ley y siempre que la Ley la impone, en rigurosa coherencia con el ejercicio de una función postulante de desarrollo paralelo a la decisoria, en el

marco de la Administración de Justicia y en la estructura del Poder Judicial.

Y, por último, en el orden estatutario, y como lógica consecuencia de haber configurado al Ministerio Fiscal en el ámbito del Poder Judicial, se impone a los miembros que lo integran un sistema de incompatibilidades, prohibiciones, responsabilidades, deberes y derechos paralelo al de los Jueces, aún incompleto, en espera de la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en proceso de elaboración en las Cortes Generales. Obsérvese que el artículo 127 de la Constitución, que en su párrafo primero se refiere expresamente a "Jueces, Magistrados y Fiscales", dispone en el segundo que "la Ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los mismos", términos estos que, con arreglo a un criterio sistemático de interpretación, deberán entenderse dirigidos a Jueces y Fiscales. Y que ese criterio ha sido ratificado por la voluntad legislativa al remitir en el Estatuto todo el régimen de los miembros del Ministerio Fiscal a la supletoriedad de dicha Ley Orgánica (Disposición adicional).

De este planteamiento, en suma, se deduciría, desde el Derecho vigente, la concepción del Ministerio Fiscal como Magistratura postulante integrado como tal en el Poder Judicial, y de ello habrían de extraerse consecuencias importantes con muy diversas proyecciones.

Pero se faltaría a la objetividad si no se subrayara que esta concepción halla en la normativa constitucional, y según un planteamiento doctrinal riguroso, algún inconveniente. Uno es que la propia Constitución, en el artículo 122, 2, atribuye el gobierno del Poder Judicial al Consejo General, con absoluta omisión de toda referencia al Ministerio Fiscal y, por supuesto, con exclusión de su presencia en él. Y ello ha determinado una realidad en nuestro Ordenamiento perfectamente conocida. Otro sería la intervención del Gobierno, mediante propuesta, en el nombramiento por el Rey del Fiscal

General del Estado, previsto en el artículo 124, 4, que mantiene el rescoldo de una cierta dependencia respecto del Poder Ejecutivo, desde luego mucho menos intensa y matizada que en la regulación anterior.

A nuestro juicio, estos dos inconvenientes impiden tomar partido por la posición llamada "judicialista" de modo terminante. Parece, en definitiva, que la Constitución de 1978 quiso aproximar sensiblemente el Ministerio Fiscal a la Magistratura, pero no quiso llegar a una identidad de ambas instituciones.

Pero, indudablemente, no sería técnicamente correcto ni objetivo concluir, de los óbices apuntados, la instalación del Ministerio Fiscal en el Poder Ejecutivo, configurándolo como un enclave de éste en el Poder Judicial.

Para ello habría que prescindir de cuantos preceptos constitucionales conducen a una construcción exactamente contraria y potenciar el valor de la designación del Fiscal General del Estado por encima de lo que realmente significa, porque no ha de minusvalorarse que la Constitución ha eliminado de su texto el carácter de "Organo de representación", que, según el viejo Estatuto de 1926, tenía el Ministerio Fiscal respecto del Gobierno en sus relaciones con el Poder Judicial; y el Estatuto suprime toda relación de mandato que pueda implicar dependencia, como ocurría en el derogado, y, en cambio, se atribuye al Fiscal la Ley y se le encomienda la defensa de la legalidad en el proceso, limitándose la actuación del Fiscal a su propia iniciativa ("de oficio") o a "la petición de los interesados". De donde debe inferirse, como ya concreta con todo pormenor el Estatuto vigente, que ante una "instancia" del Gobierno, el Fiscal actuará o no como se le "interesa", según resulta de los principios que conforman su actuación, proceder que no puede calificarse precisamente de dependiente. Quizás, lo incongruente con la configuración constitucional del Ministerio Fiscal sea que la propia Constitución haya denominado al Organo de Gobier-

no de los Tribunales como Consejo General del Poder Judicial y no como Consejo de la Magistratura, olvidando que en el esquema legal del Poder Judicial se halla también el Ministerio Fiscal, regido por otros Organos, y existen otros Organos jurisdiccionales excluidos del ámbito del Consejo (Tribunales Castrenses, Tribunales consuetudinarios y tradicionales). Pero lo cierto es que esa denominación constitucional implica un término de referencia para delimitar los órganos comprendidos en el Poder Judicial, que serán, en principio, aquellos sobre los que el Consejo tiene competencias.

La conclusión a que se llega, en suma, en cuanto a la naturaleza del Ministerio Fiscal en su nueva ordenación constitucional y estatutaria, es que, aun habiéndose integrado en el Poder Judicial por ministerio de la Ley, no constituye plenamente una magistratura integrada en el Consejo del Poder Judicial, pero tampoco es órgano gubernamental, dependiente del Ejecutivo. Ahora bien, comparando el régimen vigente con la regulación anterior, se advierte una clara aproximación a la Jurisdicción que sitúa a la Institución en una zona intermedia, más cercana a ésta que al Poder Ejecutivo, del que notoriamente se ha distanciado. El ejercicio de las funciones bajo criterios de legalidad e imparcialidad, la atribución, como funciones específicas, de la defensa de la Ley, los derechos de los ciudadanos, el interés social y el interés público tutelado legalmente, con las connotaciones que la propia Constitución da a tales conceptos: la actuación de oficio o a petición de los interesados de modo exclusivo, que imposibilita toda suerte de órdenes e impulsos coercitivos de poderes del Estado, la colocación sistemática de las normas que al Ministerio Fiscal se refieren en el Título dedicado al Poder Judicial, la declaración estatutaria a este respecto, son argumentos que confirman lo expuesto y éste es sin duda el sentido que debe atribuirse a la supresión de la representación del Gobierno ante los Tribunales, que hasta ahora se enco-

mendaba al Fiscal, y la Constitución, significativamente, ha suprimido.

He aquí una línea inicial del pensamiento sobre la que es menester continuar profundizando para lograr un coherente cuerpo de doctrina sobre la naturaleza del nuevo Ministerio Fiscal español.

b) *Organización y gobierno del Ministerio Fiscal.*

En rigurosa coherencia con lo que ha quedado expuesto, el nuevo Estatuto se muestra sensiblemente innovador en este punto respecto de lo que establecía el Estatuto de 1926.

Bajo la vigencia de éste y conforme a las líneas maestras que estableciera la Ley Orgánica de 1870, el Ministerio Fiscal estaba ordenado de modo exclusivamente jerárquico, con ausencia de órganos colegiados electivos. Todo ello era consecuencia de que los dos únicos principios rectores de la institución, según aquella normativa, eran la unidad de actuación y la dependencia jerárquica, en cuanto que la legalidad, aunque siempre observada con rigor por el Ministerio Fiscal, era criterio conformado de su actuación, pero no principio rector de ésta, formulado legalmente como tal.

La Constitución de 1978 ha modificado, con indudable acierto, este planteamiento y el Estatuto ha recogido sus consecuencias. El artículo 124, 2, de aquélla, establece que "el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de Organos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica", pero subraya que la actividad funcional queda sujeta en todo caso a los principios de legalidad e imparcialidad, que adquieren así rango prevalente. Con este precedente, el proyecto de Estatuto, que en su día aprobó el Consejo de Ministros y elevó a las Cortes Generales, recortó y matizó sus propias funciones de gobierno sobre el Ministerio Fiscal, otorgando facultades de propuesta de nom-

bramientos al Fiscal General del Estado, por un lado, e introduciendo, por otro, un nuevo órgano, de estructura democrática en la mayor parte de sus componentes, al que confirió funciones de asistencia al Fiscal General del Estado en la tarea de gobierno de la institución: el Consejo Fiscal.

Cabría decir, con toda exactitud, que el Gobierno, en el que residían, según el régimen derogado, las facultades de gobierno del Ministerio Fiscal, ha pasado a compartirlas, en cierta medida, con órganos de la propia institución por razones de riguroso respeto al principio de legalidad que ha de presidir en todo caso su actuación —lo que en modo alguno debe implicar olvido de este criterio en la acción de Gobierno— y como consecuencia de su integración en el marco constitucional del Poder Judicial, lo que implica absoluta abstención de toda injerencia en su acción.

Con arreglo a este criterio, el artículo 8.° del Estatuto Orgánico dispone expresamente que el Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público y, desde el punto de vista formal, canaliza la comunicación del Gobierno con el Ministerio Fiscal por conducto del Ministro de Justicia y a través del Fiscal General del Estado, sin perjuicio de la vía directa del Presidente del Gobierno con aquél. Mas, como los principios de legalidad e imparcialidad a que el Fiscal ha de acomodar en todo caso su acción, imponen una reconsideración por éste de la actuación interesada, establece igualmente el Estatuto que el Fiscal General del Estado, oída la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, resolverá sobre la viabilidad —existencia de mecanismos procesales para postular la actuación— y procedencia —acomodación al ordenamiento jurídico— de las actuaciones interesadas y expondrá al Gobierno de forma razonada su resolución.

En consecuencia, cabe sintetizar así las relaciones del Gobierno con el Ministerio Fiscal:

*a)* El Gobierno como tal, y como "interesado" cualificado en cuanto gestor de los intereses públicos y sociales, cuya actuación ante los Tribunales corresponde al Ministerio Fiscal, puede interesar del Fiscal General del Estado que promueva las actuaciones oportunas en defensa judicial de tales intereses (art. 8, 1).

*b)* Tal instancia corresponde al Presidente del Gobierno directamente o al Ministro de Justicia, que el Estatuto configura como órgano de comunicación con el Fiscal General del Estado. No tiene esa legitimación ningún otro Ministro del Gobierno ni autoridad de inferior rango en los niveles central, provincial y local (artículos 8, 2, y 55).

*c)* El Fiscal General del Estado, ante una comunicación del Gobierno interesando su actuación, oirá a la Junta de Fiscales de Sala y resolverá, con arreglo a los principios de legalidad e imparcialidad, lo que estime ajustado al ordenamiento jurídico vigente (art. 8, 2).

*d)* El Fiscal General del Estado expondrá en forma razonada su resolución al Gobierno (art. 8, 2).

*e)* El Fiscal General del Estado informará al Gobierno, cuando éste lo requiera y no exista obstáculo legal, sobre cualquier asunto en que intervenga el Ministerio Fiscal o sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia en general (art. 9, 2).

*f)* En casos excepcionales, ese informe puede ser formulado directamente ante el Consejo de Ministros —se entiende que con las mismas limitaciones—, ante el que a tal fin puede ser llamado el Fiscal General del Estado (art. 9, 2).

c) *Funciones.*

En el anexo a la Memoria de 1981 analizamos con detenimiento el proceso evolutivo de las funciones atri-

buidas por la Ley al Ministerio Fiscal y examinamos las establecidas en la Constitución de 1978, comparándolas con las estatutarias de 1926, para concluir la progresiva acumulación de éstas, que llega a su punto culminante en el texto constitucional vigente. Ello nos releva de consideraciones que supondrían una repetición de lo dicho, porque el Estatuto de 1981, posterior al anexo que citamos, no ha hecho otra cosa que desmembrar y analizar lo establecido en el artículo 124 de la Constitución con absoluta fidelidad a ésta, como era obligado.

Pero sí hemos de señalar aquí, para establecer su valor en orden a las misiones que se encomiendan constitucionalmente al Ministerio Fiscal en la convivencia democrática bajo las exigencias del Estado de Derecho, las novedades más destacables, aun a riesgo, naturalmente, de incidir en cuestiones ya expuestas por la Fiscalía.

Merece ante todo especial reflexión la "defensa de la legalidad", hasta ahora criterio conformador de la actuación del Ministerio Fiscal con otros fines y que se eleva en la normativa vigente a función y función primordial en sí misma. De ello habrán de extraerse consecuencias que impondrán reformas legislativas de entidad, porque no es lo mismo confiar unas funciones concretas al Fiscal, señalando que en su complimiento procurará siempre "el mantenimiento del orden jurídico", como hacía el Estatuto de 1926, que asignarle, como función primera y principal, "promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad". Y debemos señalar terminantemente que hay órdenes jurisdiccionales, el contencioso-administrativo y el laboral, en los que no es posible el total cumplimiento de tal función porque las Leyes no otorgan al Fiscal legitimación con carácter general a esos efectos, lo que abre una brecha que deberá ser cubierta en futuras reformas.

También debe destacarse la "defensa de los derechos de los ciudadanos", consecuencia sin duda de aquel con-

cepto clave, constituido por el cumplimiento de la legalidad democrática. Y huelga decir que, como ya se ha previsto en cuanto a la libertad de expresión, asociación sindical, materia electoral, asociaciones políticas y derechos fundamentales de la persona, este nuevo concepto en el marco funcional del Ministerio Público ha de producir una muy creciente actividad, sobre cuya trascendencia no es preciso hacer consideración alguna. Basta subrayar que se confiere al Ministerio Fiscal la defensa, entre otros, de los derechos constitucionales de la persona bajo un estricto criterio de legalidad e imparcialidad.

La "satisfacción del interés social" ante los Tribunales de Justicia, aunque mantenga su formulación casi en los mismos términos que en el Estatuto derogado, cobra en la Constitución y en el vigente un significado especial, como también ha señalado la doctrina, por cuanto que el interés social, antes difuso, adquiere ahora concreción en el Capítulo III del Título II de aquélla, al regular los principios rectores de la política social y económica. Tal misión debe interpretarse, como parece, como una acción dirigida a remediar situaciones injustas, que contradicen lo preceptuado en el artículo 1.º de la Constitución en materias tan trascendentales como la protección de la familia y la infancia, la redistribución de la renta, el pleno empleo, régimen laboral, seguridad social, protección de la salud, acceso a la cultura, medio ambiente y calidad de vida, derecho a la vivienda, utilización del suelo y defensa de los consumidores. No cabe duda de que la Constitución señala en este tema una tarea al Ministerio Fiscal de extraordinaria importancia y de enorme amplitud. Tanta que será menester un acotamiento posterior de esa esfera de actuación del Ministerio Fiscal para evitar que la indefinición esterilice la eficacia de su intervención.

Estas consideraciones han determinado que el nuevo Estatuto, aunque con cierta timidez, haya ampliado sen-

siblemente el catálogo de actuaciones concretas del Ministerio Fiscal, tanto en el orden procesal como extraprocesal. El desarrollo previsto de numerosos aspectos de la Constitución pormenorizará necesariamente esta intervención en las áreas en que una normativa de desarrollo es absolutamente precisa para dotar de eficacia práctica a lo que podría calificarse de un ambicioso programa la actuación del Ministerio Fiscal, según la Constitución de 1978.

d) *Principios rectores del Ministerio Fiscal.*

Se ha hecho referencia a la legalidad como función del Ministerio Fiscal, pero no a la legalidad como principio rector de la actuación de éste, que, con la imparcialidad, constituye una innovación de la Constitución y del nuevo Estatuto.

La antigua dicotomía unidad-dependencia, ha sido complementada por estos nuevos principios. Y es indispensable establecer la órbita de eficacia de cada uno, la coherencia entre ellos y las consecuencias que deben extraerse de su formulación legal. Consciente, sin duda, el legislador constitucional de que unidad y dependencia eran principios orgánicos que no establecen la esencia de la institución y, tras optar por una configuración del Ministerio Fiscal en el marco del Poder Judicial, señaló la legalidad y la imparcialidad como principios rectores de la actuación de modo paralelo a lo que hizo respecto de la Magistratura.

Una objetiva interpretación del sentido de los cuatro principios, conduce a la conclusión de que unidad y dependencia son principios orgánicos, y legalidad e imparcialidad principios funcionales. Aquéllos tienen su ámbito de eficacia "ad intra" en la propia estructura de los órganos; éstos proyectan su eficacia "ad extra" en el ejercicio de la actividad funcional que la Ley encomienda a la Institución. Los primeros se concretan en

criterios de ordenación de los distintos elementos de la estructura, que asegura la presencia del Ministerio Fiscal allí donde debe actuar; los segundos marcan la orientación y la medida de la actuación.

Entre los cuatro principios, complementarios entre sí y coordinados dos a dos, no debe verse contradicción alguna si se piensa en un discurrir correcto de la actuación, pero como quiera que la hipótesis de colisión es posible, el Estatuto prevé una forma de solución del conflicto sin merma de la integridad de ninguno de ellos y haciendo intervenir en la indecisión dirimente a órganos colegiados, cuya voluntad colectiva es garantía de que *en todo caso* primará la legalidad y el criterio que mejor se acomode a ella (art. 27).

La consecuencia, en fin, que del establecimiento de los principios de legalidad e imparcialidad debe extraerse es, por una parte, que nuestro Ministerio Fiscal no tiene parentesco alguno con la institución del mismo o semejante nombre que en otros sistemas actúa según criterios de oportunidad y, de otra, que tales principios imprimen carácter a la hora de matizar la naturaleza del Ministerio Fiscal y su construcción dogmática y del ejercicio de las funciones que le son encomendadas.

2. *El funcionamiento de la Administración de Justicia en el orden penal.*

Como es habitual en la Memoria Fiscal, vamos a examinar los aspectos fundamentales del trabajo desarrollado por los órganos de la Administración de Justicia, cuyos datos nos servirán también para interpretar hasta ciertos límites el fenómeno de la delincuencia en nuestro país. Y decimos hasta ciertos límites porque nuestra estadística es más bien de procedimientos penales tramitados y se confecciona a partir de nuestros libros-registro, que difícilmente pueden suministrarnos, en cuanto al contenido de criminalidad de tales procedi-

mientos, los datos absolutamente exactos que serían precisos para una exhaustiva valoración de la materia, aparte de que también se ha de contar con la consabida "cifra negra", que no se refleja en el recuento de procedimientos penales.

Si en la Memoria del pasado año, por la especial circunstancia de cumplirse un quinquenio del cambio de régimen político, desde una autocracia o dictadura hacia una democracia parlamentaria, pareció conveniente examinar esa evolución a través de más dilatado espacio de tiempo y la influencia que en la misma habían tenido las circunstancias excepcionales derivadas de dicha transición, unas de orden político, como los indultos y amnistías concedidos o la absorción de las energías de los órganos judiciales por las tareas de múltiples consultas electorales y refrendadoras de leyes básicas, y otras de orden puramente técnico de política criminal, como la variación de cuantías límite entre delitos y faltas de contenido económico (que absorben gran parte de la actividad de los órganos jurisdiccionales) o la abolición de ciertas figuras penales (adulterio, delitos de opinión, etcétera), en la presente parece innecesaria tan amplia confrontación, puesto que se trata de un año que podemos considerar normal al no incidir en él aquellas circunstancias excepcionales.

*A)* El trabajo judicial; volumen de los distintos procedimientos.

a) *Tendencia a disminuir.*

Pasando ya al examen de las cifras que aparecen en nuestra estadística aneja a la Memoria, nos es grato señalar que en 1981, después de la fuerte ascensión producida en el número de causas incoadas desde 1975 a 1979, continúa la línea descendente que ya se apreciaba el año anterior en el volumen de los asuntos penales

incoados en los distintos órganos de instancia de nuestra Justicia penal del nivel superior, encargada de perseguir precisamente los delitos.

Tomamos como base para esta afirmación la suma de los totales de incoación que aparecen en los distintos estadillos de la letra A de la estadística, en los que sólo se contabiliza una vez cada procedimiento aunque haya pasado por distintos estadios procesales.

Pues bien, mientras en 1979 el total de procedimientos incoados por delito fue de 837.500 (cota máxima de nuestra estadística en todos los tiempos) y en 1980 de 835.718 (con disminución, por consiguiente, de un 0,20 por 100), en 1981 las causas incoadas han sido 833.297, lo que supone respecto del año anterior una disminución de 2.421 procedimientos, equivalente a un 0,29 por 100, y 4.203 respecto a 1979, esto es, 0,50 por 100 menos que en ese año.

Cifra y porcentaje mínimos, si se quiere, frente al ingente volumen total de la incoación, pero que, al menos, es sintomático de la consolidación del frenazo a la escalada que se había experimentado durante el quinquenio precedente y del mantenimiento de una inflexión descendente de la curva estadística.

No debe, sin embargo, esta cifra favorable llevarnos a una absoluta euforia, pues, en realidad, es el resultado final de más o menos sustanciales disminuciones o aumentos en las distintas provincias, y aun, en cada una, de los distintos tipos delictivos, como tendremos ocasión de ver y se acusa en las Memorias de los Fiscales.

En este orden, sin ánimo de exhaustividad (que haría esta exposición demasiado prolija), podemos decir, ad exemplum, que, según señalan los respectivos Fiscales en sus Memorias, ha aumentado la incoación de causas en Cuenca, Murcia, Ciudad Real, Baleares, Palencia, León, Burgos, Logroño, Santander, Gerona, Tarragona, Lugo y Orense, mientras que ha disminuido en Albacete, Zamora, Teruel, Soria, Granada, Valladolid y Sevilla. Como

se ve, en ambos grupos se encuentran provincias con núcleos de población medios dentro de los volúmenes de nuestra Nación.

Por lo que hace a las dos mayores provincias del país, que absorben el 27,77 por 100 de la incoación nacional: Madrid y Barcelona, acusan la tendencia básica a la disminución en grado distinto, pero en ambas muy por encima de la media nacional antes citada (0,2 por 100), pues en la de Madrid la incoación fue de 115.302 procedimientos, con un descenso del 6,27 por 100, y en la de Barcelona fue de 116.158, con descenso del 4,33 por 100 respecto, ambas, del año 1980.

El hecho objetivo de la disminución merece, en general, a los Fiscales que lo señalan, la estimación de ser debido a una mayor eficacia de los Cuerpos de la Seguridad del Estado, indudablemente mejor dotados cada día de medios personales y materiales para su labor de vigilancia en las calles de nuestras ciudades.

No sería, sin embargo, honrado ocultar que más de un Fiscal, al referirse a este punto, hablan también de un posible aumento de la "cifra negra", derivado de una cierta desconfianza de muchos ciudadanos respecto al éxito de sus denuncias.

b) *Volumen de los distintos procedimientos y de sus vicisitudes principales.*

Atendiendo a la clase de procedimiento, el total de las causas incoadas se descompone de la siguiente forma:

El nuevo procedimiento oral de la Ley 10/1980 alcanzó las 44.569 causas; se formuló acusación en 22.119; se dictaron 10.517 sentencias condenatorias y 977 absolutorias, habiéndose interpuesto recurso de apelación en 187 ocasiones por el Fiscal y en 529 por los particulares. A final del año quedaban pendientes 8.400 causas.

De procedimiento de urgencia se tramitaron, sin pasar a ulterior fase propiamente enjuiciadora, 698.353

diligencias previas, de las que al acabar el año estaban pendientes en los Juzgados 150.921.

Las diligencias preparatorias incoadas fueron 51.094, se abrió el juicio oral en 40.032 casos, se dictaron 35.790 sentencias condenatorias y 6.407 absolutorias, formulando contra ellas recurso el Fiscal en 862 ocasiones y las partes en 3.933. Al final de 1981 había pendientes en los Juzgados 20.807 procedimientos y esperaban resolución de las Audiencias 1.725 recursos.

Los sumarios que se incoaron por el procedimiento de urgencia fueron 30.443, de ellos, unidos a los procedentes de años anteriores, había al acabar el año en los Juzgados 6.808 con procesado y 5.500 sin procesado; habían sido elevados conclusos a las Audiencias 21.445; en el Tribunal Colegiado se abrieron 18.551 juicios y se terminaron 14.883 por sentencia condenatoria y 2.251 por absolutoria. Los recursos de casación preparados contra ellas fueron 98 del Fiscal y 2.153 de las partes. Quedaban a fin de año en las Audiencias pendientes de resolución definitiva 8.493 de estas causas.

Los sumarios ordinarios incoados fueron 8.838; a fin de año, de éstos y los procedentes de años anteriores, quedaban pendiente en los Juzgados 4.167 y, aparte de otras formas de concluirlos, se habían elevado a las Audiencias 7.938. En las Audiencias se abrieron 3.961 juicios, dictándose 2.932 sentencias condenatorias y 575 absolutorias, formulándose recurso por el Fiscal en 41 casos y por las partes privadas en 594. Las Audiencias tenían pendientes a fin de año 3.434 causas de esta clase.

c) *El retraso en la tramitación de causas penales.*

Las cifras expuestas, demostrativas del volumen de trabajo que ha recaído sobre los órganos de la Justicia penal en materia de delitos, deben relacionarse, para otros efectos prácticos, con las observaciones que hacen generalmente los Fiscales en sus Memorias sobre la falta

de medios, tanto legales como personales y materiales, o, lo que es lo mismo, sobre la inadecuada, por insuficiente y anticuada, infraestructura de nuestra organización judicial.

Por eso, no es muy de extrañar que, aun habiendo descendido el número de las incoaciones de causas criminales, en el conjunto de la actividad jurisdiccional (y aun salvando, como lo hacen nuestros Fiscales, el espíritu y esfuerzo de todos los funcionarios), se aprecie en la estadística un aumento de las causas pendientes a final de año que, necesariamente, se ha de contabilizar en sentido negativo por lo que representa de retraso en la resolución de las causas, retraso que, de continuar, podría llevar a muchos de los órganos judiciales al colapso.

Porque si al final de 1980, con una incoación total de 835.718 causas, quedaban pendientes un total de 201.330, que representaban el 24,09 por 100 de dicha incoación, al final de 1981, con una incoación de 833.297 causas, quedaban pendientes 211.580, que representa un 25,39 por 100 de la incoación del año. El atraso, pues, ha aumentado en 1,3 puntos a pesar de la disminución de las incoaciones.

Descomponiendo estas cifras de pendencia para ver la relación entre el retraso de los Juzgados (sobre los que pesa indudablemente el mayor volumen de trabajo) y las Audiencias, parece llegarse a una conclusión desfavorable a los Tribunales colegiados, tanto más sorprendente cuanto que, salvo contadas excepciones, el volumen de las tareas de las Salas de las Audiencias Provinciales, ni es desproporcionado, ni excede, sino todo lo contrario, está muy por debajo del que corresponde a los Juzgados.

En efecto, en los Juzgados de Instrucción, de los 833.297 asuntos penales iniciados en 1981, más los procedentes de años anteriores, al final de dicho año quedaban pendientes 196.603, que representaban el 23,60

por 100 de la incoación del año. Como en 1980 quedaron pendientes 190.240, que representaban un 22,82 por 100 de la incoación de dicho año, se observa que el aumento del retraso era de 0,18 puntos.

Las Audiencias, a su vez, recibieron de los Juzgados, para resolver en definitiva (entre apelaciones de sentencias penales y sumarios conclusos), en 1981, un total de 34.889 causas y al final del año tenían pendientes de resolución 14.978, que representaban 42,93 por 100 de las recibidas. En 1980 habían recibido 37.027 causas y al final del año tenían pendientes 11.090, que representaban el 29,95 por 100 de las recibidas. El aumento de pendencia era, por tanto, al final de 1981, de 12,98 puntos sobre 1980.

Son bastantes los Fiscales que se ocupan en sus Memorias de este problema de las Audiencias, que achacan, no sólo a los defectos de las leyes procesales vigentes y a la falta, también indicada, de personal adecuado, sino también al deficiente funcionamiento de las Secretarías (en parte condicionado por la insuficiencia de personal), ayudado por una ausencia de colaboración de los ciudadanos que no comparecen a los juicios, obligando a múltiples suspensiones y, en algunos casos, incluso al desánimo de los propios Magistrados, que, ante el cúmulo de circunstancias adversas, llega a veces a sólo preocuparse del trámite de sentencia.

Todo esto hace reflexionar a los Fiscales sobre la necesidad de poner remedio a la situación, ofreciendo muchos de ellos posibles soluciones, ya que las deficiencias puestas de manifiesto se traducen en verdadero desprestigio de esa fundamental función del Estado de Derecho que es la Administración de Justicia, especialmente en su faceta penal, que exige prontitud y efectividad para que la condena resulte ejemplar y surta los convenientes efectos de prevención general.

Confiemos en que la cada día más decidida actuación del Consejo General del Poder Judicial sea apoyada en

los ámbitos de su competencia por los otros Poderes del Estado y pueda poner remedio a una situación que, de no salvarse, habrá de tener consecuencias evidentemente perjudiciales para el correcto funcionamiento del Estado en su totalidad.

*B)* Apreciaciones sobre el índice de criminalidad.

a) *Apreciación relativa derivada de nuestra estadística.*

Hasta aquí hemos puesto de relieve el volumen de trabajo que durante el año 1981 ha pesado sobre los órganos de la Administración de Justicia, encargados de depurar las responsabilidades derivadas de actos presuntamente constitutivos de delitos, y las dificultades con que tropieza, que entorpecen su labor y determinan su retraso; en este aspecto, las estadísticas de las Fiscalías son realmente bastante fiables.

En determinados aspectos sería aún más interesante poder ofrecer una panorámica exacta sobre el índice de criminalidad de nuestro país, cosa que, desafortunadamente, no es posible; sólo podemos ofrecer datos indiciarios, aunque pensamos que aproximados a la realidad y útiles para ser tomados en consideración para plantear la lucha de la sociedad contra el delito.

Y es que nuestras estadísticas, como decíamos antes, se basan en los libros-registro de las Fiscalías y de los Juzgados, que son, en definitiva, listas de causas. Pero en tales listas no constan los datos que serían precisos para hacer una estadística segura en el aspecto que vamos a acometer.

Hay causas en que existe un solo sujeto activo del delito, pero también las hay en que los sujetos son múltiples; en unas se persigue un solo delito, en otras varios, con un solo autor o con varios. Aun suponiendo que pudiera establecerse tanto dato en el momento inicial de la anotación de los partes de incoación en los libros,

para una estadística fiable sería preciso poder seguir las vicisitudes de la causa sobre tales puntos a través de las acusaciones formuladas y su relación con las sentencias dictadas y con el resultado de los recursos que hubieran podido formularse.

Sería una actividad, como se ve, excesivamente compleja para que la realizasen unos funcionarios que no son técnicos estadísticos, que no cuentan con los medios adecuados para realizarla y que además, generalmente, están sobrecargados con su trabajo propio, pues también esto ocurre con frecuencia en las Fiscalías.

Pero además, y aun olvidándonos de la consabida "cifra negra" (influenciada por tantos factores), ocurre que, por desgracia, la realidad muestra que aún tenemos un gran número de hechos posiblemente delictivos de los que no se descubren los autores a pesar de la creciente eficacia de los Cuerpos de la Seguridad del Estado, eficacia que quizá opera mejor en la fase preventiva de los delitos que en la propiamente represiva.

Porque si examinamos la estadística aneja a esta Memoria, veremos que de las 833.297 causas abiertas en 1981 se archivaron por no ser conocido el autor (presuponiéndose que el hecho presentaba caracteres de delito) un total de 400.000 (redondeamos por muy ligero exceso, no superior a 1.500 causas), lo que supone un 48 por 100 de la incoación del año, causas que fundamentalmente se refirieron a delitos dolosos, pues los culposos (cuya mayoría está integrada por los de circulación) casi siempre es conocido el autor.

Esto motiva que muchos de nuestros Fiscales, aun reconociendo y alabando el esfuerzo de la Policía Judicial, hablen del alto porcentaje de impunidades que enmascararon la estadística.

Con estos condicionamientos, y a pesar de ellos, nos atrevemos a dar unos datos indicativos de los índices de criminalidad de la Nación.

Para ello conjugamos diversos factores.

De una parte, tendremos en cuenta el número de juicios abiertos durante el año y su correlación con las sentencias condenatorias dictadas por los distintos Tribunales.

Obtenido así el porcentaje resultante de las inculpaciones formales (aunque sin especificación del número de sujetos responsables ni de delitos incriminados), al relacionarlo con el número de sentencias condenatorias (también sin tales especificaciones), lo aplicaremos también a los casos en que la causa se archivó por entenderse que, aun habiendo en principio delito, el autor o autores eran desconocidos.

En este sentido, empecemos por notar que en 1981 se abrieron en total 84.655 juicios orales en los distintos procedimientos, dictándose un total de 54.042 sentencias condenatorias, es decir, que éstas representan un 63,83 por 100 de los juicios abiertos.

Si aplicamos este porcentaje, que podemos llamar de "delincuencia comprobada mediante proceso", al conjunto de los procesos en que se ha estimado que había delito, tendremos que las causas archivadas por desconocerse el autor son 427.195, que, unidas a las 84.655 en que se llegó al juicio, alcanzan un total de 511.850; aplicado el porcentaje dicho antes, del 63,83 por 100, resultaría que de los 833.297 procedimientos incoados contendrían criminalidad real 326.713.

Claro está que esta cifra, como se dice antes, no revela con exactitud el número de delincuentes ni el de delitos, aunque sí podemos afirmar que la mayoría de los procesos se refieren a un solo procesado y un solo delito, por lo que esa cifra se aproxima suficientemente a la realidad como para valorarla como significativa.

b) *Consideración de los delitos con mayor incidencia.*

Pasemos ahora a extraer de la estadística las posibles conclusiones sobre el contenido de la delincuencia,

para lo cual destacaremos los grupos de delitos más significativos entre los que aparecen en los estados B anejos a esta Memoria, fijándonos también en los comentarios que sobre ello hacen los Fiscales en las suyas.

Reseñemos en primer lugar que los *delitos contra la seguridad interior del Estado* experimentan un aumento de 300 causas sobre el año anterior, llegando a 11.055, de las que 2.723 son por atentado y 3.527 por desacato, lo que permite a muchos Fiscales apuntar una cierta crisis del principio de autoridad y de su acatamiento por los ciudadanos, por cuanto estos dos tipos de delito han aumentado bastante.

Otro tipo de delitos que atrae muy intensamente la atención de los Fiscales es el relativo al *tráfico y consumo de drogas o estupefacientes*. No es sólo que los procedimientos incoados en 1981 hayan ascendido a 6.671 (hace pocos años no aparecía en la estadística prácticamente ninguno), con aumento del 24,75 por 100 sobre los incoados en el año 1980, sino que además el hábito de su consumo, llegando a producir adicción, es un acusado factor criminógeno, en cuanto que el adicto llega a tener que proporcionarse la droga en cantidades cada vez mayores y por costos que alcanzan cifras considerables, para lo que con frecuencia recurre para ello a la comisión de otros delitos, contra la propiedad.

En el Título de los *delitos contra las personas* se observa una interesante regresión, pues los homicidios, con un total de 789 causas, disminuyen respecto del año anterior en un 9,20 por 100 y las lesiones, con 32.182 causas, bajan también un 7,47 por 100, lo que permite a muchos Fiscales estimar que la más intensa y eficaz labor de vigilancia de los Cuerpos de la Seguridad del Estado ha hecho recobrar una mayor sensación de seguridad ciudadana y ha disminuido la violencia ambiental.

Se señala, en cambio, un aumento de los *suicidios*, que alcanzan 3.150, desigualmente repartidos por las provincias, de manera que en algunas alcanzan cotas muy

altas. En su producción aparecen, a juicio de los Fiscales, en gran número de casos, las anomalías mentales del sujeto; pero también se señalan situaciones de crisis, especialmente económicas, unidas a la degradación de los valores morales tradicionales. Y algún Fiscal, como el de Salamanca, nos presenta su preocupación ante el aumento de los suicidios de jóvenes y aun muchachos, aunque los estudios sobre el tema hayan mostrado cómo la época de la pubertad, con sus inmadureces e inseguridades, sea proclive a desencadenar un tipo de reacciones negativas y escapistas.

Los *delitos contra la propiedad* aumentan en su conjunto hasta el número de 444.219 causas incoadas por ellos, que supone un crecimiento del 1,11 por 100 sobre el año anterior. Dentro del grupo, descienden el hurto común y el de uso de vehículos (éste muy acusadamente, pues rebaja un 12,68 por 100) y aumentan, en cambio, moderadamente, los casos de cheque en descubierto, y menos moderadamente los de estafa, con 14.090 procedimientos (5,74 por 100), y los de robo, con 226.392 procesos (7,54 por 100).

Han disminuido en un 3,79 por 100 los procesos registrados por *delitos contra la libertad y seguridad* de las personas, situándose en 23.676 procedimientos incoados.

Prescindiendo de otros tipos de delito menos significativos, y pasando a la *delincuencia específica del tránsito automovilístico,* veremos que sus figuras más representativas han decrecido en nuestros registros; la imprudencia automovilística aparece con 151.264 procedimientos, descendiendo en un 2,28 por 100; la conducción sin habilitación legal, con 14.188 casos y una regresión del 3,31 por 100; y la conducción bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas, con 4.061 causas y retroceso del 2,99 por 100.

*C)* Los juicios de faltas.

Los juicios de faltas incoados por los órganos inferiores de la Justicia penal fueron, en 1981, en total 696.024, con un aumento de 7.695, que equivalen al 1,11 por 100 de la incoación del año anterior.

Se dictaron un total de 359.669 sentencias, de las cuales fueron condenatorias 196.645 y absolutorias 163.024, interponiéndose recurso por el Fiscal en 1.311 ocasiones, por el perjudicado 8.090 y por el condenado en 21.362, recursos que fueron resueltos por el Juzgado de Instrucción, confirmando la apelada en 21.767 casos y revocándola en 5.250.

Quedaban pendientes en los Juzgados de Distrito y de Paz al terminar el año, 276.032 juicios, con aumento de 29.375 sobre la pendencia del año anterior, lo que supone un incremento del 11,90 por 100.

Los problemas de este grado de la Justicia tienen similitud con los ya examinados en relación con los Tribunales superiores, agudizándose aquí de manera especial el del personal que ha de atender a la tramitación de los juicios, pues aquí son aún más numerosos los supuestos en que, por diversas causas, los oficios están en manos de personas no profesionalizadas y faltas de la necesaria preparación técnica.

*D)* Referencia a la delincuencia juvenil.

No queremos terminar este capítulo de nuestra Memoria sin poner de relieve algo que preocupa muy hondamente a nuestros Fiscales, como ya hemos anticipado, y que debe preocupar a todos: la delincuencia juvenil, considerando como tal, al efecto de nuestro examen, la de personas menores de veintiún años, que es la que se refleja en nuestra estadística.

Del fenómeno del quebrantamiento de las leyes en el ámbito penal se ocupan en España, por un lado, los

Jueces o Tribunales Tutelares de Menores y, de otro, los órganos de la Jurisdicción penal.

Los Tribunales o Jueces unipersonales de Menores han iniciado durante 1981 actuaciones de la facultad reformadora sobre 26.294 menores de dieciséis años, la mayor parte de los cuales (21.293) habían cometido infracciones contra la propiedad.

Aunque nuestra estadística sobre la materia no es completa, algún Fiscal ha tenido ocasión de estudiar el fenómeno atendiendo a las edades de los chicos, encontrándose con que la mayor parte de ellos están en los quince años, de lo que se deduce la trascendencia que para el aumento de la delincuencia, a enjuiciar por la Jurisdicción ordinaria, puede tener la rebaja de la edad penal que se proponía en el Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal remitido a las Cortes por el Gobierno en febrero de 1980. Sin entrar en la polémica sobre cuál debe ser el límite que señale el inicio de la responsabilidad penal, sí se hace patente la necesidad de revisar el tratamiento de la delincuencia juvenil, acogiendo modernas tendencias y singularizando las medidas de actuación en aras de una mayor eficacia preventiva y el logro de mayores éxitos en la rehabilitación de esos delincuentes, logrando la reinserción social de ciudadanos que, por su edad, todavía disponen de muchos años de vida activa y útil para la sociedad.

Por su parte, en la Jurisdicción penal ordinaria se dictó condena para 19.518 personas comprendidas entre los dieciséis y los veintiún años, de cuyas condenas 6.592 proceden de Tribunales colegiados, lo que indica que responden a delitos, al menos, relativamente graves.

Si ponemos la cifra de condenados menores de veintiún años en relación con el total de las sentencias condenatorias dictadas, que fue de 54.042, nos daremos cuenta de la importante contribución que nuestra juventud aporta al componente de la criminalidad, que en algunos casos alcanza proporciones que pueden califi-

carse de preocupantes; el Fiscal de Granada, por ejemplo, la sitúa en el 47 por 100 de la delincuencia declarada por sentencia en aquella provincia.

3. *Actuación de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.*

El balance global de la actividad del Ministerio Fiscal en los procedimientos constitucionales durante el año 1981, marca una clara línea creciente respecto al año precedente. Debe recordarse que hasta el 15 de julio de 1980 no inició oficialmente sus actuaciones el Tribunal Constitucional, si bien con antelación a la referida fecha ya se habían presentado numerosos recursos, al amparo de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

En 1981 entraron en Fiscalía, para diversos trámites, 257 nuevos procedimientos constitucionales (170 en 1980). El total de asuntos contabilizados en el despacho asciende a 803 (397 en 1980), distribuidos entre recursos de amparo, cuestiones de inconstitucionalidad y otras actuaciones heterogéneas.

Al terminar el año se hallaban pendientes de despacho por el Fiscal dos procedimientos, ambos dentro del plazo legal.

Como es sabido, la actividad más extensa y característica del Ministerio Fiscal, en los procesos constitucionales, se contrae a los recursos de amparo por violación de los derechos fundamentales relacionados en los artículos 14 a 30 de la Constitución.

A lo largo de 1981 el Ministerio Fiscal actuó en 246 nuevos recursos (170 en 1980).

La distribución numérica de dictámenes emitidos en recursos de amparo, teniendo en cuenta la naturaleza del trámite, arroja las siguientes cifras:

Dictámenes sobre admisión (art. 50 L. O. T. C.) ... ... ... ... ... 78
Dictámenes sobre suspensión (art. 56 L. O. T. C.) ... ... ... ... ... 10
Dictámenes sobre alegaciones (art. 52 L. O. T. C.) ... ... ... ... ... 41
Dictámenes sobre otros trámites o incidencias ... ... ... ... ... ... 39

Se notificaron a Fiscalía las resoluciones definitivas dictadas en 129 procedimientos, de los cuales 78 correspondientes al año 1981 y 51 al año anterior. Su distribución, según clase, es la siguiente:

| | Número | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sentencias ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 26 | 20 |
| Autos de inadmisión ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 74 | 57 |
| Resoluciones de archivo ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " |
| Por distintas causas ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 29 | 23 |

Las resoluciones de archivo e inadmisión del recurso se acordaron siempre de conformidad con el criterio del Fiscal. En cuanto a las sentencias, de las 26 notificadas 10 son estimatorias del recurso, total o parcialmente (una de acuerdo con el Fiscal), y 16 desestimatorias (14 de conformidad con el dictamen de Fiscalía).

La Fiscalía General del Estado intervino en 11 procedimientos en los que se planteó cuestión de inconstitucionalidad: en uno intervino en trámite de admisión y en los restantes en trámite de alegaciones.

La respectiva sentencia del Tribunal Constitucional rechazó en un caso la admisión; en otro declaró no haber lugar a pronunciarse (compatibilidad del art. 252, 2, de la Compilación del Derecho Civil Especial de Cataluña con el artículo 39, 2, de la Constitución en relación con los derechos sucesorios testamentarios de los hijos extramatrimoniales y madre adúltera), aceptándose el dictamen alternativo del Fiscal. En otros tres casos se dictó sentencia de declaración de inconstitucionalidad, en discrepancia con la tesis de Fiscalía.

## Capítulo V

## RESUMEN DE LAS MEMORIAS REMITIDAS A LA FISCALIA GENERAL

No resulta fácil en unas cuantas páginas hacer un resumen y una valoración globales de las Memorias confeccionadas por las Fiscalías de las Audiencias. Aunque todas ellas, por consecuencia de las instrucciones en su día impartidas por la Fiscalía del Tribunal Supremo, mantienen una estructura y desarrollan unos temas homogéneos (Evolución de la delincuencia, Actuación de la Administración de Justicia, Desarrollo de las funciones del Ministerio Fiscal y Examen de la actividad penitenciaria), es lo cierto que ni todas se ocupan de ellos en análoga extensión y profundidad, ni todas alcanzan el mismo interés y la misma altura testimonial ni, en en suma, muestran parecida preocupación por aportar comentarios, opiniones, reflexiones o apuntes sobre aspectos relacionados con problemas organizativos, funcionales o técnico-jurídicos afectantes a la Justicia en general.

Es notorio que en la extensión y calidad de las Memorias influyen factores como la preparación y el talante de los respectivos Fiscales que las firman o de los que colaboran en su confección, pero también incide en ello la situación circunstancial de algunas, cual la existencia de vacantes en la plantilla (tan frecuente en los últimos tiempos), que obliga a una sobrecarga de trabajo, con repercusión en el tiempo libre para poder dedicar el necesario a una labor que requiere acopio de anteceden-

tes, meditación y estudio. Pero, en definitiva, en su conjunto, constituyen un material muy útil para conocer en visión panorámica la evolución y el estado presente de los problemas relacionados con todos los aspectos de la Administración de Justicia.

Es muy posible que ciertos extremos de los que a continuación se va a tratar, constituyan, en cierto modo, una repetición más o menos parcial de los temas que conforman anteriores capítulos de esta Memoria, pero debe tenerse en cuenta que la finalidad de éste es solamente la de mostrar las preocupaciones de los Fiscales por ellos, lo que, en definitiva, viene a afirmar la urgencia de su consideración y estudio en busca de las soluciones a los problemas planteados, poniéndose de manifiesto puntos de vista, no siempre coincidentes entre sí o con el de esta Fiscalía General del Estado.

Qusiéramos reproducir íntegramente muchos de los textos comprendidos en las Memorias, pero, por una parte, ello daría a este extracto una dimensión desmesurada y, por otra, desvirtuaría la finalidad del mismo, por lo que nos limitaremos a repetir ciertos párrafos de los que, en relación con cada tema, se estiman de mayor interés, actualidad o curiosidad, sin demérito para otros muchos que no pueden ver la luz en estas páginas, pero que son tenidos en cuenta y apreciados en lo que valen por esta Fiscalía General:

1. Dentro del capítulo general sobre la criminalidad, su evolución, condicionantes y posibles remedios, los Fiscales, con casi completa unanimidad, que no contrasta, por otro lado, con los puntos de vista de cuantos en diversos campos de la actividad social contemplan el problema con ojos desapasionados y espíritu equilibrado, ponen el acento de las motivaciones mediatas o cercanas de la presente delincuencia, con sus líneas y características especiales, en los factores bien conocidos de relajación de la moral tradicional, sin sustitutivo válido, el uso abusivo de las drogas, el resquebrajamiento de los

vínculos familiares, el paro, el inmoderado afán de consumo que caracteriza nuestra época, la eclosión turística, el bajo nivel cultural de extensas masas de españoles, el mal uso de la libertad de expresión en algunos medios de comunicación, la defectuosa educación ciudadana y moral que reciben los niños en la escuela, la propia insuficiencia de la escolarización infantil en ciertas zonas, la escasa eficacia intimidativa y reformadora de la pena, etc.

Tarea ardua resulta hallar remedios inmediatos para intentar poner freno a las actitudes antisociales, secuela de esos factores condicionantes, y los Fiscales, en sus Memorias, muestran su preocupación por el tema, ofreciendo un abanico de medidas de muy diversa significación.

El Fiscal de Palma las clasifica en tres grandes grupos, a saber: de carácter psicológico, de naturaleza política y de índole judicial. Respecto a las primeras dice: "Es preciso lograr un ambiente social proclive a conseguir la mejor formación moral, cívica y profesional de la juventud en un mundo libre, pluralista e ilusionante. Para ello debe dedicarse la mayor atención y dotación de medios a cuatro instituciones fundamentales de la vida comunitaria: la familia, los centros docentes, el trabajo profesional y la organización comunitaria del ocio, del deporte y de la cultura", desarrollando luego con detalle cuáles debieran ser, a su juicio, las líneas de actuación en dichos aspectos. En relación a las segundas, concreta, entre otras cosas, que: "Deben tender a fomentar un ambiente social de seguridad, orden jurídico, libertad y paz social, acentuando —especialmente hasta que se consolide el correcto funcionamiento de nuestras instituciones democráticas y termine el confuso y en ocasiones anárquico período actual de tránsito político— el principio de autoridad y el cumplimiento de las leyes". Y sobre las terceras propone una profunda revisión del Código Penal, del sistema de penas, de la orga-

nización judicial y del proceso penal. Y agrega: Mientras lleguen a buen término las expresadas reformas legislativas, cuya tramitación parlamentaria acusa gran lentitud, nos encontramos en una situación jurídica transitoria de insuficiencia legislativa, unas veces, de incompatibilidad tácita, otras, de inidoneidad de medios para una eficaz lucha contra la criminalidad en la mayoría de los casos, todo lo cual produce de hecho una situación de confusión y de vacío de poder, especialmente en orden a la defensa social y contra el delito". Y finaliza diciendo: "No es ahora el momento de agotar el catálogo de las diferentes medidas legales que podrían aplicarse mientras duren las actuales circunstancias de escalada criminal y de inseguridad ciudadana, dentro del marco de una bien pensada, programada y colectivamente aceptada política judicial. El Poder Judicial no puede cruzarse de brazos en las actuales circunstancias esperando se lleven a cabo las necesarias reformas legislativas, orgánicas y de dotación de medios. Parece obligado intentar, hasta que lleguen estas reformas, medidas transitorias que frenen y aun reduzcan el panorama actual de degradación social por el alarmante crecimiento de la delincuencia."

Muchos son los comentarios que a los Fiscales sugiere la consideración de la evolución cuantitativa de la delincuencia en nuestro país, toda vez que los datos sobre los que normalmente se juega, es decir, los que arroja el examen de aumento o disminución de los procedimientos incoados por delito por cada año natural, no son totalmente fiables como consecuencia de los criterios dispares de los Juzgados para el inicio de actuaciones formales, o bien porque, como explica el Fiscal de Vitoria: "Una buena proporción de conductas delictivas "menores" no son denunciadas, pues el ciudadano va perdiendo fe en la Justicia. Su complejo funcionamiento y lenta marcha le asusta, sus resultados le merecen poco crédito y no pocas veces prefiere sufrir, resignada y calla-

damente, las consecuencias del delito que las molestias del procedimiento y la decepción, en ocasiones, de su resolución."

No obstante todo ello, es lo cierto que las estadísticas indican en los dos últimos años, como se comenta anteriormente, una ligera disminución global (prescindiendo de provincias determinadas) del número de procedimientos penales, lo que puede ser indicativo de que ha terminado por ahora la escalada delictiva que se apreció de forma indubitada en el quinquenio 1975-1979.

"Sin embargo —según dice el Fiscal de Jaén en su muy apreciable Memoria—, la realidad gozosa que tales cifras da, contrasta con el hecho que refleja el ambiente. Al margen del dato numérico, se vive en una profunda preocupación, que no ocultan los Fiscales —dice esa Superioridad— en sus informes anuales. Pero la verdad es que esta preocupación no la manifiestan sólo los Fiscales, a quienes en unión de otras instituciones incumbe luchar contra la delincuencia, sino que se manifiesta en el ambiente social, en el contacto con las gentes. Estas, en su mayoría, viven en constante desazón y temor por la extensión de la actividad criminal que de algún modo a todos alcanza, bien personalmente como víctimas directas, bien como muy próximas a las que lo fueron, temiendo, lógicamente, que el que no lo sufrió hoy lo sufrirá mañana. Resulta, pues, una clara desarmonía entre una optimista realidad estadística y la respuesta social, cada vez más pesimista. ¿Cuál puede ser la causa de esta cierta antinomia? Pensamos que la principal causa es que la delincuencia ha tomado ya un nivel suficientemente alto para ser, de suyo, preocupante y una leve baja no se manifiesta fácilmente al ciudadano para ser claramente percibida. Por otra parte, los delitos comunes (robos, hurtos, amenazas, agresiones a los bienes o a la moral, etc.) son muy "clamorosos" y, como tales, psicológicamente contagiosos entre las gentes, que no suelen "inventar" los hechos, sino que, simplemente, a

fuerza de referirlos una y otra vez, parece que son más de los que en realidad acontecieron. Además, el alza evidente de algunas modalidades delictivas, caracterizadas por su insólita agresividad o por su acentuado descaro y falta de respeto a las más elementales normas de convivencia que vienen ya aquejando a España, produce necesariamente una sensación de desasosiego que se traduce irremisiblemente en el ambiente de inseguridad en que hoy se vive."

Al hilo de tales consideraciones, podemos situar las apreciaciones de los Fiscales en relación con ese ambiente de inseguridad en que se desenvuelve la vida nacional y al que se refieren, por ejemplo, los Fiscales de Salamanca: " ...la sociedad..., sensibilizada en cuanto a su seguridad, recela de quien no conoce..., aumenta el egoísmo, con un escudo protector que nos cubra de riesgos, se consumen algunos productos con miedo..."; Valencia: "Hay temor, no sólo en las en otros tiempos pacíficas calles de nuestras ciudades, antes pletóricas de vida nocturna y hoy vacías; y ello es lo más triste, hasta hay un justificado temor a abrir las puertas de nuestras casas"; o el ya citado de Jaén: "El clima de inseguridad se palpa, sería inútil negarlo. Buena prueba de ello es la serie de medidas que a nivel oficial y particular se toman para conjurar amenazas, evitar atracos, secuestros o hechos de mayor alcance criminal, la ocultación del verdadero nombre, la alteración de los apellidos en las guías telefónicas, el ponerlos a nombre de la esposa o de su suegra, los consejos que frecuentemente se reciben por diferentes conductos, hasta de la forma en que deben llevar el bolso las señoras; preparación para la defensa personal, no repetir el recorrido, etc., etc."

En cuanto a las formas de delincuencia más llamativas, hay sensibles variantes en relación con la situación geográfica de las Fiscalías, aunque prácticamente todas ellas destacan en lugar preferente el componente de agresividad y brutalidad que empapa la mayor parte de

las actividades antisociales del momento. El Fiscal de La Coruña resume así la situación: "Pero lo que sí queremos destacar, en consonancia con lo que ya dijimos al hablar de la evolución de la criminalidad, es el aspecto violento y agresivo, exacerbado en el último año, en la comisión de los delitos, reflejo, a nuestro juicio, de un estado de crispación de la sociedad que hace que los mismos delitos de antaño sean ahora cometidos con medios más violentos o con saña, que puede representar la explosión en determinado momento de una ira contenida en ocasiones que, fríamente contempladas, en modo alguno explicarían en circunstancias corrientes tal modo brutal de obrar."

Y el Fiscal de Madrid, en su destacada Memoria, añade: "La carencia de relaciones sociales le hace sentirse (al hombre) marginado e impune. Nadie ha reparado en su identidad y llega a pensar que existen grandes posibilidades de que sus comportamientos marginales nunca sean perseguidos. La impunidad le da seguridad y el rechazo del sistema le sirve para desatar la agresividad acumulada, llegando en algunos casos a utilizarla de manera gratuita y brutal, aunque no la necesite para conseguir el fin último de su actuación, el despojo del patrimonio de su víctima, para propiciar la satisfacción de sus carencias."

Los Fiscales de Bilbao, Vitoria, Pamplona y San Sebastián aluden, como es lógico, al terrorismo que ensangrienta aquellas provincias. El primero se refiere a las repercusiones que el fenómeno terrorista tiene en la sociología de Vizcaya, en la evolución de la delincuencia común y en la propia situación de la Administración de Justicia, a través de atinadas consideraciones, que por su extensión no es posible reproducir aquí. En su valiente Memoria, el Fiscal de Vitoria se refiere "al clima de *degradación social e insolidaridad* nacido al amparo de dilatadísima ofensiva terrorista y los escasos éxitos durante muchos años en la lucha frente a ella, con la con-

siguiente quiebra del principio de autoridad. En tales circunstancias la colaboración ciudadana, imprescindible en la lucha contra el crimen, es mínima o nula, encontrándose así el delincuente con una ventaja, sobre las muchas con las que ya cuenta, sobreañadida y de valor inestimable para la realización de sus propósitos". El de Pamplona hace un largo relato de las actividades terroristas llevadas a cabo en Navarra durante el año. Y el de San Sebastián, entre otras muchas consideraciones sobre los objetivos perseguidos por el terrorismo vernáculo, llega a esta triste conclusión: "... creemos que para esa comunidad españolista no tardará en llegar el día —de seguir así las cosas— en que tendrá que decir como Aquiles: "¡Yo, tratado como un vil extranjero!", ya que cada vez serían más los que pensarán que se estarían dando una serie de circunstancias que les permitirían dudar de si seguirían siendo ciudadanos de su propia patria".

El grave problema del tráfico y consumo de drogas es objeto de atención preferente por parte de prácticamente todos los Fiscales, pues, aun cuando su incidencia es menor en aquellas comunidades de escasa población o situadas al margen de las fronteras, las costas o las principales rutas de comunicación, el mal se va extendiendo progresivamente a todos los rincones de la geografía nacional, como señalan, en cuanto a sus respectivos territorios, las Memorias de Palencia, Teruel, Huesca, Zamora, Cuenca o León.

Es muy sensible no disponer de espacio para reproducir total o parcialmente las consideraciones que, sobre el comercio de la droga y las nefastas consecuencias de su uso en la salud corporal, psíquica y moral de los españoles y su incidencia en la criminalidad, hacen algunas Memorias, entre las que destacan las de Madrid, Cádiz, Badajoz, Bilbao, Cuenca, Huelva, Las Palmas y Vitoria, entre otras. Pero no nos resistimos a copiar algunos de los párrafos que, en su excelente Memoria, el Fiscal de

Huelva dedica a este problema. Dice, entre otras cosas, que "... lo cierto es que la extensión de las zonas de la realidad social contaminadas por las drogas, no hace más que crecer. De momento el vehículo de la contaminación consiste casi exclusivamente, en esta provincia, en los productos derivados de la "cannabis indica", pero ya se sabe que el paso de aquéllos a drogas duras, como la heroína, es, en buen número de casos, sólo cuestión de tiempo. Sin ceder a la tentación de un fácil y retórico alarmismo, puede y debe decirse que en este punto lo razonable es ser pesimista. Pesimista, porque el consumo habitual o frecuente de drogas encuentran, en la estructura social de nuestro tiempo y en las actitudes y valores predominantes, un excelente caldo de cultivo; pesimista, por la sofisticada perfección —que garantiza tantas veces su impunidad— con que actúan las organizaciones dedicadas al tráfico; pesimista, en fin, por el elevado coste social que supone una plaga que se difunde tan implacable como sistemáticamente. Coste social difícilmente calculable, pero sin duda importante, ya que en su cuantificación habría que computar dinero invertido, capacidad laboral perdida, niveles de salud deteriorados, debilitamiento de la cultura vigente y reforzamiento de la subcultura marginal y criminal, vidas humanas amenazadas, etc. Esta situación no demanda, naturalmente, sólo soluciones represivas, sino ante todo una eficaz acción preventiva de colaboración internacional y una programada política informativa y de higiene social, pero, junto a ellas, no cabe desconocer la importancia y absoluta necesidad de una decidida lucha jurídico-penal contra el tráfico. Porque, en cierto sentido, aquí se invierte la dirección de la línea de la causalidad, que tantas veces nos parece descubrir en el mundo de la criminalidad. Con demasiada frecuencia, en efecto, el delito surge como mero efecto de una situación socialmente patológica, a la que, en consecuencia, dirigimos nuestro reproche con tanta o mayor intensidad que al

crimen. El tráfico de drogas, por el contrario, es un factor criminógeno de carácter prácticamente originario, de forma que es en él donde está una de las causas de las más graves enfermedades que aquejan a la sociedad de nuestro tiempo. Porque la difusión de la droga —con su interminable cortejo de efectos indeseables— es, en gran medida, el producto pura y simplemente de una oferta capaz de crear necesidades artificiales en los grupos sociales que cuentan con menores defensas psicológicas y morales. Reprimir, pues, por vía penal, el tráfico de drogas, no equivale sólo, como en otras áreas de la criminalidad, a luchar contra el síntoma de una más profunda y decisiva enfermedad social, sino que significa precisamente combatir el origen del mal. Lo que ocurre, sin embargo, es que con demasiada frecuencia lo que se nos remite para la aplicación de la Ley penal son apenas los últimos eslabones de la cadena de tráfico y distribución, consumidores que venden pequeñas cantidades para seguir drogándose, traficantes marginales, que tienen tanto de víctimas como de delincuentes". Aquí pone el Fiscal de Huelva el dedo en la llaga, ya que la verdadera lucha contra ese pernicioso tráfico habría que darla en el origen de la cadena, contra los grandes traficantes organizados, que desencadenan todo el proceso.

En el capítulo de los atentados a la propiedad, que forma el grueso de la delincuencia común, exponen los Fiscales su aprensión por la extensión de los robos con violencia e intimidación en las personas, incluso con violación, y comentan una vez más la incongruencia que supone su más leve punición, en relación con algunas figuras del robo con fuerza en las cosas, así como la que supone la paridad de penas entre los robos violentos utilizando instrumentos peligrosos con resultado lesivo para la vida o integridad física de las víctimas, y aquellos en que las lesiones se producen ocasionalmente por la caída subsiguiente a un "tirón", como pone de manifiesto el

Fiscal de Madrid en su Memoria, aunque convendría recordar que el subtipo agravado por el uso de esos medios peligrosos rompe el planteamiento inicial y obliga a castigar más severamente el primer supuesto.

No es posible entrar con detalle en los extensos informes de los Fiscales sobre la amplia gama de la delincuencia patrimonial, que es fenómeno común a todo el país, aunque con diversa incidencia según las características urbanas o rurales del territorio, pero sí dar unas pinceladas en relación con dos formas de agresión a bienes ajenos que se producen en ciertas zonas.

La Memoria de Cuenca, bien trabajada y documentada, alude a las sustracciones de efectos, animales y productos del campo: "La proliferación de este tipo de delitos —dice— se explica perfectamente sin más que pensar en las condiciones de vida actual, que favorecen al sujeto activo, motorizado las más de las veces y beneficiado por la mejora de los caminos existentes y la creación de otros y de auténticas pistas que les permiten llegar sin el menor esfuerzo al lugar del hecho y trasladar con rapidez y a distancia lo sustraído, y que perjudican al sujeto pasivo, que ha dejado de ser el esclavo de su hacienda y que no renuncia siquiera a pernoctar en el pueblo, inocentemente ajeno a que los tiempos han cambiado y que el campo ha dejado de ser el sitio donde nunca ocurría nada y que se ve desagradablemente sorprendido cuando al volver a su tarea bien de mañana encuentra su cosechadora sin ruedas, que le ha desaparecido el motor de riego o que le han sustraído buena parte de sus corderos." Por su parte, los Fiscales de Galicia, así como los de Cádiz, Badajoz, Tenerife y Castellón, entre otros, lamentan la extensión de los incendios forestales, que siguieron asolando aquellas provincias durante el pasado año. Estudia el fenómeno, especialmente el de Pontevedra, en su cuidada Memoria, examinando sus causas, las medidas adecuadas para prevenirlos, los medios necesarios para detectar su origen y la actualización

de la legislación sancionadora. Y entre las hipótesis que baraja en relación con las finalidades de los producidos dolosamente, que sitúa, según criterio dominante, en el 70 por 100, cita: "lograr a corto plazo pastos para el ganado; rencillas e intereses encontrados entre los vecinos o comunidades; devolución de montes "en mano común" que ha originado malestar en algunas poblaciones; pretensión de crear puestos de trabajo en invierno a costa de las repoblaciones; intereses madereros; necesidad de quemar la maleza para alejar alimañas; organización criminal que pretende desestabilizar; ciertas filosofías que pretenden la vuelta en Galicia a las especies tradicionales del castaño y el roble; o interés de contrabandistas, que tratan de distraer a la Guerdia Civil para que abandone la costa".

Otro de los grandes grupos de las actividades delictivas a que se refieren extensamente las Memorias lo constituyen las agresiones contra la persona en su triple vertiente de atentados contra la vida y la integridad física, contra la libertad sexual y contra la libertad y seguridad. En cuanto a la primera, es opinión general que el clima de agresividad en que se desenvuelve la vida nacional, influye poderosamente en la creación de las condiciones para el incremento de los hechos lesivos a la integridad corporal y su mayor crueldad. El Fiscal de Ciudad Real, por ejemplo, dice: "El hecho cierto es que los delitos de sangre siguen en clara ascendencia, pues si disminuyen los homicidios, aumentan sensiblemente las lesiones... La influencia del "mundo circundante", aun cuando lo sea en el aspecto geográfico, determina en este caso que los delitos contra las personas aquí acaecidos, si no son "pasionales", al menos sí lo han sido apasionantes; se observa siempre en todos ellos un plus de culpabilidad."

El Fiscal de Murcia, después de aludir al incremento de los delitos de homicidio y lesiones en estos términos: "En el diario quehacer hemos detectado el aumento de

riñas en discotecas y lugares de reunión similares, respondiendo a los estímulos de alcohol, muchas veces la droga y el machismo. Tales frutos son la cosecha de la holganza de un sector de la juventud hedonista, ansiosa de vivir intensamente sus días de vino y rosas, sin frenos éticos que moderen un protagonismo mal alentado con fines consumistas", se ocupa del problema de los abortos clandestinos, refutando la cifra de un millón anual, fijada por los que "sin rubor científico y con falacia llegan a fabular su número en esa cifra redonda", extendiéndose en consideraciones sobre el hecho de que, por mucha clandestinidad y sigilo en las conductas, una proporción de tan elevada cifra negra tendría que filtrarse en los ambientes judiciales en mayor número de lo que arrojan nuestras estadísticas, aunque sólo fuera a través de los casos de muerte de la abortante, que se cifra por la Organización Mundial de la Salud en un 1 por 100, lo que daría para España 10.000 mujeres muertas por aborto al año, rechazando como calumnia que la clase médica, obligada profesionalmente a certificar la causa de la muerte como trámite previo para la inscripción de la defunción, sea capaz de ocultar tamaña hecatombe. Es evidente que el porcentaje de incidencias graves en los abortos clandestinos trasciende necesariamente al terreno judicial y su porcentaje no guarda proporción con aquella mítica cifra que señala cierta propaganda.

En la vertiente de los actos afectantes a la libertad y, en general, a la moral sexual, que se queja el Fiscal de Pamplona de la facilidad con que se conceden licencias de apertura de establecimientos aparentemente de bebidas, incluso en pequeñas localidades, con toda una suerte de instalaciones y ambientación que demuestran bien a las claras las finalidades de su utilización para la explotación del comercio carnal. Y el de Córdoba, de la profusión en la prensa de anuncios de "casas de masajes", con ofrecimiento de "chicos y chicas para todo" y a veces con la máxima crudeza en la expresión anun-

ciante. "La exaltación del sexo —añade—, como continuamente puede observarse, la obtención del placer como fin vital, sea cual fuere y en la manera que fuere, no conduce a la larga más que a la debilitación de la sociedad, de la familia y del individuo."

En la tercera vertiente, aluden las Memorias a los heterogéneos comportamientos en que se manifiesta el abuso de la propia libertad frente a la de los demás y que afecta a la seguridad individual y colectiva. Así, el Fiscal de Ciudad Real comenta: "La libertad individual sin límites se confunde con la libertad atemperada y es precisamente, quizá por mimetismo, que la libertad sin límites a lo que más ataca es a la libertad de los demás, y cuando la libertad se quebranta, se quebranta, por ende, la seguridad, porque ésta no es más que la suma de todas las libertades." Y el de Jaén dice: "Unas veces es la llamada telefónica, otras veces la carta manuscrita o mecanografiada, la que sirve de instrumento para atemorizar al destinatario de una u otra y no faltan casos en que dicha llamada o carta se articula con alguna frase o alusión soez de hechos contra la honestidad, normalmente dedicados a la señora o muchachas jóvenes que habitan en la casa. Frecuentísimos son los casos en que, para causar mayor temor, los autores de las amenazas se firman con las siglas de las organizaciones que más puedan aterrar a un ciudadano", relatando luego casos pormenorizados de amenazas a médicos por supuestos errores en sus intervenciones profesionales, a testigos para obligarles a no comparecer a declarar en juicio, etcétera, etc.

No resulta posible continuar con los comentarios de las Memorias sobre muchas otras formas delictivas en particular (atentados a la fuerza pública, usurpación de funciones, falsedades, coacciones, imprudencia con ocasión de la circulación, etc.), que haría interminable el resumen de este primer gran capítulo sobre la delincuencia. Baste decir que a todas ellas se refieren los Fis-

cales con extensión y profundidad, demostrando su gran interés por no ocultar los problemas que en este campo afectan a sus respectivas provincias.

2. Otro tema de estudio y reflexión en casi todas las Memorias, es el de la delincuencia juvenil e infantil, "uno de los más graves —acaso el más grave— de cuantos hoy tiene planteados la sociedad española en el área de la seguridad ciudadana", como dice el Fiscal de Huelva. "Naturalmente —sigue arguyendo—, no es un fenómeno sin causas ni raíces ni éstas han de buscarse fuera de la propia sociedad en que el fenómeno nace y al margen del entorno donde se encuentra su clave explicativa. Aun a riesgo de repetir lo archisabido e incurrir en lo que puede denunciarse como tópico —en definitiva, ceder al tópico es con frecuencia hacer un modesto homenaje a la verdad—, hay que recordar que las bandas juveniles se forman en las barriadas suburbiales de la ciudad, donde, con frecuencia, asimilan sus miembros las pautas, habilidades y técnicas que integran la subcultura criminal; hay que insistir en la relación de causa-efecto que puede establecerse entre desajustes sociales, frustración juvenil y reacción hostil y violenta contra los símbolos y valores que llegan a definirse como inaccesibles; hay que anotar con firmeza la clara desigualdad con que se enfrentan los distintos grupos de jóvenes, según su clase social, a la eventual iniciación en el camino del crimen; hay que denunciar una vez más la fuerza criminógena —tanto más intensa cuanto más inmaduro e indefenso el que la soporta— de la injusticia estructural." Y después de reconocer el grado de responsabilidad que el sistema jurídico-penal, en su más amplio sentido, tiene en la agravación del problema, concluye: "No podemos, pues, tranquilizarnos pensando que los delincuentes juveniles nos vienen ya hechos y que nuestra única misión es utilizar los medios jurídicos puestos a nuestra disposición para conjurar una hostilidad social de cuyo origen pudiésemos hacer abstracción.

Los delincuentes juveniles son, más que otros cualesquiera, seres "in fieri" y, desgraciadamente, tras su paso por los sucesivos órganos del aparato jurídico-penal, nada permite esperar que el "producto" sea un ser responsable, socializado e integrado en la sociedad. Más bien hay que temer todo lo contrario. Y si así fuera, este negativo efecto habría que cargarlo en la cuenta de nuestra insensibilidad para un tema que tan cerca y directamente nos atañe."

En su bien elaborado trabajo, el Fiscal de Barcelona dedica amplio espacio a esta cuestión, estudiando con detalle todos cuantos condicionantes económicos, morales, de adicción a la droga, familiares, de absentismo escolar, de relajación social, etc., influyen en la predisposición del menor hacia el delito; examina las diversas tendencias en orden a la actuación sobre el menor delincuente: "Una progresista, que va siendo superada, la cual pretende tratar a los jóvenes en un contexto nuevo de protección no institucionalizada, a través de Colectivos en régimen de libertad, colocación en familias, Hogares de Libertad Controlada, Centros de Vigilancia Informal, cuyas experiencias, ya intentadas en países tan avanzados como Finlandia, se han ido difuminando en sus fines, para más tarde apagarse lentamente, siendo una de las razones la falta de apoyo financiero. La otra, conservadora y tradicional, propugna la creación de Centros de Internamiento que sirvan de preservación al menor delincuente, de reforma de su comportamiento y de creación de hábitos de conducta tendentes a su recuperación, en auténtica disparidad con los criterios progresistas anteriores. Pues bien, se estima que la reforma futura debe acoger lo que cada una de tales tendencias tiene de aceptable, pudiendo cohonestar perfectamente el sistema presidido por una actuación en la que predomina el régimen de libertades, que conviene en determinados casos de menores delincuentes primarios o simplemente insumisos al régimen familiar, con el que considera me-

dio más eficaz para la lucha contra la delincuencia el internamiento del menor, que deberá ser total en los supuestos de jóvenes difíciles, quienes bajo un régimen de internamiento institucionalizado, dotando al Centro de los medios necesarios, podrán lograr su rehabilitación, reduciendo la privación de libertad a medida que el sometido al régimen va asumiendo las enseñanzas que a nivel educativo o laboral se le impartan, sin abandonar la posibilidad de crear otros Centros que, en régimen de semilibertad, puedan acoger a los menores encuadrados entre los dos polos opuestos referidos." Y propugna la necesidad de un gran esfuerzo económico para crear los establecimientos capaces de dar solución a las distintas facetas de actuación del joven delincuente.

3. El apartado referente al funcionamiento de la Administración de Justicia, aparte del estudio de los datos estadísticos que se hace en otro lugar de esta Memoria, es tratado con extensión por los Fiscales, que examinan numerosas facetas en relación con las dificultades con que se tropieza para una labor expedita, fluida y eficaz. Pero no siendo posible comentarlos todos, nos referiremos a algunos de los más significativos y actuales.

Como pórtico de este resumen citaremos dos párrafos de las Memorias de Madrid y Barcelona, que centran el problema en términos realistas y crudos. Dice la primera: "Nos enfrentamos, digámoslo directamente, con un serio problema de idoneidad, es decir, tenemos que preguntarnos si la Administración de Justicia de hoy está capacitada para resolver los conflictos de ahora en el tiempo y en la forma que demanda la sociedad actual. Tal vez sea, pues, el problema de la Justicia, como órgano, una cuestión de contemporaneidad. Es imposible sustraerse a la idea de que estamos asistiendo al final de un largo proceso. Durante más de una centuria, la Administración de Justicia en nuestro país ha permanecido inmutable, indiferente al paso del tiempo, con una mineral y pasmosa inmovilidad, lo que ciertamente no tendría

mayor importancia si la sociedad en ese dilatado período no hubiera cambiado. Pero lo ha hecho y muy profundamente, por cierto. Con las arcaicas leyes orgánicas o de procedimiento, con los viejos Códigos, parcheados y recosidos con apresuradas, cuando no improvisadas y circunstanciadas enmiendas de urgencia, con la vieja y anacrónica planta de los Tribunales, etc. se pretende dar respuesta a las demandas de una sociedad distinta, que tiene del tiempo un concepto nuevo y de la fluidez y agilidad de las relaciones jurídicas, económicas y aun humanas, un sentido menos formal y rituario. El mundo de hoy tiene características diferentes del anterior, no sólo en su estructura, en la comunicabilidad entre sus clases, en el tipo de actividad y de ocios que la ocupan, sino en su espíritu y pensamiento, en la jerarquía de la escala de valores que ordenan su convivencia. Los efectos de esta discordancia, patente aun para las personas más alejadas de estos temas, son los que día a día se ponen de manifiesto. El desinterés, cuando no la incomodidad, de la sociedad por su propia Justicia, a la que tacha de falta de operatividad práctica —una enorme masa de los conflictos y colisiones económicas y jurídicas, como es sabido, se resuelven arbitrariamente, por lo que franjas contenciosas muy importantes se ventilan al margen de la vieja estructura judicial, extramuros de los Tribunales—, al tiempo que de lenta y, por consiguiente, inoportuna. La extemporaneidad de sus resoluciones (que cuando se producen a través de un largo y costoso proceso se refieren a situaciones que, por el natural impulso de la vida, han mudado y han sido sustituidas por otras muy diferentes, con el consiguiente arrastre perturbador que ello lleva consigo) genera en las gentes un sentimiento de insatisfacción y rechazo." Y la segunda: "... no podemos ocultar nuestro desaliento y honda preocupación al constatar que, no obstante los buenos propósitos de sus órganos rectores y las medidas anunciadas, la Administración de Justicia en Barcelona continúa presentando

los mismos y ya endémicos niveles de deterioro que en los años anteriores. La simple voluntad correctora, por muy firme que sea, no es suficiente mientras no se traduzca en la ordenada y racional planificación de las medidas que su problemática peculiar requiere. La Justicia en Cataluña, como en el resto de España, necesita que se le dote de una infraestructura adecuada, que se le proporcione los medios personales y materiales precisos, así como unas instalaciones dignas y suficientes, aparte, claro es, de una normativa moderna, ágil y simplificada, pero también necesita la especial consideración a la hora de fijar la retribución de sus funcionarios del pesado volumen de asuntos que sobre ellos recae y que, unido al alto índice del nivel de vida, motiva el gran mal del constante trasiego de Jueces y demás funcionarios procedentes de otras regiones. La estabilidad de los funcionarios en la provincia de Barcelona, singularmente de los Jueces y Magistrados, es esencial para que Juzgados y Tribunales funcionen con regularidad y eficacia, sin atascos, sin atrasos, con la necesaria fluidez para poder ofrecer a la sociedad la Justicia que ésta demanda. En última instancia, el problema es, pues, esencialmente económico, ya que la Justicia, como ocurre en todo servicio público, si se quiere de buena calidad hay que pagarla, compitiendo, si es preciso, con la empresa privada, que tiende a absorber, en términos generales, al personal auxiliar mejor preparado y responsable."

También son de indudable interés y trascendencia las consideraciones que, sobre la libertad de expresión y sus límites en relación con la independencia judicial, exponen algunos Fiscales y especialmente los de Pontevedra y Lérida. Aquél, después de aludir al interés de los medios de comunicación social de informar a la opinión pública de los hechos socialmente relevantes y de controlar el desarrollo normal y correcto de la actividad judicial, y al interés del Estado en que se administre la Justicia en forma que sea útil y con las garantías opor-

tunas para alcanzar esa esencial necesidad, respetando la imparcialidad y la independencia judicial, dice: "El problema nace, después del planteamiento expuesto, cuando los dos intereses reconocidos anteriormente entran en conflicto y se trata de determinar cuál de ellos ha de gozar de preferencia. A nuestro juicio, debe prevalecer el principio del respeto a la independencia judicial, porque este principio, en un Estado de Derecho, es un imperativo derivado de la propia esencia y razón de ser de la función judicial, como garantía de la libertad individual, en beneficio y función del cual está establecido; es decir, de los justiciables y de la sociedad y del pueblo en general y no en favor de los Jueces ni en una reivindicación caprichosa de éstos." Y el de Lérida, con mayor concreción, relata: "Los medios de comunicación social ponen cada día con mayor sensacionalismo hechos sujetos a los Tribunales de Justicia sobre los que éstos, es decir, *la Justicia,* todavía no se ha pronunciado. Dictar sentencia después de juzgar, es algo difícil que se realiza por la Magistratura ponderada y reflexiblemente, lo que comporta no pocas dificultades a veces, porque toda valoración debe estar en función de la prueba, que puede presentarse oscura. Pues bien, frente a este buen hacer de la Justicia, de la Magistratura, los medios de comunicación social suelen expresar "actuaciones paralelas a las jurisdiccionales", basadas normalmente en datos fragmentarios e interesados que sólo en apariencia, a veces lejana, guardan relación con el contenido real de un determinado proceso. Esta "actuación paralela" a la legítima actividad jurisdiccional, es peligrosa, porque, además de no arrojar certeza ni información, confunde a la sociedad, desinformándola."

Pasando a temas más específicos, es bien sabido que una de las causas que más influyen en que la Justicia, como servicio, alcance cotas de deseable perfección, es la estabilidad de los Jueces en su destino, por lo menos durante un tiempo suficientemente prolongado como

para poder dirigir con conocimiento de causa la Oficina Judicial e imponerse de las particularidades de los problemas específicos de la demarcación. Otro factor determinante de la buena marcha de un Juzgado, es el de la presencia en él de personal colaborador y auxiliar en número y con preparación suficiente. Pero, desgraciadamente, ni lo uno ni lo otro parece que sea factible por el momento.

Los Fiscales de La Coruña, Badajoz, Gerona, Bilbao, Huesca, Pamplona, San Sebastián, Las Palmas y Vitoria, por no citar sino los que tratan más ampliamente del problema, ofrecen cuadros desoladores del funcionamiento y el estado de los Juzgados de sus respectivas provincias, con permanentes cambios, vacantes, sustituciones, interinidades y comisiones de servicio, de forma que milagro parece que no hayan caído en el caos más absoluto, aunque en algunos ha habido ya que adoptar medidas de emergencia.

En contraste con este panorama de dificultades y agobios, no deja de ser paradógico encontrar organismos judiciales cuya subsistencia constituye un verdadero anacronismo. Como botones de muestra, podemos citar algunos a los que se refiere el Fiscal de Zamora: "Los Juzgados de Instrucción de Puebla de Sanabria, Toro y Villalpando tramitaron, respectivamente, 210, 137 y 114 Previas en el año 1981 y los Juzgados de Distrito de Alcañices y Fuentesauco celebraron, el primero, 69, y, el segundo, 34 juicios de faltas en todo el año. O el de Segovia, que informa que el Juzgado de Instrucción de Sepúlveda dictó 28 sentencias y el de Cuéllar 12. No cabe duda que urge una reestructuración de las demarcaciones judiciales.

Cuestión delicada, a la que también aluden las Memorias, es el de las suspensiones de juicios orales, verdadera lacra, que supone un grave obstáculo para la conclusión rápida del proceso. Se refieren a ello, entre otras, las de Cádiz, Guadalajara y Logroño y sobre todo la de

Madrid, que dedica al tema amplios comentarios. Comienza con una estadística de suspensiones de juicios orales y vistas producidas en el último trimestre del año, que llega a 442 de entre 1.231 señalamientos, es decir, a más del 35 por 100 de éstos, y continúa: "El primer efecto que producen, es la demora que impone en el proceso. La sentencia, fin de éste, no puede pronunciarse y hay que abrir una nueva etapa que se cerrará con un nuevo señalamiento, sin que pueda abrigarse seguridad ni poseer garantías que tengan fiabilidad alguna, de que este segundo intento va a alcanzar el deseado éxito. En esta tremenda espiral pueden irse sucediendo y acumulándose los fracasados intentos, alejándose cada vez más el eventual fallo de los hechos, de la memoria de los testigos, de los intereses de las partes y de la misma oportunidad del pronunciamiento, con efectos que, como veremos más adelante, afectan y dañan a la médula y razón de ser de la propia Institución Judicial. Hay que comenzar de nuevo, hay que citar, convocar, etc., y este trabajo añadido cae sobre abrumadas y desorganizadas Secretarías, que así se ven obligadas a agregar al quehacer ordinario, este otro que ya había hecho. Por consiguiente, los consecuentes efectos de la congestión que se origina con estas suspensiones, han de incidir —creando nueva demoras y trabajo a su vez— en el que ordinariamente desempeñan. Las partes (el Fiscal, los Letrados de la defensa) han preparado la vista, han examinado la causa, leído declaraciones, etc. Trabajo estéril, porque en la remota e imprevisible fecha en que aquélla tenga lugar, resultará inútil, por olvido, el estudio hecho."

Examina más tarde las causas más frecuentes de las suspensiones (incomparecencia de acusados, testigos, letrados, defectos de las citaciones, etc.) y sugiere algunas acertadas medidas para reprimir en lo posible el absentismo, entre las que figura el mejoramiento de los servicios de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, responsable de los traslados de presos, cuya

demora figura entre las motivaciones de las suspensiones de los juicios, aunque hemos de advertir que ello es provocado, más que por defectos de la organización de aquellos servicios, por el sistema de traslados, encomendado a personal ajeno a los servicios penitenciarios, del que no se puede disponer en fecha determinada. Más que reorganizar los servicios de Instituciones Penitenciarias habría, pues, que reformar y coordinar el régimen de traslados.

4. Es interesante hacer mención a las opiniones del Fiscal de Barcelona sobre las causas de las disconformidades de las sentencias de los órganos judiciales en relación con la posición del Fiscal, tema reiteradamente tratado en la generalidad de las Memorias prácticamente desde que comienzan a existir. Dice dicho Fiscal, después de aludir al generalizado criterio de atribuir la disparidad a la benevolencia de los Tribunales: "Pero el problema, así enunciado, merece una mayor atención, buscando la raíz de tales motivaciones, que no es, como podría pensarse, una postura de benevolencia rutinaria con la que se tratara de compensar el rigorismo del Fiscal, que en puridad no existe. En nuestra opinión, la verdadera motivación de las sentencias disconformes debe buscarse en el actual desfase entre la Ley penal y el orden social. El actual Código, pese a las reformas sufridas, resulta insuficiente para enfrentarse con los comportamientos, a todas luces punibles, que las nuevas estructras sociales y económicas propician en un mundo cada vez más dominado por la técnica y abrumado por el utilitarismo materialista que aquélla trae consigo. La nueva delincuencia, especialmente la económica, resulta imperfectamente tipificada, y su complejidad permite escurrirse entre los huecos de la actual casuística penal a los que hábilmente, y contando con medios poderosos, atentan contra el bien común desde el plano económico y financiero, gozando de una posición penal extraordinariamente favorable en relación con los delincuentes

responsables de las figuras delictivas más elementales y tradicionales, que resultan, por contraste, penadas con excesiva dureza. Ante esta situación, de la que son conscientes los Tribunales, tratan de poner remedio, con mejor o peor fortuna, utilizando la equidad, en función correctora, para evitar, dentro de los límites legales, el desequilibrio que en el caso concreto se da, con cierta frecuencia, entre delito y pena. De ahí la degradación del hecho en cuanto a su valoración penal cuando exista el menor portillo abierto a través de la prueba que lo haga posible... Tal utilización de la equidad, siempre peligrosa, exige que se obre con el mayor cuidado y ponderación, huyendo de su uso generalizado para evitar, no sólo la quiebra del legalismo, sino, lo que es peor, la sensación de impunismo y consecuente inseguridad ciudadana." También es destacable el punto de vista del Fiscal de Palencia, que dice: "La celeridad que los procesos van adquiriendo en el ordenamiento procesal penal, es otra de la causas de las disconformidades y de las absoluciones. La Administración de Justicia, montada sobre la base de la celeridad, tiene que intentarse sobre una de estas dos premisas: o bien sobre una proliferación de medios que aseguren una urgente investigación como garantías de acierto, o bien sobre una indudable inseguridad, que se traduce a la hora de la sentencia en la duda y, por tanto, en el tan invocado por las defensas principio "in dubio pro reo"."

5. Entre los muchos factores que contribuyen a las dificultades en que, como hemos visto, se debaten los servicios judiciales, gran número de Fiscales se refieren a la multiplicidad de procedimientos penales existentes, que provoca criterios dispares en su utilización y que significa un serio entorpecimiento en la labor administrativa de Juzgados y Tribunales, y propugnan, casi unánimemente, su reducción a dos, uno para delitos graves, de la competencia de las Audiencias, y otro, más simplificado, para delitos leves, cuyo enjuiciamiento correspon-

dería a los Juzgados; sin que falten ejemplos (como el de Orense) que propugnan la vuelta al tradicional sistema de separación de la instrucción y el fallo como medio para aliviar el trabajo de los Juzgados, incrementado de forma espectacular en los últimos años en beneficio de las Audiencias.

En relación con ello, se ocupan casi todas las Memorias de exponer un juicio crítico sobre los resultados de la aplicación del nuevo procedimiento oral para delitos menos graves y flagrantes establecido por la Ley Orgánica 10/1980, de 11 de noviembre, después de un año de vigencia. Y es curioso observar que las opiniones son diametralmente divergentes, pues mientras unas (Bilbao, Cádiz, Cuenca, Jaén, León, Palencia, Salamanca, Valladolid, Zamora y Zaragoza, entre otras) lo consideran fracasado, o por lo menos perturbador, otras (Badajoz, Guadalajara, Murcia, Pamplona, por citar algunas) lo estiman muy útil y aprovechable.

Las críticas negativas inciden, sin embargo, más bien en las dificultades prácticas de aplicación del nuevo proceso que en la filosofía que lo informa. El acopio precipitado e imperfecto, por escasez de plantillas y medios policiales, de los datos precisos para poder decidir sobre la oportunidad de formular acta de acusación, la dificultad en cumplir los plazos perentorios para ciertos trámites, las suspensiones constantes por falta de comparecencia de inculpados y testigos, entre otras, son las principales tachas que esgrimen los Fiscales para sus quejas sobre la eficacia del procedimiento, aparte de la que supone el incremento de trabajo de los Juzgados y la resistencia de éstos a imponer penas de hasta seis años de privación de libertad con diligencias precarias y con unas garantías de defensa ciertamente disminuidas. Habremos de decir que lo que plantean los Fiscales en sus críticas, es el eterno dilema: Justicia plena de seguridad y garantías, pero tardía, o Justicia rápida, pero insuficiente. La Justicia tardía, es Justicia a me-

dias; la Justicia insegura, no es verdadera Justicia. Conseguir el "dessiderata" de una Justicia certera, eficaz y rápida, es el desafío de nuestro tiempo.

En relación con ello, dice el Fiscal de Bilbao: "La idea que está presente en todas las reformas del proceso penal, sin excluir a la Ley Orgánica 10/1980, de 11 de noviembre, es la "celeridad", la prisa, a la que se sacrifican valores muy estimables en el enjuiciamiento de los delitos." Y añade luego: "Comprendemos las diferencias entre los distintos procesos y que no se puede dedicar el mismo tiempo y atención a un hecho grave que a una infracción menor, pero hasta ciertos límites; la verdad, y consecuentemente la Justicia, debe de imperar en todos los procesos, no importa de qué gravedad o trascendencia. Paradójicamente, frente a una instrucción deficitaria o un proceso que, por su propia normativa, apenas puede contener otra cosa distinta a unas actuaciones policiales, los Juzgados y Tribunales, a veces, como es sabido, los mismos Juzgados que han realizado la instrucción, son inflexibles en el momento de apreciación de la prueba, y, por si fuera poco, la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de julio de 1981 parece conferir un rango superior al principio de presunción de inocencia respecto al principio de libre apreciación de la prueba, que corresponde a los Jueces penales. Esta sentencia descalifica las normas de enjuiciamiento contenidas en el Ley Orgánica 10/1980, de 11 de noviembre, al menos en el estado actual de desarrollo legislativo de los derechos individuales reconocidos en la Constitución y, sobre todo, demanda una investigación penal perfecta para cualquier clase de procesos. Como una consecuencia, pensamos que la norma idónea para conjuntar los distintos sistemas procesales de indagación penal, puede hallarse en el artículo quinto, párrafo tercero, del Estatuto del Ministerio Fiscal de 30 de diciembre de 1981." Para concluir: "Como todas las normas, puede quedar en una simple declaración de principios, relegada poco menos que al olvido

por su falta de utilización, o, poniéndola en práctica, llevar al Ministerio Fiscal a su máxima eficiencia en las fases preliminares, también por la misma razón decisiva, del enjuiciamiento penal. En todo caso, será necesario tener muy en cuenta ese precepto en su desarrollo reglamentario y en la orientación de las nuevas Leyes procesales."

6. Como es natural, las Memorias se extienden con amplitud en todos los aspectos referentes a la naturaleza, funciones y actuación del Ministerio Fiscal y a las circunstancias en que se desenvuelve la vida de las Fiscalías, constituyendo tema de especial consideración el examen crítico del nuevo Estatuto Orgánico de la Institución, aprobado por Ley 50/1981, de 30 de diciembre, que ha sido recibido con casi general complacencia, destacándose el importante avance que, respecto de la normativa anterior, supone el reforzamiento de los principios de legalidad e imparcialidad y la democratización de su gobierno, aunque está extendido el parecer de que, en cierto modo, no se ha llegado a las últimas consecuencias en el aspecto referente a la desvinculación del Ministerio Fiscal del Poder Ejecutivo, no obstante el prácticamente unánime anhelo de la integración, no sólo formal, en el Poder Judicial, con órganos propios y autónomos, y con funciones paralelas y complementarias de las correspondientes al mismo, pero sin subordinación alguna.

Especialmente los Fiscales de Badajoz, Cádiz, Granada, Jaén, Orense, Oviedo, Palencia, Palma, Pontevedra, Salamanca, Sevilla y Toledo dedican amplios espacios al estudio de tan apasionante tema, pero ante la imposibilidad de recoger aquí todos sus comentarios, opiniones y sugerencias, transcribiremos solamente ciertos párrafos de algunas de las Memorias.

Así, el Fiscal de Badajoz dice: "Creemos, de todos modos, con la mayoría de la Carrera Fiscal, que de las dos concepciones bajo las que últimamente se contempla

el Ministerio Fiscal, y que han dado en llamarse judicialista y gubernativa, es la primera de ellas la que responde a nuestros deseos y aspiraciones. Efectivamente, casi todos, por no decir todos, los miembros de nuestra Carrera, han tenido por meta en sus aspiraciones, configurar el Ministerio Fiscal formando parte integrante del Poder Judicial, que acogería en su seno un poder postulante, el Fiscal, y un poder decisorio, el Organo Jurisdiccional. Uno y otro sirviendo a los mismos fines, razón por la cual el Ministerio Fiscal debería estar dotado de organización, medios y garantías paralelas a las que se conceden a los Jueces; y si éstos son independientes en sus funciones y sólo están sometidos a la Ley, lo mismo habría de predicarse de los Fiscales." Y más tarde agrega: "Pero cuando en la propia Constitución no se señala entre los miembros del Consejo General del Poder Judicial al Ministerio Fiscal, o cuando se prevé para el Ministerio Fiscal que una Ley especial regulará su Estatuto Orgánico, distinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, o que el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, la única conclusión clara que se extrae es la de que se había dejado de lado esa concepción "judicialista", tan grata a la Carrera Fiscal, y que se ha seguido una concepción de matiz gubernativo, con algunas peculiaridades que le dan un carácter "sui géneris", pero sin llegar a una concepción mixta, que, de otra parte, no es posible." Para concluir luego: "Pero ha de reconocerse que el Estatuto introduce peculiaridades importantes que responden al espíritu de independencia respecto del Ejecutivo y acerca a esa idea de judicialización tan deseada. Cierto que existe esa vinculación sobre el Poder Ejecutivo, pero que tiene unos mecanismos correctores que atenúan la dependencia, como son que el Fiscal General del Estado ha de oír a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo antes de resolver sobre la viabilidad o procedencia de las peticiones del Gobierno, y expondrá a éste su resolución de

forma razonada, rechazando las peticiones que considere improcedentes; y que igualmente los informes y acuerdos de dicha Junta de Fiscales de Sala, como los de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo y los del Consejo Fiscal, atemperarán de hecho las decisiones del Fiscal General del Estado."

El de Granada comenta, por su parte: "Año importante ha sido el pasado en la historia del Ministerio Fiscal. Con la promulgación de su nuevo Estatuto Orgánico, ha consumado la ardua tarea de elevarlo a Institución del Estado, con mayor desvinculación del Ejecutivo, robusteciendo su independencia, con potenciación de sus principios de legalidad e imparcialidad. Se han ampliado sus funciones, se ha mejorado su eficacia, se ha aumentado la participación corporativa de sus miembros en cuestiones de importancia y, en suma, se ha elevado el nivel de su rango entre las Instituciones del Estado."

Dice el de Jaén: "Pensamos que el nuevo Estatuto no habrá podido dejar satisfechos a muchos miembros y hasta "sectores" de la Carrera, pero parece indudable el cambio operado en las líneas maestras del mismo. Cualquiera que sea la opinión que de él tengamos, no podrá negarse que, dentro de sí, permite el juego de los principios democráticos en muchos aspectos hasta ahora desconocidos, sin duda por la partida de nacimiento del viejo Estatuto. No cabe negar que los estamentos superiores de la Institución se verán constreñidos en muchas de sus decisiones por la necesidad de someterse a unas opiniones y pareceres que pueden ser distintos de los que tenga la Fiscalía General del Estado."

El de Orense hace un estudio muy extenso sobre la naturaleza y funciones del Ministerio Fiscal a la luz de la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Estatuto Orgánico y los Estatutos de Autonomía, para llegar a la conclusión de que, conforme a la legalidad vigente, no ofrece dudas el carácter del Fiscal como par-

tícipe del Poder Judicial con funciones propias y específicas, y propone la siguiente fórmula para el futuro Reglamento: "El Ministerio Fiscal, partícipe del Poder Judicial por mandato constitucional, en el que tiene encomendadas principalmente las funciones de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad..., ejerce tales funciones por medio de órganos propios bajo la dependencia del Fiscal General del Estado, el que actúa en nombre de Su Majestad el Rey, de quien depende."

Por su parte, establece el de Palencia: "Cuando la disposición del artículo segundo del Estatuto dice que "el Ministerio Fiscal está integrado en el Poder Judicial", está diciendo que el Poder Judicial no lo es todo sin el Ministerio Fiscal, o, lo que es lo mismo, que el Ministerio Fiscal es la pieza que le falta al Poder Judicial para ser un real Poder pleno, tal como lo quiere configurar la Contitución. Lo contrario sería una incoherencia de las leyes entre sí." Y agrega después: "La integración, ya se ha dicho, no priva de autonomía al Ministerio Fiscal, lo que quiere decir que éste, "en el marco del Poder Judicial", funciona con independencia de él, y este principio de autonomía se deriva de lo antedicho, porque el Poder Judicial, independiente, pero inerme, encuentra su defensa en un órgano autónomo que vela para que los Jueces y Tribunales ejerciten, sin ingerencias, las funciones que las Leyes les atribuyen. Mal podía salvaguardar esa independencia judicial un órgano incardinado a su vez con dependencia dentro del propio Poder Judicial."

Y el Fiscal de Palma, en una interesante separata de la Memoria, se extiende sobre el nuevo Estatuto, las características de la reforma, la naturaleza del Ministerio Fiscal, sus funciones y facultades, y su organización, perteneciendo a su trabajo el siguiente párrafo: "La Constitución española de 1978 y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 1981, que la desarrolla en

relación con nuestro Instituto, optan por el sistema de la judicialidad, concibiéndose al Ministerio Fiscal como un órgano constitucional del Estado (art. 124 de la Constitución) "integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial" (art. 2.º, 1, del Estatuto), sin perjuicio de promover ante los Tribunales, a excitación del Gobierno, las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público (art. 8, 1, del Estatuto). Con este criterio legal culmina la evolución perfectiva, tendente a una mayor judicialidad e independencia del Ministerio Fiscal que se inició con el Estatuto de 1926 ..."

Se ocupan también algunos Fiscales del problema de los límites de las funciones del Ministerio Fiscal, con la idea de no convertir la Institución en una especie de "cajón de sastre", "recabando —como dice el Fiscal de Oviedo— su intervención para "casi todo", en tanto en cuanto haga acto de presencia algo que pueda entenderse como "interés público", "interés social" o "defensa de la legalidad". Para mi particular criterio, entiendo de mayor acierto limitar tal intervención a aquellos supuestos en que el interés público o "la legalidad", como particular manifestación del mismo, aparezca ocupando un lugar preeminente y no difuminado tras intereses particulares, en los que, al estar amparados por el Derecho, siempre cabrá apreciar un interés social más o menos notorio en su consecución y respeto. En todo caso, tanto en uno como en otro supuesto, parece racional que la atribución de facultades vaya acompañada del consiguiente otorgamiento de medios, que hagan posible la efectiva y eficaz intervención del Ministerio Fiscal, evitando que vaya a convertirse en una rémora estrictamente formal, razón que ya de por sí sería suficiente para limitar a términos razonables los supuestos de intervención del Ministerio Fiscal."

A este problema de los medios de actuación se refiere, entre otros, el Fiscal de Sevilla en estos términos: "Pero el desarrollo de las posibilidades legales que el Ministe-

rio Fiscal tiene ya legalmente atribuidas en nuestra Patria; ese perfeccionamiento de su cometido y esa ampliación —que ya se postula— de las funciones que al Ministerio Fiscal competen, sólo deben serle atribuidas, cuando al mismo tiempo, es decir, en el mismo instante de su asignación, le sean concedidos los elementos personales y los medios materiales necesarios, para hacer factible, en forma adecuada y con la rapidez necesaria, el cumplimiento de sus funciones, y además que para tal cumplimiento no le sean puestas cortapisas ni condicionamientos, que sólo pueden ser debidos a desconfianzas o envidias. Si así no se hiciera, el desarrollo o la ampliación del campo de nuestras funciones, sólo daría lugar al fracaso más rotundo, y al fracasar nosotros, fracasaría también, indudablemente, la Administración de Justicia."

En general, comentan los Fiscales con complacencia el clima en que se desenvolvió la reunión de Fiscales Jefes que tuvo lugar en Logroño a finales de noviembre del pasado año, en la que se pasó revista a toda la problemática de la Institución a la luz del nuevo Estatuto Orgánico, confiando, en que, del cambio de opiniones y pareceres, surjan las pautas oportunas para que en el desarrollo reglamentario en preparación se resuelvan, en lo posible, todas las cuestiones que afectan a la organización y actuación de nuestro Ministerio, para las que será imprescindible el apoyo moral y económico de la Administración, si realmente se pretende potenciar su intervención como defensor del interés público y social.

7. Como es natural, también tratan los Fiscales de los numerosos problemas que la sucesiva creación de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de Familia y de Distrito, plantea para la ordenada actuación de las Fiscalías, no sólo en cuanto supone considerable aumento de trabajo, sino también por lo que representa para la distribución de los servicios y especialmente para la asistencia a los juicios y vistas en los distintos órganos judi-

ciales, que obliga a una permanente y masiva intervención, en ocasiones imposible por la simultaneidad de los señalamientos, habida cuenta lo reducido de las plantillas y la existencia de vacantes, que sólo podrá paliarse en parte con el incremento de aquéllas y con el reclutamiento de personal idóneo a través de oposiciones, agilizando entretanto la política de nombramiento de sustitutos para las Agrupaciones de Fiscalías en los Juzgados de Distrito. En este sentido, el Fiscal de Guadalajara explica: "Así, pues, desde noviembre del año 1980, en toda la provincia sólo han existido dos funcionarios fiscales, el que suscribe y el Fiscal de Distrito citado. El problema se encuentra, como siempre, en aquellos supuestos en los que se produce simultaneidad de señalamientos. Hemos conseguido de los señores Jueces una cierta armonización y acuerdo en cuanto a los señalamientos de juicios de faltas, diligencias preparatorias y diligencias de procedimiento oral. Pero el conflicto surge cuando existen además señalamientos en pruebas o vistas de separación, divorcio o nulidades. La protección de los intereses de los menores, que la Ley confía al Fiscal, no puede ser atendida correctamente en estos supuestos de señalamientos sincrónicos. El Fiscal carece del don de la ubicuidad." Y más adelante: "La impotencia a que se ve sometido el Fiscal se incrementa cuando se trata de diligencias penales, como reconstitución de hechos, declaraciones, etc., en las que su intervención sería valiosa. Y esto sin contar con otras asistencias, atenciones al despacho ordinario, visitas, etc."

Sobre la integración de los antiguos Fiscales de Distrito en la Carrera Fiscal y la asunción por los mismos de nuevas atribuciones y responsabilidades, se extienden asimismo las Memorias, aludiendo al necesario período de aprendizaje y adaptación y a las dificultades que se van a encontrar para la ubicación de los nuevos Abogados Fiscales en los locales, generalmente reducidos, que ocupan las Fiscalías. El Fiscal de Zamora, por

ejemplo, dice: "Por lo que hace a esta Fiscalía, el Fiscal que suscribe cree necesario, para lograr una total integración de los funcionarios de este territorio, un largo período previo de auténtico Magisterio, y ello, como es lógico, restará tiempo para otras funciones. Dichos Fiscales, anquilosados por los años en el despacho rutinario de expedientes de juicios de faltas, aceptan malamente la integración en la Carrera, por lo que se refiere al cambio y aumento de trabajo, pero esperamos que en un período no muy largo obtendrán la experiencia suficiente y conocimientos para poder desempeñar su nueva misión. El mayor problema que estimamos puede surgir es el de esta fase intermedia, en la que se ven obligados a asistir no sólo a las nuevas causas por delito, sino a continuar interviniendo en los juicios de faltas hasta tanto no se decida en la Ley su no intervención en estos procedimientos."

8. Muchos otros aspectos heterogéneos de la actuación fiscal son tratados en las Memorias, sin que sea posible recogerlos todos y, mucho menos, tratarlos con amplitud.

Gran parte de ellas comentan la escasez de personal auxiliar y subalterno que sufren, lo que repercute en la buena marcha de los servicios (Tarragona, Madrid, Badajoz, Cádiz y Sevilla), del agobio que supone tener que dedicar buena parte de su actividad a la vigilancia del desarrollo de las ejecutorias ante la pasividad de Salas y Secretarías (Córdoba), del deficiente estado de las instalaciones de las oficinas administrativas y de la necesidad de introducir sistemas de racionalización del trabajo (Tenerife), de los problemas de distribución de las Agrupaciones de Fiscalías ante los Juzgados de Distrito (Jaén), de las dificultades de traslado para celebrar juicios y vistas en Juzgados alejados de la sede de las Fiscalías (León, Teruel), de la soledad en que desarrollan su trabajo los Fiscales Jefes, sin posibilidad de ayuda ni de contraste de opiniones con otros compañe-

ros (Palma, Huesca, Lugo), de la necesidad de especialización de la Fiscalía en relación con el tratamiento de los problemas de los menores (Zaragoza), de la conveniencia del establecimiento de un Cuerpo de Peritos Forenses (Badajoz), etc., etc.

9. Dedican también los Fiscales comentarios y sugerencias en relación con problemas organizativos, de reforma de preceptos legales, de aplicación de recientes disposiciones, especialmente en materia de Derecho de Familia, y de cuestiones difíciles que se les han planteado en su quehacer diario. Mencionaremos sólo algunos de ellos.

El Fiscal de Madrid emplea amplio espacio a plantear la necesidad de que las grandes Fiscalías dispongan de un armazón orgánico adecuado para superar la plana estructura actual, formándose equipos de Fiscales, bajo la jefatura y dirección de los más idóneos, que asumieran la responsabilidad de sectores de trabajo, descargando a la jefatura de tantas obligaciones como hoy pesan sobre ella, sin perjuicio de continuar ejerciendo la dirección de la labor conjunta y de examinar aquellas cuestiones que, por su gravedad e importancia, lo merecieran, tema que convendría tener en cuenta a la hora del desarrollo reglamentario del Estatuto. También hace un detallado examen de la aplicación de la Ley de 7 de julio de 1981, comentando los problemas que ha traído consigo en materias de competencia, emplazamientos, allanamiento a la demanda, causas de separación, tramitación, divorcio por mutuo consenso, alimentos y culpabilidad, etc.; y trata en otro apartado de la ejecución de sentencias canónicas de separación y nulidad, estudiando con profundidad si los efectos civiles de las mismas han de ser los previstos en el artículo 73 de la antigua redacción del Código Civivl o, por el contrario, los de los artículos 90 y siguientes, redactados conforme a la Ley antes citada. Asimismo contiene la Memoria un extenso estudio sobre los delitos de prensa e imprenta,

con especial alusión a los problemas legales, penales y procesales que comporta la profusa normativa existente.

Sobre este mismo problema de la ejecución de las sentencias canónicas de nulidad matrimonial, el Fiscal de Sevilla alude a una interesante Consulta que en su día elevó a la Fiscalía General del Estado, cuya resolución se publica en el correspondiente anexo de esta Memoria, en relación con la interpretación que debía darse a lo dispuesto en el artículo 80 del Código Civil y la Disposición Adicional 2.ª de la Ley 30/1980 para cumplimiento del artículo VI del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, publicado en el *Boletín Oficial del Estado* de 15 de diciembre de 1979, si debiera prevalecer la de que podrán declararse sólo ajustadas al Derecho del Estado las sentencias que decreten la nulidad cuando la causa de nulidad coincida o pueda entenderse incluida o subsumirse en algunas de las causas mencionadas en el artículo 73 del Código Civil, o la que señala que el Juez civil deberá examinar únicamente los aspectos formales que menciona el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de modo que, cumplidos éstos, deberá declararse ajustada al Derecho del Estado la sentencia canónica, cualquiera que sea la causa en que se funde.

El Fiscal de Lérida, aparte de dedicar un extenso comentario a las particularidades de la intervención del Ministerio Fiscal en los procesos relativos a separación, nulidad y divorcio matrimoniales, y a la ejecución de sentencias canónicas sobre la materia, hace un minucioso estudio sobre la intervención en el proceso penal de las Compañías Aseguradoras de riesgos derivados de la circulación de vehículos de motor, y otro sobre la declaración de incapacidad a que se refiere el artículo 213 y siguientes del Código Civil y el procedimiento para obtenerla; y en una extensa separata de la Memoria, desarrolla el tema de: "Constitución y Principio de Legalidad, Jueces y Tribunales y Actividad del Ministerio Fis-

cal. Referencia al Defensor del Pueblo"; todo lo cual es una palpable demostración de la vocación y entusiasmo por su trabajo de aquel Fiscal.

Debemos citar también al Fiscal de Palma, que ofrece dos separatas a su Memoria, una dedicada al comentario del nuevo Estatuto Orgánico, ya citado anteriormente, y otra a las formas y la impugnabilidad de las resoluciones del Juez de Vigilancia, ambas de indudable interés.

Y, por último, al de Las Palmas, que acompaña a la Memoria otra separata sobre ciertos problemas de la persecución penal del delito de expedición de cheques en descubierto.

10. No es posible entrar a detallar y comentar el sinnúmero de asuntos de especial gravedad y trascendencia, iniciados durante 1981, en que las Fiscalías han intervenido, que han obligado a los Fiscales a una especialísima dedicación y que en la estadística de asuntos despachados son sólo una cifra fría e impersonal. Aparte de numerosos hechos de sangre, con ribetes de brutalidad y ensañamiento, y de atracos a mano armada, con graves consecuencias, podemos citar el sumario sobre las intoxicaciones producidas por la ingestión de aceite de colza (Audiencia Nacional, Segovia, San Sebastián, etcétera), muerte violenta de tres personas por fuerzas de Orden Público (Almería), atraco al Banco Central (Barcelona), coacciones y detención ilegal en la explotación minera de "Crimidesa" (Burgos), intervención de 2.500 kilogramos de "hachís" con supuesta confabulación con agentes de la Autoridad (Gerona), accidente ferroviario con once muertos y numerosos heridos (Huesca), fabricación de embutidos con carne emponzoñada (Lérida), fuga espectacular de un preso (Palencia), ocupación de cinco kilos de cacaína importada de Colombia (Las Palmas), muerte violenta con ocasión de una manifestación ecologista (Pamplona), asesinato cometido por banda de "maflosos" (Salamanca), robo de obras artís-

ticas (Zamora) y tantos otros asuntos de muy diverso carácter que resulta materialmente imposible resumir aquí, pero que han supuesto trabajo, reflexión y estudio intensos.

11. El último de los grandes capítulos a que se refieren las Memorias, es el del examen del funcionamiento de los establecimientos penitenciarios y, en general, del estudio sobre las vicisitudes en el cumplimiento de las condenas, aspectos a los que dedican extensos y atinados comentarios.

En relación con los Depósitos Municipales, los Fiscales de Albacete, Murcia y Palma, entre otros, aluden al pésimo estado de la mayoría, sin las adecuadas condiciones de higiene y seguridad, algunos de ellos en situación infrahumana, preguntándose cómo en dicho estado pueden servir para el cumplimiento de los arrestos de fin de semana, previstos en el Proyecto de Código Penal.

Por lo que se refiere a los Establecimientos de Detención o Cumplimiento, y, salvo los casos de aquellos de nueva contrucción o de reforma importante en los últimos años (Ciudad Real, Lugo, Valladolid), en que las instalaciones son aceptables e incluso excelentes, la mayoría de los Fiscales se refieren con alarma a las condiciones en que se desarrolla la vida de la población reclusa, por un lado, por el en ocasiones deplorable estado de los edificios e instalaciones, bien por su vejez, bien por las destrucciones producidas en años pasados a consecuencia de motines, bien por el mal uso que los internos hacen de los servicios y efectos, y, por otro, por la masificación y hacinamiento, secuelas del incremento numérico de los internados, que llega a alcanzar el doble y aun el triple de las plazas previstas, según la capacidad de los Establecimientos.

Tales circunstancias traen consigo, como ya se destaca en otro lugar de esta Memoria y confirman los Fiscales en las suyas, la dificultad, por no decir la imposibilidad, de establecer las medidas de régimen interior

previstas en la Ley Orgánica y Reglamento Penitenciario en orden a establecer las debidas separaciones entre jóvenes y adultos, preventivos y penados, normales y difíciles, etc., y contribuyen a que la vida en los Establecimientos se desenvuelva en un clima de roces y violencias, con agresiones mutuas, abusos deshonestos, ataques a funcionarios, plantes, huelgas de hambre, etc.

La ubicación de muchas prisiones en el interior de las poblaciones, aparte de provocar espectáculos poco agradables para la vida comunitaria, dificulta la debida vigilancia exterior y facilita el envío al recinto, por encima de las tapias, de toda clase de objetos, entre los que no son infrecuentes pequeños paquetes conteniendo drogas e incluso armas.

Si a ello se añade la escasez de funcionarios precisos para la correcta realización de los servicios y la penuria de talleres y centros de trabajo, indispensables para mantener en actividad rehabilitadora a los reclusos, tenemos una visión panorámica de la difícil situación en que se encuentra una parte considerable de los centros penitenciarios españoles, resumen de lo que explican los Fiscales en sus Memorias, pudiéndose citar, entre otras, las de Barcelona, Madrid, Burgos, Cádiz, Cuenca, Huelva, Jaén, Tenerife, Teruel, Logroño, Málaga, Palma de Mallorca y Las Palmas.

Por su concreción y contundencia citaremos tan sólo ciertos párrafos de las Memorias de Huelva y de Barcelona, que confirman lo hasta aquí resumido. Dice el primero: "Ello quiere decir que, también aquí, se camina hacia ese progresivo deterioro de la vida penitenciaria, que ha convertido ya, a algunos establecimientos, en puros almacenes de carne humana, de los que resulta verdaderamente milagroso que salga alguna persona no absoluta e irremediablemente degradada. Posiblemente el Centro de Huelva no ha franqueado todavía el umbral de esa situación límite, a partir del cual lo único que puede hacerse es cerrar los ojos —por cobarde que pa-

rezca el recurso—, antes de enviar un ser humano a la cárcel, pero ya se advierte con toda claridad, en las primeras palabras que se cambian con los funcionarios, que el único aspecto del internamiento que les preocupa —por ser el único que se puede medianamente controlar— es el de la disciplina. Cuando se les habla, aun tímidamente, del tratamiento de los reclusos, no pueden reprimir una sonrisa ante lo que, sin duda, consideran una expresión de ingenuidad. Y ello es gravísimo. Tenemos una ejemplar Ley Penitenciaria y un cuidadoso Reglamento que, lisa y llanamente, no se pueden aplicar en un buen número de establecimientos por imposibilidad física. No permiten su aplicación el hacinamiento y promiscuidad en que viven los reclusos, el número de funcionarios, la escasa preparación y especialización de algunos de ellos, la ausencia de una estructura colectiva de trabajo seriamente organizada, la pobreza o inexistencia de un servicio de asistencia social, la vetustez y disfuncionalidad de los edificios, etc. Por eso sorprende y escandaliza oír cómo muchos de nuestros compañeros —tanto Fiscales como Jueces— protestan cuando se habla de inversiones públicas en establecimientos penitenciarios. Porque si reprobable, por inhumano y farisaico, es el habitual desentendimiento de la sociedad por lo que sucede tras los muros de las cárceles —como si lo único que la importase es que fuesen bien altos y seguros—, absolutamente injustificable es que nosotros incurramos en análoga actitud. Y, desgraciadamente, no es del todo insólito que lo hagamos. Avivar entre los miembros del Ministerio Fiscal la más aguda conciencia sobre los problemas penitenciarios de nuestro país, no es, desde luego, una necesidad secundaria, sino urgente. E insistir cerca del Poder Ejecutivo en la prioridad y racional planeamiento de estas inversiones, también."

Por su parte, el de Barcelona dice: "Pero creemos que deben hacerse algunas anotaciones que, como las ante-

riores, siguen demostrando palpablemente que en la Cárcel Modelo no se cumplen ni la Ley General Penitenciaria ni el propio Reglamento y que la corrección de esta situación es un objetivo inaplazable de la reforma penitenciaria. Basta recordar que el conjunto de funcionarios de prisiones de la Cárcel Modelo —uno por cada cien reclusos— es totalmente insuficiente para afrontar, tanto las funciones de vigilancia, como cualquier actividad inspirada en los objetivos reeducadores que deben presidir su actuación. Y a ello se une la incapacidad material del Centro para cubrir mínimamente las condiciones de una convivencia que asegure el respeto a la dignidad humana, la salud y la satisfacción de las más elementales y justas aspiraciones de los reclusos. Así resulta con toda claridad de los propios informes del Centro Penitenciario de Detención de Hombres, que hace constar la insuficiencia de medios para garantizar el control del Centro —como aparatos de megafonía o sistemas de apertura electrónica de los rastrillos—, así como la *constante degradación de las instalaciones,* que afecta tanto a la falta de higiene, como a un crecimiento de las enfermedades epidemiológicas de los internos, como hepatitis víricas, enfermedades venéreas y tuberculosis, que creció en un 25 por 100, como a la imposición de una *vida regimental,* que prima, en todo caso, sobre el tratamiento individualizado de los reclusos (como son la falta de comedores de los reclusos, que se ven obligados a comer en las celdas, donde llegan a habitar hasta seis internos, o la falta de locutorios que garanticen una comunicación humanizada, o la ausencia de locales dignos para una comunicación íntima, que debe realizarse en condiciones degradantes, etc.). Todo ello, junto a los problemas propios de una gran concentración humana, conduce directamente a la creación de un clima de agresividad constante que se traduce en agresiones, autolesiones y un fuerte incremento de las infracciones disciplinarias, que, además de colocar a todos los internos

en una permanente situación de riesgo, perjudica su futuro penitenciario."

En cumplimiento de las instrucciones recibidas de esta Fiscalía General, los Fiscales de las Audiencias extreman la inspección y control de la situación de los presos preventivos para evitar innecesarias prolongaciones del internamiento de los que se encuentran en dicha situación, y en las Memorias recogen la actividad desplegada en tal sentido. El Fiscal de Madrid, por ejemplo, se refiere a ello en estos términos: "La lentitud que desde hace años se viene observando por parte de nuestros Tribunales en la celebración de los juicios orales, en las causas con presos preventivos —aunque el problema se extiende igualmente a los sumarios en que los procesados se encuentran en libertad—, ha venido dañando la imagen de la Justicia, producido numerosas protestas, procedentes de amplios sectores de la sociedad, y denunciado en los diferentes medios de comunicación social. Siendo pieza básica en el funcionamiento de la Administración de Justicia, no podía dejar de ser sensible al tema el Ministerio Fiscal y de ahí que la Fiscalía General del Estado, ante la magnitud del problema —alarmante en muchos casos—, decidiera el nombramiento de un Fiscal Coordinador en la Audiencia de Madrid con el fin de tratar de conseguir, bajo la inspección directa de esa Jefatura, una mayor celeridad en la celebración de los juicios y crear un sistema de control efectivo de las causas en que los procesados se encuentran preventivamente privados de libertad. Igualmente, teniendo como obligación el Ministerio Fiscal efectuar visitas periódicas a los establecimientos penitenciarios (Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y Estatuto Orgánico), se ha encomendado al Fiscal Coordinador la misión de llevar a cabo tales visitas, con independencia de las que gira la Audiencia Provincial, acompañada de una representación fiscal, y que en la práctica se ha convertido en algo más bien

simbólico que efectivo, debido precisamente a su falta de periodicidad. Con la mayor honestidad ha de decirse que un control real de las causas con preso no existía hasta el presente en la Fiscalía. Si a ello se añade que, salvo una Sección de la Audiencia, ninguna lleva libros de presos, fácilmente puede deducirse que tal control no existía ni por parte de nuestro Ministerio ni de los Tribunales. De ahí la necesidad de esa coordinación para conseguir la finalidad propuesta."

Otro tema estudiado en las Memorias es el de la nueva figura del Juez de Vigilancia, y al que se refieren en especial las Fiscalías de Cádiz, Huesca, Jaén, Lérida, Orense y Palma de Mallorca, y sobre cuya eficacia, por lo menos en la forma en que está concebido, hay contradictorias opiniones. Parece ser que en ciertos territorios existen bastantes dificultades e inconvenientes para el desempeño de su misión. En algunas provincias (Cádiz), las deficiencias radican en la enorme dispersión de su competencia, que le imposibilita cubrir con eficacia y prontitud todas las incidencias que surgen para atender a una extensa población reclusa correspondiente a Centros penitenciarios múltiples y alejados geográficamente de su sede. Para otros (Jaén, Huesca), en la inercia de la situación anterior, que conlleva el que algunos establecimientos desconozcan más o menos su existencia y prescindan de él para numerosos trámites de ejecución de las sentencias. Por su parte, el Fiscal de Lérida, y con más extensión el de Palma, examinan la naturaleza de la Institución, con funciones mixtas jurídico-penales y jurídico-administrativas, que sería necesario precisar en orden a los recursos que pudieran plantearse contra sus resoluciones, tal como ya hemos señalado en el capítulo de esta Memoria dedicado al tema.

Por último, y para concluir este repaso, forzosamente escueto, de las Memorias de los Fiscales, conviene resaltar la preocupación que expresan algunas Memorias

(Cádiz, Huelva, Las Palmas, entre otras) sobre el problema de las detenciones prolongadas de extranjeros cuya expulsión está en trámite o se halla acordada por la Dirección de Seguridad del Estado en virtud del Decreto 522/1974, que puede estimarse en conflicto con ciertos preceptos constitucionales, propugnando por que se aborde y resuelva cuanto antes la cuestión, como se propone también por esta Fiscalía General del Estado en el correspondiente lugar de esta Memoria.

Muchos otros comentarios contienen las Memorias respecto a instituciones, como la condena condicional, la libertad condicional, indultos, redención de penas por el trabajo, etc., todos ellos de indudable interés y oportunidad, que será preciso tener en cuenta en la presente fase de reformas penales y procesales.

# CONSULTAS

## CONSULTA NUM. 1/1981

## LA RESPONSABILIDAD DEL AGENTE PROVOCADOR

EXCMOS E ILTMOS. SRES.:

Se ha recibido en esta Fiscalía General del Estado consulta de V. I. derivada del contenido de un sumario que se instruye por delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de estupefacientes. El objeto de su consulta lo centra en una alternativa que consiste, bien en comprender la conducta de determinados miembros de la Policía Judicial en la figura del agente provocador impune, o bien en precisar si la actividad desarrollada se integra en la estructura típica del artículo 344 del Código Penal, delito del que responderían en concepto de autores.

En dos órdenes distintos se analiza el tema: en el general de los presupuestos de la figura del agente provocador y en el particular de los hechos dados.

*A)* La inducción, aun la indirecta, se concreta siempre en el hecho de instigar a cometer un delito determinado en el futuro y está mediatizada por un delito que subsigue cuya causa se halla en el consejo eficaz. Si al tiempo de la inducción el delito ya se había cometido o si el inducido había decidido, *ex libera voluntas,* perpetrarlo, la conducta del inductor es impune. De igual modo, la provocación a delinquir aparece como incitación *ante delictum,* con lo que no se originará la provocación punible en los supuestos de incitación *ex post.* La solución es distinta cuando a la provocación sigue la ejecución (art. 4.°, párrafo tercero, del Código Penal).

Mas tratándose no de provocación a delinquir en el futuro, sino de un delito directamente derivado de la conducta actual del provocador, la irresponsabilidad del provocado por hechos ejecutados merced a la actividad desplegada por un agente provocador, es admitida y tiene un doble fundamento: estimar que el error sufrido por el ejecutor material elimina la voluntariedad del acto o entender que se trataría de un supuesto de tentativa inidónea, delito putativo o delito aparente; tal impunidad abarcaría también la conducta del provocador (Sentencias de 26-VI-1950, 27-VI-1967).

Sin embargo, no se sujetan a este tratamiento, con lo que hay responsabilidad para el provocado, aquellos casos en que la provocación vaya encaminada a descubrir delitos ya cometidos (Sentencias de 18-IV-1972, 20-II-1973, 18-IV-1975, 14-VI-1975), sobre todo cuando se trate de infracciones de tracto sucesivo, naturaleza que debe asignarse al tráfico de estupefacientes, y el agente provocador es un funcionario de la Policía Judicial, que, simulando ser comprador, persigue en realidad averiguar los canales a través de los cuales se venía difundiendo la droga por vastas organizaciones. Esta doctrina es, por lo demás, aplicable, como dice la Sentencia de 18-IV-1975, a aquellos supuestos que, no por presentar perfiles de más modesto alcance, dejan de ofrecer igual persistencia en la conducta y consiguiente peligrosidad para la salud pública. Además, la conducta del provocado es sancionable en todo caso si se obtiene la convicción de que el supuestamente provocado era un *omnimodo facturus*, es decir, estaba ya resuelto a cometer el delito , manifestándose así la provocación como gratuita (Sentencia de 14-VI-1975). Es claro, pues, que instar la venta de estupefacientes (delito provocado) aparentando miembros de la Policía Judicial, su compra, a quien está en posesión de ellos, es acción impune para el agente provocador por razón de conducta justificada, y acción punible para el provocado porque el delito se

hallaba ya consumado antes de la provocación en otra modalidad delictiva (tenencia para transmitir).

*B)* En particular, los hechos fundamento de la Consulta presentan dos cuestiones distintas.

*a)* Una se halla, desde luego, dentro de los límites de la verdadera figura del agente provocador y conduce a proclamar la impunidad de su conducta.

Nos referimos a los hechos materializados en la *provocación de la venta* de estupefacientes por quienes están en posesión de los mismos. En efecto, si se aparenta la adquisición de aquellos productos determinando en el provocado su entrega o su disposición a transmitirlos, tal conducta es impune para el provocador, pues el provocado no sólo había resuelto cometer un delito, sino que éste se había consumado en uno de los subtipos (es delictiva la tenencia cualificada por eventuales actos de tráfico) y el fin perseguido por el provocador es el descubrimiento de la actividad delictiva, independientemente de que con este acto puedan aclararse otros (el origen de los canales de distribución). Lo mismo cabe decir de la intervención de quien colabora con el provocador realizando materialmente los actos conducentes al descubrimiento.

*b)* El otro tema que late en la Consulta, al menos parcialmente, se halla fuera del radio de la figura penal del agente provocador impune y se conforma con la estructura delictiva que define y sanciona el artículo 344 del Código Penal. En esta hipótesis, los hechos a valorar son indicativos de que ya no se trata de simular la compra de estupefacientes, sino de *ofrecerlos* en venta por quien actúa en nombre del agente provocador para su entrega al consumidor o al traficante. Y la cuestión, tal como se narra en la Consulta, presenta a su vez dos variantes. Una es la de la oferta de venta sin más finalidad que la de individualizar a posibles delincuentes. Otra, la de oferta de venta real de drogas con el fin de transmitirlas mediante precio del que se beneficiarían

los agentes de la Policía Judicial. En el primero de estos supuestos es, si se quiere, dudoso que la conducta desarrollada por el agente provocador y sus colaboradores sea impune, porque de modo directo con ella no se origina siempre el descubrimiento de un delito (no es, sin más, acción delictiva el hecho de adquirir estupefacientes, pues el comprador puede no perseguir otra finalidad que su propio consumo). En el segundo, es manifiesto que se dan todos los requisitos de un comportamiento penal típico, bien porque media tenencia en los provocadores con vocación de tráfico o porque se han consumado actos de tráfico efectivo.

El presupuesto de hecho sobre el que se construye la Consulta no cuenta con más apoyatura que las manifestaciones del eventual colaborador de quienes pueden ser configurados como agentes provocadores; declaraciones que, por lo demás, son realmente antitéticas con las de éstos. Por ello, si como V. I. dice, los hechos expuestos son por ahora únicamente indiciarios y a efectos de Consulta, sin perjuicio de lo que resulte de ulteriores diligencias, también la contestación con base en aquellos hechos se desenvuelve en un plano puramente provisional y virtualmente teórico. Y si en la continuación de la investigación resultaren confirmados los indicios existentes de criminalidad a través de elementos probatorios de otra naturaleza o de intensidad mayor, es claro que se desencadenaría la responsabilidad en concepto de autor, pues habrían desaparecido los presupuestos objetivos y subjetivos condicionantes de la figura jurídico-penal del agente provocador impune.

Dios guarde a V. E. y a V. I. muchos años.

Madrid, 10 de julio de de 1981.

Excmos. e Iltmos. Sres. Fiscales de las Audiencias Territoriales y Provinciales.

## CONSULTA NUM. 2/1981

## EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO FISCAL EN LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA

EXCMOS E ILTMOS. SRES.:

Se ha recibido en esta Fiscalía General del Estado Consulta del Fiscal de Málaga, en la que plantea la siguiente cuestión: si le han de corresponder en exclusividad las funciones propias de nuestro Ministerio ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, creado en aquella capital por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, de 9 de julio de 1981 *(Boletín Oficial del Estado* del 22 de julio de 1981), o si, por el contrario, al extenderse la jurisdicción de aquel Juzgado a los establecimientos penitenciarios sitos en las cuatro provincias del territorio de la Audiencia Territorial, deberán ejercerse dichas funciones por cada una de las Fiscalías del territorio y, más concretamente, por la de la Audiencia que hubiera dictado la Sentencia que originó la ejecutoria.

La Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, creadora de la nueva figura del Juez de Vigilancia, con funciones y jurisdicción propia, no delegada, le confiere expresamente la competencia que hasta ahora tenían los Jueces y Tribunales sentenciadores en la ejecución de las penas privativas de libertad, tanto las directamente impuestas como las sustitutorias de penas pecuniarias. Dedica tal norma su título V al nuevo órgano jurisdiccional, enunciando el artículo 76 las atribuciones y competencias que le son propias.

Razones de urgencia, de sobra conocidas, han impulsado al Consejo General del Poder Judicial a asignar las funciones de Juez de Vigilancia Penitenciaria a determinados órganos judiciales en tanto se promulgue la Ley Orgánica del Poder Judicial. El pronto funciona-

miento de estos Juzgados y el mayor celo en su desempeño, son de la mayor importancia para la Justicia.

El Ministerio Fiscal, en virtud de funciones propias derivadas del artículo 124 de la Constitución y el contenido del Estatuto y Reglamento orgánicos, habrá de intervenir desde el primer momento en las actividades encomendadas a los nuevos Juzgados, por lo que se les deberá dar traslado inmediato o, en su caso, promoverá las actuaciones, ya sea de oficio o a instancia del interno u otros interesados.

El acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, de 9 de julio de 1981, al tiempo que crea los Juzgados de Vigilancia, ordena una peculiar distribución territorial, caracterizada porque en ocasiones no coincide el ámbito territorial que se fija para el Juzgado con la jurisdicción de la Audiencia Territorial y, en algún caso concreto, con el de la Audiencia Provincial.

Por lo expuesto, ha considerado conveniente resolver la Consulta formulada dando, con carácter general, las siguientes instrucciones:

1.° El Fiscal en cuyo territorio esté la sede de un Juzgado de Vigilancia cuya competencia exceda de la jurisdicción de la respectiva Audiencia, elevará, por conducto reglamentario en su caso, propuesta, a esta Fiscalía, de designación de uno o de varios funcionarios del Ministerio Fiscal de la Fiscalía correspondiente para que, sin exclusividad y por turno u otro sistema de distribución de trabajo, se reparta el que corresponda al Juzgado de Vigilancia.

La Fiscalía General del Estado, a la vista de las propuestas, designará al funcionario o funcionarios que deban atender las funciones del Ministerio Fiscal en los respectivos Juzgados de Vigilancia.

2.° En los casos en que las funciones del Juzgado de Vigilancia recayeren en el Juez de Peligrosidad y Rehabilitación Social, el Fiscal podrá encargar el despacho de los asuntos procedentes del Juzgado de Vigilancia

al funcionario o funcionarios afectos a la jurisdicción de peligrosidad, dando cuenta de esta decisión a la Fiscalía General del Estado.

3.º Las Fiscalías de las Audiencias Territoriales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, que tienen en plantilla asignado un funcionario del Ministerio Fiscal con carácter fijo y exclusivo al Juzgado de Peligrosidad, si en éste han recaído las funciones de Juzgado de Vigilancia, designarán a dicho funcionario, a no ser que por vacante o por razones de mayor coordinación y especialidad hagan aconsejable al Fiscal proponer al Abogado Fiscal encargado del despacho de ejecutorias, si lo hubiere.

4.º En el supuesto de que los Juzgados de Vigilancia no extiendan su jurisdicción a mayor ámbito territorial que el de la Audiencia Provincial (Cádiz y Toledo), el Fiscal de la Audiencia hará directamente la designación del funcionario o funcionarios que habrán de despachar el trabajo de los Juzgados de Vigilancia, dando seguidamente cuenta a esta Fiscalía de la designación realizada.

5.º Los Fiscales adscritos a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria dependerán del Fiscal de la Audiencia donde radique el Juzgado, y sus consultas y propuestas se elevarán a esta Fiscalía General por aquél a través del Fiscal de la Audiencia Territorial cuando su jurisdicción exceda del ámbito provincial.

6.º Los Fiscales a quienes se confíen los asuntos de los Juzgados de Vigilancia, cuidarán de que todas las incidencias de cada expediente y sus principales trámites se reflejen en una carpetilla a custodiar en la Fiscalía a la que pertenezca, así como en una ficha por cada interno, con las vicisitudes y cambios que experimente.

7.º En los partes estadísticos se dará cuenta del trabajo realizado por los funcionarios adscritos a los Juzgados de Vigilancia, con expresión del total de asuntos despachados, distinguiendo si son dictámenes en ejecución de penas de privación de libertad o recursos.

8.º Por el Fiscal adscrito al Juzgado de Vigilancia se realizarán las visitas a los establecimientos penitenciarios con el titular del Juzgado (art. 526 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y disposición transitoria 1.ª de la Ley General Penitenciaria), mas, como son compatibles con las vistas comunes, se mantiene en todo su vigor la Circular de esta Fiscalía 3/1978.

Por considerarlo de utilidad y su conocimiento necesario, se adjunta fotocopia de las "Prevenciones" que sobre los Juzgados de Vigilancia ha dictado, al amparo del artículo 5 de la Ley Provisional Orgánica del Poder Judicial de 1870, el Excmo. señor Presidente del Tribunal Supremo.

Dios guarde a V. E. y a V. I. muchos años.

Madrid, 22 de octubre de 1981.

Excmos. e Iltmos. Sres. Fiscales de las Audiencias Territoriales y Provinciales.

## CONSULTA NUM. 3/1981

## NATURALEZA DE LA CANCELACION DE ANTECEDENTES PENALES

EXCMOS E ILTMOS. SRES.:

Ante los criterios, esencialmente antitéticos, surgidos entre los funcionarios de esa Fiscalía, y al discrepar V. E. del parecer de la mayoría, con prudencia y celo encomiables, formula, con fecha de 19 de octubre anterior, Consulta en la que da cuenta de las interpretaciones contrapuestas acerca de los efectos y extensión de la cancelación de antecedentes penales una vez promulgada la Ley 81/1978, de 28 de diciembre, por la que se adiciona a los números 14 y 15 del artículo 10 del Código Penal, un párrafo redactado en los siguientes términos: "En los casos en que se hubiera producido cancelación de antecedentes penales en el Registro Central de Pena-

dos y Rebeldes, no serán considerados los mismos, a los efectos de la apreciación de esta agravante, cuando al tiempo de la comisión del delito enjuiciado hubiera transcurrido un tiempo doble del previsto para cada caso por el artículo 118, párrafo tercero, de este Código, computado desde la fecha señalada en el mismo y, como máximo, el plazo de diez años."

Las interpretaciones propugnadas pueden resumirse del siguiente modo:

La primera entiende que no debe considerarse la agravante de reincidencia una vez transcurrido el plazo máximo de diez años previsto, aunque no se haya obtenido la cancelación, y esgrime como argumento favorable que, de otra manera, se establecería una gran desigualdad, perjudicando a los más débiles y menos formados, desconocedores de la posibilidad de cancelación, por lo que el trámite administrativo que precede a la misma debería iniciarse de oficio.

La segunda entiende, por el contrario, que el precepto legal percitado es terminante al exigir la cancelación de los antecedentes penales, llegando a la conclusión de que es ineliminable que la misma se haya producido y precisamente a instancia del interesado.

La alternativa planteada en Junta de esa Fiscalía debe concentrarse en una solución coincidente con el segundo de los criterios expuestos, fundamentada en las siguientes consideraciones:

*A)* La extinción de la sanción impuesta en sentencia firme, no elimina, sin más, todas las consecuencias de la pena impuesta, pues la inscripción de la condena permanece en tanto no se haya obtenido la cancelación de los antecedentes. Pero la cancelación, cuyo efecto es la nulidad de la inscripción, no tiene siempre una vigencia temporal incondicionada, sino que, ante la comisión de un nuevo delito, es susceptible de revocación, con efectos "ex tunc", recobrando los antecedentes penales su vigor.

Este ha sido el sistema normalmente aceptado por nuestro ordenamiento jurídico, en el que la cancelación se ha concebido como figura jurídica condicional, pues en cualquier momento en que se produjera el acontecimiento delictivo constitutivo de la condición, quedaban extinguidos sus efectos. Sin necesidad de acudir a antecedentes legislativos más remotos en la línea apuntada, se halla el artículo 118, párrafo último, del Código Penal de 1944, al declarar que si el rehabilitado cometiera un nuevo delito comprendido en el mismo título que el que originó la inscripción cancelada, recobrará ésta su vigor para los efectos de la reincidencia. La reforma que llevó a efecto la Ley de 20 de diciembre de 1952 se mostró más rigurosa, pues, de una parte, el evento que desencadenaba la revocación de la cancelación era cualquier delito y, de otra, la inscripción de condena recobraba su vigor a todos los efectos. La Ley de 15 de noviembre de 1971, de tono más progresivo, añadió un nuevo párrafo al artículo 118, por el cual la cancelación de los antecedentes quedaba sin efecto únicamente para apreciar las circunstancias de reiteración y reincidencia.

En todas las normas citadas, la cancelación debía ser instada por el condenado.

*B)* Con la Ley de 28 de diciembre de 1978, a la que se hace referencia en la Consulta, la cancelación continúa siendo una institución sometida a condiciones que sólo alcanza carácter definitivo si se cumple la condición negativa de la no realización de una conducta punible en tiempo determinado, más la positiva de tener satisfechas en lo posible las responsabilidades civiles provenientes de la infracción y además se promueva el expediente cancelatorio por el interesado.

Así, en ella es posible distinguir dos estadios. En uno la cancelación produce sus efectos definitivamente si durante el plazo legal no se ha verificado el evento constitutivo del nuevo delito *(condictio deficit)*. En otro, esto es, mientras está transcurriendo el plazo *(conditio pen-*

*det),* la cancelación es productora sólo de efectos provisionales, pues pesa sobre ellos la eventualidad de la destrucción.

C) Situados ante la cancelación de efectos definitivos, es preciso analizar el tema central de la consulta, que es el siguiente: si transcurridos los plazos que la Ley determina, esos efectos se producen *ipso iure* y sin necesidad de declaración de cancelación, o si es imprescindible la iniciación del expediente dirigido a la obtención de la misma.

El simple transcurso del tiempo no es bastante, ya que, como dijimos, no es el único requisito; a él debe unirse el expediente de cancelación, en el que deberá acreditarse el cumplimiento de las condiciones exigidas para ello. No cabe una cancelación presunta deducida de los simples datos de la hoja histórica penal del reo, pues éstos son insuficientes para acreditar el cumplimiento de *todos* los requisitos exigidos en el artículo 118, como tampoco puede conocerse normalmente el *dies a quo* o inicial del cómputo del plazo exigible para la cancelación, que el citado artículo hace depender de circunstancias de cumplimiento de la pena, que, normalmente, no obran en la causa. En otras palabras, aún para llegar a una cancelación presunta o *ex officio* de los antecedentes, sería menester una investigación complementaria análoga a la que se lleva a cabo en el expediente formal de rehabilitación. En definitiva, tanto el dato temporal como el requisito formal —instar la cancelación y obtenerla— integran el núcleo de la proposición normativa contenida en el artículo 118. La cancelación automática o *ex lege,* lo mismo que la cancelación *ex officio,* son ajenas a nuestro sistema vigente, que, por el contrario, acoge de modo expreso la cancelación a iniciativa del interesado.

Los interesados son, pues, los legitimados para solicitar la cancelación (art. 3.º del Decreto 1.598/1972, de 25 de mayo) y por tales hay que entender únicamente

los condenados (art. 118, párrafo primero del Código Penal), de donde se desprende que responde la cancelación a la naturaleza de un derecho potestativo atribuido al penado y cuyo nacimiento se subordina al transcurso del tiempo que la Ley establece, por lo que sin su ejercicio la cancelación no es posible.

Que lo relevante es la voluntad del sujeto para la eficacia jurídica de la cancelación, lo muestra además la frase *podrán instar,* del artículo 118, párrafo primero, del Código Penal, y si se observan y cumplen los presupuestos exigidos no hay discrecionalidad administrativa, sino obligación de concederla, como se deriva del párrafo segundo del artículo precitado, pues cumplidos aquéllos, la cancelación se obtiene.

*D)* Esta interpretación de la norma contemplada, es la misma que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha expresado en reciente sentencia, de 29 de septiembre de 1981, en la que se declara que la premisa fundamental para la aplicación del nuevo precepto —se refiere al introducido por la Ley de 28 de diciembre de 1978—, es que se haya producido la cancelación de los antecedentes, pues, tal como aparece redactado, la rehabilitación no opera automáticamente o legalmente, sino por expediente previo en que se acuerde y conceda la cancelación de antecedentes solicitada. Y concluye la Sentencia así: "mientras no se hubiere producido la cancelación de la inscripción, cualquiera que fuere el tiempo transcurrido, siempre habrán de ser tenidos en cuenta, a efectos de reiteración o reincidencia, los antecedentes que tuviere el reo".

En igual sentido las sentencias de 20 de octubre de 1981, 7 de marzo de 1981, 16 de junio de 1980, 21 de mayo de 1980 y 21 de diciembre de 1979.

*E)* Ciertamente que el proyecto de Ley Orgánica del Código Penal, pendiente en las Cortes, con criterio, sin duda más equitativo, coincidente con el mayoritario de esa Fiscalía, da un tratamiento distinto del actual

a la cancelación de antecedentes penales y, así, en el artículo 108 se dice: Por la rehabilitación se extinguen *definitivamente* todos los efectos de la pena; que los condenados que hayan cumplido su pena o alcanzado la remisión condicional de ella, *podrán instar y obtener* del Ministerio de Justicia la cancelación de sus antecedentes penales; se establecen los requisitos indispensables para obtener dicho beneficio, entre ellos el transcurso de los plazos que se fijan en el núm. 3.º del párrafo tercero; y determinando en el párrafo cuarto que "El Ministerio de Justicia *procederá de oficio* a la cancelación de los antecedentes penales cuando transcurriesen los plazos precedentes señalados y dos años más sin que se haya anotado una nueva y posterior condena o declaración de rebeldía del penado".

Ello viene a confirmar que en tanto no se modifique la redacción actual del artículo 118 del Código Penal, dicho precepto no puede tener otro alcance que el anteriormente consignado: lo contrario significaría una violación expresa del texto legal, no justificable por presuntas motivaciones éticas-jurídicas que acampan fuera de la realidad del ordenamiento jurídico.

En su consecuencia, deberán V. E. y los funcionarios de esa Fiscalía, atenerse a la interpretación anteriormente expresada en el caso consultado y en los supuestos análogos que pudieran presentarse y sea de aplicación el artículo 118 del Código Penal y las disposiciones a que implícitamente se refiere en su vigente redacción.

Dios guarde a V. E. y a V. I. muchos años.

Madrid, 13 de noviembre de 1981.

Excmos. e Iltmos. Sres. Fiscales de las Audiencias Territoriales y Provinciales.

# CIRCULARES

## CIRCULAR NUM. 1/1981

## EN TORNO AL CARACTER PERIODICO DEL IMPUESTO GENERAL SOBRE EL TRAFICO DE EMPRESAS A LOS EFECTOS DEL ARTICULO 319 DEL CODIGO PENAL

EXCMOS E ILTMOS. SRES.:

Con la promulgación de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, se introdujo de modo expreso en nuestro ordenamiento jurídico el llamado "delito fiscal", definido en el artículo 319 del Código Penal. En un orden puramente objetivo, comete este delito "el que defrauda a la Hacienda estatal o local mediante la elusión del pago de impuestos o el disfrute ilícito de beneficios fiscales en una cantidad igual o superior a dos millones de pesetas" De la estricta literalidad del precepto se desprende que es esencial para el nacimiento de la figura de delito la determinación del *quantum* de lo defraudado y a la hora de fijar la entidad de la infracción ejercerá una decisiva influencia la naturaleza del tributo. A estos efectos el apartado segundo del artículo 319 distingue entre tributos periódicos y tributos no periódicos.

— "En los tributos que no tengan carácter periódico, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible es susceptible de liquidación." En tales hipótesis es claro que no deben ser acumulables las distintas cuantías defraudadas correspondientes a distintos tributos no periódicos, habiéndose de entender por tales aquellos que res-

ponden a hechos imponibles distintos, cada uno de los cuales sea objeto de una propia y única liquidación.

— "Cuando se trate de tributos periódicos, se estimará como cuantía el importe de lo defraudado en cada período impositivo." La consecuencia es que que los tributos periódicos o correspondientes a un mismo hecho impositivo, sí habrán de acumularse.

Hasta aquí el tema es pacífico y no ha ofrecido mayores dificultades interpretativas. Mas las Delegaciones de Hacienda, de conformidad con la obligación *ex lege* impuesta por el artículo 37, dos, de la Ley de 14-XI-1977, han comenzado a enviar expedientes al Ministerio Fiscal —compuestos por el procedimiento administrativo de liquidación, determinación e investigación del hecho imponible y de la cuantía defraudada por cada concepto contributivo— para la iniciación del oportuno proceso penal a través de denuncia o querella. El mayor número de expedientes remitidos lo han sido por presuntas defraudaciones del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas; y en el examen que de ellos ha de hacerse, para precisar si los hechos pueden integrarse en el tipo que describe el artículo 319, se ha planteado un problema que se proyecta sobre el elemento objetivo esencial de la cuantía de la defraudación, cual es el de si, a los efectos del delito fiscal, debe considerarse o no como tributo periódico el Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas.

Los criterios mantenidos sobre su naturaleza de tributo periódico o tributo no periódico, han sido contrapuestos. De asignársele uno u otro carácter dependerá muchas veces la decisión de iniciar o no el proceso penal, pues sólo la posibilidad de la acumulación de las distintas cuantías defraudadas hará que se rebase la cifra de dos millones, *quantum* ineliminable para desenvolvernos en el área del delito fiscal. En efecto, si se interpreta el artículo 319 conforme a la tesis del tributo

periódico, la cuota defraudada, al referirse al período impositivo o al año natural, normalmente alcanzará la cifra exigida para que el hecho sea delito. Mientras que si se acepta el criterio del tributo no periódico, al tener que considerar cuantía defraudada la correspondiente a cada hecho imponible, y, más aún, a cada concepto por el que el hecho imponible es susceptible de liquidación, no es fácil que se alcance la cifra prevenida para que el hecho sea delito y no mera infracción tributaria.

En un plano teórico y en trances de determinar la naturaleza periódica o no del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas, puede decirse que hay argumentos paralelos en favor de uno u otro sistema.

En favor de que nos hallamos ante un impuesto no periódico, podrían esgrimirse las siguientes razones:

— El hecho imponible no es el volumen de operaciones de una empresa ni su actividad comercial durante períodos determinados de tiempo, sino cada una de las operaciones de venta o entrega de mercancías mediante precio, ejecuciones de obras, arrendamientos, etc., descritos en el artículo 3.º de la norma reguladora (Decreto 3314/1966, de 29 de diciembre).

— El impuesto no se devenga periódicamente, sino una vez realizada la correspondiente operación mercantil (art. 8).

— El impuesto se exigirá por cada operación sujeta a gravamen (art. 36).

Como el régimen legal de este impuesto presenta particularidades frente a otros tributos no periódicos, de ellas se extraen los argumentos que conducen a la tesis del impuesto periódico. Son éstos:

— Aunque el hecho imponible está constituido por cada operación sujeta a gravamen, estas operaciones deben realizarse, para quedar sujetas al impuesto, en el ejercicio de una actividad comercial caracterizada por

la nota de habitualidad (art. 1, 1.º, condición segunda), y ésta supone, evidentemente, una actividad que se desarrolla en el tiempo.

— Aunque el impuesto se exige por cada operación sujeta a gravamen, las declaraciones-liquidaciones se deben prestar periódicamente, dependiendo la periodicidad (trimestral, semestral, anual) del volumen total de ingresos (art. 38 del Reglamento de 23-XII-1971).

— A causa de la periodicidad de las declaraciones-liquidaciones, éstas contienen el volumen total de ingresos por cada grupo de operaciones —sujeto al mismo tipo impositivo— del que se obtiene la correspondiente cuota tributaria global, referida al total de operaciones realizado en el período correspondiente.

— Como consecuencia asimismo del carácter periódico de las declaraciones, la exacción y gestión tributarias se realizan también periódicamente.

La alternativa argumental de impuesto periódico —impuesto no periódico debe resolverse en favor de la periodicidad del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas—. Si, ciertamente, el artículo 35 de la Ley de 14-XI-1977 distingue entre impuestos periódicos y no periódicos, es también evidente que del tenor de la norma no se obtiene una clara línea diferencial entre los mismos que permita separarlos con nitidez en el ámbito del derecho tributario positivo. Por las consecuencias que la naturaleza del tributo proyecta en la formación de las estructuras punibles, es indispensable integrar ese espacio atendiendo a otros elementos interpretativos.

Es conocido que la nota de periodicidad puede referirse a una de estas dos circunstancias: bien a la actividad sobre la que se asienta el presupuesto de hecho del tributo o a la materialización de la obligación tributaria principal (el ingreso de las cuotas en el Tesoro Público).

1. Desde el primer punto de vista anotado, es preciso distinguir diversas categorías de tributos.

*a)* Los relativos a hechos imponibles o, más ampliamente, a situaciones que se producen aislada y esporádicamente, sin que sea previsible su repetición o, en todo caso, sin que formen parte de una actividad que *per se* exige la producción de una serie de actos homogéneos que se efectúan en masa: son éstos los tributos que gravan el tráfico patrimonial civil, como el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, o las transmisiones por causa de muerte, Impuesto sobre sucesiones, etc.

*b)* Una segunda categoría es la de los tributos que, si bien se devengan por cada operación aislada en virtud de imperativo legal, contemplan y se refieren a una actividad que por sí misma exige una repetición de actos y una continuidad. Ejemplo relevante de estos tributos es el Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas, que, técnicamente, se ha calificado por la doctrina como impuesto sobre el volumen de ventas o sobre la cifra de negocios, lo que pone de relieve la artificiosidad del devengo legal de operación por operación.

*c)* Un tercer grupo está formado por los tributos cuyo devengo se realiza en unos plazos determinados y con una periodicidad establecida en la ley. Aparecen aquí fundamentalmente el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades.

Bajo estos puntos de vista, son tributos periódicos, a efectos del artículo 35 de la Ley de 14-XI-1977 y, por remisión, del artículo 319 del Código Penal, los incluidos en los apartados *b)* y *c)*. Otra conclusión, aparte de producir una notoria desigualdad en la posibilidad de incriminar los ilícitos fiscales de naturaleza penal, llevaría a resultados inviables, pues la declaración legal del devengo "operación por operación", puede resultar inoperante cuando se trata de operaciones de tracto sucesivo.

2. La anterior conclusión se reafirma si acudimos al régimen de las declaraciones y consiguientes ingresos

de las cuotas tributarias en el Tesoro. Para los tributos del apartado *a)*, considerados no periódicos, la obligación tributaria fundamental —la de declarar y, en su caso, ingresar— se impone para ser cumplida en un plazo determinado a partir de un evento concreto e instantáneo. Sin embargo, en los grupos *b)* y *c)* el régimen es diferente: la declaración y el ingreso que proceda se han de hacer repetidas y periódicas veces en un tiempo predeterminado, que, normalmente, suele ser trimestral, semestral o anual, englobando todos los flujos de rentas o de ingresos percibidos por el sujeto pasivo en tal período. Todos estos tributos son periódicos.

Obsérvese, además, que en ellos es en el momento en que falta el ingreso cuando se exterioriza la voluntad antijurídica del obligado y no cuando se produce el devengo, de tal forma que antes ni la Administración puede exigir cuota alguna en tanto no haya transcurrido el plazo para efectuarlo, previa la oportuna declaración, ni sería posible proceder contra aquél, dada la falta de conducta irregular.

El Impuesto General sobre Tráfico de Empresas debe calificarse de impuesto periódico y, conforme a lo establecido en el artículo 35, dos, de la Ley de 14-XI-1977, según el cual "el importe de lo defraudado se referirá al año natural", será la suma defraudada en tal lapso de tiempo la que haya de considerarse, sin que deban contemplarse períodos de tiempo inferiores, aunque se trate de declaraciones semestrales o trimestrales, ni tampoco realizarse una imputación estimativa por virtud del mecanismo de la llamada elevación al año u otro análogo.

Dios guarde a V. E. y a V. I. muchos años.

Madrid, 10 de julio de 1981.

Excmos. e Iltmos. Sres. Fiscales de las Audiencias Territoriales y Provinciales.

## CIRCULAR NUM. 2/1981

## EN TORNO A LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA PARA CONOCER DETERMINADOS PROCESOS MATRIMONIALES YA INICIADOS AL TIEMPO DE SU CREACION

EXCMOS E ILTMOS. SRES.:

La disposición final de la Ley 30/1981, de 7 de julio, establece que, una vez creados, los Juzgados de Familia asumirán las funciones atribuidas en la presente Ley a los de Primera Instancia. Básicamente tales funciones son las desarrolladas en el marco de los procesos de nulidad matrimonial, separación y divorcio. Tras la entrada en vigor del Real Decreto 1.322/1981, de 3 de julio, la atribución legal de competencia se ha hecho realidad. Mas puede cuestionarse si el conocimiento de aquellos procesos, independientemente de la fecha de la presentación de la demanda, debe ser asumido, desde luego, y de modo automático, por los denominados Juzgados de Familia o si, por el contrario, esa competencia en exclusiva se condiciona a que su iniciación subsiga al momento de la efectiva constitución y funcionamiento de los nuevos órganos judiciales, tesis ésta con la que quedarían fuera de su radio los procesos que se hallaren en tramitación en aquella fecha.

Como toda norma que carece de disposiciones transitorias, la eficacia en el tiempo de la Ley 30/1981, de 7 de julio, y del Real Decreto 1.322/1981, de 3 de julio, dejan cierto margen a la interpretación, particularmente en el punto relativo a su proyección o no sobre los procesos pendientes. Precisamente por ello, en el análisis de los preceptos referidos son posibles criterios antitéticos. La presente Circular pretende que entre los funcionarios del Ministerio Fiscal, dada su cualidad de parte

en la mayoría de los procesos matrimoniales, impere una vez más la unidad en sus determinaciones.

Es cierto que conforme a la regla del *tempus regit factum,* fundamento del principio del respeto a las situaciones creadas, puede pensarse que los procedimientos iniciados al amparo de la Ley antigua no deben experimentar modificaciones de ningún tipo. Mas también podrían hallarse argumentos en favor de la tesis de que las disposiciones de carácter procesal no son esencialmente incompatibles con la retroactividad, por lo que la Ley nueva se debería aplicar a los pleitos nacidos antes de su perfección jurídica.

Nuestro ordenamiento parte del principio de la irretroactividad de las leyes (art. 2.3 del Código Civil; art. 9.3 de la Constitución), previéndose, sin embargo, la cláusula de exclusión en forma expresa o implícita, al tiempo que se reconoce que aquel principio es insuficiente, dada la multiplicidad de supuestos que en la práctica pueden presentarse. De ahí la existencia de disposiciones transitorias, que contienen un eficaz criterio orientador en la aplicación del estricto artículo 2.3 del Código Civil, y con vigencia incluso para todas las normas jurídicas generales que carezcan de ellas, dado el carácter supletorio general del Código Civil respecto de otras leyes (artículo 4.3). Atendido el tenor de las normas comunes de transición, para la hipótesis aquí cuestionada, no habrá problemas en orden a los efectos consumados bajo el sistema legal precedente (pleitos decididos por sentencia a la vigencia de la nueva ley); tampoco para los efectos futuros (procedimientos no iniciados aún, aunque los hechos causantes se desarrollaren bajo la ley anterior). La cuestión básica se cifra en los efectos pendientes o procedimientos en tramitación al promulgarse la actual normativa, que debe resolverse acudiendo en primer término a la disposición transitoria 4.ª del Código Civil, expresiva de que "si el ejercicio del derecho

o de la acción se hallare pendiente de procedimientos oficiales empezados bajo la legislación anterior y éstos fueren diferentes de los establecidos por el Código, *podrán optar los interesados por unos o por otros*". Ello significa que la situación procesal extinguida puede ser prolongada en su eficacia normativa si la autonomía de la voluntad privada así lo decide, acto válido justamente por no tratarse de materia contraria al orden público.

En la misma línea interpretativa se halla el artículo 3.º del Real Decreto de 3 de febrero de 1881, aprobando y publicando la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando declara "que los pleitos pendientes en la actualidad continuarán sustanciándose en la instancia en que se hallen con arreglo a la Ley vigente, *a no ser que los litigantes, todos de común acuerdo, pidieran que el procedimiento se acomode a la nueva Ley*". De igual principio parte el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 (art. 2.º), que atribuye un derecho de opción a los litigantes entre la nueva y la vieja legislación.

En definitiva, como la facultad de opción es excepcional, lo mismo que la retroactividad, sólo cuando se ejercite por las partes aceptando la sumisión a la Ley nueva, los procedimientos en curso continuarán los trámites pendientes ante los Juzgados de Familia. A la inversa, si los interesados no se ponen de acuerdo deberá concluirse el procedimiento ya empezado ante el órgano jurisdiccional que está conociendo de él. Esta parece, en suma, la solución más adecuada a nuestro sistema de derecho intertemporal y a la que debe llegarse además por aplicación del método de interpretación analógico reconocido en el articulado del Código Civil (art. 4.1) y en sus normas de transición (disposición transitoria 13).

En consecuencia, los señores Fiscales deberán atenerse a los principios de derecho transitorio anteriormente consignados, en los dictámenes sobre competencia de que se las dé traslado en los procedimientos matrimo-

niales en tramitación, a que se hace referencia en la presente Circular.

Dios guarde a V. E. y a V. I. muchos años.

Madrid, 24 de septiembre de 1981.

Excmos. e Iltmos. Sres. Fiscales de las Audiencias Territoriales y Provinciales.

# ESTADISTICA

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*Procedimientos delitos menores y flagrantes: Ley Orgánica 10/80.*

A. Trámite. B. Sentencias y recursos.

| AUDIENCIAS | Pendientes en 1.º de enero 1981 (1) | Iniciados el 1.º de enero al 31 diciembre 1981 (2) | Reabiertos de años anteriores (3) | Total de las tres casillas anteriores (4) | Acumulados (5) | Archivo por no ser delito (6) | Archivo por ser decconocido el autor (7) | Declarados falta (8) | Inhibidos (9) | Convertidos en sumario (10) | Convertidos preparatorias (11) | Acusación y juicio oral (12) | En trámite en 1.º enero 1982 (13) | CONDENATORIAS | | ABSOLUTORIAS | TOTAL sentencias | Recurridos por el Fiscal | Recurridos por las partes | SENTENCIAS 2.ª INSTANCIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Conformes Fiscal (14) | Disconformes (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | Confirmando (20) | Revocando (21) | Pendientes de sentencias (22) |
| Alava | 14 | 214 | " | 228 | 2 | 10 | 91 | " | 4 | 4 | " | 47 | 70 | 8 | " | " | 8 | " | " | 1 | " | " |
| Albacete | " | 348 | " | 348 | 1 | 9 | " | 24 | 4 | 7 | 7 | 286 | 10 | 150 | 14 | 9 | 173 | 1 | 19 | 8 | 4 | 8 |
| Alicante | " | 887 | " | 887 | " | " | " | 32 | 3 | 35 | 21 | 569 | 227 | 95 | 37 | 18 | 150 | " | " | " | " | " |
| Almería | " | 417 | " | 417 | " | 35 | 31 | 27 | " | 32 | 10 | 265 | 17 | 106 | 4 | 7 | 117 | " | 2 | 2 | " | " |
| Asturias | " | 1.230 | " | 1.230 | " | 34 | 10 | 59 | 5 | 68 | 37 | 980 | 37 | 521 | 80 | 60 | 661 | 9 | 16 | 13 | 12 | " |
| Avila | " | 80 | " | 80 | " | " | " | " | " | " | 1 | 72 | 7 | 11 | 3 | 2 | 16 | 3 | " | " | 2 | 1 |
| Badajoz | " | 642 | " | 642 | " | 12 | 5 | 18 | 2 | 27 | 26 | 545 | 7 | 315 | 48 | 31 | 394 | 1 | 21 | 5 | 2 | 15 |
| Baleares | 55 | 1.616 | " | 1.671 | " | 153 | 95 | 96 | 20 | 26 | 84 | 906 | 291 | 373 | 50 | 35 | 458 | 5 | 7 | 6 | 6 | " |
| Barcelona | " | 2.973 | " | 2.973 | " | 178 | 260 | 174 | 7 | 118 | 61 | 1.733 | 424 | 444 | 89 | 61 | 594 | 5 | 13 | 12 | 5 | 1 |
| Burgos | " | 3.460 | " | 3.460 | 31 | 90 | 2.770 | 88 | 19 | 107 | 13 | 221 | 121 | 163 | 6 | 9 | 178 | 2 | 20 | 6 | 4 | 2 |
| Cáceres | " | 752 | " | 752 | 7 | 46 | 274 | 56 | 25 | 23 | 12 | 182 | 127 | 104 | 5 | 7 | 116 | 2 | 9 | 2 | 1 | 7 |
| Cádiz | " | 1.521 | " | 1.521 | " | 15 | 5 | 35 | 2 | 30 | 27 | 1.074 | 333 | 450 | 28 | 21 | 499 | " | 8 | 1 | " | 7 |
| Castellón | " | 400 | " | 400 | " | 34 | 5 | 30 | 1 | 10 | 11 | 271 | 37 | 55 | 10 | 7 | 72 | " | " | " | " | " |
| Ciudad Real | 5 | 316 | " | 321 | " | 13 | " | 14 | 4 | 16 | " | 250 | 24 | 124 | 16 | 15 | 155 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 |
| Córdoba | " | 467 | " | 467 | " | 1 | " | " | " | 3 | " | 266 | 197 | 139 | 94 | 33 | 266 | 62 | 26 | 37 | 13 | 38 |
| Coruña (La) | " | 4.835 | " | 4.835 | 14 | 99 | 1.958 | 185 | 21 | 26 | 12 | 567 | 1.953 | 195 | 23 | 13 | 231 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 |
| Cuenca | " | 150 | " | 150 | " | 2 | 2 | 7 | " | 3 | 1 | 122 | 13 | 83 | 4 | 2 | 89 | " | 10 | 4 | 2 | 4 |
| Gerona | " | 381 | " | 381 | 1 | 12 | 9 | 4 | 3 | 18 | 10 | 235 | 89 | 88 | 12 | 13 | 113 | " | 4 | 2 | 2 | " |
| Granada | " | 826 | " | 826 | " | 28 | 10 | 50 | 1 | 58 | 21 | 624 | 34 | 276 | 49 | 18 | 343 | 6 | 8 | 3 | 2 | 9 |
| Guadalajara | " | 147 | " | 147 | " | 4 | 1 | 5 | " | 7 | 8 | 118 | 4 | 59 | 7 | 1 | 67 | " | 3 | 2 | " | 1 |
| Guipúzcoa | " | 167 | " | 167 | " | 8 | 10 | 2 | " | " | " | 137 | 10 | 10 | " | " | 10 | " | " | " | " | " |
| Huelva | " | 572 | " | 572 | " | 19 | 7 | 29 | 3 | 19 | 39 | 440 | 16 | 225 | 44 | 26 | 295 | " | 20 | 13 | 4 | 3 |
| Huesca | " | 71 | " | 71 | " | 2 | " | " | " | 2 | 6 | 61 | " | 31 | 2 | 3 | 36 | " | 1 | 1 | " | " |
| Jaén | " | 668 | " | 668 | 2 | 6 | 65 | 18 | 2 | 14 | 10 | 376 | 175 | 296 | 56 | 24 | 376 | " | 16 | 12 | 4 | " |
| Las Palmas | 110 | 2.195 | " | 2.305 | 1 | 95 | 55 | 108 | 9 | 38 | 29 | 1.478 | 492 | 486 | 56 | 44 | 586 | " | 4 | 4 | " | " |
| León | " | 383 | " | 383 | " | 10 | 2 | 9 | " | 15 | 9 | 313 | 25 | 186 | 23 | 12 | 221 | 4 | 16 | 5 | 4 | 11 |
| Lérida | 10 | 355 | " | 365 | 2 | 28 | 1 | 21 | " | 7 | 3 | 133 | 170 | 110 | 23 | 8 | 141 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 |
| Logroño | 9 | 1.195 | " | 1.204 | 5 | 41 | 879 | 26 | 7 | 8 | 3 | 180 | 55 | 100 | 9 | 13 | 122 | 4 | 1 | 4 | " | 1 |
| Lugo | " | 251 | " | 251 | " | 15 | 4 | 14 | 1 | 2 | 5 | 193 | 17 | 71 | 6 | 6 | 83 | 1 | 9 | 1 | 6 | 3 |
| Madrid | 12 | 2.956 | " | 2.968 | " | 192 | 10 | 131 | 7 | 163 | 148 | 1.949 | 368 | 662 | 64 | 112 | 838 | " | 58 | 4 | 5 | 1.111 |
| Málaga | 45 | 1.279 | " | 1.324 | " | 21 | 85 | 36 | " | 38 | 12 | 921 | 211 | 171 | 11 | 8 | 190 | " | " | " | " | " |
| Murcia | " | 1.012 | " | 1.012 | " | 11 | 12 | 19 | 4 | 39 | 37 | 629 | 261 | 252 | 86 | 31 | 369 | 3 | 15 | 14 | 4 | " |
| Navarra | " | 361 | " | 361 | 2 | 7 | 3 | 23 | 2 | 24 | 8 | 277 | 15 | 126 | 17 | 15 | 158 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| Orense | 7 | 117 | " | 124 | " | 6 | " | 5 | " | 3 | 1 | 83 | 26 | 32 | 9 | 4 | 45 | 1 | 1 | " | 1 | 1 |
| Palencia | 1 | 202 | " | 203 | " | 3 | 2 | 6 | " | 10 | 7 | 143 | 32 | 124 | 8 | 12 | 144 | 1 | 11 | 9 | 1 | 5 |
| Pontevedra | " | 665 | " | 665 | " | 15 | 3 | 12 | 1 | 33 | 22 | 464 | 115 | 141 | 14 | 9 | 164 | 5 | 11 | 11 | 2 | 3 |
| Salamanca | " | 313 | " | 313 | 2 | 20 | 8 | 25 | " | 12 | 6 | 208 | 32 | 138 | 20 | 9 | 167 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| Santa Cruz de Tenerife | 9 | 1.067 | " | 1.076 | 2 | 14 | 13 | 35 | 1 | 29 | 31 | 522 | 429 | 360 | 48 | 37 | 445 | 8 | 6 | 2 | 1 | 11 |
| Santander | 4 | 552 | " | 556 | " | 2 | 10 | 17 | 2 | 24 | 8 | 439 | 54 | 223 | 39 | 23 | 285 | 5 | 8 | 1 | 6 | 6 |
| Segovia | " | 712 | " | 712 | " | 15 | 514 | 7 | " | 6 | 1 | 78 | 91 | 44 | 9 | 4 | 57 | " | 4 | 3 | 1 | " |
| Sevilla | " | 1.504 | " | 1.504 | " | 81 | 36 | 103 | 6 | 123 | 19 | 435 | 701 | 350 | 61 | 61 | 472 | 21 | 34 | 26 | 7 | 29 |
| Soria | " | 44 | " | 44 | " | 1 | " | 1 | " | 2 | 3 | 29 | 8 | 17 | 2 | 3 | 22 | " | 2 | " | 1 | 1 |
| Tarragona | " | 629 | " | 629 | " | 3 | 13 | 30 | 2 | 13 | 23 | 500 | 45 | 254 | 22 | 20 | 296 | 1 | 10 | 5 | 3 | " |
| Teruel | " | 60 | " | 60 | " | 1 | " | 2 | " | 1 | 2 | 51 | 3 | 7 | " | 1 | 8 | " | 1 | 1 | " | " |
| Toledo | 13 | 1.740 | 2 | 1.755 | 15 | 53 | 1.003 | 71 | 4 | 35 | 17 | 264 | 293 | 131 | 15 | 11 | 157 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Valencia | " | 1.903 | " | 1.903 | " | 87 | 33 | 102 | " | 72 | 28 | 1.275 | 306 | 252 | 22 | 17 | 291 | " | " | " | " | " |
| Valladolid | " | 449 | " | 449 | " | 38 | 15 | 22 | 3 | 21 | 10 | 110 | 230 | 124 | 6 | 6 | 136 | 1 | 20 | 5 | 3 | 13 |
| Vizcaya | " | 606 | " | 606 | " | 2 | 24 | 29 | 2 | 26 | 32 | 460 | 31 | 29 | 29 | 8 | 66 | 3 | " | " | " | " |
| Zamora | " | 199 | " | 199 | 1 | 7 | 11 | 9 | 1 | 5 | 7 | 142 | 16 | 99 | 16 | 4 | 119 | 14 | 6 | 4 | 19 | 1 |
| Zaragoza | " | 680 | " | 680 | " | " | " | 4 | 7 | 22 | " | 496 | 151 | 369 | 42 | 84 | 495 | " | 69 | 49 | 12 | 8 |
| TOTAL | 294 | 44.569 | 2 | 44.865 | 88 | 1.578 | 8.344 | 1.820 | 185 | 1.424 | 888 | 22.119 | 8.400 | 9.179 | 1.338 | 977 | 11.494 | 182 | 529 | 302 | 148 | 1.322 |

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*Diligencias previas del Artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.*

| AUDIENCIAS | Pendientes en 1.º de enero de 1981 | Iniciadas del 1.º enero a 31 diciembre 1981 | Reabiertas de años anteriores | Total de las tres casillas anteriores | TERMINADAS DURANTE 1981, POR | | | | | | | Pendientes en 1.º enero 1982 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Acumulación | Archivo por no ser delito el hecho (art. 789/1.º) | Sobreseídas por no ser conocido el autor (art. 789/1.º) | Declaradas falta (art. 789/2.º) | Inhibidas conforme al art. 789/3.º | Convertidas en sumario (art. 789/4.º) | Elevadas a preparatorias (art. 789/5.º) | |
| Alava | 1.180 | 4.216 | 15 | 5.411 | 49 | 337 | 1.969 | 1.143 | 154 | 137 | 285 | 1.337 |
| Albacete | 865 | 3.292 | 11 | 4.168 | 23 | 394 | 1.414 | 598 | 57 | 124 | 455 | 767 |
| Alicante | 5.239 | 24.442 | " | 29.681 | 124 | 1.569 | 15.474 | 2.542 | 908 | 1.718 | 1.985 | 5.361 |
| Almería | 1.124 | 6.470 | 23 | 7.617 | 37 | 838 | 2.765 | 1.115 | 187 | 328 | 523 | 1.425 |
| Asturias | 2.117 | 16.754 | 62 | 18.933 | 251 | 2.156 | 9.248 | 2.802 | 258 | 475 | 1.783 | 1.960 |
| Avila | 652 | 2.355 | 4 | 3.011 | 16 | 504 | 1.120 | 305 | 31 | 30 | 192 | 813 |
| Badajoz | 1.148 | 8.122 | 12 | 9.282 | 73 | 1.531 | 2.447 | 1.972 | 770 | 314 | 488 | 1.081 |
| Baleares | 3.032 | 18.178 | 36 | 21.246 | 26 | 1.615 | 13.139 | 1.418 | 249 | 78 | 943 | 3.778 |
| Barcelona | 28.154 | 103.328 | 1.915 | 133.397 | 1.514 | 18.102 | 58.224 | 7.718 | 6.604 | 3.280 | 6.241 | 28.753 |
| Burgos | 597 | 2.889 | 7 | 3.493 | 24 | 590 | 697 | 950 | 101 | 136 | 373 | 622 |
| Cáceres | 656 | 3.590 | 34 | 4.280 | 65 | 521 | 1.487 | 938 | 339 | 120 | 225 | 585 |
| Cádiz | 7.362 | 19.462 | " | 26.824 | " | 1.846 | 10.248 | 2.004 | 416 | 2.420 | 1.420 | 7.135 |
| Castellón | 830 | 6.523 | 29 | 7.382 | 46 | 601 | 3.794 | 362 | 79 | 149 | 962 | 1.007 |
| Ciudad Real | 844 | 5.129 | " | 5.973 | 90 | 763 | 2.081 | 1.054 | 185 | 186 | 364 | 934 |
| Córdoba | 1.101 | 12.497 | 367 | 13.965 | 47 | 1.855 | 5.502 | 2.851 | 558 | 368 | 513 | 2.271 |
| Coruña (La) | 2.817 | 11.381 | 131 | 14.329 | 216 | 2.488 | 4.615 | 2.476 | 413 | 594 | 1.560 | 1.967 |
| Cuenca | 629 | 1.805 | 2 | 2.436 | 21 | 237 | 594 | 404 | 66 | 73 | 270 | 650 |
| Gerona | 4.758 | 15.471 | 1 | 20.230 | 84 | 318 | 9.699 | 2.196 | 155 | 185 | 664 | 6.785 |
| Granada | 3.515 | 12.639 | 109 | 16.263 | 128 | 1.720 | 7.203 | 1.919 | 633 | 710 | 1.367 | 1.769 |
| Guadalajara | 775 | 2.019 | 9 | 2.803 | 43 | 257 | 832 | 381 | 41 | 181 | 166 | 755 |
| Guipúzcoa | 4.921 | 11.353 | " | 16.274 | " | 761 | 8.279 | 2.614 | 302 | 349 | 674 | 3.295 |
| Huelva | 2.054 | 6.662 | 7 | 8.723 | 24 | 995 | 3.021 | 1.140 | 137 | 232 | 518 | 703 |
| Huesca | 471 | 2.312 | 13 | 2.796 | 66 | 551 | 474 | 409 | 40 | 83 | 550 | 623 |
| Jaén | 2.503 | 8.576 | 38 | 11.117 | 74 | 2.260 | 3.614 | 1.247 | 229 | 166 | 85 | 2.968 |
| Las Palmas | 11.945 | 18.376 | 306 | 30.627 | 60 | 2.994 | 11.589 | 1.821 | 276 | 719 | 2.054 | 11.114 |
| León | 1.073 | 6.199 | 74 | 7.346 | 43 | 1.109 | 2.519 | 1.564 | 168 | 241 | 574 | 745 |
| Lérida | 1.062 | 4.917 | 2 | 5.981 | 18 | 736 | 2.476 | 1.105 | 73 | 89 | 388 | 1.096 |
| Logroño | 367 | 3.572 | 14 | 3.953 | 29 | 443 | 2.230 | 467 | 88 | 115 | 218 | 363 |
| Lugo | 954 | 4.896 | 43 | 5.893 | 48 | 611 | 1.887 | 1.674 | 82 | 151 | 477 | 748 |
| Madrid | 10.879 | 103.211 | 401 | 114.491 | 217 | 12.587 | 69.645 | 7.161 | 2.409 | 2.683 | 4.874 | 13.790 |
| Málaga | 7.380 | 32.769 | " | 40.149 | 130 | 3.179 | 20.923 | 2.871 | 572 | 1.056 | 1.792 | 9.626 |
| Murcia | 2.723 | 12.372 | 51 | 15.146 | 72 | 1.175 | 6.691 | 1.235 | 234 | 516 | 1.339 | 2.990 |
| Navarra | 988 | 8.186 | 40 | 9.214 | 45 | 580 | 4.852 | 1.453 | 143 | 260 | 423 | 1.152 |
| Orense | 1.516 | 5.659 | 15 | 7.190 | 362 | 1.284 | 1.308 | 1.858 | 607 | 197 | 311 | 1.263 |
| Palencia | 318 | 3.204 | " | 3.522 | 15 | 269 | 1.695 | 665 | 51 | 166 | 200 | 383 |
| Pontevedra | 2.633 | 14.094 | " | 16.727 | " | 1.558 | 6.729 | 3.982 | 305 | 412 | 1.439 | 2.302 |
| Salamanca | 225 | 4.443 | 35 | 4.703 | 12 | 643 | 2.740 | 312 | 53 | 142 | 244 | 244 |
| Santa Cruz de Tenerife | 2.786 | 11.747 | 88 | 14.621 | 22 | 1.907 | 5.728 | 2.127 | 237 | 631 | 668 | 2.764 |
| Santander | 1.282 | 7.954 | 87 | 9.323 | 58 | 562 | 5.360 | 1.173 | 73 | 286 | 583 | 1.228 |
| Segovia | 367 | 1.177 | " | 1.544 | 7 | 437 | 385 | 169 | 21 | 58 | 143 | 324 |
| Sevilla | 11.993 | 39.520 | 432 | 51.945 | 612 | 8.930 | 15.166 | 9.023 | 3.790 | 1.401 | 4.845 | 8.178 |
| Soria | 461 | 1.157 | 1 | 1.619 | 14 | 317 | 428 | 216 | 46 | 85 | 153 | 323 |
| Tarragona | 1.463 | 16.094 | 31 | 17.588 | 486 | 1.126 | 9.968 | 2.150 | 65 | 386 | 863 | 2.544 |
| Teruel | 1.101 | 1.491 | " | 2.592 | 20 | 652 | 662 | 542 | 43 | 36 | 262 | 315 |
| Toledo | 1.178 | 2.438 | 31 | 3.647 | 25 | 551 | 455 | 791 | 69 | 236 | 484 | 968 |
| Valencia | 5.955 | 39.827 | 870 | 46.652 | 825 | 7.650 | 21.430 | 5.358 | 756 | 1.087 | 3.208 | 4.520 |
| Valladolid | 939 | 7.840 | 168 | 8.947 | 98 | 752 | 4.456 | 940 | 82 | 295 | 533 | 1.393 |
| Vizcaya | 2.237 | 20.594 | 1 | 22.832 | 178 | 3.421 | 10.259 | 3.833 | 539 | 282 | 808 | 2.906 |
| Zamora | 365 | 2.557 | 27 | 2.949 | 19 | 697 | 740 | 725 | 64 | 114 | 245 | 345 |
| Zaragoza | 1.431 | 13.425 | 36 | 14.892 | 79 | 2.303 | 6.632 | 2.412 | 262 | 154 | 1.329 | 1.721 |
| Audiencia Nacional | 215 | 1.169 | " | 1.384 | 12 | 273 | 509 | " | 85 | 235 | 38 | 232 |
| TOTAL | 151.180 | 698.353 | 5.578 | 855.111 | 6.547 | 99.555 | 385.402 | 96.185 | 24.105 | 24.469 | 51.101 | 150.921 |

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*Diligencias preparatorias.*

A. Trámite.

B. Sentencias y recursos.

| PROVINCIAS | Pendientes en 1.º enero 1981 | Instruidas entre 1.º enero y 31 diciembre 1981 | Reabiertas de años anteriores | Total de las tres casillas anteriores | Acumuladas | Sobreseimiento por no considerar delictivo el hecho o no probarse su realización (arts. 637/1.º y 2.º y 641/1.º) | Sobreseimiento por estar exentos de responsabilidad penal los autores o no haberse descubierto éstos (arts. 637/3.º y 641/2.º) | Abierto el juicio oral | Convertidas en sumario (art. 791/4.º) | En trámite en 1.º enero 1982 | CONDENATORIAS | | Absolutorias | TOTAL sentencias | Recurridos por el Fiscal | Recurridos por las partes | SENTENCIAS 2.ª INSTANCIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Conformes Fiscal | Disconformes | | | | | Confirmando | Revocando | Pendientes de sentencia |
| Alava | 83 | 285 | " | 368 | " | 43 | 8 | 210 | 15 | 92 | 180 | 53 | 11 | 244 | 2 | 54 | 42 | 10 | 4 |
| Albacete | 349 | 469 | " | 818 | 1 | 162 | " | 386 | 35 | 223 | 336 | 49 | 23 | 408 | 7 | 51 | 35 | 12 | 23 |
| Alicante | 494 | 1.985 | " | 2.479 | " | 182 | 30 | 1.499 | 81 | 2.214 | 873 | 215 | 310 | 1.398 | 14 | 81 | 93 | 26 | 21 |
| Almería | 319 | 610 | 5 | 934 | " | 153 | 12 | 438 | 71 | 233 | 377 | 59 | 36 | 472 | 3 | 42 | 36 | 9 | " |
| Asturias | 503 | 1.055 | 19 | 1.577 | " | 108 | 8 | 1.093 | 45 | 323 | 954 | 341 | 121 | 1.416 | 37 | 167 | 135 | 69 | " |
| Avila | 19 | 171 | " | 190 | " | 13 | 41 | 119 | 6 | 11 | 95 | 18 | 9 | 122 | 5 | 18 | 6 | 7 | 10 |
| Badajoz | 70 | 529 | " | 599 | 3 | 74 | 8 | 421 | 26 | 39 | 465 | 135 | 56 | 656 | 16 | 64 | 52 | 17 | 11 |
| Baleares | 1.054 | 1.045 | 25 | 2.124 | 3 | 209 | 342 | 661 | 92 | 817 | 636 | 89 | 84 | 809 | 34 | 54 | 55 | 33 | " |
| Barcelona | 3.004 | 6.303 | 68 | 9.375 | 31 | 568 | 983 | 4.694 | 210 | 2.435 | 2.630 | 710 | 477 | 3.817 | 70 | 467 | 227 | 120 | 180 |
| Burgos | 160 | 386 | 3 | 549 | " | 60 | 62 | 295 | 56 | 76 | 325 | 53 | 33 | 411 | 22 | 76 | 68 | 51 | 40 |
| Cáceres | 69 | 240 | 6 | 315 | 6 | 52 | 3 | 177 | 19 | 58 | 186 | 26 | 4 | 216 | 4 | 21 | 7 | 11 | 7 |
| Cádiz | 929 | 1.568 | " | 2.497 | " | 279 | 49 | 1.339 | 98 | 666 | 1.219 | 129 | 106 | 1.454 | 54 | 68 | 49 | 24 | 49 |
| Castellón | 151 | 973 | " | 1.124 | " | 338 | 40 | 541 | 60 | 131 | 261 | 213 | 41 | 515 | 2 | 38 | 17 | 7 | 15 |
| Ciudad Real | 268 | 364 | " | 632 | " | 60 | 9 | 367 | 29 | 167 | 349 | 57 | 42 | 448 | 11 | 44 | 27 | 13 | 15 |
| Córdoba | 205 | 513 | 12 | 730 | 1 | " | 12 | 494 | " | 223 | 189 | 297 | 77 | 563 | 102 | 33 | 61 | 22 | 52 |
| Coruña (La) | 979 | 1.065 | 48 | 2.092 | 34 | 98 | 219 | 1.173 | 45 | 523 | 792 | 118 | 71 | 981 | 11 | 101 | 83 | 15 | 14 |
| Cuenca | 80 | 292 | 2 | 374 | 1 | 26 | 46 | 234 | 8 | 59 | 212 | 19 | 12 | 243 | 15 | 34 | 25 | 17 | 7 |
| Gerona | 275 | 913 | 2 | 1.190 | 1 | 164 | 31 | 719 | 39 | 236 | 450 | 144 | 81 | 675 | 10 | 60 | 33 | 18 | 19 |
| Granada | 345 | 1.390 | 5 | 1.740 | 1 | 309 | 16 | 975 | 40 | 382 | 649 | 156 | 48 | 853 | 18 | 68 | 35 | 27 | 24 |
| Guadalajara | 17 | 166 | 4 | 187 | " | 17 | 2 | 158 | 3 | 7 | 129 | 38 | 17 | 184 | 12 | 22 | 23 | 3 | 8 |
| Guipúzcoa | 171 | 679 | 466 | 1.316 | " | 39 | 29 | 698 | 349 | 201 | 172 | 223 | 45 | 440 | 3 | 69 | 41 | 18 | 13 |
| Huelva | 398 | 579 | " | 977 | 1 | 95 | 12 | 436 | 28 | 62 | 438 | 84 | 62 | 584 | 11 | 60 | 39 | 15 | 12 |
| Huesca | 114 | 485 | " | 599 | 1 | 115 | 10 | 331 | 22 | 115 | 199 | 83 | 27 | 309 | 15 | 45 | 34 | 14 | 11 |
| Jaén | 86 | 379 | " | 465 | 2 | 11 | 1 | 318 | 6 | 127 | 424 | 80 | 50 | 554 | 2 | 73 | 47 | 28 | " |
| Las Palmas | 994 | 1.741 | 3 | 2.738 | 2 | 97 | 141 | 1.573 | 41 | 731 | 781 | 84 | 81 | 946 | 1 | 21 | 15 | 7 | " |
| León | 148 | 574 | " | 722 | " | 83 | 15 | 525 | 22 | 77 | 429 | 50 | 16 | 495 | 4 | 118 | 42 | 28 | 52 |
| Lérida | 574 | 407 | 3 | 984 | 15 | 155 | 74 | 351 | 19 | 370 | 231 | 75 | 21 | 327 | 9 | 38 | 25 | 18 | 4 |
| Logroño | 48 | 221 | " | 269 | 6 | 34 | 1 | 178 | 10 | 40 | 208 | 38 | 24 | 270 | 17 | 43 | 44 | 14 | 2 |
| Lugo | 158 | 537 | " | 695 | 2 | 102 | 8 | 491 | 14 | 76 | 353 | 72 | 38 | 463 | 13 | 80 | 77 | 27 | 21 |
| Madrid | 1.851 | 5.236 | 40 | 7.127 | 3 | 635 | 385 | 4.188 | 331 | 1.464 | 2.729 | 154 | 676 | 3.559 | 15 | 141 | 99 | 35 | 629 |
| Málaga | 1.241 | 1.720 | 90 | 3.051 | " | 74 | 386 | 1.498 | 40 | 1.053 | 1.562 | 178 | 104 | 1.844 | 27 | 131 | 97 | 61 | " |
| Murcia | 1.994 | 1.343 | 16 | 3.353 | 8 | 141 | 46 | 1.339 | 58 | 1.761 | 853 | 255 | 106 | 1.214 | 12 | 154 | 100 | 66 | " |
| Navarra | 68 | 434 | 2 | 504 | " | 16 | 42 | 353 | 19 | 51 | 252 | 143 | 31 | 426 | 4 | 55 | 42 | 34 | 2 |
| Orense | 102 | 311 | 2 | 415 | " | 19 | 4 | 278 | 5 | 109 | 124 | 73 | 17 | 214 | 6 | 34 | 22 | 9 | 9 |
| Palencia | 34 | 168 | 1 | 203 | " | 7 | 3 | 144 | 16 | 12 | 164 | 34 | 19 | 217 | 3 | 49 | 30 | 20 | 2 |
| Pontevedra | 1.052 | 2.390 | " | 3.442 | " | 438 | 92 | 1.851 | 77 | 984 | 842 | 45 | 55 | 942 | 19 | 101 | 59 | 35 | 14 |
| Salamanca | 248 | 244 | 6 | 498 | 3 | 53 | 7 | 250 | 142 | 43 | 203 | 84 | 24 | 311 | 11 | 66 | 60 | 19 | 13 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1.363 | 668 | 39 | 2.070 | 5 | 107 | 42 | 715 | 64 | 1.137 | 864 | 142 | 145 | 1.151 | 14 | 51 | 55 | 5 | 6 |
| Santander | 259 | 583 | 18 | 860 | " | 61 | 18 | 594 | 23 | 164 | 431 | 97 | 40 | 568 | 18 | 76 | 74 | 13 | 54 |
| Segovia | 14 | 143 | " | 157 | " | 5 | 17 | 121 | 5 | 9 | 95 | 36 | 2 | 133 | " | 15 | 13 | 2 | " |
| Sevilla | 778 | 3.341 | 15 | 4.134 | 8 | 727 | 141 | 2.168 | 161 | 929 | 1.469 | 373 | 202 | 2.044 | 97 | 213 | 184 | 57 | 69 |
| Soria | 83 | 158 | " | 241 | " | 37 | " | 167 | 10 | 22 | 124 | 67 | 2 | 193 | 22 | 33 | 20 | 21 | 14 |
| Tarragona | 195 | 863 | 2 | 1.060 | " | 39 | 169 | 706 | 25 | 121 | 705 | 131 | 67 | 903 | 10 | 111 | 69 | 33 | " |
| Teruel | 332 | 252 | " | 584 | " | 50 | 68 | 317 | 5 | 144 | 186 | 84 | 24 | 294 | 5 | 35 | 28 | 7 | 5 |
| Toledo | 260 | 504 | 40 | 804 | 3 | 133 | 16 | 345 | 27 | 268 | 302 | 54 | 30 | 386 | 6 | 24 | 28 | 8 | 4 |
| Valencia | 1.181 | 3.249 | 74 | 4.504 | 41 | 831 | 941 | 1.552 | 330 | 740 | 1.722 | 404 | 237 | 2.363 | 25 | 169 | 160 | 34 | 197 |
| Valladolid | 265 | 744 | 15 | 1.024 | 2 | 20 | 191 | 386 | 27 | 398 | 650 | 116 | 43 | 809 | 16 | 104 | 173 | 45 | 69 |
| Vizcaya | 299 | 808 | " | 1.107 | " | 35 | 65 | 716 | 43 | 248 | 638 | 88 | 180 | 906 | 14 | 64 | 56 | 18 | 4 |
| Zamora | 61 | 245 | " | 306 | 3 | 9 | 31 | 226 | 8 | 29 | 205 | 43 | 11 | 259 | 12 | 44 | 34 | 14 | 8 |
| Zaragoza | 144 | 1.721 | 24 | 1.889 | " | 90 | 148 | 1.188 | 64 | 399 | 700 | 92 | 86 | 878 | " | 146 | 100 | 34 | 12 |
| Audiencia Nacional | 28 | 45 | " | 73 | " | 19 | 9 | 36 | 1 | 8 | 21 | 6 | 9 | 36 | 2 | 7 | 8 | 1 | " |
| TOTAL | 23.916 | 51.094 | 1.055 | 76.065 | 187 | 7.192 | 5.033 | 40.032 | 2.970 | 20.807 | 29.383 | 6.407 | 4.133 | 39.923 | 862 | 3.933 | 2.984 | 1.251 | 1.725 |

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*Sumarios de Urgencia.*

A. Trámite en el Juzgado.

B. Trámite en la Audiencia.

| AUDIENCIAS | Pendientes en 1.º enero 1981 | Incoados entre 1.º enero y 31 diciembre 1981 | Reabiertos de años anteriores | Total de las tres casillas anteriores | Acumulados | Sobreseimiento del n.º 1 del art. 641 (Art. 795) | Sobreseimiento del n.º2 del art. 641 (Art. 795) | Archivados por rebeldía | Declarados falta | Inhibidos | Conclusos elevados a la Audiencia | En trámite en el Juzgado en 31 de diciembre de 1981 | | Sobreseimiento por no considerar delictivo el hecho o no probarse su realización (arts. 637/1.º y 2.º y 641/1.º) | Sobreseimiento por estar exentos de responsabilidad penal los autores o no haberse descubierto éstos (arts. 637/3.º y 641/2.º) | Aperturas de juicio oral | Extinción de responsabilidad | SENTENCIAS DICTADAS | | | | RECURSOS DE CASACION | | Pendientes en la Audiencia en 31 diciembre 1981 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Con procesado | Sin procesado | | | | | CONDENATORIAS | | Absolutorias | TOTAL | Preparados por el Fiscal | Preparados por las partes | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Conformes Fiscal | Disconformes | | | | | |
| Alava | 56 | 135 | 1 | 192 | " | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 119 | 48 | 3 | " | " | 111 | 3 | 65 | 26 | 9 | 100 | 1 | 23 | 19 |
| Albacete | 42 | 117 | 10 | 169 | " | 11 | 1 | 8 | 1 | " | 101 | 29 | 16 | 9 | 5 | 103 | " | 67 | 19 | 3 | 89 | " | 15 | 13 |
| Alicante | 295 | 611 | " | 906 | 2 | 49 | 34 | " | 2 | " | 482 | 175 | 162 | 8 | 42 | 459 | 17 | 183 | 199 | 29 | 411 | 2 | 19 | 545 |
| Almería | 204 | 302 | 4 | 510 | " | 8 | 3 | 32 | 1 | 11 | 261 | 91 | 103 | 36 | 8 | 208 | 9 | 141 | 37 | 15 | 193 | 1 | 31 | " |
| Asturias | 166 | 762 | 12 | 940 | " | 151 | 52 | 18 | 26 | 28 | 458 | 14 | 193 | 82 | 23 | 349 | 4 | 238 | 181 | 84 | 503 | " | 71 | 187 |
| Avila | 8 | 66 | " | 74 | 3 | 5 | 3 | " | " | 2 | 18 | " | 43 | 1 | " | 11 | 8 | 13 | 2 | 3 | 18 | " | 2 | " |
| Badajoz | 120 | 272 | 3 | 395 | " | 10 | 3 | 3 | " | " | 300 | 48 | 31 | 18 | 3 | 263 | 3 | 194 | 77 | 15 | 286 | 3 | 53 | 74 |
| Baleares | 431 | 983 | 10 | 1.424 | 8 | 172 | 429 | 72 | 31 | 18 | 307 | 131 | 256 | 65 | 142 | 369 | 2 | 258 | 117 | 57 | 432 | 2 | 36 | 296 |
| Barcelona | 3.104 | 3.074 | 23 | 6.201 | 15 | 248 | 504 | 216 | 78 | 21 | 2.154 | 1.977 | 988 | 28 | 62 | 2.189 | 19 | 931 | 323 | 220 | 1.474 | 5 | 206 | 2.704 |
| Burgos | 87 | 469 | 2 | 558 | 4 | 152 | 22 | 18 | 8 | 8 | 264 | 14 | 68 | 40 | 23 | 178 | 6 | 131 | 27 | 10 | 168 | 4 | 38 | 28 |
| Cáceres | 83 | 226 | 1 | 310 | " | 31 | 25 | 6 | 1 | 5 | 112 | 14 | 116 | " | 1 | 110 | 4 | 84 | 25 | 4 | 113 | 1 | 13 | 10 |
| Cádiz | 740 | 2.825 | " | 3.565 | 7 | 126 | 797 | " | 1 | 8 | 1.879 | 714 | 415 | 187 | 62 | 1.139 | 23 | 672 | 41 | 48 | 761 | 1 | 45 | 635 |
| Castellón | 124 | 335 | 40 | 499 | " | 38 | 5 | 25 | 8 | 2 | 214 | 71 | 132 | 37 | 9 | 161 | 7 | 77 | 72 | 13 | 162 | 1 | 53 | 147 |
| Ciudad Real | 75 | 177 | " | 252 | " | 18 | 3 | 11 | " | " | 143 | 20 | 57 | " | " | 142 | 2 | 76 | 33 | 28 | 137 | " | 31 | 62 |
| Córdoba | 83 | 368 | 7 | 458 | " | 6 | 2 | 39 | 1 | " | 344 | 52 | 14 | 16 | 3 | 324 | " | 38 | 272 | 64 | 374 | 3 | 71 | 55 |
| Coruña (La) | 438 | 510 | 8 | 956 | 6 | 28 | 19 | 26 | 2 | " | 434 | 168 | 273 | 45 | 21 | 366 | 2 | 271 | 119 | 33 | 423 | 3 | 18 | 20 |
| Cuenca | 23 | 88 | 1 | 112 | 1 | 18 | 5 | 4 | 2 | " | 67 | 13 | 2 | " | 5 | 62 | " | 48 | 11 | 4 | 63 | 3 | 13 | 18 |
| Gerona | 65 | 361 | 9 | 435 | 5 | 73 | 2 | 22 | 9 | 18 | 214 | 53 | 39 | 21 | 48 | 172 | 9 | 133 | 36 | 34 | 203 | " | 25 | 29 |
| Granada | 121 | 584 | 2 | 707 | " | 6 | 2 | 38 | 11 | " | 475 | 102 | 66 | 22 | 7 | 401 | 1 | 333 | 60 | 37 | 430 | " | 64 | 44 |
| Guadalajara | 42 | 187 | 5 | 234 | " | 14 | 91 | 8 | " | " | 87 | 14 | 20 | 4 | " | 79 | 4 | 48 | 14 | 13 | 75 | " | 12 | 20 |
| Guipúzcoa | 246 | 405 | " | 651 | " | 59 | 18 | 31 | 9 | 13 | 305 | 187 | 29 | 48 | 50 | 241 | 10 | 101 | 15 | 31 | 147 | " | 13 | 298 |
| Huelva | 27 | 224 | " | 251 | " | 3 | 4 | 18 | " | 2 | 237 | 74 | 30 | 16 | 7 | 191 | 5 | 123 | 41 | 34 | 198 | " | 30 | 70 |
| Huesca | 57 | 353 | " | 410 | 4 | 18 | 143 | 6 | 5 | 4 | 114 | 30 | 81 | 4 | 3 | 97 | 3 | 62 | 27 | 6 | 95 | 1 | 14 | 7 |
| Jaén | 90 | 243 | 2 | 335 | " | 50 | 6 | 12 | 6 | " | 193 | 31 | 37 | 1 | " | 192 | " | 108 | 81 | 32 | 221 | " | 31 | 20 |
| Las Palmas | 270 | 570 | 18 | 858 | 1 | 14 | 4 | 63 | 9 | 5 | 500 | 169 | 93 | 20 | 3 | 390 | 10 | 175 | 124 | 46 | 345 | " | 21 | 117 |
| León | 151 | 285 | " | 436 | " | 10 | 2 | 17 | " | " | 279 | 36 | 92 | 21 | 4 | 254 | " | 129 | 38 | 14 | 181 | " | 19 | 125 |
| Lérida | 78 | 217 | 8 | 303 | 2 | 47 | 38 | 7 | 5 | 1 | 130 | 53 | 20 | 4 | 3 | 119 | 2 | 96 | 40 | 12 | 148 | 1 | 8 | 9 |
| Logroño | 57 | 132 | " | 189 | 3 | 16 | 11 | 2 | " | 1 | 88 | 29 | 39 | 7 | 3 | 78 | " | 73 | 8 | 6 | 87 | 1 | 1 | 10 |
| Lugo | 35 | 144 | 4 | 183 | " | 6 | " | 7 | " | 2 | 114 | 33 | 21 | 4 | 1 | 98 | 3 | 74 | 29 | 14 | 117 | " | 6 | 27 |
| Madrid | 1.414 | 3.241 | 35 | 4.690 | 7 | 202 | 67 | 199 | 34 | 29 | 2.812 | 826 | 509 | 207 | 166 | 2.115 | 13 | 1.503 | 224 | 357 | 2.084 | 14 | 168 | 311 |
| Málaga | 56 | 980 | 42 | 1.078 | 6 | 58 | 7 | 267 | 1 | " | 693 | 15 | 31 | 30 | 37 | 987 | " | 592 | 399 | 186 | 1.177 | 8 | 106 | " |
| Murcia | 209 | 578 | 26 | 813 | 1 | 17 | 12 | 19 | 1 | 3 | 528 | 149 | 83 | 17 | 12 | 494 | 5 | 220 | 86 | 72 | 378 | 2 | 23 | " |
| Navarra | 81 | 314 | 21 | 416 | " | 16 | 9 | 16 | 7 | " | 262 | 70 | 36 | 27 | 9 | 234 | 8 | 129 | 89 | 40 | 258 | 1 | 51 | 129 |
| Orense | 27 | 197 | 3 | 227 | " | 41 | 51 | 22 | " | " | 69 | 27 | 17 | 8 | 3 | 126 | 21 | 41 | 49 | 19 | 109 | " | 11 | 8 |
| Palencia | 31 | 99 | " | 130 | " | 4 | " | 4 | " | " | 85 | 15 | 20 | 12 | " | 73 | " | 57 | 11 | 17 | 85 | " | 13 | " |
| Pontevedra | 211 | 775 | " | 986 | " | 98 | 122 | 60 | 13 | 4 | 502 | 112 | 75 | 41 | 7 | 455 | 7 | 525 | 9 | 39 | 573 | 3 | 46 | 187 |
| Salamanca | 36 | 154 | 9 | 199 | 4 | 23 | 1 | 3 | " | " | 135 | 17 | 16 | 5 | 4 | 122 | 2 | 109 | 13 | 9 | 131 | 3 | 26 | 2 |
| Santa Cruz de Tenerife | 91 | 428 | 53 | 572 | " | 26 | 14 | 41 | 1 | " | 407 | 54 | 29 | 20 | 14 | 337 | 19 | 294 | 65 | 58 | 417 | 2 | 131 | 99 |
| Santander | 112 | 301 | 12 | 425 | " | 12 | 5 | 29 | " | " | 283 | 73 | 23 | 13 | 13 | 338 | 7 | 187 | 126 | 60 | 373 | 2 | 40 | 32 |
| Segovia | 12 | 27 | " | 39 | " | 5 | 4 | " | " | " | 21 | 4 | 5 | 5 | 4 | 27 | " | 23 | 4 | 1 | 28 | " | 7 | 11 |
| Sevilla | 475 | 1.668 | 11 | 2.154 | 2 | 86 | 627 | 2 | 6 | 6 | 1.292 | 101 | 32 | 14 | 60 | 563 | 20 | 237 | 46 | 53 | 336 | 3 | 64 | 298 |
| Soria | 47 | 114 | " | 161 | " | 25 | 16 | 4 | 2 | 2 | 64 | 13 | 34 | 11 | 1 | 51 | 1 | 24 | 18 | 3 | 45 | 3 | 8 | 16 |
| Tarragona | 111 | 386 | 195 | 692 | " | 25 | 5 | 46 | 3 | 1 | 445 | 122 | 28 | 5 | 5 | 391 | 4 | 270 | 64 | 46 | 380 | " | 57 | 69 |
| Teruel | 64 | 37 | " | 101 | " | 7 | 2 | 12 | 2 | " | 44 | 28 | 6 | " | " | 42 | " | 28 | 11 | 3 | 42 | " | 9 | " |
| Toledo | 149 | 933 | 8 | 1.090 | 5 | 33 | 652 | " | 18 | 6 | 236 | 61 | 66 | 26 | 19 | 166 | 1 | 58 | 39 | 12 | 109 | " | 14 | 68 |
| Valencia | 678 | 2.005 | 83 | 2.766 | 16 | 76 | 271 | 25 | 23 | 31 | 1.483 | 382 | 459 | 20 | 44 | 1.401 | 27 | 750 | 153 | 117 | 1.020 | 9 | 225 | 1.065 |
| Valladolid | 95 | 295 | 7 | 397 | 2 | 29 | 12 | 21 | " | 8 | 184 | 35 | 106 | 8 | 13 | 315 | 4 | 213 | 84 | 34 | 331 | 8 | 57 | 103 |
| Vizcaya | 235 | 757 | " | 992 | " | 51 | 24 | 36 | 15 | 10 | 496 | 92 | 268 | 27 | 45 | 386 | 4 | 182 | 176 | 73 | 431 | " | 26 | 332 |
| Zamora | 39 | 109 | " | 148 | " | 4 | 7 | 1 | " | " | 114 | 9 | 13 | 2 | 3 | 82 | 1 | 70 | 22 | 4 | 96 | 1 | 12 | 12 |
| Zaragoza | 237 | 1.377 | 29 | 1.643 | 15 | 309 | 442 | 72 | 38 | 22 | 536 | 80 | 129 | 22 | 55 | 423 | " | 257 | 64 | 99 | 420 | " | 67 | 36 |
| Audiencia Nacional | 115 | 643 | 3 | 761 | 26 | 107 | 20 | 16 | 4 | 18 | 361 | 133 | 76 | 57 | 5 | 467 | 2 | 103 | 143 | 31 | 277 | 6 | 10 | 126 |
| TOTAL | 11.843 | 30.443 | 707 | 42.993 | 145 | 2.643 | 4.600 | 1.616 | 387 | 292 | 21.445 | 6.808 | 5.500 | 1.321 | 1.057 | 18.551 | 302 | 10.814 | 3.989 | 2.251 | 17.054 | 98 | 2.153 | 8.493 |

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*Sumarios ordinarios y los especiales del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (excepto Título III).*

A. En el Juzgado.

B. En la Audiencia.

| AUDIENCIAS | Pendientes en 1.º enero 1981 | Incoados entre 1.º enero y 31 diciembre 1981 | Reabiertas de años anteriores | Total de las tres casillas anteriores | Acumuladas | Archivados por rebeldía | Declarados falta (624) | Inhibidos | Elevados a la Audiencia con auto de conclusión | Pendientes en 31 diciembre 1981 | Sobreseimiento por no considerar delictivo el hecho o no probarse su realización (arts. 637/1.º y 2.º y 641/1.º) | Sobreseimiento por estar exento de responsabilidad penal los autores o no haberse descubierto éstos (arts. 637/3.º y 641/2.º) | Aperturas de juicio oral | Extinción de responsabilidad | SENTENCIAS DICTADAS | | | | RECURSO DE CASACION | | Pendientes en 31 diciembre 1981 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | CONDENATORIAS | | Absolutorias | TOTAL | Preparados por el Fiscal | Preparados por las partes | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Conformes Fiscal | Disconformes | | | | | |
| Alava | 16 | 24 | " | 40 | 1 | 2 | " | 3 | 19 | 15 | " | 1 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1 | 17 | " | 2 | 5 |
| Albacete | 20 | 58 | " | 78 | " | 1 | " | 1 | 50 | 26 | 6 | 6 | 40 | " | 18 | 9 | 1 | 28 | " | 11 | 10 |
| Alicante | 73 | 220 | " | 293 | " | 9 | " | 4 | 141 | 139 | 39 | 31 | 98 | 2 | 29 | 42 | 6 | 77 | " | 8 | 5 |
| Almería | 44 | 170 | 3 | 217 | " | 2 | " | " | 144 | 71 | 90 | 5 | 43 | 6 | 41 | 11 | 12 | 64 | " | 17 | " |
| Asturias | 138 | 394 | 8 | 540 | " | 11 | 7 | 6 | 355 | 161 | 211 | 35 | 93 | 16 | 185 | 60 | 12 | 257 | 1 | 11 | 140 |
| Avila | 11 | 65 | " | 76 | 1 | 2 | 3 | 2 | 38 | 30 | 33 | 2 | 8 | 1 | 1 | " | 1 | 2 | " | 1 | " |
| Badajoz | 36 | 104 | 7 | 147 | " | 1 | " | 3 | 95 | 48 | 19 | 3 | 71 | 1 | 55 | 14 | 6 | 75 | " | 11 | 42 |
| Baleares | 172 | 529 | 4 | 705 | 2 | 22 | 2 | 5 | 408 | 266 | 316 | 26 | 121 | 1 | 67 | 34 | 46 | 147 | 1 | 12 | 163 |
| Barcelona | 355 | 480 | 6 | 841 | 4 | 133 | 82 | 64 | 218 | 340 | 9 | 19 | 421 | 12 | 464 | 162 | 110 | 736 | 5 | 72 | 959 |
| Burgos | 23 | 70 | " | 93 | " | 1 | 3 | 2 | 60 | 27 | 5 | 4 | 31 | 4 | 17 | 5 | 4 | 26 | " | 11 | 15 |
| Cáceres | 42 | 94 | " | 136 | " | 2 | 1 | 2 | 96 | 35 | 58 | 10 | 28 | " | 16 | 5 | 2 | 23 | " | 9 | 3 |
| Cádiz | 226 | 598 | " | 824 | 3 | " | " | 12 | 518 | 391 | 98 | 39 | 287 | 3 | 132 | 5 | 13 | 150 | " | 10 | 566 |
| Castellón | 51 | 163 | " | 214 | " | 6 | " | " | 153 | 55 | 124 | 5 | 24 | " | 8 | 11 | 4 | 23 | 1 | 14 | 33 |
| Ciudad Real | 37 | 117 | " | 154 | " | 5 | " | " | 124 | 25 | 61 | 2 | 50 | " | 22 | 21 | 3 | 46 | 1 | " | 32 |
| Córdoba | 31 | 277 | 2 | 310 | " | 4 | " | 1 | 269 | 36 | 137 | 11 | 111 | 2 | 7 | 61 | 31 | 99 | 2 | 16 | 26 |
| Coruña (La) | 56 | 135 | " | 191 | 1 | 1 | " | 1 | 95 | 93 | 43 | 4 | 28 | 1 | 9 | 1 | 2 | 12 | 4 | 6 | 13 |
| Cuenca | 16 | 47 | " | 63 | 1 | " | " | " | 44 | 18 | 29 | " | 15 | " | 8 | 9 | 1 | 18 | 2 | 6 | 7 |
| Gerona | 234 | 196 | 4 | 434 | 6 | 2 | " | 1 | 150 | 275 | 17 | 4 | 127 | " | 22 | 6 | 6 | 34 | " | 12 | 11 |
| Granada | 47 | 254 | 3 | 304 | " | 7 | 2 | 1 | 240 | 53 | 98 | 21 | 95 | 3 | 53 | 19 | 10 | 82 | " | 26 | 23 |
| Guadalajara | 37 | 82 | 1 | 120 | " | 1 | 4 | " | 92 | 23 | 62 | " | 21 | " | 8 | 2 | 4 | 14 | " | 3 | 9 |
| Guipúzcoa | 39 | 99 | " | 138 | " | 2 | " | " | 65 | 71 | 6 | 4 | 62 | " | 49 | 6 | 20 | 75 | " | 6 | 163 |
| Huelva | 14 | 78 | " | 92 | 1 | 5 | 2 | 2 | 69 | 13 | 14 | 5 | 44 | 2 | 17 | 2 | 7 | 26 | " | 10 | 10 |
| Huesca | 9 | 30 | " | 39 | " | 1 | " | " | 26 | 12 | 2 | " | 20 | " | 14 | 5 | 2 | 21 | " | " | 5 |
| Jaén | 46 | 129 | " | 175 | " | " | " | " | 117 | 58 | 59 | 1 | 56 | " | 30 | 24 | 8 | 62 | " | 14 | 69 |
| Las Palmas | 139 | 190 | 12 | 341 | " | 17 | 2 | 1 | 173 | 148 | 13 | 4 | 135 | 1 | 46 | 17 | 18 | 81 | " | 9 | 60 |
| León | 8 | 63 | " | 71 | " | 1 | " | " | 68 | 2 | 38 | " | 30 | " | 19 | 6 | 2 | 27 | " | 4 | 11 |
| Lérida | 18 | 52 | 4 | 74 | " | 1 | " | " | 45 | 28 | 23 | 1 | 16 | 1 | 11 | 10 | 4 | 25 | 1 | 3 | 4 |
| Logroño | 18 | 40 | " | 58 | " | 3 | " | " | 44 | 11 | 20 | 2 | 21 | 1 | 7 | " | 2 | 9 | " | 2 | 5 |
| Lugo | 14 | 36 | 2 | 52 | " | " | " | " | 35 | 17 | 3 | 1 | 19 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11 | " | 1 | 13 |
| Madrid | 301 | 658 | 5 | 964 | " | 51 | 18 | 9 | 588 | 298 | 126 | 95 | 283 | 7 | 42 | 10 | 16 | 68 | 3 | 32 | 77 |
| Málaga | 7 | 256 | 5 | 268 | " | 21 | " | " | 238 | 9 | 60 | 11 | 103 | 5 | 22 | 21 | 14 | 57 | 1 | 12 | " |
| Murcia | 60 | 182 | 7 | 249 | " | 10 | " | 1 | 169 | 69 | 12 | 2 | 160 | 5 | 27 | 14 | 11 | 52 | 1 | 7 | " |
| Navarra | 20 | 125 | 1 | 146 | " | 3 | 2 | 7 | 105 | 29 | 89 | 5 | 20 | 3 | 12 | 11 | 7 | 30 | " | 9 | 10 |
| Orense | 33 | 86 | 1 | 120 | " | 2 | " | " | 71 | 47 | 50 | 2 | 12 | 4 | 5 | 29 | 1 | 35 | " | 4 | 3 |
| Palencia | 17 | 28 | " | 45 | " | " | " | 1 | 28 | 16 | 7 | 2 | 18 | 1 | 9 | 2 | 5 | 16 | " | 5 | " |
| Pontevedra | 39 | 161 | " | 200 | " | 5 | " | " | 148 | 47 | 46 | 6 | 83 | 2 | 21 | " | 2 | 23 | " | 9 | 11 |
| Salamanca | 19 | 91 | 2 | 112 | 2 | " | " | " | 81 | 29 | 37 | 10 | 28 | 3 | 19 | 6 | 11 | 36 | 1 | 12 | 3 |
| Santa Cruz de Tenerife | 53 | 266 | 20 | 339 | " | 9 | 2 | 3 | 274 | 51 | 147 | 7 | 78 | 2 | 55 | 12 | 12 | 79 | 2 | 6 | 49 |
| Santander | 14 | 82 | 1 | 97 | " | 2 | " | 1 | 72 | 22 | 9 | 3 | 50 | 1 | 11 | 18 | 7 | 36 | 2 | 6 | 9 |
| Segovia | 11 | 31 | " | 42 | " | " | " | " | 32 | 10 | 19 | 3 | 1 | " | " | 1 | " | 1 | " | " | " |
| Sevilla | 411 | 568 | 6 | 985 | 1 | " | 3 | 9 | 660 | 312 | 357 | 90 | 211 | 8 | 102 | 84 | 32 | 218 | 3 | 61 | 192 |
| Soria | 20 | 41 | " | 61 | " | " | " | " | 38 | 23 | 24 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | " | 6 | 1 | 2 | 8 |
| Tarragona | 176 | 196 | " | 372 | " | 11 | " | " | 221 | 140 | 85 | 4 | 92 | 3 | 38 | 11 | 12 | 61 | 1 | 15 | 20 |
| Teruel | 4 | 5 | 7 | 16 | " | 1 | " | " | 7 | 8 | 1 | " | 3 | " | 1 | 2 | " | 3 | " | 2 | " |
| Toledo | 78 | 181 | " | 259 | 3 | 5 | " | 4 | 166 | 81 | 97 | 19 | 39 | 2 | 11 | 10 | 5 | 26 | " | 4 | 45 |
| Valencia | 389 | 352 | 16 | 757 | 3 | 17 | " | 4 | 469 | 264 | 10 | 32 | 318 | 4 | 167 | 62 | 56 | 285 | 3 | 53 | 420 |
| Valladolid | 27 | 87 | " | 114 | " | 3 | " | 2 | 55 | 54 | 9 | 4 | 28 | 2 | 31 | 16 | 6 | 53 | " | 15 | 11 |
| Vizcaya | 31 | 111 | " | 142 | 3 | 7 | " | 2 | 67 | 63 | 5 | 11 | 33 | 2 | 12 | 11 | 4 | 27 | " | 6 | 57 |
| Zamora | 4 | 22 | " | 26 | " | " | " | " | 23 | 3 | 2 | 3 | 15 | " | 8 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| Zaragoza | 59 | 424 | 5 | 488 | 2 | 14 | 7 | 12 | 391 | 62 | 215 | 75 | 123 | 2 | 14 | 27 | 15 | 56 | " | 22 | 67 |
| Audiencia Nacional | 52 | 91 | " | 143 | 10 | 5 | " | 1 | 84 | 43 | 11 | 7 | 129 | " | 16 | 28 | 16 | 60 | 4 | 3 | 51 |
| TOTAL | 3.795 | 8.838 | 132 | 12.765 | 44 | 408 | 140 | 167 | 7.938 | 4.167 | 3.051 | 640 | 3.961 | 120 | 1.998 | 934 | 575 | 3.507 | 41 | 594 | 3.438 |

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*Procedimientos delitos menores y flagrantes (Ley Orgánica 10/80) incoados en los Juzgados de las provincias, desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1981.*

| NATURALEZA DEL SUPUESTO DELITO | Alava | Albacete | Alicante | Almería | Asturias | Avila | Badajoz | Baleares | Barcelona | Burgos | Cáceres | Cádiz | Castellón | Ciudad Real | Córdoba | Coruña (La) | Cuenca | Gerona | Granada | Guadalajara | Guipúzcoa | Huelva | Huesca | Jaén | Las Palmas | León | Lérida | Logroño | Lugo | Madrid | Málaga | Murcia | Navarra | Orense | Palencia | Pontevedra | Salamanca | Santa Cruz de Tenerife | Santander | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Teruel | Toledo | Valencia | Valladolid | Vizcaya | Zamora | Zaragoza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Delitos contra la seguridad exterior del Estado | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| 2. Delitos contra la seguridad interior del Estado: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Contra el Jefe del Estado (Cap. I del Tít. II) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *b)* Contra la libertad religiosa (Cap. II) ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 2 |
| *c)* Atentados (Cap. VI) ... ... ... ... ... ... | 2 | 2 | 1 | 22 | 4 | 1 | 77 | 12 | 24 | 2 | 3 | 67 | " | 3 | " | " | " | " | " | " | 1 | 10 | " | 9 | " | " | 11 | 11 | 1 | 116 | 35 | 19 | " | 4 | " | 3 | 7 | " | 9 | " | 51 | 1 | 5 | 1 | 14 | " | 7 | 9 | 5 | 3 | 552 |
| *d)* Blasfemias (Cap. VII) ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 6 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 2 | 12 | " | " | " | 29 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 50 |
| *e)* Desacatos (Cap. VIII) ... ... ... ... ... | 2 | 20 | 34 | 16 | 6 | 1 | 1 | 23 | 18 | 11 | 7 | 22 | 20 | 6 | 30 | " | 2 | 1 | " | 8 | 4 | 38 | " | 11 | " | 5 | 5 | 10 | 5 | 50 | 56 | 38 | 6 | " | 15 | " | 6 | 21 | 11 | " | 98 | 2 | 24 | 3 | 10 | 34 | 15 | 9 | 6 | 25 | 735 |
| *f)* Tenencia de armas (Cap. XII) ... ... ... | 1 | 1 | 15 | " | " | " | " | " | 15 | " | " | " | " | " | " | " | " | 4 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 22 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | 6 | 1 | " | " | 67 |
| *g)* Otros ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 3 | " | 6 | " | " | 3 | 3 | 11 | 44 | 19 | 16 | 323 | " | 22 | " | 17 | 19 | 13 | 82 | " | 1 | 3 | " | 18 | 71 | 6 | " | 2 | 7 | 14 | 233 | 1 | 4 | 2 | " | 14 | 14 | " | 7 | " | " | " | " | " | 2 | " | " | 8 | " | " | 988 |
| 3. Falsedades: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* De moneda ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 |
| *b)* De documentos ... ... ... ... ... ... ... ... | " | 3 | 3 | " | " | 2 | " | 17 | 44 | " | " | 3 | 8 | 1 | " | 3 | 1 | 5 | " | " | 1 | 1 | 1 | 1 | " | 1 | 4 | " | 1 | 45 | 20 | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 10 | " | " | 2 | 3 | " | " | 4 | " | 1 | 186 |
| *c)* Delito fiscal ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 |
| *d)* Usurpación de funciones, uso indebido de nombre, etc. ... ... ... ... ... ... ... ... | " | 1 | 2 | " | " | " | 2 | " | 82 | 3 | 1 | 3 | " | " | " | 1 | 2 | " | " | " | " | 2 | " | 2 | 1 | " | " | " | " | 23 | 3 | 4 | " | " | " | " | " | " | " | 3 | " | 2 | " | 3 | " | 2 | 10 | 1 | " | " | 1 | 148 |
| *e)* Otras (Cap. I y III del Tít. III del C. P.) | " | 1 | " | " | " | " | " | " | 12 | 8 | " | " | " | " | " | 30 | " | 2 | 5 | " | " | " | " | 1 | 30 | " | " | " | " | 37 | " | " | " | " | " | 4 | " | " | 3 | " | 2 | " | 3 | " | 2 | " | 4 | " | " | " | 144 |
| 4. Delitos contra la Administración de Justicia ... | " | 3 | 8 | " | 8 | " | " | 6 | 8 | 26 | 5 | 9 | 4 | 34 | " | " | " | 1 | 35 | " | " | 1 | " | 4 | 5 | 8 | " | 4 | 2 | " | 4 | 2 | 2 | " | 2 | 9 | " | " | " | " | " | " | 5 | 2 | 6 | " | 3 | 1 | 2 | 3 | 212 |
| 5. Título V del Libro II: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Inhumación ilegal ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 |
| *b)* Violación de sepulturas o profanación de cadáveres ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 4 |
| *c)* Contra la salud pública: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Tráfico y comercio de drogas ... ... | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | " | " | " | 3 | 1 | " | " | " | 80 | 6 | " | 1 | " | " | " | " | " | 6 | 2 | " | " | " | 4 | " | " | " | 1 | " | 109 |
| II. Otros ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 5 | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | " | 1 | " | 1 | " | " | " | " | 14 |
| 6. Juegos ilícitos ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 1 | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 4 |
| 7. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Prevaricación ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *b)* Malversación ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 1 | " | " | 2 | 1 | " | " | 1 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 2 | 11 |
| *c)* Otros (Cap. II al IX y XII del Tít. VII del C. P.) ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | 22 | 1 | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | 1 | 1 | 2 | " | " | " | " | 22 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 52 |
| 8. Delitos contra las personas: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Homicidio ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *b)* Infanticidio ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *c)* Aborto ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *d)* Lesiones ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 2 | 16 | 15 | 10 | 49 | 6 | 48 | 62 | 283 | 63 | 58 | 39 | 16 | 23 | 37 | 157 | 8 | 14 | 54 | 6 | 23 | 50 | " | 33 | 26 | 50 | 10 | 27 | 10 | 194 | 29 | 67 | 12 | 12 | 16 | 33 | 26 | 31 | 25 | 1 | 72 | 2 | 32 | 13 | 41 | 50 | 28 | 59 | 19 | 37 | 1.994 |
| 9. Suicidios ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| 10. Delitos contra la honestidad ... ... ... ... ... | " | 1 | 2 | 12 | " | " | " | 6 | 4 | 2 | " | 3 | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | " | " | 1 | 9 | 3 | " | " | " | 6 | 3 | 2 | 2 | " | 1 | 2 | " | " | " | " | 4 | " | 1 | " | 3 | " | " | 4 | 2 | " | 76 |
| 11. Delitos contra el honor ... ... ... ... ... ... | " | " | 10 | " | " | " | " | " | 12 | 12 | " | " | " | " | " | " | 3 | 2 | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 3 | " | " | " | 46 |
| 12. Delitos contra el estado civil de las personas ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 7 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 9 |
| 13. Delitos contra la libertad y seguridad ... ... ... | 5 | " | 35 | 8 | 20 | 1 | 25 | 30 | 112 | 51 | 38 | 32 | 15 | 5 | 6 | 198 | 10 | 1 | 43 | 14 | 6 | 23 | 4 | 27 | 38 | 22 | 12 | 20 | 26 | 75 | 43 | 26 | 12 | 12 | 6 | 25 | 8 | 9 | 4 | " | 38 | " | 3 | 1 | 54 | 36 | 25 | 14 | 14 | 33 | 1.265 |
| 14. Delitos contra la propiedad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Robo ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 65 | 52 | 259 | 65 | 160 | 15 | 117 | 356 | 290 | 1.879 | 240 | 280 | 54 | 52 | 49 | 1.996 | 24 | 79 | 145 | 29 | 37 | 96 | 3 | 83 | 396 | 74 | 60 | 398 | 31 | 1.242 | 314 | 122 | 74 | 28 | 33 | 171 | 92 | 222 | 143 | 336 | 354 | 6 | 97 | 5 | 660 | 232 | 92 | 183 | 45 | 127 | 11.962 |
| *b)* Hurto ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 35 | 16 | 77 | 32 | 287 | 5 | 81 | 119 | 306 | 210 | 81 | 99 | 13 | 17 | 78 | 1.127 | 3 | 24 | 64 | 9 | 10 | 55 | 7 | 53 | 109 | 28 | 9 | 62 | 19 | 535 | 112 | 55 | 39 | 9 | 20 | 66 | 22 | 65 | 93 | 96 | 131 | 2 | 47 | 2 | 368 | 285 | 28 | 41 | 24 | 32 | 5.107 |
| *c)* Estafa ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 1 | 8 | 23 | 6 | 18 | " | 36 | 98 | 84 | 25 | 12 | 17 | 8 | 7 | 5 | 49 | 2 | 7 | 29 | " | 4 | 12 | 1 | 12 | 47 | 19 | 5 | 13 | 1 | 304 | 22 | 11 | 6 | 1 | 7 | 13 | 9 | 18 | 9 | 17 | 25 | 1 | 11 | 4 | 15 | 68 | 11 | 13 | 10 | 29 | 1.153 |
| *d)* Robo y hurto de uso ... ... ... ... ... ... | 20 | 16 | 43 | 39 | 88 | 15 | 44 | 125 | 175 | 675 | 97 | 60 | 24 | 12 | 74 | 747 | 10 | 13 | 29 | 11 | 13 | 35 | 4 | 49 | 96 | 18 | 26 | 501 | 8 | 202 | 58 | 53 | 43 | 13 | 14 | 75 | 51 | 44 | 30 | 126 | 83 | 4 | 49 | 4 | 26 | 404 | 45 | 60 | 5 | 63 | 4.519 |
| *e)* Cheque en descubierto ... ... ... ... ... | 15 | 15 | 41 | 25 | 55 | " | 21 | 219 | 398 | 32 | 21 | 39 | 24 | 12 | 49 | 54 | 9 | 68 | 69 | 9 | 9 | 26 | 2 | 26 | 188 | 29 | 13 | 34 | 9 | 301 | 30 | 79 | 21 | 6 | 7 | 34 | 11 | 98 | 18 | 17 | 52 | " | 76 | 2 | 45 | 380 | 27 | 39 | 10 | 98 | 2.862 |
| *f)* Otros ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 7 | 8 | 31 | 7 | 39 | 1 | 35 | 42 | 52 | 185 | 71 | 10 | 4 | 10 | 4 | 259 | " | 2 | 19 | " | 10 | 29 | 1 | 18 | 48 | 15 | 22 | 37 | 11 | 87 | 49 | 14 | 9 | 4 | 6 | 36 | 13 | 17 | 13 | 8 | 7 | 1 | 41 | 2 | 101 | 120 | 7 | 6 | " | 15 | 1.533 |
| 15. Imprudencia punible (no tráfico) ... ... ... | " | " | " | 3 | " | " | " | " | " | 2 | " | " | 3 | " | 1 | " | " | 3 | " | 5 | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 32 | " | " | " | " | " | " | " | " | 6 | 16 | 31 | " | " | " | 23 | " | " | " | " | " | 126 |
| 16. Delitos relativos al tráfico de automóviles: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Falsificación de matrícula (art. 279 bis) ... | " | " | 2 | 2 | 10 | " | 15 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | " | " | 1 | 2 | 1 | " | 2 | " | 3 | 3 | " | 1 | " | 1 | 6 | 7 | 15 | 1 | " | 2 | " | " | " | 3 | " | 6 | " | 10 | " | 1 | 50 | " | 2 | 1 | 1 | 172 |
| *b)* Quebrantamiento de condena (art. 334) ... | " | " | " | 10 | 3 | " | 8 | " | " | " | " | 3 | " | " | 3 | 6 | 1 | 4 | " | 2 | " | 3 | " | 1 | " | 4 | 5 | 2 | " | 8 | " | 3 | 1 | " | " | 1 | " | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | " | 2 | " | 4 | " | " | " | 10 | 102 |
| *c)* Conducción bajo influencia del alcohol o tóxicos (art. 340 bis, *a*, 1.º) ... ... ... ... | 15 | 35 | 48 | 25 | 123 | 5 | 53 | 25 | 45 | 8 | 26 | 32 | 104 | 5 | " | 15 | " | 5 | 54 | 8 | 2 | 35 | 2 | 73 | 298 | 5 | 56 | 3 | 36 | 78 | 59 | 92 | 41 | " | 16 | 10 | 5 | 133 | 72 | 10 | 40 | 4 | 78 | 4 | 16 | 39 | 22 | 6 | 3 | 32 | 1.901 |
| *d)* Conducción temeraria (art. 340 bis, *a*, 2.º) | " | " | 15 | " | 12 | 24 | 1 | 1 | 19 | 4 | " | " | " | " | " | " | 6 | 3 | " | " | " | " | " | 1 | 1 | " | " | 3 | " | 22 | " | " | " | 2 | " | 1 | " | " | 5 | " | 28 | " | " | " | 1 | 3 | " | " | 3 | 40 | 195 |
| *e)* Riesgos para la circulación (art. 340 bis, *b*) ... ... ... ... ... ... ... ... | 2 | " | " | " | 9 | " | " | 2 | 65 | 2 | " | " | " | " | 60 | 35 | " | 11 | " | " | " | " | " | 2 | 13 | " | " | " | " | 8 | " | 10 | " | " | " | 4 | " | 2 | 4 | " | 23 | " | " | " | " | " | " | 4 | " | " | 256 |
| *f)* Conducción sin permiso (art. 340 bis, *c*) | 33 | 72 | 211 | 48 | 212 | " | 97 | 214 | 214 | 76 | 54 | 295 | 74 | 71 | 32 | 127 | 42 | 91 | 86 | 25 | 46 | 107 | 29 | 162 | 749 | 64 | 90 | 35 | 47 | 398 | 132 | 312 | 38 | 22 | 36 | 81 | 34 | 406 | 56 | 27 | 214 | 11 | 124 | 7 | 213 | 71 | 66 | 80 | 45 | 66 | 5.842 |
| *g)* Omisión de socorro (art. 489 bis) ... ... | " | " | " | 2 | " | " | 1 | " | 148 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 3 | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 159 |
| *h)* Imprudencia (art. 565) ... ... ... ... ... | 4 | 11 | 5 | 10 | " | " | 1 | 14 | 316 | 9 | " | 31 | 2 | 6 | " | " | 1 | 1 | 13 | 3 | " | " | " | " | 17 | " | " | " | " | " | 12 | " | " | " | 2 | 2 | " | " | " | " | 24 | " | " | 1 | 7 | " | 8 | 62 | " | 18 | 580 |
| 17. Delitos definidos en Leyes especiales ... ... ... | " | 12 | 1 | 8 | 3 | " | 14 | 3 | " | 7 | 10 | 38 | 3 | 28 | 12 | 2 | 6 | 3 | 12 | 1 | " | 23 | 9 | 43 | 5 | " | 21 | 15 | " | 4 | " | 8 | 13 | 2 | 1 | 8 | " | 6 | 5 | 33 | 31 | 3 | 18 | 2 | 59 | 17 | " | " | 3 | 11 | 503 |
| 18. Hechos casuales ... ... ... ... ... ... ... ... | " | 1 | " | 25 | 19 | " | " | " | " | 17 | " | 18 | " | 1 | 14 | 44 | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 7 | 144 | " | " | " | 4 | " | " | 1 | " | " | 298 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL ... ... ... 43.942

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*Diligencias previas instruidas en las distintas provincias desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1981.*

| NATURALEZA DEL SUPUESTO DELITO | Alava | Albacete | Alicante | Almería | Asturias | Avila | Badajoz | Baleares | Barcelona | Burgos | Cáceres | Cádiz | Castellón | Ciudad Real | Córdoba | Coruña (La) | Cuenca | Gerona | Granada | Guadalajara | Guipúzcoa | Huelva | Huesca | Jaén | Las Palmas | León | Lérida | Logroño | Lugo | Madrid | Málaga | Murcia | Navarra | Orense | Palencia | Pontevedra | Salamanca | Santa Cruz de Tenerife | Santander | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Teruel | Toledo | Valencia | Valladolid | Vizcaya | Zamora | Zaragoza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Delitos contra la seguridad exterior del Estado | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 6 | 1 | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| 2. Delitos contra la seguridad interior del Estado: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Contra el Jefe del Estado (Cap. I del Tít. II) | 4 | " | 2 | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *b)* Contra la libertad religiosa (Cap. II) | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 6 | 4 | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *c)* Atentados (Cap. VI) | " | 4 | 19 | 60 | 8 | 2 | 113 | 24 | " | 10 | 4 | 85 | 1 | 14 | 102 | " | " | 5 | 7 | " | 15 | 2 | 1 | 14 | 39 | " | " | 14 | 4 | 217 | 34 | 24 | 1 | 4 | " | 13 | 2 | 58 | 20 | " | 207 | " | 25 | 2 | 17 | 98 | 9 | 19 | 15 | 22 |
| *d)* Blasfemias (Cap. VII) | " | " | 6 | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 4 | " | " | " | 1 | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " |
| *e)* Desacatos (Cap. VIII) | 70 | 51 | 67 | 25 | " | 14 | 5 | 68 | 88 | 11 | 18 | 28 | 19 | 33 | 30 | " | 3 | 10 | 57 | 11 | 21 | 75 | 14 | 23 | 92 | 20 | " | 7 | 6 | 153 | 107 | 125 | 66 | 8 | 25 | 14 | " | 84 | 24 | " | 260 | 6 | 70 | 16 | 8 | 201 | 71 | 25 | 17 | 48 |
| *f)* Tenencia de armas (Cap. XII) | 4 | 2 | 9 | " | " | 2 | 2 | " | " | 1 | 1 | 1 | " | 2 | 21 | 2 | " | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 10 | 9 | 7 | " | 5 | 7 | 350 | 22 | 11 | 16 | 11 | 2 | 11 | " | " | " | 1 | " | " | " | 1 | " | 19 | 28 | 3 | " | " |
| *g)* Otros | 21 | 6 | 37 | " | 10 | 11 | 10 | 9 | 120 | 9 | 21 | 279 | " | 75 | 8 | 40 | 13 | 56 | 61 | " | 87 | 27 | 8 | 85 | 219 | 23 | " | 3 | 51 | " | 206 | 8 | 82 | 18 | " | 172 | 6 | " | 30 | " | " | 1 | " | 3 | " | 1 | 4 | 252 | " | " |
| 3. Falsedades: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* De moneda | 1 | 2 | " | " | " | 1 | 6 | 14 | 18 | " | " | 22 | " | " | 4 | " | 1 | 1 | 1 | " | " | 1 | 3 | 1 | " | 1 | " | 10 | 2 | 11 | 17 | " | 2 | " | " | 1 | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | 23 | " | " | " | 1 |
| *b)* De documentos | 11 | 10 | 55 | 7 | 20 | 12 | 11 | 26 | 185 | 6 | 3 | 29 | 4 | 25 | 17 | 15 | 5 | 16 | 12 | " | 11 | 9 | 7 | 26 | 73 | 10 | 9 | 10 | 5 | 361 | 60 | 71 | 22 | 25 | 8 | 2 | " | 30 | 56 | 6 | " | 1 | 3 | 5 | 8 | 124 | 18 | 14 | 10 | 5 |
| *c)* Delito fiscal | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | 1 | " | 1 | " | " | " | 3 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | 6 | " | " | 7 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 |
| *d)* Usurpación de funciones, uso indebido de nombre, etc. | " | 4 | 27 | " | 10 | 3 | 11 | 7 | 92 | 4 | 2 | 19 | " | 3 | " | 1 | 3 | 9 | 8 | " | 4 | 7 | 2 | 35 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 62 | 27 | 20 | 3 | " | 2 | 14 | " | 2 | " | " | " | " | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | " | 4 |
| *e)* Otras (Cap. I y III del Tít. III del C. P.) | " | " | 8 | " | 1 | " | " | 9 | 245 | 6 | 2 | " | " | " | 20 | " | 24 | 18 | " | 3 | 13 | " | 1 | 13 | 6 | " | " | " | 84 | " | " | 1 | " | " | 49 | " | " | 34 | " | " | " | 25 | " | 1 | " | 6 | " | " | " |
| 4. Delitos contra la Administración de Justicia | 3 | 17 | 5 | " | 28 | 3 | 4 | 10 | 84 | 4 | 12 | 20 | " | 17 | 10 | " | " | 5 | 5 | " | " | " | 3 | 20 | 23 | 15 | " | 2 | 10 | 56 | 29 | 2 | 3 | 2 | " | 35 | " | " | 28 | " | " | 2 | 6 | 9 | 6 | 33 | 10 | 1 | 6 | 18 |
| 5. Título V del Libro II: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Inhumación ilegal | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 1 | 1 | " | " | 1 | 1 | " | 1 | " | 3 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " |
| *b)* Violación de sepulturas o profanación de cadáveres | " | 1 | " | " | 3 | " | " | 3 | 8 | " | " | " | " | " | 1 | 1 | " | 1 | 3 | " | " | " | 1 | " | " | 1 | " | 1 | " | " | 1 | " | " | " | 1 | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 3 | " | 1 | " | 1 |
| *c)* Contra la salud pública: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Tráfico y comercio de drogas | 35 | 7 | 63 | 10 | 85 | 11 | 13 | 36 | 220 | " | 2 | 180 | 1 | 28 | 101 | 57 | 5 | 39 | 36 | 10 | 2 | 23 | 5 | 90 | 200 | 3 | 4 | 28 | 6 | 751 | 239 | 124 | 44 | 18 | 7 | 35 | " | 5 | 11 | 5 | 118 | 4 | 8 | 14 | 16 | 160 | 63 | 37 | 22 | 6 |
| II. Otros | " | 7 | 40 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 260 | 13 | 7 | 12 | " | " | 12 | " | 1 | 6 | " | 8 | 107 | " | 2 | " | 17 | 12 | " | 14 | 5 | 593 | 1 | 12 | 2 | " | 5 | " | 5 | 29 | 25 | 15 | " | 6 | 43 | 11 | 17 | 5 | " | 2 | " | 12 |
| 6. Juegos ilícitos | " | 2 | 10 | " | 4 | " | " | 2 | 48 | " | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | " | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | " | " | 1 | 1 | 10 | " | " | 10 | 34 | 2 | " | " | 3 | " | " | " | " | " | " | 10 | " | 3 | 2 | 1 | " | 6 | 8 | 5 | 5 |
| 7. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Prevaricación | 1 | " | 2 | " | " | 1 | " | 4 | 12 | " | 1 | " | " | 2 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | 2 | " | 1 | 2 | 1 | " | 1 | " | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " |
| *b)* Malversación | " | 2 | 11 | " | 2 | 2 | 9 | 6 | 42 | 3 | 4 | 5 | " | 6 | " | 2 | " | 1 | 5 | " | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | " | 3 | " | 65 | 4 | 3 | 2 | 3 | " | 8 | " | " | " | 1 | " | " | 3 | " | " | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 |
| *c)* Otros (Cap. II al IX y XII del Tít. VII del C. P.) | 5 | 3 | 7 | " | 2 | " | 3 | " | 19 | " | " | 2 | " | 1 | " | " | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | " | 6 | 2 | " | " | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | " | " | 27 | " | " | " | " | " | " | " | 3 | 3 | 4 | " |
| 8. Delitos contra las personas: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Homicidio | 5 | " | 2 | " | " | " | 2 | " | 22 | " | " | 3 | " | " | 2 | " | " | 2 | 2 | " | 5 | 4 | " | 2 | 9 | 1 | " | " | 2 | 50 | 10 | " | 1 | " | " | 10 | " | " | " | " | " | " | " | 53 | 1 | " | " | 3 | 4 | 1 | " |
| *b)* Infanticidio | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *c)* Aborto | 2 | 1 | 2 | " | " | " | 1 | 1 | 80 | " | " | 2 | 1 | 2 | " | 7 | " | " | " | " | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | " | 1 | 1 | 114 | 3 | " | 3 | " | 1 | 10 | " | " | " | " | " | " | 1 | " | 1 | 2 | 1 | " | 1 | " |
| *d)* Lesiones | 111 | 102 | 442 | 450 | 515 | 92 | 524 | 655 | 5.196 | 190 | 130 | 704 | 77 | 196 | 1.005 | 217 | 106 | 14 | 954 | 119 | 377 | 348 | 74 | 848 | 890 | 306 | 183 | 145 | 256 | 2.414 | 1.075 | 340 | 214 | 769 | 115 | 988 | 91 | 369 | 427 | 62 | 725 | 40 | 866 | 103 | 89 | 690 | 230 | 896 | 173 | 163 |
| 9. Suicidios | 10 | 26 | 71 | " | 37 | 2 | 184 | 169 | 1.012 | 11 | 10 | 22 | " | 60 | 9 | " | 1 | 21 | 9 | " | 18 | 26 | 17 | 120 | 56 | 8 | " | 7 | 37 | 174 | 70 | 1 | 4 | 7 | 10 | 16 | " | " | 2 | " | 76 | 2 | 14 | 10 | 5 | 27 | 33 | 6 | 21 | " |
| 10. Delitos contra la honestidad | 37 | 13 | 98 | 57 | 41 | 5 | 35 | 104 | 1.088 | 11 | 20 | 60 | 8 | 49 | 17 | 38 | 11 | 36 | 67 | 7 | 45 | 46 | 9 | 47 | 128 | 50 | 2 | 20 | 13 | 829 | 132 | 94 | 39 | 16 | 2 | 56 | 2 | 247 | 102 | 12 | 164 | 6 | 35 | 3 | 11 | 104 | 42 | 68 | 17 | 19 |
| 11. Delitos contra el honor | 2 | 2 | 14 | " | " | " | 8 | 7 | 102 | 7 | 17 | 26 | 4 | 2 | 24 | " | " | 119 | 3 | " | " | 42 | 1 | 37 | 26 | " | 2 | 1 | 11 | 146 | 49 | 5 | 37 | 3 | 3 | 24 | " | " | 72 | 12 | 19 | 9 | 6 | 2 | " | 20 | 13 | " | 1 | " |
| 12. Delitos contra el estado civil de las personas | " | " | 4 | " | 33 | " | 3 | 10 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 1 | 4 | " | " | 4 | 1 | " | " | " | " | 12 | 3 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| 13. Delitos contra la libertad y seguridad | 171 | 121 | 761 | 90 | 364 | 56 | 253 | 273 | 3.012 | 95 | 127 | 428 | 58 | 299 | 88 | 394 | 40 | 196 | 377 | 56 | 467 | 206 | 72 | 321 | 1.163 | 362 | 22 | 121 | 156 | 2.828 | 1.182 | 276 | 242 | 186 | 123 | 554 | 89 | 656 | 262 | 12 | 602 | 34 | 294 | 44 | 95 | 838 | 372 | 354 | 145 | 324 |
| 14. Delitos contra la propiedad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Robo | 877 | 902 | 11.381 | 650 | 5.995 | 662 | 1.419 | 7.403 | 14.639 | 186 | 748 | 6.953 | 3.089 | 1.294 | 3.916 | 1.795 | 414 | 6.976 | 3.229 | 403 | 4.322 | 1.652 | 237 | 2.012 | 6.602 | 1.360 | 553 | 1.254 | 790 | 38.306 | 13.728 | 2.589 | 1.869 | 774 | 1.114 | 3.089 | 1.722 | 3.027 | 1.252 | 229 | 6.478 | 181 | 6.390 | 184 | 221 | 11.263 | 2.801 | 7.282 | 445 | 3.043 |
| *b)* Hurto | 686 | 310 | 2.818 | 515 | 1.200 | 151 | 650 | 2.681 | 8.952 | 29 | 147 | 2.212 | 351 | 379 | 1.121 | 429 | 22 | 2.303 | 1.190 | 81 | 1.133 | 562 | 153 | 500 | 2.067 | 506 | 282 | 118 | 216 | 20.041 | 4.136 | 1.019 | 1.730 | 254 | 173 | 846 | 168 | 1.754 | 1.427 | 39 | 5.498 | 87 | 1.225 | 80 | 149 | 2.904 | 405 | 2.236 | 150 | 557 |
| *c)* Estafa | 46 | 45 | 235 | 85 | 166 | 68 | 82 | 234 | 1.944 | 19 | 27 | 217 | 20 | 63 | 194 | 88 | 21 | 135 | 127 | 28 | 99 | 63 | 30 | 117 | 397 | 65 | 11 | 33 | 43 | 2.401 | 425 | 170 | 64 | 42 | 39 | 112 | 14 | 291 | 68 | 32 | 425 | 11 | 154 | 12 | 39 | 603 | 67 | 77 | 29 | 113 |
| *d)* Robo y hurto de uso | 392 | 168 | 215 | 690 | 1.380 | 192 | 167 | 175 | 8.572 | 41 | 257 | 775 | 284 | 164 | 909 | 680 | 84 | 503 | 632 | 180 | 1.400 | 483 | 109 | 603 | 2.806 | 318 | 492 | 721 | 165 | 7.542 | 2.367 | 912 | 1.026 | 195 | 327 | 1.970 | 636 | 1.918 | 582 | 14 | 5.277 | 50 | 1.170 | 20 | 9 | 6.780 | 943 | 2.984 | 94 | 2.053 |
| *e)* Cheque en descubierto | 20 | 89 | 348 | 60 | 160 | 22 | 68 | 258 | 2.248 | 13 | 21 | 104 | 1 | 105 | 121 | 59 | 18 | 131 | 83 | 4 | 43 | 54 | 30 | 98 | 466 | 68 | 5 | 31 | 9 | 3.555 | 416 | 406 | 40 | 25 | 20 | 225 | 20 | 183 | 111 | 9 | 467 | 4 | 269 | 7 | 37 | 1.831 | 43 | 158 | 11 | 521 |
| *f)* Otros | 188 | 164 | 1.019 | 20 | 639 | 285 | 380 | 594 | 2.972 | 243 | 410 | 484 | 7 | 353 | 205 | 403 | 163 | 70 | 688 | 105 | 552 | 470 | 230 | 571 | 890 | 289 | 57 | 131 | 751 | 2.639 | 1.192 | 348 | 404 | 613 | 217 | 958 | 251 | 28 | 4 | 99 | 1.063 | 103 | 738 | 124 | 72 | 738 | 380 | 802 | 277 | 515 |
| 15. Imprudencia punible (no tráfico) | 29 | 6 | 63 | " | 70 | 23 | 62 | 34 | 2.428 | 58 | " | 38 | 247 | 90 | 45 | 166 | 8 | 10 | 1 | " | " | 4 | 50 | 93 | 8 | 174 | 5 | 77 | 48 | 254 | 55 | 66 | 20 | " | " | " | 9 | 24 | 98 | " | 48 | 4 | 74 | 4 | 105 | 301 | 10 | 25 | " | 420 |
| 16. Delitos relativos al tráfico de automóviles: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Falsificación de matrícula (art. 279 bis) | 5 | 5 | 13 | " | 11 | " | 7 | 1 | 89 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | " | 4 | 1 | 4 | 14 | 5 | 2 | " | 2 | 52 | 19 | 15 | 2 | 5 | 2 | 3 | " | " | 27 | " | 21 | " | 14 | " | " | 17 | " | 1 | 1 | 8 |
| *b)* Quebrantamiento de condena (art. 334) | " | " | 12 | " | " | " | 2 | " | 15 | " | " | 1 | " | 1 | 7 | 4 | " | 2 | 1 | " | " | 2 | " | 2 | " | 6 | " | " | 2 | 31 | 1 | 9 | 4 | " | 1 | 1 | " | " | 12 | " | 2 | " | " | " | " | 5 | " | 11 | " | 3 |
| *c)* Conducción bajo influencia del alcohol o tóxicos (art. 340 bis, *a*, 1.º) | 3 | 26 | 119 | 15 | 38 | 24 | 21 | 126 | 345 | 9 | 11 | 25 | 1 | 3 | 22 | 19 | 1 | 19 | 9 | 13 | 11 | 2 | 6 | 25 | 166 | 1 | 2 | 1 | 15 | 284 | 190 | 147 | 5 | " | " | 14 | 3 | 70 | 29 | 1 | 53 | 2 | 40 | 1 | 4 | 3 | 11 | 23 | 1 | 2 |
| *d)* Conducción temeraria (art. 340 bis, *a*, 2.º) | " | 4 | 18 | " | 2 | 72 | 2 | 11 | 142 | " | " | " | " | " | 20 | 4 | 3 | " | " | " | " | 2 | 4 | " | 1 | 6 | 7 | 1 | " | 3 | 398 | 28 | 19 | 1 | " | " | 2 | 2 | " | 25 | " | " | " | 2 | " | " | 8 | 2 | 10 | " | 32 |
| *e)* Riesgos para la circulación (art. 340 bis, *b*) | " | " | " | " | 71 | " | " | 6 | 82 | " | 7 | " | " | 1 | 142 | 42 | " | 19 | 14 | " | " | " | " | " | " | 6 | 2 | " | 1 | 5 | 121 | " | 22 | 4 | 4 | " | 8 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 13 | 1 | 11 | " | 6 |
| *f)* Conducción sin permiso (art. 340 bis, *c*) | 14 | 64 | 505 | 90 | 181 | " | 53 | 191 | 79 | 13 | 27 | 249 | 2 | 27 | 68 | 77 | 41 | 80 | 22 | 17 | 101 | 46 | 67 | 136 | 280 | " | " | 14 | 32 | 423 | 358 | 597 | 18 | 32 | 27 | 100 | 1 | 117 | 114 | 12 | " | 6 | 179 | 6 | 11 | 611 | 16 | 197 | " | 95 |
| *g)* Omisión de socorro (art. 489 bis) | " | 1 | " | " | 15 | " | 4 | 5 | 80 | " | 2 | 5 | " | 3 | " | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | " | 1 | " | 7 | 18 | 4 | " | 1 | " | 41 | 8 | 9 | " | 1 | 1 | 5 | " | 16 | 6 | " | 15 | 1 | 2 | " | " | 11 | " | 1 | " | 1 |
| *h)* Imprudencia (art. 565) | 1.014 | 527 | 1.969 | 1.265 | 2.766 | 556 | 2.036 | 1.841 | 34.417 | 1.415 | 1.408 | 1.980 | 178 | 1.001 | 1.747 | 4.448 | 581 | 3.764 | 1.847 | 458 | 1.684 | 1.111 | 735 | 1.442 | 1.103 | 1.129 | 2.547 | 522 | 1.554 | 7.370 | 3.666 | 2.079 | 1.462 | 1.774 | 524 | 3.841 | 375 | 2.754 | 1.837 | 565 | 10.274 | 349 | 2.951 | 487 | 843 | 3.905 | 1.131 | 3.863 | 639 | 2.497 |
| 17. Delitos definidos en Leyes especiales | 7 | 17 | 15 | " | 36 | 2 | 20 | 17 | 45 | 10 | 14 | 37 | " | 79 | 92 | 11 | 3 | 16 | 7 | 12 | 3 | 25 | 11 | 61 | 49 | 33 | 4 | 3 | 6 | 54 | 8 | 17 | 22 | 20 | 6 | 68 | " | " | 86 | 1 | 46 | 3 | 15 | 4 | 14 | 23 | 17 | 1 | 10 | 7 |
| 18. Hechos casuales | 158 | 54 | 247 | 1.032 | 595 | 13 | 1.075 | 445 | 1.843 | 123 | 19 | 1.150 | 601 | 162 | 900 | 220 | 11 | 202 | 1.437 | " | 181 | 142 | 134 | 491 | 356 | 174 | 20 | 79 | 84 | 1.708 | 348 | 81 | 16 | 130 | 127 | 212 | 348 | 83 | 268 | 47 | 1.426 | 77 | 82 | 189 | 351 | 2.254 | 39 | 502 | 58 | 1.432 |

TOTAL

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*Diligencias preparatorias incoadas en los Juzgados de las provincias, desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1981.*

| NATURALEZA DEL SUPUESTO DELITO | Alava | Albacete | Alicante | Almería | Asturias | Avila | Badajoz | Baleares | Barcelona | Burgos | Cáceres | Cádiz | Castellón | Ciudad Real | Córdoba | Coruña (La) | Cuenca | Gerona | Granada | Guadalajara | Guipúzcoa | Huelva | Huesca | Jaén | Las Palmas | León | Lérida | Logroño | Lugo | Madrid | Málaga | Murcia | Navarra | Orense | Palencia | Pontevedra | Salamanca | Santa Cruz de Tenerife | Santander | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Teruel | Toledo | Valencia | Valladolid | Vizcaya | Zamora | Zaragoza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Delitos contra la seguridad exterior del Estado. | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| 2. Delitos contra la seguridad interior del Estado: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Contra el Jefe del Estado (Cap. I del Tít. II) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 4 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 4 |
| *b)* Contra la libertad religiosa (Cap. II) ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *c)* Atentados (Cap. VI) ... ... ... ... ... ... | " | " | 11 | 6 | 12 | " | 51 | 2 | 42 | " | " | 2 | 1 | 1 | 10 | " | " | " | 1 | " | 2 | " | " | 1 | " | " | " | 1 | " | 32 | 7 | 4 | " | 1 | " | " | " | 2 | " | 45 | " | " | 1 | 2 | " | " | 2 | 2 | 7 | 248 |
| *d)* Blasfemias (Cap. VII) ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 3 |
| *e)* Desacatos (Cap. VIII) ... ... ... ... ... | 2 | 7 | 31 | 3 | 10 | " | 3 | 7 | 24 | " | 4 | 1 | 24 | 2 | 14 | " | " | 2 | 17 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | " | " | " | 33 | 25 | 7 | 3 | 1 | " | 5 | " | " | " | 74 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 359 |
| *f)* Tenencia de armas (Cap. XII) ... ... ... | " | " | " | 2 | " | 6 | 1 | " | " | " | " | " | 3 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 17 | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 31 |
| *g)* Otros ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 4 | " | 1 | " | " | 3 | 8 | 2 | " | " | 3 | 6 | " | 1 | 5 | 29 | 5 | 12 | 11 | " | 12 | " | 5 | 10 | 30 | " | " | " | 1 | 12 | 9 | " | 1 | 2 | " | 10 | 3 | 34 | " | " | " | " | " | " | " | " | 15 | " | " | 234 |
| 3. Falsedades: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* De moneda ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 |
| *b)* De documentos ... ... ... ... ... ... ... ... | " | 1 | 51 | " | 5 | " | 1 | 4 | 8 | " | " | " | 3 | " | " | 3 | 1 | 3 | 3 | " | 6 | " | " | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | " | 44 | 2 | 2 | " | 3 | " | " | " | 7 | " | " | 13 | " | " | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | " | " | 193 |
| *c)* Delito fiscal ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 3 |
| *d)* Usurpación de funciones, uso indebido de nombre, etc. ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | 25 | " | " | " | 5 | 1 | 14 | " | 1 | 2 | 1 | " | " | " | " | 2 | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 5 | 3 | 2 | 3 | " | " | 3 | " | 1 | " | " | 2 | " | " | " | 1 | 1 | " | " | " | 1 | 74 |
| *e)* Otras (Cap. I y III del Tít. III del C. P.). | " | " | " | " | 2 | " | " | " | 22 | " | " | " | " | " | " | 26 | 1 | 9 | " | " | " | 1 | 2 | " | 4 | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | 5 | " | 5 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 78 |
| 4. Delitos contra la Administración de Justicia ... | 1 | 6 | 4 | " | 9 | " | 4 | 3 | 28 | " | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | " | " | " | 3 | " | " | " | 4 | 1 | " | 1 | " | " | 2 | 32 | 2 | 1 | " | 1 | " | 30 | " | 4 | " | " | 3 | " | 2 | 1 | 2 | " | " | 1 | " | 2 | 158 |
| 5. Título V del Libro II: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Inhumación ilegal ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " |
| *b)* Violación de sepulturas o profanación de cadáveres ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 4 |
| *c)* Contra la salud pública: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Tráfico y comercio de drogas ... ... | 1 | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 4 | " | " | 86 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 16 | 5 | " | 1 | " | " | " | 2 | " | 17 | " | " | 2 | " | " | " | " | " | 1 | " | 1 | " | 136 |
| II. Otros ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | 5 | " | " | " | " | " | " | 1 | " | 4 | " | " | " | 8 | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | " | " | " | 2 | " | 4 | 1 | " | " | " | " | 1 | 10 | " | " | " | " | 40 |
| 6. Juegos ilícitos ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | 1 | " | 8 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ■ | ■ | ■ | " | 1 | " | " | " | " | 9 | " | " | " | " | 20 |
| 7. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Prevaricación ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 1 | " | 1 | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 15 |
| *b)* Malversación ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | 1 | " | 4 | " | " | " | 3 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 15 |
| *c)* Otros (Cap. II al IX y XII del Tít. VII del C. P.) ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | 12 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 7 | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | 8 | " | " | " | " | 32 |
| 8. Delitos contra las personas: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Homicidio ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 5 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 5 |
| *b)* Infanticidio ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *c)* Aborto ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | 2 | " | " | " | " | " | 4 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 6 |
| *d)* Lesiones ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 12 | 18 | 45 | 26 | 102 | 9 | 45 | 57 | 802 | 11 | 15 | 41 | 42 | 8 | 6 | 132 | 12 | 1 | 57 | 11 | 56 | 11 | 22 | 28 | 54 | 30 | 13 | 7 | 7 | 440 | 32 | 50 | 5 | 16 | 10 | 89 | 4 | 46 | 50 | 5 | 161 | 2 | 16 | 9 | 19 | 49 | 12 | 27 | 10 | 20 | 2.752 |
| 9. Suicidios ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 |
| 10. Delitos contra la honestidad ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 4 | " | " | " | 1 | " | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | " | 2 | " | " | " | 9 | " | " | " | " | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | " | " | 5 | 20 | 8 | 1 | " | " | " | " | 1 | " | 2 | " | " | " | 80 |
| 11. Delitos contra el honor ... ... ... ... ... ... | " | " | 4 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | 4 | " | " | " | " | " | " | 2 | 1 | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 6 | 4 | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | 2 | 27 |
| 12. Delitos contra el estado civil de las personas .. | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | 1 | " | " | " | 5 | " | " | " | " | " | " | " | " | 8 |
| 13. Delitos contra la libertad y seguridad ... ... ... | 5 | 3 | 25 | 7 | 14 | 8 | 17 | 36 | 28 | 4 | 2 | 5 | 22 | 4 | 20 | 55 | " | 6 | 40 | 2 | 15 | 4 | 10 | 7 | 46 | 10 | 9 | " | 3 | 44 | 17 | 13 | 5 | 3 | 2 | 34 | 8 | 77 | 3 | " | 69 | " | 2 | " | 9 | 96 | 5 | 15 | 3 | 13 | 825 |
| 14. Delitos contra la propiedad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Robo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 27 | 7 | 378 | 40 | 61 | 19 | 97 | 62 | 625 | 1 | 12 | 27 | 56 | 9 | 46 | 62 | 10 | 103 | 75 | 12 | 112 | " | 9 | 33 | 206 | 12 | 19 | 16 | 6 | 890 | 30 | 62 | 15 | 29 | 9 | 71 | 11 | 105 | 92 | 6 | 249 | 8 | 46 | 15 | 48 | 209 | 12 | 105 | 5 | 35 | 4.194 |
| *b)* Hurto ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 14 | 6 | 226 | 41 | 42 | 10 | 55 | 41 | 185 | 4 | 8 | 23 | 20 | 2 | 15 | 33 | 6 | 46 | 49 | 4 | 20 | " | 13 | 15 | 100 | 15 | 14 | 5 | 11 | 267 | 24 | 63 | 16 | 12 | 2 | 50 | 3 | 40 | 55 | " | 244 | 5 | 14 | 3 | 22 | 227 | 3 | 92 | 3 | 16 | 2.184 |
| *c)* Estafa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 4 | 1 | 85 | 6 | 24 | 4 | 26 | 47 | 84 | 2 | 1 | 7 | 27 | 3 | " | 31 | 3 | 28 | 25 | 3 | 12 | " | 4 | 5 | 82 | 7 | 2 | 6 | 1 | 167 | 16 | 28 | 5 | 7 | 1 | 25 | 4 | 15 | 10 | 3 | 116 | 3 | 18 | " | 10 | 72 | 3 | 19 | 4 | 22 | 1.078 |
| *d)* Robo y hurto de uso ... ... ... ... ... ... | 10 | 2 | 158 | 52 | 36 | " | 45 | 31 | 182 | 9 | 5 | 15 | 14 | 2 | 5 | 37 | 5 | 18 | 30 | 7 | 51 | " | 16 | 16 | 107 | 7 | 18 | 7 | 8 | 317 | 23 | 23 | 18 | 9 | 1 | 54 | 12 | 114 | 12 | 3 | 151 | 5 | 26 | 1 | 4 | 423 | 8 | 45 | 3 | 26 | 2.171 |
| *e)* Cheque en descubierto ... ... ... ... ... | 10 | 15 | 297 | 15 | 38 | 14 | 30 | 66 | 435 | 6 | 13 | 33 | 97 | 29 | 57 | 79 | 18 | 80 | 173 | 3 | 14 | 22 | 22 | 40 | 287 | 46 | 21 | 21 | 12 | 948 | 61 | 127 | 31 | 22 | 8 | 103 | 13 | " | 31 | 10 | 224 | 1 | 147 | 12 | 35 | 101 | 11 | 100 | 3 | 250 | 4.231 |
| *f)* Otros ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 3 | 5 | 77 | 5 | 46 | " | 40 | 27 | 62 | 4 | 3 | 11 | 11 | 2 | 14 | " | 13 | 15 | 29 | 6 | 15 | 5 | 12 | 10 | 62 | 8 | 9 | 2 | 5 | 97 | 22 | 14 | 8 | 15 | 3 | 67 | " | 22 | 12 | " | " | 1 | 28 | 7 | 7 | 67 | 10 | 34 | 6 | 17 | 938 |
| 15. Imprudencia punible (no tráfico) ... ... ... ... | 1 | " | 12 | 2 | 9 | " | 7 | " | " | " | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | " | 4 | " | " | " | " | " | 7 | 7 | " | 2 | 3 | " | 2 | " | " | 3 | 1 | 1 | " | 2 | 3 | 4 | " | " | 71 | 2 | " | " | 5 | 33 | " | " | " | 5 | 207 |
| 16. Delitos relativos al tráfico de automóviles: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Falsificación de matrícula (art. 279 bis) ... | " | 2 | 2 | 3 | 2 | " | 11 | 1 | 3 | " | " | " | 2 | 1 | " | 2 | 1 | 1 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | 5 | " | 1 | 1 | 1 | 10 | " | 1 | 1 | 2 | " | 1 | 3 | " | 7 | " | 4 | " | 1 | 14 | " | 2 | " | 2 | 88 |
| *b)* Quebrantamiento de condena (art. 334) ... | " | " | " | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | 2 | " | 1 | " | " | " | " | 13 | " | 2 | " | " | 3 | " | 1 | 2 | " | " | 2 | 1 | 8 | 2 | " | 1 | " | " | 2 | " | 1 | " | 3 | " | 3 | 73 |
| *c)* Conducción bajo influencia del alcohol o tóxicos (art. 340 bis, *a*, 1.º) ... ... ... ... | 10 | 6 | 61 | 13 | 11 | 6 | 49 | 32 | 48 | 2 | 12 | 13 | 88 | " | 13 | 8 | " | 17 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 26 | 106 | " | 20 | 1 | 37 | 51 | 43 | 30 | 15 | 1 | " | 9 | 3 | 49 | 26 | 14 | 39 | 5 | 19 | 3 | 10 | 11 | 4 | 12 | 1 | 17 | 979 |
| *d)* Conducción temeraria (art. 340 bis, *a*, 2.º). | 11 | 2 | 5 | " | 2 | 43 | 3 | 2 | 22 | " | " | " | " | " | 12 | 2 | 3 | 12 | " | 1 | 2 | " | " | 1 | " | " | 3 | 1 | " | 106 | 11 | 1 | " | " | 1 | 2 | " | 14 | 34 | " | 48 | " | 1 | " | " | 5 | " | " | 3 | 35 | 388 |
| *e)* Riesgos para la circulación (art. 340 bis, *b*) ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | 18 | 104 | 2 | " | " | " | " | 10 | 49 | " | 22 | 31 | " | " | " | " | " | " | 10 | " | " | " | 1 | 107 | " | " | 1 | " | " | 8 | " | " | 3 | " | 21 | " | " | " | " | " | " | 4 | " | 2 | 393 |
| *f)* Conducción sin permiso (art. 340 bis, *c*). | 21 | 12 | 174 | 51 | 2 | " | 96 | 84 | 28 | 8 | 26 | 46 | 48 | 13 | 10 | 52 | 40 | 91 | 16 | 6 | " | 18 | 24 | 79 | 462 | 50 | 32 | 6 | 27 | 215 | 67 | 152 | 17 | 45 | 8 | 66 | 6 | " | 43 | 7 | 340 | 2 | 87 | 15 | 80 | 24 | 5 | 68 | 11 | 78 | 2.858 |
| *g)* Omisión de socorro (art. 489 bis) ... ... | " | " | " | " | " | " | " | 14 | 542 | " | " | " | 1 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 1 | 2 | " | " | " | 10 | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | 4 | " | " | " | 1 | 579 |
| *h)* Imprudencia (art. 565) ... ... ... ... ... | 134 | 63 | 304 | 230 | 567 | 42 | 365 | 386 | 2.817 | 136 | 112 | 379 | 411 | 52 | 214 | 678 | 165 | 416 | 712 | 96 | 132 | 243 | 312 | 67 | 118 | 351 | 201 | 133 | 136 | 907 | 330 | 683 | 238 | 141 | 99 | 664 | 166 | 5 | 162 | 89 | 1.267 | 113 | 417 | 170 | 172 | 1.520 | 375 | 260 | 187 | 440 | 18.377 |
| 17. Delitos definidos en Leyes especiales ... ... ... | " | 6 | 1 | 5 | 2 | " | 35 | 2 | 10 | 6 | 2 | 8 | 3 | 8 | 32 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | " | 3 | 8 | 18 | 12 | 7 | 8 | 2 | " | 3 | 6 | 2 | 1 | " | " | 6 | " | 71 | " | 2 | 19 | 2 | 6 | 2 | 20 | 17 | " | " | " | 2 | 352 |
| 18. Hechos casuales .. ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | 6 | " | 2 | " | " | " | " | 12 | 1 | 1 | 21 | 81 | " | " | 44 | " | " | 2 | " | " | " | 2 | " | " | " | 17 | " | 1 | 1 | " | " | 5 | " | " | " | 1 | 6 | " | " | " | 4 | " | 2 | " | " | 2 | 211 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ... ... ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44.641 |

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*Sumarios de Urgencia incoados en los Juzgados de las provincias, desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1981.*

| NATURALEZA DEL SUPUESTO DELITO | Alava | Albacete | Alicante | Almería | Asturias | Avila | Badajoz | Baleares | Barcelona | Burgos | Cáceres | Cádiz | Castellón | Ciudad Real | Córdoba | Coruña (La) | Cuenca | Gerona | Granada | Guadalajara | Guipúzcoa | Huelva | Huesca | Jaén | Las Palmas | León | Lérida | Logroño | Lugo | Madrid | Málaga | Murcia | Navarra | Orense | Palencia | Pontevedra | Salamanca | Santa Cruz de Tenerife | Santander | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Teruel | Toledo | Valencia | Valladolid | Vizcaya | Zamora | Zaragoza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Delitos contra la seguridad exterior del Estado | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | 4 |
| 2. Delitos contra la seguridad interior del Estado: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Contra el Jefe del Estado (Cap. I del Tít. II) | 1 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 5 | " | " | " | 1 | 1 | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 1 | 14 |
| *b)* Contra la libertad religiosa (Cap. II) | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 |
| *c)* Atentados (Cap. VI) | 1 | " | 1 | 2 | 11 | 4 | 57 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 17 | 18 | 4 | 3 | " | 10 | " | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | " | " | 4 | 5 | 79 | 17 | 14 | " | 1 | " | 25 | " | " | 2 | " | 41 | 2 | 7 | " | 5 | 118 | 7 | 8 | 2 | 24 | 549 |
| *d)* Blasfemias (Cap. VII) | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | " | " | " | " | " | " | 8 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 23 | 1 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 36 |
| *e)* Desacatos (Cap. VIII) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | " | " | 4 | 1 | " | 1 | " | 6 | 10 | 2 | " | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | " | " | 19 | " | " | 13 | 2 | 5 | 1 | 6 | 20 | 9 | 2 | 1 | 2 | 220 |
| *f)* Tenencia de armas (Cap. XII) | 2 | 1 | 10 | 1 | 16 | 2 | 5 | " | 12 | 7 | 2 | 2 | " | 4 | 10 | 6 | 3 | " | 13 | 2 | 4 | " | " | 1 | 8 | " | " | 4 | 11 | 81 | 5 | 11 | 5 | 8 | 1 | 15 | " | 1 | " | " | 14 | " | " | " | " | 48 | 4 | 8 | 1 | 10 | 338 |
| *g)* Otros | " | " | " | " | 13 | " | 1 | 5 | 33 | 3 | 2 | 38 | " | " | " | 4 | " | 8 | 5 | " | 13 | 1 | " | 4 | 15 | " | " | " | 4 | 5 | 9 | " | 9 | " | " | 16 | 2 | 1 | " | " | 18 | " | 2 | " | " | 5 | 1 | 5 | " | 1 | 223 |
| 3. Falsedades: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* De moneda | " | " | " | " | " | " | " | " | 7 | 1 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 4 | " | " | " | 1 | " | " | 2 | 19 |
| *b)* De documentos | 2 | 2 | 18 | 4 | 31 | 2 | 7 | 40 | 64 | 8 | 11 | 14 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 14 | " | " | 2 | 7 | 14 | 16 | 16 | 3 | 3 | 6 | 83 | 23 | 18 | 8 | 2 | 4 | " | 13 | 7 | " | 2 | 6 | " | " | 2 | 9 | 80 | 12 | 16 | 3 | 24 | 627 |
| *c)* Delito fiscal | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | 9 |
| *d)* Usurpación de funciones, uso indebido de nombre, etc. | " | " | 6 | 2 | 4 | " | 2 | " | 28 | 1 | " | 2 | 1 | 1 | 1 | " | 1 | 2 | 2 | " | 3 | " | 2 | 3 | 2 | " | 2 | " | " | 5 | 2 | 3 | 2 | " | " | 2 | 2 | 2 | " | " | 9 | " | " | " | " | 5 | 3 | 2 | " | 5 | 107 |
| *e)* Otras (Cap. I y III del Tít. III del C. P.) | " | " | " | " | " | " | 2 | 42 | 75 | 1 | " | " | " | " | 2 | 17 | " | 8 | " | 5 | " | 4 | 2 | " | 1 | " | " | " | " | 38 | " | " | " | " | " | 37 | " | " | 1 | " | 53 | 1 | 9 | " | " | " | " | " | " | " | " | 298 |
| 4. Delitos contra la Administración de Justicia | " | " | 2 | " | 9 | " | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 2 | " | 3 | " | 1 | " | 16 | 7 | 4 | " | " | " | 4 | 2 | " | " | " | " | " | " | 1 | 1 | 10 | 2 | " | 1 | 4 | 84 |
| 5. Título V del Libro II: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Inhumación ilegal | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 |
| *b)* Violación de sepulturas o profanación de cadáveres | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 9 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 10 |
| *c)* Contra la salud pública: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Tráfico y comercio de drogas | 5 | 2 | 40 | 20 | 14 | 1 | " | 5 | " | 4 | 2 | 1.094 | 10 | " | " | 17 | " | 6 | 21 | 7 | 8 | 25 | 4 | " | 8 | 14 | 17 | " | 9 | 114 | 174 | 10 | 15 | 2 | 2 | 31 | " | 9 | " | 2 | 19 | " | " | 4 | 4 | 10 | 13 | 28 | " | 8 | 1.778 |
| II. Otros | " | 1 | " | " | 2 | " | 3 | " | " | 13 | " | " | " | " | " | " | 2 | 3 | 1 | " | 17 | " | " | " | " | 8 | " | " | " | 56 | 1 | 1 | " | " | " | 1 | " | 2 | " | " | " | " | 1 | " | " | 1 | 9 | " | " | " | 2 | 124 |
| 6. Juegos ilícitos | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 3 | " | 1 | " | " | " | " | " | 8 |
| 7. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Prevaricación | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 3 | " | " | " | " | 6 | " | 2 | " | " | 7 | 1 | 2 | " | 8 | 76 |
| *b)* Malversación | " | " | " | " | " | " | 3 | " | 10 | " | 2 | " | 3 | " | " | 3 | " | 5 | 4 | " | " | 3 | 1 | " | " | " | 1 | " | " | 10 | 2 | " | " | " | " | 3 | " | " | " | " | 6 | " | 2 | " | " | 7 | 1 | 2 | " | 8 | 76 |
| *c)* Otros (Cap. II al IX y XII del Tít. VII del C. P.) | " | " | " | " | 1 | 2 | 2 | 2 | " | 1 | 3 | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | 13 | " | " | " | 1 | 4 | " | " | " | 3 | " | " | " | 1 | 1 | 3 | " | 1 | " | " | 3 | " | " | " | " | 5 | 2 | 1 | " | 3 | 53 |
| 8. Delitos contra las personas: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Homicidio | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | 2 | " | 1 | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | 10 | " | " | " | " | 2 | 3 | " | " | " | " | 4 | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 31 |
| *b)* Infanticidio | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 3 |
| *c)* Aborto | " | " | 7 | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | 6 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 2 | 1 | " | 2 | " | 1 | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 27 |
| *d)* Lesiones | 8 | 3 | 3 | 27 | 43 | 2 | 46 | 18 | " | 9 | 11 | 39 | 7 | 4 | 41 | 25 | 4 | 25 | 60 | 6 | 19 | 7 | 10 | 28 | 18 | 28 | 3 | " | 5 | 125 | 22 | 72 | 7 | 19 | 9 | 39 | 2 | 26 | 18 | 1 | 50 | 6 | 17 | 3 | 10 | 90 | 13 | 64 | 6 | 24 | 1.122 |
| 9. Suicidios | " | " | " | " | " | 1 | 2 | " | " | 1 | " | " | 1 | " | 4 | " | " | " | " | 1 | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 4 | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 60 | " | " | " | 1 | 79 |
| 10. Delitos contra la honestidad | 5 | 7 | 35 | 36 | 43 | 1 | 30 | 18 | " | 21 | 11 | 40 | 25 | 3 | 3 | 24 | 6 | 29 | 33 | 5 | 7 | 25 | 12 | 11 | 30 | 12 | 12 | 4 | 3 | 106 | 35 | 34 | 20 | 12 | 10 | 34 | 15 | 31 | 28 | 1 | 63 | 7 | 17 | 3 | 5 | 143 | 17 | 66 | 4 | 68 | 1.210 |
| 11. Delitos contra el honor | " | " | 3 | " | " | " | 7 | 9 | " | " | " | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | " | 22 | 5 | " | 1 | " | " | 1 | 4 | " | " | " | " | 14 | 10 | 7 | " | " | " | 8 | " | 9 | 11 | " | " | 3 | " | " | 2 | " | 5 | " | 1 | 20 | 156 |
| 12. Delitos contra el estado civil de las personas | " | " | " | " | 46 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 10 | " | " | " | " | " | " | " | 3 | 1 | " | " | " | " | 3 | " | " | " | 1 | 65 |
| 13. Delitos contra la libertad y seguridad | 2 | 8 | 38 | 60 | 26 | 5 | 17 | 52 | 24 | 8 | 30 | 30 | 33 | 3 | 12 | 46 | 6 | 11 | 67 | 12 | 33 | 16 | 18 | 22 | 21 | 21 | 13 | 5 | 4 | 211 | 41 | 47 | 12 | 11 | 12 | 88 | 22 | 61 | 54 | 1 | 69 | 9 | 32 | 3 | 7 | 171 | 24 | 22 | 11 | 103 | 1.654 |
| 14. Delitos contra la propiedad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Robo | 60 | 10 | 212 | 96 | 231 | 23 | 222 | 489 | 1.232 | 233 | 73 | 914 | 93 | 23 | 107 | 234 | 21 | 100 | 208 | 89 | 123 | 51 | 218 | 91 | 244 | 113 | 104 | 76 | 33 | 1.319 | 224 | 184 | 108 | 94 | 30 | 313 | 54 | 117 | 62 | 8 | 974 | 27 | 146 | 8 | 699 | 550 | 110 | 220 | 49 | 622 | 11.641 |
| *b)* Hurto | 8 | 1 | 30 | 18 | 151 | 2 | 45 | 58 | 825 | 18 | 20 | 50 | 12 | 3 | 22 | 23 | " | 20 | 20 | " | 26 | 2 | 10 | 3 | 44 | 15 | 29 | 4 | 1 | 189 | 23 | 40 | 21 | " | 5 | 30 | 4 | 24 | 53 | 3 | 99 | 3 | 10 | " | 28 | 141 | 7 | 113 | 5 | 47 | 2.305 |
| *c)* Estafa | 7 | 2 | 69 | 8 | 16 | 3 | 15 | 105 | 262 | 11 | 6 | 15 | 15 | 4 | 2 | 19 | 2 | 14 | 28 | 11 | 12 | 7 | 9 | 11 | 47 | 12 | 15 | 10 | 3 | 192 | 26 | 32 | 7 | 11 | 4 | 22 | 8 | 18 | 18 | 1 | 97 | 6 | 22 | 2 | 15 | 71 | 14 | 39 | 4 | 91 | 1.440 |
| *d)* Robo y hurto de uso | 9 | 3 | 1 | 20 | 11 | 4 | 22 | 8 | 248 | 17 | 9 | 4 | 7 | 3 | 42 | 6 | 1 | 6 | " | 7 | 23 | 3 | 6 | 3 | 22 | 9 | " | 7 | 5 | 63 | 7 | 11 | 8 | 15 | " | 20 | 5 | 7 | 17 | 2 | " | 3 | 18 | " | 2 | 116 | 6 | " | 7 | 26 | 839 |
| *e)* Cheque en descubierto | 1 | " | 37 | " | 2 | " | 1 | 8 | 122 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 2 | " | 3 | 9 | " | 3 | " | " | 4 | 25 | 1 | 2 | " | " | 119 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | " | 7 | " | 4 | 50 | 1 | 32 | " | 10 | 505 |
| *f)* Otros | 8 | 3 | 71 | " | 58 | " | 38 | 16 | 108 | 43 | 8 | 22 | 13 | 3 | 6 | 12 | 2 | 27 | 31 | " | 59 | 11 | 3 | 6 | 21 | 6 | 2 | 8 | 9 | 136 | 28 | 30 | 6 | 11 | 2 | 27 | 9 | 24 | 10 | " | 17 | 1 | 36 | 2 | 19 | 45 | 19 | 40 | 1 | 61 | 1.118 |
| 15. Imprudencia punible (no tráfico) | 1 | " | 4 | " | 3 | " | 2 | 1 | 124 | 2 | " | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | " | " | " | 2 | " | " | 1 | 2 | " | 1 | " | " | " | " | 4 | 5 | 4 | " | " | " | 4 | 1 | " | " | 22 | 1 | 6 | " | 8 | 40 | " | 32 | " | 21 | 305 |
| 16. Delitos relativos al tráfico de automóviles: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Falsificación de matrícula (art. 279 bis) | " | " | 1 | " | " | " | 4 | " | 4 | 1 | " | 1 | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 1 | 1 | 2 | " | 4 | 1 | " | " | 1 | 3 | 1 | " | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | " | " | 30 |
| *b)* Quebrantamiento de condena (art. 334) | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 1 | " | " | 2 | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | 3 | " | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 14 |
| *c)* Conducción bajo influencia del alcohol o tóxicos (art. 340 bis, *a*, 1.º) | " | " | " | " | " | " | 2 | " | 5 | " | " | " | " | " | 5 | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | 3 | 1 | " | " | " | " | 10 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 30 |
| *d)* Conducción temeraria (art. 340 bis, *a*, 2.º) | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 3 | " | " | " | " | " | 4 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 1 | 1 | " | 1 | " | " | 11 | " | 7 | " | " | " | " | " | 12 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 42 |
| *e)* Riesgos para la circulación (art. 340 bis, *b*) | " | " | " | " | 1 | " | 1 | " | 5 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 10 |
| *f)* Conducción sin permiso (art. 340 bis, *c*) | " | 3 | " | " | " | " | 16 | 1 | 10 | 1 | " | 4 | " | " | 3 | " | " | 2 | 1 | " | 2 | " | " | " | 4 | 1 | " | " | " | 12 | " | 1 | 1 | " | " | 1 | " | 10 | " | " | 5 | " | " | " | 2 | " | " | 8 | 1 | 1 | 90 |
| *g)* Omisión de socorro (art. 489 bis) | " | " | 5 | 2 | 3 | " | " | " | 3 | " | " | " | 1 | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | 2 | 1 | " | " | " | 3 | " | " | " | 6 | 1 | 4 | " | " | 3 | 2 | " | " | 1 | " | " | " | " | 3 | 45 |
| *h)* Imprudencia (art. 565) | 12 | 2 | 15 | 3 | 17 | 7 | 18 | 8 | 322 | 44 | 28 | 18 | 70 | 17 | 32 | 35 | 29 | 8 | 20 | 33 | 28 | 1 | 36 | 17 | 24 | 15 | 1 | 1 | 5 | 208 | 19 | 4 | 51 | 2 | 11 | 35 | 6 | 26 | 16 | 2 | 43 | 32 | 26 | 7 | 75 | 163 | 21 | 48 | 12 | 142 | 1.815 |
| 17. Delitos definidos en Leyes especiales | 1 | " | " | " | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | " | " | 35 | " | 1 | 4 | " | " | " | " | 6 | " | " | " | " | 1 | 1 | " | 1 | " | 4 | " | 6 | " | 1 | " | 5 | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 89 |
| 18. Hechos casuales | " | " | " | " | 2 | " | 1 | 7 | " | 2 | 2 | 123 | 5 | 1 | 15 | " | " | 47 | 6 | " | " | " | 1 | " | 7 | " | " | 1 | " | 10 | " | " | 11 | " | 1 | 4 | " | " | " | " | " | 7 | " | " | 26 | 42 | " | " | " | 29 | 350 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | 29.599 |

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*Sumarios Ordinarios y otros del Título IV, Ley de Enjuiciamiento Criminal, incoados en los Juzgados de las provincias, desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1981.*

| NATURALEZA DEL SUPUESTO DELITO | Alava | Albacete | Alicante | Almería | Asturias | Avila | Badajoz | Baleares | Barcelona | Burgos | Cáceres | Cádiz | Castellón | Ciudad Real | Córdoba | Coruña (La) | Cuenca | Gerona | Granada | Guadalajara | Guipúzcoa | Huelva | Huesca | Jaén | Las Palmas | León | Lérida | Logroño | Lugo | Madrid | Málaga | Murcia | Navarra | Orense | Palencia | Pontevedra | Salamanca | Santa Cruz de Tenerife | Santander | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Teruel | Toledo | Valencia | Valladolid | Vizcaya | Zamora | Zaragoza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Delitos contra la seguridad exterior del Estado | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| 2. Delitos contra la seguridad interior del Estado: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Contra el Jefe del Estado (Cap. I del Tít. II) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *b)* Contra la libertad religiosa (Cap. II) ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 3 |
| *c)* Atentados (Cap. VI) ... ... ... ... ... ... | " | " | 1 | " | 1 | " | 5 | 1 | " | " | " | " | 1 | 1 | 3 | " | " | " | " | " | 1 | " | 1 | " | 3 | " | " | " | " | 7 | 1 | 3 | " | " | " | 1 | " | 4 | " | 3 | " | " | " | 1 | " | 2 | " | " | " | " | 40 |
| *d)* Blasfemias (Cap. VII) ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 17 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 18 |
| *e)* Desacatos (Cap. VIII) ... ... ... ... ... | 1 | " | " | " | 1 | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | 3 | " | " | " | 1 | 1 | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | 4 | " | " | " | " | 19 |
| *f)* Tenencia de armas (Cap. XII) ... ... ... | " | " | 2 | " | " | " | 8 | " | 4 | 1 | 1 | 1 | " | 1 | 2 | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | 7 | 2 | 2 | " | 19 | " | 2 | 4 | " | " | 2 | 1 | " | 2 | " | " | 5 | " | 7 | " | 1 | 78 |
| *g)* Otros ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | 1 | " | " | " | " | 1 | 2 | " | 1 | " | " | " | " | 5 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 4 | " | " | " | " | 2 | " | 1 | 1 | " | " | 1 | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 21 |
| 3. Falsedades: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* De moneda ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | 9 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 4 | " | 1 | " | 1 | 16 |
| *b)* De documentos ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | 1 | 10 | 2 | 3 | 22 | " | " | " | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | " | " | 7 | 1 | 3 | " | " | 2 | 6 | 1 | 1 | " | " | 12 | 4 | 2 | " | " | " | " | 5 | 3 | " | " | " | " | " | " | " | 3 | 8 | 2 | " | 1 | 2 | 112 |
| *c)* Delito fiscal ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 |
| *d)* Usurpación de funciones, uso indebido de nombre, etc. ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 9 |
| *e)* Otras (Cap. I y III del Tít. III del C. P.) | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 21 | " | " | " | " | " | " | 10 | " | 5 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | 10 | 1 | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 51 |
| 4. Delitos contra la Administración de Justicia ... | " | " | " | " | " | " | " | 2 | 3 | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 8 | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | 2 | 19 |
| 5. Título V del Libro II: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Inhumación ilegal ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 |
| *b)* Violación de sepulturas o profanación de cadáveres ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *c)* Contra la salud pública: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Tráfico y comercio de drogas ... ... | 7 | 5 | 51 | 14 | 35 | 2 | 68 | 73 | 8 | 11 | 13 | 294 | 4 | 11 | 47 | 49 | 6 | 37 | 49 | 4 | " | " | 11 | 49 | 88 | 2 | " | 19 | 4 | 113 | 34 | 22 | 7 | 1 | " | 12 | 10 | 41 | " | " | 127 | 2 | 39 | 2 | 23 | 140 | 23 | 11 | 2 | 91 | 1.661 |
| II. Otros ... ... ... ... ... ... ... ... | " | 1 | " | " | " | " | " | 13 | 42 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 4 | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 32 | " | 1 | " | " | " | " | " | 3 | " | " | 1 | " | " | " | " | 1 | " | " | 2 | 102 |
| 6. Juegos ilícitos ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 |
| 7. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Prevaricación ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 |
| *b)* Malversación ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | " | " | " | " | " | " | 1 | " | 1 | " | 2 | 2 | 1 | " | " | " | 6 | " | " | " | 1 | " | 3 | 2 | 5 | " | " | 3 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 2 | 46 |
| *c)* Otros (Cap. II al IX y XII del Tít. VII del C. P.) ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | 4 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | 2 | " | " | " | " | 1 | " | 1 | " | " | " | " | " | 2 | 13 |
| 8. Delitos contra las personas: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Homicidio ... ... ... ... ... ... ... ... | 3 | 4 | 5 | 5 | 12 | 5 | 6 | 10 | 44 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 25 | 21 | 1 | 12 | 20 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 72 | 21 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 20 | 2 | 81 | " | 10 | 20 | 2 | 12 | 2 | 12 | 557 |
| *b)* Infanticidio ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 1 | " | " | 2 | " | " | " | " | 1 | 9 |
| *c)* Aborto ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | 30 | 1 | 1 | " | " | 1 | 6 | " | " | 1 | " | 1 | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | 2 | " | " | " | " | 3 | 1 | " | " | " | " | " | " | " | 7 | 1 | " | " | " | 57 |
| *d)* Lesiones ... ... ... ... ... ... ... ... | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | " | " | 12 | 68 | 3 | 3 | 6 | 2 | " | 13 | 4 | 1 | " | 1 | 3 | " | " | 1 | 1 | 7 | " | " | " | 2 | 5 | 2 | 43 | 1 | " | 4 | 3 | " | 4 | 6 | " | 7 | " | 1 | " | " | 3 | 6 | 10 | 1 | " | 249 |
| 9. Suicidios ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | 56 | 87 | 14 | 4 | 12 | 58 | 2 | 25 | 33 | 5 | 25 | 40 | 7 | 7 | 10 | 8 | 2 | " | 4 | " | 35 | " | 4 | 16 | 1 | 2 | " | 10 | " | 12 | 3 | " | " | 28 | 13 | 5 | 24 | 11 | 9 | 6 | " | 27 | 21 | 3 | " | " | 19 | 648 |
| 10. Delitos contra la honestidad ... ... ... ... ... | 2 | 5 | 32 | 12 | 29 | 2 | 11 | 30 | 62 | 10 | 7 | 21 | 2 | 1 | 36 | 36 | 4 | 18 | 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 20 | 9 | " | 5 | 8 | 28 | 15 | 18 | 13 | 6 | 2 | 26 | " | 14 | 10 | " | 52 | 1 | 24 | " | 16 | 29 | 14 | 18 | 9 | 22 | 725 |
| 11. Delitos contra el honor ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | 11 | 2 | 4 | 7 | 14 | " | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | " | 2 | " | " | 5 | 1 | 4 | 3 | " | " | " | 1 | 48 | 12 | 1 | " | 1 | " | 4 | 10 | 2 | 7 | 2 | " | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 3 | 4 | " | 3 | 205 |
| 12. Delitos contra el estado civil de las personas ... | " | " | " | " | 15 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 18 |
| 13. Delitos contra la libertad y seguridad ... ... ... | 3 | 1 | " | 2 | 12 | 1 | 1 | 33 | 74 | 1 | " | 23 | 3 | 2 | 15 | 29 | 2 | " | 3 | " | " | " | 1 | 1 | 4 | " | " | 1 | " | 1 | 5 | 4 | 1 | " | " | 4 | " | 4 | " | " | 3 | " | 1 | " | 26 | 10 | " | " | " | " | 271 |
| 14. Delitos contra la propiedad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Robo ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 5 | 5 | 45 | 49 | 47 | " | 23 | 38 | 24 | 3 | 7 | 11 | 19 | 11 | 14 | 36 | " | 40 | 32 | 13 | 52 | " | 1 | " | 13 | 2 | 8 | " | 1 | 96 | 15 | 27 | 6 | 4 | 8 | 27 | 11 | 27 | 16 | 2 | 33 | 5 | 24 | " | 14 | 29 | 9 | 15 | 4 | 24 | 895 |
| *b)* Hurto ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | " | 2 | 2 | " | 2 | 2 | " | " | 1 | " | 10 | " | " | " | 7 | " | " | 1 | " | 4 | " | 1 | " | " | " | 1 | 3 | 6 | 10 | " | 3 | " | 1 | 1 | " | 14 | 1 | 3 | " | 5 | 117 |
| *c)* Estafa ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | 1 | 31 | 6 | 18 | 8 | 11 | 28 | 22 | 7 | 2 | 3 | 12 | 3 | " | 16 | 2 | 30 | 12 | " | 6 | " | 3 | 3 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 74 | 16 | 22 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 13 | 6 | " | 60 | 2 | 8 | " | " | 18 | 2 | 4 | 2 | 35 | 529 |
| *d)* Robo y hurto de uso ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | 1 | " | " | " | 6 | 1 | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 2 | " | " | " | 1 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 16 |
| *e)* Cheque en descubierto ... ... ... ... ... | 1 | " | 1 | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | 17 | 4 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 5 | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 34 |
| *f)* Otros ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | 1 | 10 | 5 | 17 | 8 | 9 | 4 | " | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | " | 3 | " | " | 5 | " | 10 | " | 1 | 2 | 7 | " | " | 2 | 1 | 18 | 4 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | " | 2 | " | 2 | 1 | 7 | " | 5 | " | 6 | 1 | " | 20 | 197 |
| 15. Imprudencia punible (no tráfico) ... ... ... ... | 1 | " | 1 | 3 | " | " | 1 | " | " | " | 2 | " | " | " | 12 | " | 4 | " | 3 | " | " | " | " | 1 | 1 | " | " | " | " | " | " | 1 | 2 | " | " | " | " | 1 | " | 5 | " | " | " | 9 | " | " | " | " | 19 | 66 |
| 16. Delitos relativos al tráfico de automóviles: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Falsificación de matrícula (art. 279 bis) ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 |
| *b)* Quebrantamiento de condena (art. 334) ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 |
| *c)* Conducción bajo influencia del alcohol o tóxicos (art. 340 bis, *a*, 1.º) ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *d)* Conducción temeraria (art. 340 bis, *a*, 2.º). | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *e)* Riesgos para la circulación (art. 340 bis, *b*) ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *f)* Conducción sin permiso (art. 340 bis, *c*). | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 |
| *g)* Omisión de socorro (art. 489 bis) ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *h)* Imprudencia (art. 565) ... ... ... ... ... | " | 1 | 6 | 8 | " | " | " | " | " | " | 1 | 8 | " | " | " | 23 | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | 1 | " | " | " | 1 | " | " | 4 | " | 202 | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | 261 |
| 17. Delitos definidos en Leyes especiales ... ... ... | " | " | " | " | 11 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 15 |
| 18. Hechos casuales ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | 63 | 14 | 2 | 221 | " | 19 | 22 | 97 | 101 | 17 | 33 | 6 | 17 | 44 | 91 | 42 | " | 1 | " | " | 3 | 29 | 15 | 2 | " | 121 | 50 | 3 | 69 | 43 | " | 46 | " | 125 | 2 | " | " | 11 | " | " | 39 | 25 | 5 | 24 | " | 161 | 1.563 |

TOTAL ... ... ... 8.650

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*Procedimientos penales iniciados en los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional en 1981.*

| NATURALEZA DEL SUPUESTO DELITO | Diligencias previas | Diligencias preparatorias | Sumarios de urgencia | Sumarios ordinarios | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| I. COMETIDOS POR BANDAS ORGANIZADAS Y ARMADAS. | | | | | |
| Asesinato | 9 | " | 62 | " | 71 |
| Daños y estragos | 79 | " | 35 | " | 114 |
| Detención ilegal | 4 | " | 7 | " | 11 |
| Tenencia y depósito de explosivos | 6 | " | 3 | " | 9 |
| Tenencia de armas | 9 | " | 9 | " | 18 |
| Colaboración | 67 | " | 95 | " | 162 |
| Lesiones | 9 | " | 6 | " | 15 |
| Robos | 24 | " | 42 | " | 66 |
| Propaganda | 56 | " | 16 | " | 72 |
| Atentados | 22 | " | 7 | " | 29 |
| II. DELITOS COMUNES. | | | | | |
| Injurias al Jefe del Estado | 4 | " | 7 | " | 11 |
| Desórdenes | 1 | " | " | " | 1 |
| Desacatos | 15 | " | 19 | " | 34 |
| Falsedad de moneda | 166 | " | " | 65 | 231 |
| Falsedad de documentos | 2 | " | " | 2 | 4 |
| Otras falsedades | 2 | " | " | 1 | 3 |
| Drogas | 8 | " | " | 14 | 22 |
| Usurpación | 2 | " | " | " | 2 |
| Escándalo público | 21 | " | 307 | " | 328 |
| Injurias | 18 | " | 17 | " | 35 |
| Abandono de familia | " | " | " | 1 | 1 |
| Estafa | 5 | " | " | 5 | 10 |
| Apropiación indebida | " | " | " | 2 | 2 |
| Delitos monetarios | 197 | 45 | " | " | 242 |
| TOTALES | 726 | 45 | 632 | 90 | 1.493 |

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*Datos generales sobre el volumen de trabajo en la Fiscalía durante el año 1981.*

| AUDIENCIAS | Procedimientos pendientes en Fiscalía en 1.º de enero de 1981 | Procedimientos ingresados desde 1.º de enero de 1981 a 31 de diciembre | TOTAL | Pendientes en Fiscalía en 1.º de enero de 1982 | Dictámenes emitidos por: | | | | | Vistas efectuadas con asistencia de: | | | | Juicios orales a que han asistido en Audiencias y Juzgados | | | | | Asuntos gubernativos despachados por: | | | | Inspecciones directas de Sumarios | | | | Audiencias a Juntas de Protección a la mujer, de Beneficencia y otras Juntas de Autoridades | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | El Fiscal | Teniente Fiscal | Abogados Fiscales | Fiscales de Distrito | TOTAL | El Fiscal | Teniente Fiscal | Abogados Fiscales | TOTAL | El Fiscal | Teniente Fiscal | Abogados Fiscales | Fiscales de Distrito | TOTAL | El Fiscal | Teniente Fiscal | Abogados Fiscales | TOTAL | El Fiscal | Teniente Fiscal | Abogados Fiscales | TOTAL | El Fiscal | Teniente Fiscal | Abogados Fiscales | TOTAL |
| Alava | " | 6.199 | 6.199 | " | 3.028 | 3.171 | " | " | 6.199 | 41 | 13 | " | 54 | 69 | 217 | " | 43 | 329 | 57 | 55 | " | 112 | 3 | 1 | " | 4 | " | " | " | " |
| Albacete | " | 8.079 | 8.079 | " | 2.724 | 2.747 | 1.867 | " | 7.338 | 11 | 65 | 36 | 112 | 5 | 251 | 126 | 247 | 629 | 129 | 265 | 42 | 436 | 1 | 1 | " | 2 | " | " | " | " |
| Alicante | 95 | 31.644 | 31.739 | 220 | 3.575 | 2.120 | 24.400 | 1.624 | 31.719 | " | 9 | 63 | 72 | 1 | 80 | 794 | 680 | 1.555 | 341 | 34 | " | 375 | " | " | " | " | " | " | 12 | 12 |
| Almería | " | 13.107 | 13.107 | " | 3.480 | 4.332 | 4.788 | 507 | 13.107 | 18 | 10 | 14 | 42 | 98 | 191 | 215 | 139 | 643 | 153 | " | " | 153 | 1 | " | " | 1 | 2 | " | " | 2 |
| Asturias | 158 | 34.611 | 34.769 | 143 | 838 | 3.783 | 24.997 | 1.976 | 31.594 | " | 50 | 233 | 283 | " | 140 | 1.084 | 1.525 | 2.749 | 380 | 39 | 8 | 427 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | " | 7 | 9 |
| Avila | " | 2.836 | 2.836 | " | 4.622 | " | " | 527 | 5.149 | 39 | " | " | 39 | 25 | " | " | 133 | 158 | 60 | " | " | 60 | 4 | " | " | 4 | 5 | " | " | 5 |
| Badajoz | " | 20.330 | 20.330 | " | 10.545 | 4.911 | 1.467 | 1.663 | 18.586 | 27 | 43 | 12 | 82 | 230 | 520 | 161 | 500 | 1.411 | 187 | 36 | " | 223 | " | " | " | " | 28 | " | " | 28 |
| Baleares | 304 | 27.940 | 28.244 | " | 2.070 | 6.002 | 14.940 | 3.602 | 26.614 | 11 | 37 | 48 | 96 | 68 | 177 | 939 | 350 | 1.534 | 47 | 10 | 23 | 80 | " | " | " | " | 11 | " | " | 11 |
| Barcelona | 2.548 | 134.427 | 136.975 | 4.805 | 4.418 | 3.928 | 122.141 | 1.683 | 132.170 | " | 28 | 472 | 500 | " | " | 3.874 | 2.647 | 6.521 | 49 | 244 | " | 293 | " | " | " | " | " | " | 12 | 12 |
| Burgos | 10 | 11.596 | 11.606 | " | 3.305 | 4.094 | 4.207 | " | 11.606 | 30 | 56 | 49 | 135 | 51 | 192 | 220 | 268 | 731 | 215 | 26 | " | 241 | 30 | 2 | 20 | 52 | " | " | " | " |
| Cáceres | " | 10.871 | 10.871 | 2 | 2.362 | 4.181 | 3.251 | 600 | 10.394 | 6 | 12 | 10 | 28 | 27 | 127 | 53 | 240 | 447 | 400 | 47 | 39 | 486 | 68 | " | 2 | 70 | 4 | 1 | " | 5 |
| Cádiz | 372 | 30.615 | 30.987 | 257 | 4.009 | 6.208 | 19.419 | 1.105 | 30.741 | " | 35 | 61 | 96 | 16 | 251 | 616 | 1.585 | 2.468 | 310 | 21 | " | 331 | 1 | " | 3 | 4 | 14 | " | " | 14 |
| Castellón | 8 | 10.830 | 10.838 | 16 | 2.550 | 4.686 | 2.831 | 65 | 10.132 | 2 | 11 | 16 | 29 | 20 | 268 | 206 | 166 | 660 | " | 1 | " | 1 | " | " | 1 | 1 | " | " | " | " |
| Ciudad Real | " | 9.054 | 9.054 | " | 4.001 | 4.262 | " | " | 8.263 | 49 | 78 | " | 127 | 64 | 238 | " | 362 | 664 | 103 | 129 | " | 232 | 4 | 3 | " | 7 | " | 3 | " | 3 |
| Córdoba | 527 | 18.682 | 19.209 | 486 | 2.082 | 2.781 | 12.267 | 217 | 17.347 | " | 18 | 97 | 115 | 1 | 165 | 655 | 440 | 1.261 | " | " | " | " | " | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | " | 2 |
| Coruña (La) | " | 29.082 | 29.082 | " | 4.916 | 4.234 | 18.966 | " | 28.116 | 50 | 23 | 18 | 91 | 132 | 189 | 554 | " | 875 | 193 | 2 | 29 | 224 | " | " | " | " | 3 | 1 | " | 4 |
| Cuenca | " | 3.938 | 3.938 | " | 1.798 | 2.140 | " | " | 3.938 | 40 | 14 | " | 54 | 61 | 100 | " | 138 | 299 | 92 | 20 | " | 112 | 2 | " | " | 2 | " | " | " | " |
| Gerona | 33 | 19.601 | 19.634 | 25 | 5.317 | 3.950 | 9.295 | " | 18.562 | 1 | 40 | 36 | 77 | 33 | 122 | 77 | 738 | 970 | " | " | " | " | 7 | 4 | 1 | 12 | " | " | " | " |
| Granada | " | 23.283 | 23.283 | " | 2.053 | 3.733 | 11.777 | 4.015 | 21.578 | 56 | 35 | 88 | 179 | " | 143 | 945 | 456 | 1.544 | 372 | 26 | " | 398 | " | " | " | " | " | " | " | " |
| Guadalajara | 3 | 5.213 | 5.216 | " | 5.062 | " | " | " | 5.062 | 51 | " | " | 51 | 101 | 1 | " | 238 | 340 | 53 | " | " | 53 | 8 | " | " | 8 | 5 | " | " | 5 |
| Guipúzcoa | " | 16.884 | 16.884 | " | 2.548 | 3.600 | 10.096 | " | 16.244 | 15 | 5 | 39 | 59 | 55 | 65 | 431 | 30 | 581 | 103 | 52 | 57 | 212 | 11 | " | " | 11 | 5 | " | " | 5 |
| Huelva | 36 | 10.509 | 10.545 | 40 | 4.603 | 4.894 | " | 982 | 10.479 | 75 | 6 | " | 81 | 159 | 384 | " | 388 | 931 | 85 | 79 | " | 164 | 4 | 5 | " | 9 | " | " | " | " |
| Huesca | " | 8.197 | 8.197 | " | 7.300 | " | " | 406 | 7.706 | 50 | " | " | 50 | 215 | " | " | 226 | 441 | 66 | " | " | 66 | 2 | " | " | 2 | " | " | " | " |
| Jaén | 41 | 15.113 | 15.154 | 38 | 6.083 | 6.444 | " | 1.346 | 13.873 | 51 | 53 | " | 104 | 148 | 136 | " | 855 | 1.139 | 341 | 68 | " | 409 | " | " | " | " | 5 | " | " | 5 |
| Las Palmas | " | 28.770 | 28.770 | " | 1.935 | 7.038 | 19.352 | " | 28.325 | " | 11 | 32 | 43 | 6 | 179 | 839 | 312 | 1.336 | 173 | 212 | 9 | 394 | 2 | 1 | " | 3 | 7 | " | " | 7 |
| León | 6 | 9.631 | 9.637 | 9 | 2.349 | 3.502 | 3.482 | 340 | 9.673 | 41 | 43 | 24 | 108 | 96 | 228 | 214 | 270 | 808 | 46 | 98 | 92 | 236 | 1 | 1 | 1 | 3 | " | " | " | " |
| Lérida | " | 24.073 | 24.073 | " | 4.427 | 9.259 | 10.039 | 348 | 24.073 | 30 | 29 | 27 | 76 | 48 | 229 | 213 | 118 | 608 | 154 | 40 | 68 | 262 | 3 | 3 | 3 | 9 | " | " | " | " |
| Logroño | 2 | 7.614 | 7.616 | " | 3.514 | 3.390 | " | 305 | 7.209 | 62 | 6 | " | 68 | 71 | 122 | " | 146 | 339 | 81 | 73 | " | 154 | 1 | 2 | " | 3 | " | " | " | " |
| Lugo | 247 | 5.307 | 5.554 | 5 | 6.288 | " | " | 371 | 6.659 | 115 | " | " | 115 | 134 | " | " | 529 | 663 | 83 | " | " | 83 | " | " | " | " | 1 | " | " | 1 |
| Madrid | 5.484 | 158.470 | 163.954 | 1.986 | 1.244 | 5.985 | 154.057 | 682 | 161.968 | " | " | 503 | 503 | " | " | 4.278 | 625 | 4.903 | 35 | 83 | 2 | 120 | " | " | 3 | 3 | " | 2 | 18 | 20 |
| Málaga | 400 | 80.914 | 81.314 | 630 | 8.320 | 10.040 | 62.324 | " | 80.684 | " | 23 | 310 | 333 | " | 315 | 2.186 | 740 | 3.241 | 341 | " | " | 341 | " | " | " | " | " | " | " | " |
| Murcia | " | 22.236 | 22.236 | " | 1.827 | 4.215 | 12.339 | 1.485 | 19.866 | 21 | 84 | 252 | 357 | 12 | 271 | 813 | 917 | 2.013 | 39 | 65 | 197 | 301 | 2 | 8 | " | 10 | 12 | " | " | 12 |
| Navarra | " | 19.557 | 19.557 | " | 4.814 | 6.287 | 6.337 | 1.121 | 18.559 | 18 | 100 | 47 | 165 | 41 | 273 | 292 | 277 | 883 | 295 | 143 | 92 | 530 | 2 | 1 | 1 | 4 | " | " | " | " |
| Orense | " | 5.659 | 5.659 | " | 3.871 | 3.206 | " | " | 7.077 | 7 | 41 | " | 48 | 96 | 111 | " | " | 207 | 44 | 15 | " | 59 | 3 | 2 | " | 5 | 9 | " | " | 9 |
| Palencia | " | 5.636 | 5.636 | " | 5.636 | " | " | " | 5.636 | 59 | " | " | 59 | 94 | " | " | 218 | 312 | 136 | " | " | 136 | " | " | " | " | 28 | " | " | 28 |
| Pontevedra | " | 21.444 | 21.444 | " | 3.639 | 4.932 | 9.910 | 1.531 | 20.012 | 26 | 33 | 57 | 116 | 84 | 185 | 467 | 580 | 1.316 | 47 | 39 | 97 | 183 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | " | " | 8 |
| Salamanca | " | 8.282 | 8.282 | " | 2.645 | 5.637 | " | " | 8.282 | 94 | 5 | " | 99 | 158 | 286 | " | 166 | 610 | 170 | " | " | 170 | 11 | 3 | " | 14 | 72 | " | " | 72 |
| Santa Cruz de Tenerife | 407 | 20.496 | 20.903 | 881 | 2.125 | 4.054 | 11.168 | 375 | 17.722 | 29 | 24 | 51 | 104 | 132 | 230 | 902 | 932 | 2.196 | 35 | 55 | 70 | 160 | 4 | 1 | 1 | 6 | 18 | 1 | 1 | 20 |
| Santander | 23 | 14.355 | 14.378 | " | 2.302 | 3.696 | 6.791 | 312 | 13.101 | 60 | 38 | 21 | 119 | 198 | 246 | 511 | 203 | 1.158 | 157 | 27 | " | 184 | " | " | " | " | " | " | " | " |
| Segovia | " | 2.738 | 2.738 | " | 2.379 | 359 | " | " | 2.738 | " | 22 | " | 22 | " | 148 | " | 9 | 157 | 42 | 1 | " | 43 | " | 3 | " | 3 | 1 | " | " | 1 |
| Sevilla | 2.010 | 72.932 | 74.942 | 1.266 | 2.728 | 4.930 | 59.038 | 2.934 | 69.630 | 3 | 9 | 1 | 13 | " | 182 | 2.978 | 873 | 4.033 | 570 | 78 | 41 | 689 | " | " | " | " | 2 | 12 | " | 14 |
| Soria | 13 | 2.621 | 2.634 | 9 | 2.118 | " | " | 225 | 2.343 | 42 | " | " | 42 | 54 | " | " | 186 | 240 | 47 | " | 2 | 49 | 1 | " | " | 1 | " | " | " | " |
| Tarragona | 82 | 24.176 | 24.258 | 83 | 2.206 | 6.274 | 12.903 | 1.546 | 22.929 | 28 | 21 | 71 | 120 | 97 | 205 | 515 | 309 | 1.126 | 59 | 59 | 118 | 236 | 1 | 2 | 1 | 4 | " | " | " | " |
| Teruel | 676 | 3.810 | 4.486 | 26 | 3.160 | " | " | 918 | 4.078 | 36 | " | " | 36 | 46 | " | " | 302 | 348 | 33 | " | " | 33 | " | " | " | " | 6 | " | " | 6 |
| Toledo | " | 8.936 | 8.936 | " | 2.235 | 4.936 | " | 992 | 8.163 | 22 | 25 | " | 47 | 44 | 117 | " | 423 | 584 | 49 | 93 | " | 142 | 3 | 2 | " | 5 | " | " | " | " |
| Valencia | 613 | 69.683 | 70.296 | 504 | 1.531 | 1.862 | 53.743 | 8.448 | 65.584 | " | 13 | 299 | 312 | " | 9 | 2.953 | 934 | 3.896 | 1.421 | 276 | " | 1.697 | " | " | 7 | 7 | 35 | 6 | 8 | 49 |
| Valladolid | " | 24.618 | 24.618 | " | 4.918 | 8.651 | 12.123 | " | 25.692 | 8 | 7 | 12 | 27 | 70 | 256 | 661 | 62 | 1.049 | 1.499 | 1.371 | 680 | 3.550 | " | " | 2 | 2 | " | " | " | " |
| Vizcaya | 380 | 30.135 | 30.515 | 415 | 288 | 5.689 | 21.554 | " | 27.531 | " | 12 | 12 | 24 | 2 | 93 | 705 | 23 | 823 | 200 | 77 | " | 277 | " | 2 | 1 | 3 | " | 1 | " | 1 |
| Zamora | " | 4.150 | 4.150 | " | 2.167 | 2.331 | " | " | 4.498 | 45 | 30 | " | 75 | 65 | 139 | " | 245 | 449 | 81 | 37 | " | 118 | 8 | 6 | " | 14 | " | 4 | " | 4 |
| Zaragoza | " | 28.525 | 28.525 | " | 1.181 | 2.130 | 19.120 | 4.095 | 26.526 | 1 | 106 | 222 | 329 | 2 | 153 | 510 | 1.005 | 1.670 | 844 | 558 | 290 | 1.692 | " | " | " | " | 72 | 6 | " | 78 |
| Audiencia Nacional | 82 | 6.914 | 6.996 | 91 | 980 | 892 | 4.020 | " | 5.892 | 36 | 35 | 173 | 244 | 62 | 58 | 256 | " | 376 | 234 | 304 | " | 538 | 12 | 8 | 42 | 62 | " | " | " | " |
| TOTAL | 14.560 | 1.214.323 | 1.228.883 | 11.937 | 174.116 | 195.496 | 765.009 | 46.346 | 1.180.967 | 1.396 | 1.358 | 3.406 | 6.160 | 3.191 | 7.992 | 30.243 | 22.798 | 64.224 | 10.651 | 4.858 | 1.956 | 17.465 | 202 | 64 | 99 | 365 | 356 | 38 | 58 | 432 |

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*Asuntos civiles incoados en los Juzgados de 1.ª Instancia de cada una de las Provincias del Territorio en 1981.*

| AUDIENCIA TERRITORIAL DE | JUZGADOS DE LA PROVINCIA DE | Cuestiones de competencia | Mayores cuantía | Menores cuantía | Ejecutivos | Arrendamientos | Suspensiones de pago | Quiebras | Divorcios | Otros asuntos Contenciosos | Asuntos de Jurisdicción voluntaria | Número de asuntos en que intervino el M. F. | Número total de asuntos civiles incoados en los Juzgados | Número de sentencias dictadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBACETE | Albacete | 23 | 86 | 228 | 782 | 26 | 2 | 1 | 17 | 307 | 482 | 499 | 1.954 | 641 |
| | Ciudad Real | 51 | 76 | 195 | 776 | 38 | " | 2 | 36 | 204 | 829 | 820 | 2.207 | 780 |
| | Cuenca | 4 | 39 | 47 | 197 | 19 | 1 | " | 4 | 89 | 379 | 392 | 779 | 171 |
| | Murcia | 86 | 255 | 603 | 2.853 | 74 | 20 | 1 | 190 | 1.485 | 1.541 | 1.840 | 7.108 | 3.371 |
| ASTURIAS | Oviedo | 79 | 335 | 670 | 2.396 | 220 | 26 | 4 | 426 | 1.996 | 2.374 | 3.086 | 8.526 | 3.447 |
| BALEARES | Palma de Mallorca | 22 | 256 | 510 | 3.083 | 103 | 20 | 13 | 256 | 180 | 1.120 | 1.468 | 5.563 | 3.455 |
| BARCELONA | Barcelona | 289 | 1.429 | 4.129 | 16.104 | 314 | 322 | 57 | 2.210 | 5.505 | 5.874 | 8.789 | 36.233 | 3.136 |
| | Tarragona | 38 | 172 | 374 | 1.199 | 37 | 34 | 5 | 80 | 632 | 1.000 | 1.173 | 3.571 | 1.562 |
| | Gerona | 15 | 207 | 297 | 999 | 54 | 23 | 1 | 95 | 709 | 683 | 877 | 3.083 | 1.202 |
| | Lérida | 13 | 101 | 249 | 914 | 40 | 10 | 1 | 51 | 239 | 700 | 697 | 2.318 | 949 |
| BILBAO | Vizcaya | 39 | 320 | 678 | 2.132 | 54 | 4 | 5 | 45 | 1.017 | 1.491 | 1.250 | 5.785 | 3.687 |
| | Alava | 18 | 84 | 220 | 576 | 20 | 12 | " | " | 413 | 524 | 518 | 1.867 | 1.901 |
| BURGOS | Burgos | 31 | 147 | 438 | 606 | 70 | 1 | " | 57 | 693 | 787 | 706 | 2.830 | 1.230 |
| | Logroño | 11 | 101 | 198 | 667 | 30 | 5 | " | 43 | 215 | 467 | 573 | 1.737 | 700 |
| | Santander | 11 | 222 | 451 | 898 | 83 | 9 | 1 | 154 | 166 | 952 | 1.129 | 2.947 | 1.606 |
| | Soria | 3 | 35 | 38 | 132 | 24 | 2 | " | 1 | 66 | 299 | 313 | 600 | 173 |
| CACERES | Cáceres | 9 | 91 | 239 | 785 | 74 | 2 | 2 | 42 | 249 | 522 | 548 | 2.015 | 964 |
| | Badajoz | 8 | 50 | 95 | 846 | 54 | 1 | 1 | 10 | 484 | 662 | 793 | 2.211 | 924 |
| CORUÑA (LA) | La Coruña | 37 | 265 | 577 | 1.576 | 85 | 15 | 7 | 167 | 810 | 1.318 | 1.410 | 4.857 | 2.037 |
| | Lugo | 33 | 115 | 206 | 566 | 38 | 3 | 32 | 51 | 304 | 450 | 489 | 1.798 | 691 |
| | Orense | 9 | 79 | 355 | 459 | 34 | 4 | " | 95 | 313 | 226 | 337 | 1.574 | 511 |
| | Pontevedra | 26 | 240 | 533 | 2.127 | 56 | 9 | 4 | 140 | 240 | 931 | 1.069 | 4.306 | 2.181 |
| GRANADA | Almería | 17 | 26 | 36 | 342 | 13 | " | " | 4 | 98 | 302 | 137 | 838 | 301 |
| | Granada | 72 | 170 | 328 | 2.001 | 59 | 2 | " | 81 | 920 | 1.040 | 811 | 4.673 | 2.164 |
| | Jaén | 17 | 65 | 133 | 726 | 37 | 5 | 1 | 11 | 533 | 552 | 732 | 2.080 | 1.074 |
| | Málaga | 32 | 118 | 192 | 913 | 32 | 4 | 1 | 14 | 549 | 827 | 800 | 2.682 | 1.046 |
| LAS PALMAS | Santa Cruz de Tenerife | 7 | 171 | 275 | 2.247 | 51 | 2 | 1 | 197 | 1.317 | 1.849 | 754 | 6.117 | 2.102 |
| | Las Palmas | 10 | 175 | 323 | 2.622 | 75 | 13 | " | 211 | 1.464 | 1.133 | 1.229 | 6.026 | 3.918 |
| MADRID | Madrid | 218 | 1.499 | 3.258 | 21.852 | 388 | 127 | 49 | 2.063 | 10.277 | 6.840 | 9.386 | 46.571 | 26.414 |
| | Avila | 14 | 34 | 76 | 506 | 18 | " | " | 5 | 156 | 224 | 246 | 1.033 | 388 |
| | Guadalajara | 1 | 34 | 84 | 159 | 13 | " | " | 7 | 122 | 402 | 401 | 822 | 251 |
| | Segovia | 7 | 42 | 68 | 284 | 19 | 2 | 1 | 6 | 280 | 182 | 366 | 891 | 220 |
| | Toledo | 17 | 88 | 152 | 806 | 33 | 4 | 2 | 21 | 376 | 723 | 701 | 2.282 | 969 |
| NAVARRA | San Sebastián | 21 | 209 | 336 | 1.283 | 21 | 23 | 1 | 507 | 703 | 768 | 852 | 3.872 | 1.541 |
| | Pamplona | 24 | 203 | 396 | 1.709 | 42 | 12 | " | 82 | 503 | 702 | 887 | 3.673 | 2.167 |
| SEVILLA | Sevilla | 85 | 241 | 710 | 5.330 | 160 | 30 | 1 | 632 | 1.815 | 2.015 | 1.510 | 11.019 | 6.479 |
| | Córdoba | 22 | 142 | 300 | 2.171 | 75 | 15 | 1 | 20 | 1.010 | 812 | 1.213 | 4.568 | 2.182 |
| | Cádiz | 72 | 123 | 224 | 1.883 | 71 | 7 | " | 147 | 1.438 | 1.118 | 1.338 | 5.083 | 2.168 |
| | Huelva | 30 | 78 | 168 | 1.056 | 37 | 6 | " | 46 | 303 | 633 | 632 | 2.357 | 1.311 |
| VALENCIA | Valencia | 71 | 511 | 1.274 | 8.449 | 139 | 58 | 11 | 602 | 2.613 | 2.774 | 3.612 | 16.502 | 7.680 |
| | Alicante | 72 | 486 | 1.301 | 5.103 | 102 | 69 | 14 | 252 | 1.570 | 1.574 | 1.929 | 10.543 | 6.370 |
| | Castellón | 26 | 123 | 205 | 1.563 | 31 | 20 | 9 | 83 | 453 | 728 | 825 | 3.241 | 952 |
| VALLADOLID | Salamanca | 15 | 81 | 307 | 867 | 50 | 3 | " | 49 | 314 | 475 | 632 | 2.161 | 956 |
| | Zamora | 4 | 62 | 192 | 460 | 37 | " | " | 15 | 250 | 381 | 414 | 1.401 | 612 |
| | Palencia | 14 | 64 | 161 | 400 | 28 | 2 | " | 25 | 174 | 435 | 456 | 1.303 | 517 |
| | León | 31 | 163 | 429 | 1.143 | 58 | 5 | " | 56 | 379 | 963 | 1.001 | 3.227 | 1.762 |
| | Valladolid | 21 | 135 | 415 | 1.630 | 87 | 1 | " | 197 | 433 | 818 | 1.033 | 3.737 | 1.918 |
| ZARAGOZA | Zaragoza | 29 | 318 | 1.364 | 3.740 | 107 | 30 | 4 | 284 | 971 | 1.752 | 1.789 | 8.599 | 5.057 |
| | Huesca | 3 | 45 | 78 | 448 | 20 | 3 | " | 19 | 136 | 456 | 450 | 1.208 | 402 |
| | Teruel | " | 24 | 36 | 69 | 11 | " | 1 | 3 | 67 | 229 | 250 | 440 | 138 |
| | TOTAL | 1.807 | 10.135 | 24.151 | 110.435 | 3.361 | 968 | 234 | 9.809 | 45.540 | 54.378 | 63.162 | 260.818 | 120.378 |

**Estado E**

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*Asuntos civiles iniciados en la Audiencia Territorial desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1981.*

| AUDIENCIA TERRITORIAL DE | Competencias | JURISDICCION CONTENCIOSA | | JURISDICCION VOLUNTARIA | | TOTAL de de asuntos iniciados | TOTAL de sentencias dictadas | ASUNTOS EN QUE INTERVINO EL MINISTERIO FISCAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Con relación a las personas | Con relación a las cosas | Con relación a las personas | Con relación a las cosas | | | Número de asuntos | TOTAL de dictámenes |
| Albacete ... ... ... ... ... | 29 | 36 | 662 | " | " | 727 | 295 | 23 | 34 |
| Baleares ... ... ... ... ... | 2 | 43 | 388 | " | " | 433 | 242 | 39 | 37 |
| Barcelona ... ... ... ... ... | 40 | 88 | 1.909 | 30 | 9 | 2.076 | 1.193 | 147 | 120 |
| Burgos ... ... ... ... ... ... | 13 | 42 | 750 | " | " | 805 | 523 | 46 | 38 |
| Cáceres ... ... ... ... ... ... | 9 | 23 | 285 | " | " | 317 | 144 | 36 | 64 |
| Coruña (La) ... ... ... ... | 1 | 127 | 882 | " | " | 1.010 | 468 | 77 | 51 |
| Granada ... ... ... ... ... | 29 | 93 | 775 | 101 | 77 | 1.075 | 578 | 52 | 52 |
| Madrid ... ... ... ... ... ... | 24 | 218 | 2.530 | 16 | 10 | 2.798 | 1.263 | 227 | 206 |
| Oviedo ... ... ... ... ... ... | 8 | 120 | 480 | " | " | 608 | 384 | 51 | 24 |
| Las Palmas ... ... ... ... | 2 | 220 | 55 | " | 3 | 280 | 233 | 23 | 23 |
| Pamplona ... ... ... ... ... | 1 | 61 | 467 | " | " | 529 | 365 | 39 | 38 |
| Sevilla ... ... ... ... ... ... | 1 | 758 | 267 | " | " | 1.026 | 922 | 24 | 24 |
| Valencia ... ... ... ... ... | 46 | 35 | 1.229 | 94 | 12 | 1.416 | 683 | 83 | 63 |
| Valladolid ... ... ... ... ... | 5 | 56 | 974 | 3 | 12 | 1.050 | 566 | 75 | 75 |
| Zaragoza ... ... ... ... ... | " | 21 | 684 | " | " | 705 | 363 | 25 | 25 |
| TOTAL ... ... ... ... | 210 | 1.941 | 12.337 | 244 | 123 | 14.855 | 8.222 | 967 | 874 |

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*Asuntos civiles tramitados en la Audiencia Provincial desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1981.*

| AUDIENCIAS | Competencias | JURISDICCION CONTENCIOSA | | Jurisdicción voluntaria | TOTAL de Asuntos tramitados en la Audiencia | Asuntos en que intervino el Ministerio Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Apelaciones de asuntos procedentes de | | | | |
| | | Juzgados de 1.ª Instancia | Juzgados de Distrito | | | |
| Alava | " | 5 | 24 | " | 29 | " |
| Albacete | " | 8 | 29 | 3 | 40 | 3 |
| Alicante | " | 77 | 125 | " | 202 | " |
| Almería | " | 25 | 24 | 6 | 55 | " |
| Asturias | " | 56 | 230 | " | 286 | 15 |
| Avila | " | 9 | 14 | " | 23 | " |
| Badajoz | " | 15 | 85 | 1 | 101 | " |
| Baleares | " | 34 | 100 | 8 | 142 | 3 |
| Barcelona | " | 108 | 812 | 12 | 932 | 19 |
| Burgos | " | 21 | 125 | " | 146 | 1 |
| Cáceres | " | 22 | 107 | 3 | 132 | 3 |
| Cádiz | 1 | 23 | 105 | " | 129 | 7 |
| Castellón | " | 6 | 21 | 1 | 28 | " |
| Ciudad Real | 1 | 23 | 46 | 2 | 72 | 2 |
| Córdoba | " | 16 | 79 | " | 95 | 11 |
| Coruña (La) | 1 | 76 | 262 | 14 | 353 | 5 |
| Cuenca | " | 10 | 19 | " | 29 | " |
| Gerona | " | 19 | 57 | " | 76 | " |
| Granada | 1 | 59 | 148 | " | 208 | 5 |
| Guadalajara | " | 2 | " | " | 2 | 2 |
| Guipúzcoa | " | 12 | 56 | 12 | 80 | 1 |
| Huelva | " | 13 | 69 | 1 | 83 | 1 |
| Huesca | " | 7 | 27 | 1 | 35 | " |
| Jaén | " | 29 | 56 | " | 85 | 2 |
| Las Palmas | 6 | 54 | 173 | 30 | 263 | 30 |
| León | " | 25 | 165 | 1 | 191 | 2 |
| Lérida | " | 19 | 44 | 5 | 68 | 13 |
| Logroño | " | 6 | 42 | 1 | 49 | 1 |
| Lugo | " | 28 | 78 | 2 | 108 | 1 |
| Madrid | 1 | 155 | 1.141 | 55 | 1.352 | 81 |
| Málaga | " | 42 | 120 | 13 | 175 | 12 |
| Murcia | 1 | 58 | 85 | 3 | 147 | 5 |
| Navarra | " | 12 | 78 | 1 | 91 | " |
| Orense | " | 13 | 69 | " | 82 | 1 |
| Palencia | " | 25 | 46 | 3 | 74 | 3 |
| Pontevedra | " | 64 | 186 | " | 250 | 3 |
| Salamanca | " | 14 | 113 | 8 | 135 | 5 |
| Santa Cruz de Tenerife | " | 252 | 137 | 1 | 390 | 26 |
| Santander | " | 86 | 454 | " | 540 | " |
| Segovia | " | 5 | 40 | " | 45 | " |
| Sevilla | 3 | 42 | 221 | 2 | 268 | 10 |
| Soria | " | 6 | 15 | " | 21 | " |
| Tarragona | " | 28 | 64 | 2 | 94 | 2 |
| Teruel | 2 | 3 | 15 | 1 | 21 | " |
| Toledo | " | 15 | 31 | 2 | 48 | 2 |
| Valencia | 2 | 37 | 210 | 9 | 258 | 3 |
| Valladolid | " | 19 | 177 | 2 | 198 | 3 |
| Vizcaya | " | 22 | 158 | 9 | 189 | 10 |
| Zamora | 2 | 16 | 70 | 2 | 90 | 2 |
| Zaragoza | 1 | 35 | 176 | 4 | 216 | 3 |
| TOTAL | 22 | 1.756 | 6.728 | 220 | 8.726 | 298 |

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*Juicios de faltas en los Juzgados de Distrito y de Paz de toda la provincia.*

| PROVINCIAS | JUICIOS DE FALTAS | | | | | | SENTENCIAS | | APELACIONES | | | SENTENCIAS APELACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pendientes del año anterior | Ingresados durante el año 1981 | TOTAL | Juicios celebrados | Terminados por otras resoluciones | Pendientes en 31 diciembre 1981 | Condenatorias | Absolutorias | Por el Fiscal | Por el perjudicado | Por el acusado | Confirmando | Revocando |
| Alava | 631 | 3.441 | 4.072 | 1.840 | 1.486 | 746 | 1.320 | 520 | " | 24 | 200 | 210 | 14 |
| Albacete | 2.147 | 3.896 | 6.043 | 3.045 | 875 | 2.123 | 2.043 | 1.002 | 31 | 80 | 281 | 275 | 82 |
| Alicante | 8.140 | 19.720 | 27.860 | 12.608 | 7.613 | 7.639 | 6.049 | 6.559 | 28 | 124 | 918 | 921 | 121 |
| Almería | 2.062 | 5.123 | 7.185 | 2.584 | 2.715 | 1.886 | 1.493 | 1.091 | 2 | 84 | 76 | 132 | 30 |
| Asturias | 3.485 | 15.763 | 19.248 | 10.213 | 5.072 | 3.963 | 5.822 | 3.446 | 19 | 515 | 599 | 775 | 257 |
| Avila | 484 | 2.006 | 2.490 | 1.349 | 470 | 671 | 723 | 360 | 2 | 38 | 99 | 72 | 15 |
| Badajoz | 1.256 | 7.287 | 8.543 | 4.588 | 2.731 | 1.224 | 2.973 | 1.605 | 55 | 77 | 249 | 226 | 98 |
| Baleares | 4.664 | 9.240 | 13.904 | 4.399 | 2.835 | 6.670 | 1.765 | 1.383 | 11 | 80 | 172 | 151 | 42 |
| Barcelona | 58.110 | 134.286 | 192.396 | 71.891 | 54.636 | 65.869 | 24.577 | 47.314 | 133 | 968 | 2.353 | 2.189 | 457 |
| Burgos | 2.217 | 7.696 | 9.913 | 4.702 | 3.720 | 1.491 | 2.324 | 2.378 | 17 | 264 | 162 | 475 | 117 |
| Cáceres | 1.350 | 3.718 | 5.068 | 3.019 | 645 | 1.404 | 1.831 | 1.188 | " | 63 | 196 | 197 | 37 |
| Cádiz | 5.322 | 16.742 | 22.064 | 9.285 | 7.146 | 5.633 | 6.209 | 3.076 | 21 | 89 | 398 | 362 | 90 |
| Castellón | 773 | 3.657 | 4.430 | 3.045 | 501 | 884 | 1.920 | 1.125 | 5 | 74 | 166 | 122 | 30 |
| Ciudad Real | 1.806 | 5.798 | 7.604 | 3.314 | 2.385 | 1.905 | 2.272 | 1.042 | 103 | 74 | 234 | 277 | 104 |
| Córdoba | 3.137 | 12.863 | 16.000 | 6.316 | 6.751 | 2.933 | 3.435 | 2.881 | 27 | 80 | 366 | 352 | 77 |
| Coruña (La) | 13.270 | 14.148 | 27.418 | 6.472 | 6.657 | 14.289 | 3.697 | 2.514 | 18 | 392 | 853 | 815 | 203 |
| Cuenca | 520 | 1.760 | 2.280 | 1.160 | 592 | 528 | 842 | 308 | 5 | 18 | 73 | 84 | 12 |
| Gerona | 4.263 | 9.412 | 13.675 | 3.703 | 4.004 | 5.968 | 2.584 | 1.119 | 1 | 75 | 175 | 153 | 151 |
| Granada | 2.967 | 16.956 | 19.923 | 7.238 | 6.524 | 6.161 | 5.416 | 1.822 | 10 | 176 | 656 | 585 | 164 |
| Guadalajara | 617 | 2.071 | 2.688 | 832 | 1.009 | 847 | 606 | 226 | " | " | 24 | 15 | " |
| Guipúzcoa | 9.272 | 9.003 | 18.275 | 5.136 | 3.911 | 9.228 | 2.397 | 1.918 | 19 | 104 | 456 | 346 | 216 |
| Huelva | 1.012 | 4.580 | 5.592 | 3.010 | 1.807 | 775 | 1.843 | 1.010 | 4 | 36 | 123 | 102 | 26 |
| Huesca | 338 | 1.698 | 2.036 | 1.023 | 681 | 332 | 601 | 422 | 23 | 30 | 65 | 84 | 17 |
| Jaén | 2.422 | 13.056 | 15.478 | 5.299 | 7.434 | 2.745 | 3.765 | 1.361 | 16 | 113 | 470 | 481 | 91 |
| Las Palmas | 6.931 | 11.864 | 18.795 | 4.645 | 5.910 | 8.240 | 2.370 | 2.519 | 20 | 135 | 261 | 388 | 93 |
| León | 1.704 | 8.048 | 9.752 | 6.353 | 1.225 | 2.174 | 2.924 | 1.770 | 26 | 221 | 624 | 675 | 167 |
| Lérida | 2.005 | 7.058 | 9.063 | 3.429 | 3.834 | 1.800 | 2.203 | 1.410 | 3 | 95 | 487 | 411 | 80 |
| Logroño | 900 | 6.542 | 7.442 | 2.138 | 4.364 | 940 | 1.290 | 848 | 68 | 95 | 290 | 340 | 42 |
| Lugo | 828 | 3.394 | 4.222 | 3.045 | 562 | 615 | 2.385 | 658 | 15 | 115 | 406 | 303 | 48 |
| Madrid | 24.563 | 101.916 | 126.479 | 46.313 | 49.865 | 30.301 | 23.300 | 23.013 | 88 | 768 | 2.004 | 2.059 | 384 |
| Málaga | 7.350 | 23.519 | 30.869 | 10.132 | 15.230 | 5.507 | 6.095 | 3.596 | 20 | 140 | 325 | 339 | 97 |
| Murcia | 4.244 | 10.776 | 15.020 | 4.942 | 5.352 | 4.726 | 3.104 | 1.838 | 24 | 187 | 726 | 782 | 155 |
| Navarra | 1.254 | 2.510 | 3.764 | 2.505 | 125 | 1.134 | 1.369 | 1.136 | 20 | 30 | 279 | 203 | 65 |
| Orense | 1.646 | 3.076 | 4.722 | 2.633 | 789 | 1.300 | 1.331 | 1.223 | 27 | 139 | 300 | 304 | 98 |
| Palencia | 835 | 3.048 | 3.883 | 1.775 | 1.588 | 520 | 1.054 | 721 | " | 42 | 155 | 130 | 23 |
| Pontevedra | 4.947 | 11.374 | 16.321 | 8.330 | 10 | 7.981 | 4.070 | 3.170 | 36 | 406 | 702 | 742 | 240 |
| Salamanca | 1.517 | 6.929 | 8.446 | 4.558 | 2.890 | 998 | 2.289 | 2.269 | 4 | 60 | 160 | 195 | 43 |
| Santa Cruz de Tenerife | 3.621 | 7.709 | 11.330 | 5.591 | 1.824 | 3.915 | 2.582 | 3.017 | 36 | 41 | 206 | 258 | 25 |
| Santander | 3.297 | 9.573 | 12.870 | 6.343 | 3.432 | 3.095 | 4.181 | 2.162 | 13 | 297 | 746 | 717 | 198 |
| Segovia | 383 | 1.555 | 1.938 | 1.243 | 366 | 329 | 392 | 457 | " | 29 | 109 | 54 | 28 |
| Sevilla | 8.831 | 43.972 | 52.803 | 20.919 | 6.583 | 25.301 | 12.021 | 8.898 | 123 | 221 | 649 | 745 | 154 |
| Soria | 245 | 1.666 | 1.911 | 736 | 916 | 259 | 568 | 171 | " | 8 | 59 | 29 | 17 |
| Tarragona | 2.652 | 7.937 | 10.589 | 4.787 | 2.882 | 2.920 | 3.018 | 1.869 | 31 | 124 | 311 | 293 | 121 |
| Teruel | 369 | 1.246 | 1.615 | 1.040 | 357 | 218 | 668 | 405 | 2 | 16 | 57 | 64 | 11 |
| Toledo | 2.373 | 5.289 | 7.662 | 2.912 | 2.193 | 2.557 | 1.983 | 929 | 30 | 74 | 122 | 93 | 31 |
| Valencia | 12.127 | 55.052 | 67.179 | 21.770 | 31.370 | 14.039 | 14.474 | 7.296 | 73 | 451 | 1.544 | 1.651 | 289 |
| Valladolid | 2.398 | 8.593 | 10.991 | 3.631 | 4.844 | 2.516 | 2.911 | 731 | 3 | 78 | 292 | 290 | 47 |
| Vizcaya | 20.330 | 15.136 | 35.466 | 13.350 | 14.989 | 7.127 | 8.689 | 4.668 | 4 | 497 | 663 | 705 | 185 |
| Zamora | 133 | 2.599 | 2.732 | 1.544 | 635 | 553 | 914 | 630 | 22 | 35 | 168 | 154 | 42 |
| Zaragoza | 909 | 11.723 | 12.632 | 6.383 | 5.196 | 1.053 | 3.953 | 1.950 | 73 | 208 | 353 | 442 | 116 |
| TOTAL | 246.657 | 696.024 | 942.681 | 367.118 | 299.531 | 276.032 | 196.645 | 163.024 | 1.311 | 8.090 | 21.362 | 21.767 | 5.250 |

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*Asuntos civiles tramitados en los Juzgados de Distrito y de Paz de todas las provincias durante 1981.*

| AUDIENCIAS | ASUNTOS CIVILES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pendientes del año anterior | Incoados durante el año | TOTAL | Resueltos | Pendientes en 31 diciembre 1981 | Casos en que intervino el Ministerio Fiscal |
| Alava | 288 | 1.623 | 1.851 | 1.627 | 224 | 14 |
| Albacete | 408 | 1.065 | 1.473 | 1.097 | 376 | 28 |
| Alicante | 4.856 | 5.156 | 10.012 | 4.954 | 5.058 | 21 |
| Almería | 226 | 913 | 1.139 | 877 | 262 | " |
| Asturias | 815 | 3.030 | 3.845 | 3.042 | 803 | 13 |
| Avila | 66 | 402 | 468 | 369 | 99 | 3 |
| Badajoz | 223 | 1.383 | 1.606 | 1.389 | 217 | 4 |
| Baleares | 685 | 2.112 | 2.797 | 1.616 | 1.181 | 6 |
| Barcelona | 13.651 | 23.766 | 37.417 | 26.253 | 11.164 | 163 |
| Burgos | 199 | 1.257 | 1.456 | 1.250 | 206 | 14 |
| Cáceres | 224 | 885 | 1.109 | 802 | 307 | 33 |
| Cádiz | 624 | 3.115 | 3.739 | 3.001 | 738 | 31 |
| Castellón | 207 | 947 | 1.154 | 927 | 227 | 2 |
| Ciudad Real | 197 | 629 | 826 | 641 | 185 | 9 |
| Córdoba | 1.158 | 1.511 | 2.669 | 1.777 | 892 | 79 |
| Coruña (La) | 1.005 | 2.693 | 3.698 | 2.532 | 1.166 | 103 |
| Cuenca | 113 | 194 | 307 | 190 | 117 | 1 |
| Gerona | 934 | 1.431 | 2.365 | 1.509 | 856 | 8 |
| Granada | 640 | 2.711 | 3.351 | 2.466 | 885 | 7 |
| Guadalajara | 170 | 1.193 | 1.363 | 1.173 | 190 | " |
| Guipúzcoa | 214 | 2.110 | 2.324 | 1.926 | 398 | 20 |
| Huelva | 529 | 734 | 1.263 | 706 | 557 | 8 |
| Huesca | 120 | 381 | 501 | 362 | 139 | 1 |
| Jaén | 379 | 1.243 | 1.622 | 1.320 | 302 | 14 |
| Las Palmas | 2.131 | 5.451 | 7.582 | 5.507 | 2.075 | 130 |
| León | 584 | 2.739 | 3.323 | 2.627 | 696 | 8 |
| Lérida | 346 | 746 | 1.092 | 599 | 493 | 2 |
| Logroño | 129 | 548 | 677 | 554 | 123 | 6 |
| Lugo | 231 | 918 | 1.149 | 975 | 174 | 26 |
| Madrid | 14.639 | 27.730 | 42.369 | 28.507 | 13.862 | 221 |
| Málaga | 1.708 | 4.170 | 5.878 | 4.044 | 1.834 | 64 |
| Murcia | 1.414 | 2.496 | 3.910 | 2.260 | 1.650 | 26 |
| Navarra | 445 | 1.335 | 1.780 | 1.234 | 546 | 8 |
| Orense | 794 | 1.216 | 2.010 | 1.082 | 928 | 40 |
| Palencia | 153 | 446 | 599 | 420 | 179 | " |
| Pontevedra | 1.164 | 3.609 | 4.773 | 3.568 | 1.205 | 56 |
| Salamanca | 352 | 2.038 | 2.390 | 1.921 | 469 | 10 |
| Santa Cruz de Tenerife | 801 | 3.567 | 4.368 | 3.431 | 937 | 12 |
| Santander | 515 | 8.931 | 9.446 | 8.772 | 674 | 17 |
| Segovia | 81 | 453 | 534 | 413 | 121 | 3 |
| Sevilla | 4.375 | 8.771 | 13.146 | 9.335 | 3.811 | 29 |
| Soria | 48 | 442 | 490 | 443 | 47 | " |
| Tarragona | 1.142 | 1.512 | 2.654 | 1.426 | 1.228 | 9 |
| Teruel | 37 | 259 | 296 | 249 | 47 | " |
| Toledo | 212 | 850 | 1.062 | 874 | 188 | 4 |
| Valencia | 3.523 | 9.784 | 13.307 | 10.098 | 3.209 | 39 |
| Valladolid | 389 | 1.875 | 2.264 | 1.835 | 429 | 4 |
| Vizcaya | 5.362 | 3.752 | 9.114 | 7.909 | 1.205 | 17 |
| Zamora | 5 | 3.047 | 3.052 | 2.954 | 98 | 4 |
| Zaragoza | 643 | 5.163 | 5.806 | 5.130 | 676 | 38 |
| TOTAL | 69.094 | 162.332 | 231.426 | 167.973 | 63.453 | 1.355 |

**Estado I**

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*Procedimientos incoados en virtud de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1981*

| JUZGADO DE | Pendientes en 1.º de enero de 1981 | Incoados desde 1.º enero a 31 diciembre de 1981 | TOTAL | TERMINADOS DESDE 1.º DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 1981 | | | | | TOTAL | Pendientes en 31 de diciembre de 1981 | Revisiones | Cancelaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Por sentencia | | Por inhibición | Por rebeldía | Archivados | | | | |
| | | | | Absolutorias | Condenatorias | | | | | | | |
| Baleares | 103 | 227 | 330 | 30 | 74 | 1 | 50 | 26 | 181 | 149 | 42 | 63 |
| Barcelona | 1.168 | 411 | 1.579 | 22 | 62 | 24 | 4 | 757 | 869 | 710 | 10 | 32 |
| Bilbao | 1.416 | 838 | 2.254 | 82 | 88 | 11 | 42 | 1.129 | 1.352 | 902 | 23 | 66 |
| Coruña (La) | 188 | 455 | 643 | 35 | 36 | 3 | 2 | 359 | 435 | 208 | " | " |
| Las Palmas | 624 | 424 | 1.048 | 43 | 4 | " | " | 253 | 300 | 748 | 10 | 6 |
| Madrid | 564 | 2.158 | 2.722 | 3 | 10 | 13 | 24 | 1.895 | 1.945 | 777 | 6 | 625 |
| Málaga | 667 | 899 | 1.566 | 37 | 223 | 1 | 29 | 501 | 791 | 775 | 38 | 137 |
| Sevilla | 378 | 914 | 1.292 | 79 | 119 | 10 | 22 | 559 | 789 | 503 | 46 | 61 |
| Valencia | 175 | 338 | 513 | 25 | 81 | 12 | 18 | 212 | 348 | 165 | 3 | 59 |
| Valladolid | 124 | 247 | 371 | 10 | 38 | 28 | " | 184 | 260 | 111 | 13 | 41 |
| Zaragoza | 118 | 548 | 666 | 36 | 108 | 23 | 20 | 331 | 518 | 148 | 24 | 49 |
| TOTAL | 5.525 | 7.459 | 12.984 | 402 | 843 | 126 | 211 | 6.206 | 7.788 | 5.196 | 215 | 1.139 |

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*RESUMEN de los asuntos despachados por esta Fiscalía en materia civil (Sala 1.ª del Tribunal Supremo), desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1981.*

| NATURALEZA DE LOS ASUNTOS | | Número de asuntos |
|---|---|---|
| Recursos de casación preparados por el Fiscal. | Desistidos | " |
| | Interpuestos | " |
| Recursos de casación interpuestos por las partes | Despachados con la nota de "Vistos" | 608 |
| | Despachados con la nota de "Visto" | " |
| | Combatidos en la admisión | 103 |
| Recursos de revisión | | " |
| Recursos de queja | | " |
| Cuestiones de competencia | | " |
| Expedientes de ejecución de sentencias extranjeras | | 19 |
| Conflictos jurisdiccionales | | " |
| TOTAL | | 730 |

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*RESUMEN de los asuntos despachados por esta Fiscalía en materia social, desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1981.*

| NATURALEZA DE LOS ASUNTOS | | Número de asuntos |
|---|---|---|
| Dictamen Competencias a efectos Arts. 166/174 P. Laboral ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | 60 |
| Recursos preparados por el Fiscal ... ... ... ... | Desistidos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 3 |
| | Interpuestos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 4 |
| Dictamen Sentencias T. C. a efectos Recursos en Interés Ley ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | 7.022 |
| Recursos interpuestos por las partes ... ... ... | Varios ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " |
| | "Visto" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " |
| | Combatidos en la admisión ... ... ... ... ... | " |
| | Con dictamen de improcedentes ... ... ... | 357 |
| | Con dictamen de procedentes ... ... ... ... | 133 |
| | Con dictamen de absteniéndose ... ... ... | " |
| | Nulidad de actuaciones ... ... ... ... ... ... | " |
| Recursos de revisión interpuestos por las partes ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | 15 |
| Competencias del Tribunal Central ... ... ... | Competente J. Laboral ... ... ... ... ... ... | 445 |
| | Incompetente J. Laboral ... ... ... ... ... | 224 |
| | TOTAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 8.263 |

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*RESUMEN de los asuntos criminales (Sala 2.ª del Tribunal Supremo) despachados por esta Fiscalía, desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1981.*

| NATURALEZA DE LOS ASUNTOS | | Número de asuntos |
|---|---|---|
| Procedimientos atribuidos al Tribunal Supremo en Pleno, constituido en Sala de Justicia ... | | " |
| Recursos de casación por infracción de Ley y quebrantamiento de forma preparados por los Fiscales ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | Interpuestos ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 70 |
| | Desistidos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 61 |
| Recursos de revisión interpuestos por el Fiscal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | 8 |
| Recursos de súplica ... ... ... ... ... ... ... ... | Interpuestos por las partes ... ... ... ... ... | " |
| | Interpuestos por el Fiscal ... ... ... ... ... | " |
| Recursos de casación interpuestos por las partes, acordado en Junta de Fiscalía, respecto de ellos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | Apoyados total o parcialmente ... ... ... ... | 43 |
| | Impugnados total o parcialmente ... ... ... | 862 |
| | Formular adhesión ... ... ... ... ... ... ... | " |
| | Oponerse a la admisión total o parcialmente ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 659 |
| Recursos de casación interpuestos en beneficio del reo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | 5 |
| Recursos de casación desestimados por dos Letrados ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | Interpuestos en beneficio de los reos ... ... | 12 |
| | Despachados con la nota de "Visto" ... ... | 1.153 |
| Recursos de queja ... ... ... ... ... ... ... ... ... | Con dictamen de procedentes ... ... ... ... | 1 |
| | Con dictamen de improcedentes ... ... ... | 11 |
| Competencias ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | 34 |
| Causas cuyo conocimiento está atribuido a la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo ... | | 20 |
| Dictámenes de tasación de costas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | 994 |
| Dictámenes de varios ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | 34 |
| TOTAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | 3.967 |

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*RESUMEN de los asuntos despachados por esta Fiscalía en materia Contencioso-administrativa (Salas 3.ª, 4.ª y 5.ª del Tribunal Supremo), desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1981.*

| NATURALEZA DE LOS ASUNTOS | Número de asuntos |
|---|---|
| Recursos de revisión ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 82 |
| Informes en cuestiones de competencia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 28 |
| Derechos Fundamentales de la persona ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 21 |
| TOTAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 131 |

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*RESUMEN de los asuntos despachados por esta Fiscalía en el Tribunal Constitucional.*

| NATURALEZA DE LOS ASUNTOS | Número de asuntos |
|---|---|
| I. RECURSOS DE AMPARO CONSTITUCIONAL. | |
| 1. Dictámenes en trámite de admisión (art. 50 L. O. T. C.) ... ... ... ... ... ... ... | 78 |
| 2. Dictámenes en trámite de suspensión (art. 56 L. O. T. C.) ... ... ... ... ... ... | 10 |
| 3. Dictámenes en trámite de alegaciones (art. 52 L. O. T. C.) ... ... ... ... ... ... | 41 |
| 4. Otros trámites e incidencias ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 39 |
| II. CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. | |
| 1. Dictámenes en trámite de admisión (art. 37.1 L. O. T. C.) ... ... ... ... ... ... | 2 |
| 2. Dictámenes en trámite de alegaciones (art. 37.2 L. O. T. C.) ... ... ... ... ... ... | 8 |
| 3. Otros trámites ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 15 |
| III. ASUNTOS VARIOS. | |
| Comunicaciones con el Tribunal Constitucional, Tribunales, Fiscalías y Organismos. ... | 610 |
| TOTAL DE ASUNTOS DESPACHADOS ... ... ... ... ... ... ... | 803 |

# FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

*RESUMEN de los asuntos gubernativos en los que ha intervenido la Fiscalía., desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1981.*

| NATURALEZA DE LOS ASUNTOS | FUNCIONARIOS QUE LO HAN DESPACHADO | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | El Fiscal | Teniente Fiscal | Inspector Fiscal | Fiscales Generales y Abogados Fiscales | |
| Informes emitidos en expedientes de la Sala de Gobierno, Presidencia de este Tribunal Supremo y Consejo Fiscal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 1 | " | " | 99 | 100 |
| Consultas a los efectos del artículo 644 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. | " | " | " | " | " |
| Causas en que se han dado instrucciones a los Fiscales de las Audiencias ... | 12 | " | " | " | 12 |
| Comunicaciones registradas ... ... ... ... ... Entrada ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | 5.135 |
| Comunicaciones registradas ... ... ... ... ... Salida ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | 2.724 |
| Denuncias ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 20 | " | " | 12 | 32 |
| Consultas a los Fiscales ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 3 | " | " | " | 3 |
| Juntas celebradas con los señores Teniente y Abogados Fiscales del Tribunal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 38 | 16 | 6 | 136 | 196 |

# INDICE


*Págs.*

INTRODUCCION ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9

CAPÍTULO I.

MOVIMIENTO DE PERSONAL ... ... ... ... ... ... ... ... 17

CAPÍTULO II.

REFORMAS LEGISLATIVAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19

CAPÍTULO III.

MEDIDAS DE POLITICA CRIMINAL:

1. *Tratamiento penal de la libertad de expresión* ... ... 24
2. *Tratamiento penal del tráfico de drogas* ... ... ... ... 48
3. *Protección de Menores* ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
4. *Regulación jurídica de la expulsión de extranjeros indeseables* ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65
5. *Análisis de la situación penitenciaria y del desarrollo de la Ley general penitenciaria* ... ... ... ... ... ... 71
   - *A)* Situación de las prisiones ... ... ... ... ... 71
   - *B)* Necesario desarrollo de Juez de Vigilancia. 77

CAPÍTULO IV.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA:

1. *Estatuto. Su influencia en la actuación del Ministerio Fiscal* ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 84
2. *El funcionamiento de la Administración de Justicia en el orden penal* ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 99
3. *Actuación de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional* ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 113

CAPÍTULO V.

RESUMEN DE LAS MEMORIAS REMITIDAS A LA FISCALIA GENERAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 115

CONSULTAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 163

CIRCULARES ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 179

ESTADISTICA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 191